

Cambio de ciclo

Desafíos para las izquierdas

Antonio Antón Morón



 [ediciones]
dyskolo

Cambio de ciclo

Desafíos para las izquierdas

Antonio Antón Morón

 ediciones dyskolo

Cambio de ciclo

Desafíos para las izquierdas

Antonio Antón Morón

 ediciones dyskolo

Edición digital: 1.0. marzo 2026

Colección: Crónicas

Foto de portada de [Javier Allegue Barros \(@soymeraki\)](#); bajo [licencia Unsplash](#)

Este libro cuenta con una licencia [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0](#) (CC BY-NC-ND 4.0)



Ediciones Dyskolo (www.dyskolo.cc) es un proyecto sin ánimo de lucro que busca establecer una nueva relación entre quienes escriben y cuantas personas disfrutan de la lectura. Dyskolo busca fomentar la difusión de la cultura de una forma abierta, libre y participativa, publicando sus obras únicamente en formato digital, bajo licencia Creative Commons y sin restricciones tecnológicas (DRM).

Como lector puedes colaborar haciendo una donación ([a través de PayPal](#)) a este proyecto editorial, con lo que contribuirás a la liberación de nuevos contenidos.

Índice

PRESENTACIÓN

1. EL TRUMPISMO Y LA SUBORDINACIÓN EUROPEA

1.1 Rearme sin legitimidad

1.2 La claudicación de la Europa liberal

1.3 Europa ante el supremacismo trumpista

1.4 El dominio imperial por la fuerza

1.5 Resistencia antitrumpista

2. FRENTE A LA AMENAZA ULTRA Y EL RACISMO

2.1 La imperiosa regeneración democrática

2.2 Frente al racismo y la corrupción

2.3 Respuestas a la amenaza ultraderechista

2.4 Golpismo y grietas en el Estado de derecho

2.5 Conciencia democrática y perspectiva electoral

3. IGUALDAD Y LIBERTAD: FUNDAMENTOS DE LA JUSTICIA SOCIAL

3.1 Concepto de justicia: principios normativos

3.2 Una interpretación social y crítica

3.3 Tipos de justicia: solidaridad, igualdad jurídica o derechos humanos y méritos

3.4 Dimensiones de la justicia: redistribución, reconocimiento y representación

3.5 Desigualdad, bienes primarios (Rawls) o capacidades (Sen)

3.6 Un reformismo fuerte: ampliar la igualdad y la libertad

4. REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE LA ACCIÓN COLECTIVA

4.1 Discurso, estructura y experiencia

4.2 Importancia del sujeto: Hermenéutica social y realismo crítico

4.3 Superar la teoría populista

4.4 Sujeto y política: Ni determinismo, ni idealismo

4.5 Formación del sujeto y experiencia popular

5. ESTRATEGIAS E IDENTIDADES

5.1 Rearme y oportunismo

5.2 Guerras culturales y cambio sociopolítico

[5.3 El debate sobre las identidades colectivas](#)

[5.4 Acerca de lo woke: experiencia, identitarismo y universalismo](#)

[5.5 Mamdani y la izquierda española](#)

[5.6 La savia de la movilización propalestina](#)

[5.7 La identificación feminista](#)

[6. DILEMAS DE LAS IZQUIERDAS](#)

[6.1 Encrucijadas](#)

[6.2 Estrategia gubernamental e incertidumbre electoral y política](#)

[6.3 Perspectivas de la izquierda alternativa](#)

[6.4 Movimientos sociales y cambio global](#)

[6.5 La incertidumbre sobre el cambio de ciclo](#)

[6.6 Crisis y reconstrucción de las élites alternativas](#)

[Autor](#)

PRESENTACIÓN

Este libro, *Cambio de ciclo. Desafíos para las izquierdas*, tiene un hilo conductor: el análisis de las condiciones y tendencias que aventuran el cambio del ciclo institucional de progreso de los últimos años y los desafíos de las izquierdas para contrarrestar las dinámicas autoritarias y regresivas y garantizar el impulso democratizador y de reforma social. Trata del refuerzo, la unidad y la renovación de las izquierdas sociales y políticas.

Tiene, fundamentalmente, un componente analítico de las dinámicas sociopolíticas, al que se añade una reflexión más normativa o propositiva sobre los retos, las estrategias y las trayectorias de las izquierdas.

Adopta un enfoque sociohistórico y crítico, con un triple plano temático. El primero de los temas, capítulos 1 y 2, se centra en el diagnóstico del contexto internacional derivado del trumpismo y las tendencias ultras. El segundo, capítulos 3 y 4, es más teórico y expone los fundamentos de la justicia social y los valores de la igualdad y la libertad, así como diversas reflexiones sobre la acción colectiva. El tercero, capítulos 5 y 6, explica las estrategias de las izquierdas y las

identidades colectivas de los movimientos sociopolíticos y culturales, y analiza la problemática política y socioelectoral actual y los dilemas de las izquierdas en España ante la perspectiva de cambio de ciclo.

El primer capítulo, «El trumpismo y la subordinación europea», analiza tres aspectos de las relaciones transatlánticas, con la imposición del nuevo orden internacional promovido por EEUU y la dependencia y sometimiento de la UE (y el Reino Unido): el plan de rearme europeo, sin legitimidad; la claudicación de la Europa liberal ante la prepotencia imperial estadounidense; la actitud de Europa ante el supremacismo trumpista, el dominio imperial por la fuerza ejercido sobre Venezuela, América Latina y el mundo, y la resistencia antitrumpista.

El segundo capítulo, «Frente a la amenaza ultra y el racismo», estudia el ascenso de las tendencias ultraderechistas y el auge del racismo y la antiinmigración, junto con un tercer elemento, la corrupción, para valorar las respuestas de la sociedad. Señala varios aspectos: la imperiosa regeneración democrática; la necesaria actitud cívica frente al racismo y la corrupción; las respuestas a la amenaza ultraderechista; las tendencias hacia el golpismo —blando— y la existencia de grietas en el Estado de derecho. Se cierra el capítulo con la valoración de la conciencia democrática en la ciudadanía española y la perspectiva electoral.

El tercer capítulo, «Igualdad y libertad: fundamentos de la justicia social», de carácter teórico, es la reelaboración de una investigación académica. Trata sobre el concepto de justicia y sus principios normativos, y alude a distintos autores de ciencias sociales para destacar el doble carácter social e individual de la persona y la ambivalencia del ser humano. Profundiza en los tipos de justicia, solidaridad, igualdad jurídica o derechos humanos y méritos, seguido del análisis de las dimensiones de la justicia: redistribución, reconocimiento y representación. Compara las posiciones éticas de dos ilustres pensadores sobre la justicia social y la desigualdad, con los bienes primarios (Rawls) o capacidades (Sen). Concluye con un apartado en defensa de un reformismo fuerte para ampliar la igualdad y la libertad.

El cuarto capítulo, «Reflexiones teóricas sobre la acción colectiva», también de carácter teórico, analiza los movimientos sociales y la acción colectiva con una interpretación histórica y relacional de su comportamiento, su experiencia y los vínculos de colaboración y oposición de los distintos grupos o capas sociales, en sus contextos sociohistóricos y culturales. Estudia temas relevantes en las ciencias sociales: la relación entre discurso, estructura y experiencia; la importancia del sujeto, con la combinación de hermenéutica social y realismo crítico; los ejes de *la teoría populista y la necesidad de su superación*; un nuevo enfoque crítico, social y realista; qué autonomía de la política, y la experiencia popular en la formación del sujeto de cambio.

El quinto capítulo, «Estrategias e identidades», aborda varios ejes estratégicos para un cambio sociopolítico de progreso, la importancia de las identidades colectivas y la formación de los sujetos sociales y políticos, y las características de tres dinámicas de activación cívica. En primer lugar, explica las actitudes ante el rearme europeo y la relación entre el cambio cultural y las transformaciones sociopolíticas e institucionales. En segundo lugar, expone el debate sobre las identidades colectivas, y el significado de lo woke y los criterios de experiencia, identitarismo y universalismo. En tercer lugar, se muestran las dinámicas de reactivación cívica en tres ámbitos significativos, con importantes efectos sociopolíticos: la experiencia y la victoria de Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York; la relevancia de la movilización propalestina contra el genocidio israelí y, por último, el proceso y la conveniencia de la identificación feminista.

El último capítulo, «Dilemas de las izquierdas», recoge varias reflexiones sobre la actualidad sociopolítica y las perspectivas: la estrategia gubernamental y la relación entre las dinámicas del campo sociopolítico y cultural y las del ámbito político e institucional; la interacción entre las diversas izquierdas, así como entre sus élites representativas y sus estructuras partidarias y sus bases sociales; el

agotamiento y/o la renovación del ciclo de progreso frente a la ofensiva derechista, y la reconstrucción de las élites alternativas.

Madrid, febrero de 2026

1. EL TRUMPISMO Y LA SUBORDINACIÓN EUROPEA

Este primer capítulo, *EL TRUMPISMO Y LA SUBORDINACIÓN EUROPEA*, analiza cinco aspectos de las relaciones transatlánticas, con la imposición del nuevo orden imperial y neocolonial promovido por el actual EE.UU. y la dependencia y el sometimiento de la Unión Europea (y el Reino Unido).

El primero, con el título *Rearme sin legitimidad*, explica la falta de autonomía estratégica de Europa con menos seguridad, el empate estratégico en la guerra de Ucrania, las falacias del plan de rearme europeo, la trayectoria democrática y pacifista de la ciudadanía europea, con la conclusión de que el plan es un rearme imperial sin justificación y expresa los límites de la autonomía estratégica y la unidad política de Europa.

El segundo aspecto, titulado *La claudicación de la Europa liberal*, expone la rendición de las élites europeas, la prepotencia imperial trumpista desde el supremacismo estadounidense, el fiasco de la

autonomía estratégica europea y el soberanismo oligárquico, con la valoración final de que otra Europa, otro mundo, son posibles.

La tercera sección, *Europa ante el supremacismo trumpista*, detalla a partir de un reciente estudio demoscópico los temores de la ciudadanía europea sobre seguridad, así como se profundiza en la imposición del supremacismo trumpista con el sometimiento adaptativo europeo y el fracaso de la autonomía estratégica europea.

La cuarta sección, *El dominio imperial por la fuerza*, a partir de la valoración de la agresión trumpista a Venezuela, trata del reagrupamiento del poder neocolonial, el carácter del autoritarismo imperialista, el proceso adaptativo de las élites europeas y la configuración de las dinámicas sociopolíticas y opciones estratégicas ante esta deriva reaccionaria y prepotente.

El quinto tema, *Resistencia antitrumpista*, analiza el clamor cívico contra la prepotencia trumpista, la insuficiencia de la voluntad autónoma de las élites europeas y la resistencia popular democrática, pacífica y solidaria.

1.1 Rearme sin legitimidad

La Unión Europea ha aprobado un enorme plan de rearme militar de ochocientos mil millones de euros, sin debate ni aval parlamentarios. Paralelamente, se ha involucrado la OTAN, con el incremento mínimo desde el 2% del PIB, aprobado en 2014, hasta el 3,5%, aunque Trump ya reclama el 5%. El Reino Unido y Francia, las únicas potencias

nucleares europeas (aparte de Rusia) y de tradición colonialista, aspiran a dirigir este proceso belicista. De ese liderazgo, bajo dependencia estadounidense, no se quiere descolgar el otro coloso económico, Alemania, que ha aprobado con el voto democristiano, socialdemócrata y verde —antes de la constitución del nuevo parlamento en el que podrían no conseguir los dos tercios imprescindibles—, otro medio billón de euros, para su plan particular de rearme militar y reestructuración económica.

La carrera armamentística en Europa se pone en marcha o, más bien, se acelera, con una orientación común a la estadounidense, funcional para los objetivos compartidos de hegemonía occidental a nivel mundial. Mientras tanto, la guerra en Ucrania se está terminando y en Palestina y Oriente Próximo se guarda un consenso ante el genocidio, la limpieza étnica y la colonización por el Gobierno prooccidental israelí.

El problema de fondo es el sentido del rearme militar, la debilidad de su justificación, aunque hay un gran consenso político y mediático. El dilema es en qué grado de subordinación o reequilibrio de poder se coloca Europa, según los planes trumpistas y los forcejeos europeos. No se trata solo de la Unión Europea, sino que en este ámbito de defensa tiene un papel relevante el Reino Unido, aunque también Turquía — Oriente Próximo- y Noruega —Ártico— en el marco de la OTAN o de la alianza occidental (y oriental, hasta el Asia-Pacífico). Supone un difícil reajuste de la cobertura institucional.

Sin autonomía estratégica y con menos seguridad

Aparecen cuestionados los dos grandes argumentos y objetivos para el rearme europeo. El primero, esa militarización urgente no facilita la autonomía estratégica europea respecto del poderío militar estadounidense y su complejo militar industrial, del que dependen dos tercios de sus armas y su adquisición inmediata. Hasta medio plazo, al menos una década, no hay capacidad industrial y tecnológica para garantizar esa autonomía militar respecto de EE.UU. O sea, las élites

dirigentes europeas no se replantean la salida de la OTAN ni la insubordinación jerárquica del mando militar estadounidense. Tampoco hay suficientes motivos políticos en los gobiernos europeos para romper la alianza atlántica, ni siquiera para formar un ejército autónomo o un brazo europeo en la OTAN.

Por otra parte, está clara la existencia del suficiente gasto militar europeo, superior al de Rusia, para demostrar capacidad disuasoria, incluso nuclear. El rearme europeo tampoco sirve para mejorar su competencia económica y tecnológica, a la que aspiraba el plan Draghi, precisamente del mismo importe, y hoy sustituido en gran parte por éste que prioriza el gasto militar... con la compra a EE.UU. de lo fundamental y sin innovación tecnológica propia.

Por tanto, la declamada autonomía estratégica europea no va en serio. Las élites dirigentes extreman la amenaza rusa y el desamparo estadounidense para negociar una recolocación menos desfavorable en la alianza occidental, imprimir una dinámica prepotente, frenar la trayectoria democrática y social europea, así como intentar legitimarse ante su fiasco político y doctrinal. En todo caso, haciendo de la necesidad virtud, pretenden dar la apariencia de disminuir su dependencia de EE.UU., pero sin romper con Trump y su modelo expansionista y autoritario.

En ese sentido, hay que recordar que la máxima expresión de la autonomía estratégica europea, derivada de la oposición francoalemana y de la mayoría de las poblaciones europeas y española, fue frente a la intervención militar en Irak en 2003, precisamente por el trío de las Azores, el republicano Bush, el laborista Blair y el conservador Aznar, con el inicio de los grandes bulos de las armas de destrucción masiva. La posición mayoritaria en Europa tenía una amplia conciencia pacifista y se reforzó la autonomía europea frente a ese militarismo injustificado... y todavía dura hoy, actitud antibelicista que siguen combatiendo los poderosos.

Pero las administraciones estadounidenses no podían dejar pasar ese precedente y ya, con la involucración de la OTAN en Afganistán,

disciplinaron a los gobiernos europeos, que tuvieron que participar y asumir el fracaso de aquella aventura.

Lo curioso es que ahora los dirigentes europeos defienden la autonomía estratégica para legitimar el rearme militar, de forma seguidista a la carrera armamentista estadounidense, y con una orientación más belicista que ellos ante la tregua impuesta en la guerra Ucrania/Rusia. Al mismo tiempo, Trump se plantea la readecuación estratégica en el Asia-Pacífico, frente a China, con la colaboración europea desde la subalternidad.

Desde la tradición cívica y pacifista europea, la oposición principal es al rearme militar, innecesario y contraproducente. Todavía más cuando hay un equilibrio de fuerzas, con la superior capacidad económica, militar, tecnológica y demográfica respecto de Rusia. No tiene sentido la justificación de la autonomía europea para armarse más. La dinámica belicista no garantiza la seguridad, sino que la pone más en peligro. Solo se puede explicar por el objetivo de las élites europeas de ampliar la supremacía mundial conjunta con EE.UU., cosa que choca con el supuesto ideario europeo del derecho internacional, la prioridad del poder blando negociador, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos y países. Es el modelo democrático y social convencional que se va desechando, por el influjo ultraderechista.

Ante los grandes dilemas geoestratégicos mundiales, sí que hay una alternativa para neutralizar el poder duro militarista en las relaciones internacionales y defender desde la tradición pacífica, social y democrática europea un orden mundial cooperativo y no belicista. La posición pacifista y crítica a los bloques militaristas se podría reafirmar con una trayectoria excluyente del poder duro ejercido a través de la guerra y la prepotencia imperial.

Pero el discurso actual de la autonomía estratégica europea va en sentido contrario, hacia más rearme y militarismo. Una involución histórica que desacredita a las élites dirigentes y que se podría agravar en la medida de que se ejerciese ese autoritarismo agresivo. El riesgo es el de mayor inseguridad mundial, más a medio plazo, con el refuerzo y

el reequilibrio de poder de los imperios y con la posibilidad de una confrontación nuclear; además de no abordar los grandes problemas de seguridad vital de las poblaciones, como la desigualdad social, la desprotección y la crisis climática. Se afianzará la desafección hacia esas élites gobernantes que relativizan el contrato social, el Estado de bienestar, la democracia y la colaboración entre países.

El empate estratégico

El segundo objetivo del rearme queda bastante desautorizado por la propia realidad. La OTAN y Ucrania no han podido vencer a Rusia. Rusia no ha podido vencer a Ucrania, con el apoyo otanista, ni conseguir sus objetivos máximos. Ante el bloqueo de fuerzas y el agotamiento mutuo se impone el realismo, hay un empate estratégico, se acata la tregua y la pacificación, con las reticencias de los gobiernos europeos. Las responsabilidades se aplazan. El escenario del conflicto mundial se traslada —con el permiso de Oriente Próximo— hacia Asia-Pacífico, donde se ventila la hegemonía estadounidense (y occidental).

Toda la estrategia otanista de tres décadas de contención y aislamiento de Rusia, tras el hundimiento soviético, con la reducción de su área de influencia y la última apuesta por su contundente derrota militar en Ucrania, no han terminado por fructificar totalmente. El resultado es cierto debilitamiento económico-político del régimen ruso, no decisivo, la destrucción de gran parte de Ucrania y su desastre humano, y los costes socioeconómicos, políticos y reputacionales para la propia Europa. Los gobiernos de EE.UU. y Rusia, con el beneplácito del de Ucrania y la OTAN, pactan una tregua con la colonización estadounidense de sus principales activos minerales, agrícolas y geoestratégicos y el control territorial ruso de la quinta parte rusófona.

Esa pacificación, más o menos duradera, aventura un nuevo equilibrio en el Este europeo, sin que sea verosímil una supuesta invasión rusa de Europa, ni la continuación de la guerra que preferirían algunos halcones europeos (y ucranianos), pero que no conviene ya a

ninguna de las partes, casi exhaustas. Es un ejercicio de realismo de las dos superpotencias, con impotencia ucraniana y, especialmente, europea, que había sido seguidista hasta ahora con los planes belicistas estadounidenses y su retórica de la victoria total, y que aparecen subordinados al nuevo supremacismo trumpista y sin beneficios particulares de la guerra y de la paz.

En consecuencia, la amenaza de más guerra no es creíble, ni sirve de justificación para el rearme militar de Europa, cuya legitimidad no puede conseguirse ante la ciudadanía europea. Los objetivos inconfesables de la OTAN y, en particular, de su brazo europeo, se harán más evidentes en la medida que se consolide la tregua y, a pesar del gran aparato mediático, se diluya el enemigo ruso y el sinsentido del rearme militar. Se abrirá una oportunidad para la paz.

Falacias del rearme

En la justificación del plan de la UE de rearme o seguridad armada se utilizan diversas falacias o engaños, más allá de la confusión deliberada entre rearme, seguridad y protección. Veamos algunos análisis controvertidos y, sobre todo, la orientación estratégica que subyace en la política de rearme europeo.

EE.UU. no está interesado en abandonar o liquidar la OTAN. Sigue siendo un instrumento útil para reforzar su hegemonía mundial. Lo que pretende, junto con su fiel aliado, el Reino Unido, es doble. Por un lado, subordinar a Europa en el cumplimiento del incremento de su aportación y gasto militar —hasta el 5% del PIB desde el actual 2%—.

Por otro lado, la reorientación de su función complementaria hacia sus propios intereses geopolíticos de su prioridad del eje Indo-Pacífico, como ya lo hizo Biden con la OTAN en Afganistán y su alianza asiática (con Australia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido). Tras esta tregua en Ucrania y su acceso a sus recursos, espera que Europa ejerza de tapón de Rusia a medio plazo ante su eventual colaboración estratégica con China, que es su adversario principal.

Por tanto, EE.UU., con la actual administración trumpista y las siguientes demócratas, no se va de la OTAN; es un chollo para su primacía político-militar y económica; quiere que paguen más los europeos, compren su armamento y sean más disciplinados. Lo que no está a la vista en los gobiernos de la UE, por mucho que lo quiera Macron, es un plan para sustituir el liderazgo militar de EE.UU., autonomizarse respecto de la jerarquía militar estadounidense con un brazo europeo de la OTAN o salirse de esa alianza transatlántica.

Es más, la manifestación de la inquietud europea por el supuesto abandono defensivo estadounidense, además de mostrar debilidad de las fuerzas propias dificulta ese —supuesto— ansiado reequilibrio de poder europeo, imposible de concretar a medio plazo. La UE es, sobre todo, una alianza económica. La alianza político-militar es la OTAN, bajo dirección estadounidense. Hay un vacío institucional y político-normativo autónomo, sin apenas estrategia exterior y de seguridad y defensa comunitaria.

Por otra parte, la hipótesis de un ejército europeo es eso, una hipótesis con una capacitación militar muy limitada, ya que no se afronta la realidad y la dificultad principal: que la suma del gasto militar europeo es muy superior al de Rusia, que ésta no representa una amenaza creíble para la UE ni para la OTAN, y que Europa no necesita más gasto militar. En todo caso, necesitaría una reestructuración política y operativa, con un papel geopolítico diferenciado, basado en un plan o unos principios contrapuestos a este militarismo. Es decir, basado en los llamados valores europeos de democracia, paz, multipolaridad y negociación sobre el derecho internacional, aun admitiendo el poder blando de su poderío económico-cultural.

Pero esta trayectoria militarista que ha tomado la actual elite europea es la contraria a ese ideal autónomo, que solo aparece retóricamente al servicio del rearme. Su plan tiende a reforzar más la militarización consolidada por la administración estadounidense y busca una adecuación hacia una hegemonía transatlántica, compartida a nivel mundial, con el puente anglosajón, ahora laborista, por más señas.

Así, se puede hablar de la interoperabilidad y el mando jerárquico del grueso de los ejércitos de los veintisiete países; pero no se puede obviar la complicación institucional de asociarlo entre sí y con otros países OTAN, como Reino Unido o Turquía —o el propio Israel—, empezando por la comunitarización de la fuerza nuclear francesa, cosa impensable.

Una trayectoria democrática y pacifista

Por tanto, el obstáculo no solo es el soberanismo particular de los grandes Estados y sus respectivos ejércitos e intereses nacionales, por tener mayor peso en el posible liderazgo colectivo (Francia, Reino Unido, Alemania, sin olvidar Italia, Polonia y España).

La dificultad principal es el sentido del objetivo de esa unidad político-militar, el para qué conformar un nuevo bloque —imperial o cooperativo— diferenciado de la deriva iliberal, expansionista y hegemónica de EE.UU., que conforme un actor geopolítico identificado con los valores democráticos, solidarios y de modelo social. No obstante, la actitud gubernamental europea ante la limpieza étnica y el genocidio palestinos auguran su degradación insolidaria y su impotencia como referente ético y político ante el Sur global.

El emplazamiento está ahí. Asegurar mejor la paz mundial, empezando por la europea, con la consolidación de la tregua justa en Ucrania y la negociación de la coexistencia con Rusia, en vez de preparar la confrontación. Existe, una larga tradición de más de medio siglo, desde la *Ostpolitik* del socialdemócrata Willy Brandt y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), debilitada por el expansionismo otanista hacia el Este, desde los años noventa, y hundida con la invasión rusa de Ucrania.

Frente al conflicto militar, se trata de afianzar la multipolaridad mundial, el derecho internacional y humanitario, así como los vínculos europeos de colaboración con países de África, América Latina y Oriente Próximo, así como con la propia China. Eso sí, existe una pugna

competitiva con los otros actores aspirantes a imperios reaccionarios, prepotentes y militaristas. Es la raíz del conflicto con el hegemonismo ultra de Trump, que no se explicita por la UE y solo se amaga, sin atreverse a desarrollar una trayectoria alternativa solidaria, sostenida y coherente.

Sin esa perspectiva democrática y pacífica, lo que queda del plan de rearme o de seguridad armada, es el beneficio para las oligarquías del complejo militar industrial, sobre todo estadounidense, el autoritarismo de las élites gobernantes en un nuevo proceso de control social securitario, la subordinación de las mayorías sociales a una dinámica de reconstitución del ultraliberalismo neocolonial, precarizador, racista y extractivo.

El retroceso es para los derechos sociales, feministas y medioambientales y las condiciones habitacionales y laborales, así como para la degradación de la vida democrática y ética de las instituciones. Esa trayectoria armamentística va en contra de un arraigado principio europeo; lo hemos llamado ‘seguridad social’ y vital, en un marco de igualdad, libertad y solidaridad, no de rearme e imposición de la fuerza.

En definitiva, tras la terrible experiencia fratricida de las dos guerras mundiales, el nazi-fascismo y el colonialismo, el impulso europeo de sus valores democráticos y pacíficos podría constituir una aportación universalista a un mundo más seguro y pacífico. Pero el motor debe ser la propia activación cívica masiva, frente a la degradación autoritaria y regresiva que toma el poder establecido europeo. La población europea —y mundial— tiene la palabra.

Un rearme imperial y sin justificación

El alemán Jürgen Habermas es uno de los pensadores progresistas más ilustres en Europa. Suele tener una visión más histórica, crítica y global que la mayoría de intelectuales europeos, hoy en silencio o demostrando un simple seguidismo en defensa de la opción dominante del rearme europeo. Su pensamiento es un buen punto de partida en esta

compleja encrucijada en que se encuentra Europa y, particularmente, Alemania, como el principal motor económico de la UE. Estamos ante los retos geopolíticos derivados de la invasión rusa de Ucrania y la nueva estrategia trumpista de imperialismo iliberal, con sus objetivos hegemónicos frente al otro polo geoestratégico, China y los BRICS, y su exigencia de mayor subordinación y militarización europea.

Va siendo habitual en el ámbito progresista, incluso en sectores liberal-conservadores, la definición habermasiana del trumpismo como nueva forma de dominación tecnocrática y autoritaria. Es la afirmación reaccionaria o ultraconservadora frente a la democracia, los derechos sociales y feministas o la sostenibilidad medioambiental que une a la ultraderecha europea con el presidente estadounidense, bajo la influencia del nacionalismo expansionista y racista y contra la inmigración. Todo ello, además de que en el campo económico, con la guerra arancelaria, aparezcan conflictos abiertos por la imposición de la primacía estadounidense y los distintos perjuicios nacionales, en plena readecuación económica y de poder.

Veremos el alcance de la guerra arancelaria, aunque ya han aparecido algunos puntos vulnerables de EE.UU., precisamente, en el aspecto considerado, hasta ahora, su fortaleza, derivada de sus privilegios históricos: su hegemonía financiera, lo que supone la garantía a su elevada deuda externa y la prevalencia del dólar.

Dejando aparte las tendencias iliberales y la pugna comercial, el debate principal ahora es sobre la respuesta estratégica europea a la reconfiguración geopolítica y la hegemonía político-militar, definida como un rearme imperial europeo, complementario y en reajuste con el estadounidense, en declive y en un mundo multipolar. Respuesta que se concreta en la aprobación por la UE del rearme, con una inversión de ochocientos mil millones de euros, más otro medio billón en el caso de Alemania (con una pequeña parte para infraestructuras y transición ecológica). Incrementos relevantes están anunciados en Francia y Reino Unido, en espera de la cumbre de la OTAN de julio donde se aventura un aumento en gasto militar desde el 2% del PIB hasta el 3% o 3,5%,

con el horizonte a medio plazo de llegar hasta el 5%, y con la voluntad estadounidense y europea de su continuidad y cohesión, no de su desmantelamiento. La militarización está en marcha.

Están claros los objetivos geoestratégicos estadounidenses, compartidos por las dos administraciones, demócrata y republicana, y refrendados en la cumbre de la OTAN de Madrid en 2022, es decir, por todos los aliados europeos: el gran rival estratégico es China, calificada de ‘gran enemigo’, la única potencia que puede desafiar a EE.UU., que pretende evitar su declive, aunque sea con la fuerza militar. Están definidos los grandes polos geopolíticos, aun con muchas indefiniciones, neutralidades y pragmatismos en países del Sur global.

Incluso, en el caso europeo están los intentos de mantener buenas relaciones con China y poder diversificar su actividad económica y comercial. La advertencia, en el estilo brutal del trumpismo, ha venido por el Secretario del Tesoro estadounidense ante la visita del presidente español, Pedro Sánchez, a China para estrechar relaciones: a España nos pueden cortar el cuello. Esa relación, en todo caso, es limitada, y no cuestiona la prioridad por la alianza estratégica trasatlántica.

El Gobierno estadounidense, también el de la administración Biden, no se andan con chiquitas, como demostraron con la demolición del gasoducto de Rusia a Alemania, que acentuó la dependencia energética y competitiva alemana (y europea), o con el apoyo al control neocolonial israelí de todo el Oriente Próximo, incluida la terminación de la Ruta de la Seda china, eje fundamental para su comercio con Europa, en el Mediterráneo oriental. El propio Secretario General de la OTAN acaba de volver de Japón con nuevos acuerdos de seguridad para el aislamiento de China, que se suman a las alianzas estratégicas de EE.UU. —y sus bases militares— en Asia-Pacífico.

Existe un gran consenso político y mediático en el poder establecido europeo en torno a la opción del rearme, rebautizado como seguridad o protección, para evitar un rechazo más profundo y masivo por la ciudadanía europea, que demanda otras prioridades de defensa de la protección ‘pública’ y la seguridad ‘social’.

La amenaza rusa no es creíble, ante una clara superioridad militar europea, incluida la cobertura nuclear, y aunque tenga dificultades de interoperabilidad y mando único, residido ahora en la OTAN. La llamada crisis existencial europea, con el correspondiente miedo difundido entre la población, no se asienta en un peligro real.

Es más, la presencia estadounidense, con su control de los recursos mineros, agrícolas y energéticos ucranios, fruto del pacto de Trump con Putin y la tregua prevista en Ucrania, ya suponen suficiente disuasión para Rusia para no acometer otras aventuras fuera del marco defensivo de su zona de influencia. Ante la expectativa de alto el fuego, no querida por los halcones europeos, pues se quedarían sin su argumento principal para sostener el rearme, estos Admiten que la guerra con Rusia no es inminente, pero que —en un alarde de hipótesis imaginativas— podría reiniciarse en cinco años.

Sin embargo, lo que sí constituye planes precisos de rearme, militarización y preparación para la guerra es la que puede sostenerse con China... pero para dentro de más de una década —con permiso de Taiwán—. Por tanto, la estrategia compartida de EE.UU. y Europa, en el seno de la OTAN, cuya competencia se amplía al marco asiático, es frenar el desafío chino a la supremacía occidental. China ejerce el poder ‘blando’, económico-político, ampliando su influencia en el Sur global y compitiendo con EE.UU. y con Europa, respetando las normas internacionales de la OMC. Es lo que EE.UU. no soporta, la perspectiva del cambio de hegemonía, sin siquiera admitir una paridad estratégica, y para ello utiliza su prevalencia militar.

Estamos ante el riesgo de la utilización de la fuerza, como último recurso de dominio mundial. Es el peligro real de guerra, aunque su concreción precisa de muchas variables por desarrollar, incluso el desencadenamiento de guerras parciales o periféricas, que modifiquen los equilibrios y la legitimación de las sociedades, antes de llegar a una confrontación —nuclear— general; o sea, no hay que caer en el determinismo de la inevitabilidad de la guerra nuclear mundial o en la instalación de una segunda guerra fría basada en la disuasión de una

destrucción mutua asegurada. No es un futuro apetecible para la humanidad y la democracia.

Los límites de la autonomía estratégica y la unidad política

Lo que interesa destacar aquí es que el rearme europeo, exigido por EE.UU., pero cuya necesidad también es compartida por las élites europeas, solo obedece a la lógica de garantizar a Occidente la primacía mundial. La pretendida autonomía estratégica europea es muy limitada ante esos planes compartidos en el seno de la OTAN. Esa política no impide la involucración europea en una deriva belicista, con un refuerzo autoritario y supondrá el descenso de los recursos de una ambiciosa agenda social, así como de la cooperación y el desarrollo mundial, extraños a proyectos imperiales periclitados, apoyados en la fuerza militar.

Este giro militarista generará más desafección sociopolítica, y hacerle frente, con más autoritarismo y protagonismo de las fuerzas reaccionarias, supondrá el agravamiento de la crisis social y política en Europa, así como del descrédito moral y político como muestra su complicidad con el genocidio palestino. Hay que refundar el modelo social y democrático europeo, que goza de una gran legitimidad cívica y que hoy está cuestionado por el poder establecido.

Volviendo a Habermas. Tiene razón en su idea de que el rearme alemán puede enfrentarse a los celos de sus poblaciones y también a los de sus potentes aliados de EE.UU., Francia y Reino Unido. Supondría el refuerzo de su primacía político-militar en el centro y este de Europa, el conocido ‘espacio vital’ nazi, que acompañase a su expansión y poderío económico de estas tres décadas en esos territorios desde el derrumbe del Este. De ahí que, desde ámbitos progresistas, consideren la imperiosa necesidad de abordar la unidad política europea, en la que integrar el poderío alemán. Sin esa unidad política, Habermas rechaza el rearme y una fuerza militar disuasoria común de la Unión Europea.

No obstante, todavía es un argumento insuficiente. El sesgo imperial que se critica y se pretende neutralizar para Alemania se traslada al núcleo dirigente de la UE, sobre todo, a Francia (aparte del poder establecido europeo y del Reino Unido), pero sin garantía de la democratización de la UE. El problema de fondo es corregir su orientación pro-imperial, acomodada al expansionismo estadounidense y su liderazgo, por otro modelo autónomo basado en la mejor tradición europea, democrática, pacifista, social y de cooperación internacional. Pero para ello no se necesita más rearme, militarización y estrategia belicista, que es lo que se ejecuta sin la legitimidad cívica.

El rearme no tiene justificación, ni es permisible con determinadas condiciones, sea de una limitada autonomía estratégica —siguiendo la pauta otanista— o de una mayor unidad política de las élites, difícil de articular. Este rearme europeo tiene una lógica geopolítica imperial y neocolonial frente al Sur global y, a nivel interno, refuerza el autoritarismo y la regresión social. La oposición al rearme es justa. Las sociedades europeas prefieren otro orden internacional y democrático.

1.2 La claudicación de la Europa liberal

El acuerdo económico y comercial impuesto por la administración trumpista de EE.UU. y firmado por la Comisión Europea certifica la dependencia y rendición económica de la Unión Europea. Su contenido y su forma expresan un nuevo equilibrio de poder en las relaciones atlánticas, con plena sumisión europea. Éste y el reciente acuerdo en la

cumbre de la OTAN, al imponer Trump un gasto militar del 5% del PIB y redefinir sus adversarios (China), expresan la subordinación geoestratégica y militar de Europa respecto de los intereses geopolíticos de EE.UU. El foco es la recuperación del dominio imperial estadounidense: ‘América, primero... y otra vez grande’. La Europa liberal ha claudicado; avanza hacia una democracia iliberal, hacia un sistema postdemocrático y neocolonial, en el que espera posicionarse en un papel subordinado al de EE.UU.

La rendición de las élites europeas

Veamos algunos datos de la capitulación económica de la UE. Los aranceles estadounidenses del 15% suponen una transferencia de impuestos a productos europeos exportados a EE.UU., cerca de ochocientos mil millones de euros, en el último año, cuyos aranceles para las arcas estadounidenses alcanzan a más de cien mil millones de euros anuales.

No hay ninguna reciprocidad europea, cuyo superávit comercial alcanzó cerca de doscientos mil millones de euros, en el año 2024, ya que no impone ningún impuesto a los productos estadounidenses, que pueden gozar ahora de una mayor competitividad en los países europeos. Tampoco la UE reequilibra su déficit en el sector servicios (financiero, tecnológico...), que alcanza unos cuarenta y ocho mil millones de euros, en este año pasado, y del que ha pasado de largo.

Aparte de estar pendiente la concreción de la imposición en algunos sectores (farmacia, semiconductores, acero...) y las amenazas correspondientes ante posibles incumplimientos, Trump ha impuesto a la UE dos condiciones globales más.

Una, la inversión europea de setecientos cincuenta mil millones de euros en la compra de energía fósil estadounidense (petróleo, gas licuado, carbón, uranio...) mucho más cara; supone triplicar la compra actual, depender al 70% de su energía y lastrar la competitividad económica europea.

Dos, la inversión europea en bienes estadounidenses, principalmente en la compra de material militar, en los tres próximos años, dentro de su actual presidencia —para garantizar su cumplimiento inmediato—, de seiscientos mil millones de euros; Trump amarra el compromiso de la cumbre de la OTAN, de llegar al 5% del PIB en gasto de defensa y seguridad... para 2035.

Expresa una derrota estratégica de impacto duradero, una capitulación en toda regla, que apenas queda enmascarada con el argumento de Von der Leyen del ‘mejor acuerdo posible’. La Comisión Europea y el Consejo Europeo, que representan a todos los Estados europeos, han renunciado a la resistencia política o la negociación desde una posición de fuerza, sin contar con su similar poderío económico y comercial, en términos de PIB, y la voluntad de sus poblaciones. Las élites europeas se han doblegado, buscando acomodo en la nueva relación de subordinación jerárquica que impone Trump, a costa del bienestar de sus sociedades, su autonomía estratégica y sus valores sociales y políticos.

Mientras tanto, China, que en las últimas décadas se ha acercado a una posición similar a ambos a nivel mundial, en su capacidad económica, no militar, reforzada por sus alianzas con los BRICS y en el Sur global, se ha permitido plantar cara y doblegar la prepotencia trumpista. Son reglas básicas de la actitud política ante posiciones de fuerza, como las actuales; solo que, en este caso, las élites europeas buscan resguardar sus propios intereses oligárquicos, transferir los daños a sus respectivas poblaciones y confiar en el designio imperial estadounidense de participar en el beneficio del reparto de poder del mundo. O sea, con un nuevo encaje neocolonial, empezando por su complicidad en el designio israelí-estadounidense para dominar todo el Oriente Próximo y liquidar al pueblo palestino.

Pero, este cálculo fáctico, imperial autoritario, aparte de su inmoralidad, que les preocupa poco, es difícil de ejecutar por el mundo empresarial europeo, además de la propia fragilidad de la economía estadounidense. La oligarquía europea queda unida y subalterna a ese

plan, al mismo tiempo que en Europa (y también en EE.UU.) persisten los altos riesgos de desafección política interna, desvertebración social y descrédito en el Sur global, irresolubles con mayor autoritarismo regresivo.

La prepotencia imperial *trumpista*

La prepotencia trumpista pretende modificar el orden internacional a su favor. Se ha iniciado una transición de las posiciones de poder, las normas y los discursos vigentes. En estas décadas, desde los años noventa, de globalización neoliberal, bajo hegemonía económica y estratégico-militar estadounidense, ha habido cierta regulación consensual y multilateral a través de organismos internacionales — desde la ONU y su Consejo de Seguridad hasta el G-7 o la OMC—. EE.UU. aparecía, formalmente, como primero entre iguales.

Ahora, con el despliegue del peso de su poder duro político-militar, en toda su crudeza geoestratégica, se imponen varios escalafones de dominio: el emperador y los súbditos europeos/occidentales y, al fondo, los pretendidos vasallos mundiales, sin el permiso de China y los BRICS.

Su objetivo está claro: la primacía de EE.UU., la subalternidad de Europa y el control y sometimiento del Sur global, que se le escapa. Es una dinámica imperial, autoritaria e iliberal, que pretende reforzar a las derechas extremas en Europa, cuartear su Estado de bienestar y de derecho y vaciar la democracia representativa. Es el cierre a la Europa liberal progresista, a su modelo social y democrático. Sin que se plantee, de momento, la ruptura de la UE o la salida de la Unión, se acomete una profunda reorientación geopolítica, estratégica y de articulación institucional.

Junto con mayor dependencia de la OTAN y el militarismo, se refuerzan los soberanismos estatales y los nacionalismos excluyentes y antinmigración, las dinámicas institucionales autoritarias y tecnocráticas y la recomposición de las élites dirigentes, con la colaboración entre las

derechas tradicionales, liberal-conservadoras, y las ultraderechas postdemocráticas.

El mecanismo principal de presión estadounidense es su poderío geoestratégico-militar y su privilegio financiero-monetario, ambos derivados de su hegemonía tras la segunda Guerra mundial y, posteriormente, reforzada tras el hundimiento del bloque soviético. Es la respuesta autoritaria a su declive, en términos económicos, políticos y de legitimidad social o, dicho de otro modo, la reacción regresiva ante los avances democráticos y de derechos civiles y sociales en el Norte, en el propio EE.UU. y Europa, y las afirmaciones autónomas en países del Sur global.

Por el camino sombrío aparecen mayores conflictos políticos e importantes crisis sociales y medioambientales. Habrá que apuntarlas al debe de esta apuesta estratégica de involución democrática, social e imperial, impuesta por las élites occidentales, que deberán renovarse y democratizarse. Otro mundo es posible, quizá con retrocesos relativos y nuevos sufrimientos humanos. Pero el neofascismo, según la experiencia histórica, fracasará. La democracia real, más igualitaria y solidaria, es la respuesta.

El supremacismo estadounidense

Las relaciones internacionales, más o menos multilaterales de esta última etapa de más de tres décadas de globalización neoliberal y dominio estadounidense, han sido relativamente estables... pero declinantes para EE.UU. Europa, incluido el Reino Unido, apenas ha mantenido su estatus de gran potencia económico-comercial, pero con grandes desigualdades socioeconómicas, retos medioambientales y de integración social y étnico-cultural y fuertes brechas sociopolíticas y de liderazgo, estando las izquierdas debilitadas. Al mismo tiempo, se ha producido un creciente desafío económico-político chino (y de otros países). Así, para retomar la primacía estadounidense, su poder

establecido se lanza a forzar la dependencia europea y frenar la insubordinación de los BRICS.

El rasgo autoritario adicional de Trump es la brusquedad de su método: la exhibición de su poderío, con su franqueza de ‘América primero’. No hay florituras argumentales universalistas, ni concesiones discursivas a la necesidad de legitimidad de las élites nacionales subordinadas respecto de sus ciudadanías. El poder se impone, y el discurso también... aunque no convenza a la mayoría de la ciudadanía. Es el culmen del cinismo y el nihilismo moral, la destrucción de la democracia y la ética cívica. Incluso para Maquiavelo era necesario una mínima legitimación para el poder soberano; ahora se fía al control mediático totalitario y antipluralista y a la segregación social y étnico-nacional.

Ante esas tendencias declinantes para el poder oligárquico estadounidense, resurge su supremacismo, solo dispuesto a delegarlo parcialmente, con amenazas, a sus súbditos leales, o sea, a ciertas élites europeas colaboracionistas sometidas a chantaje y en conflicto con la supuesta representatividad respecto de sus respectivos pueblos. Pero, los nacionalismos ultras, o los grandes soberanismos oligárquicos europeos, con su dependencia y subordinación al dictamen imperial, reducen su propia legitimidad discursiva ante sus sociedades.

La contrapartida para garantizar una mínima aceptación ciudadana, con un control y manipulación de los aparatos culturales y mediáticos, son los supuestos beneficios económicos y políticos para sus oligarquías y estratos privilegiados, a costa de la segregación de las mayorías sociales y la fragmentación insolidaria de las ventajas relativas entre segmentos populares. Y ello no es sostenible a medio plazo.

Europa, desde la segunda Guerra mundial, siempre ha estado dependiente del dominio geoestratégico y militar estadounidense aunque, en términos económicos y comerciales, no tanto tecnológicos, medido en PIB, ha conseguido una posición similar a la de EE.UU. y de China. Era el llamado poder blando de la UE, basado en el intercambio económico y comercial cooperativo, acompañado con una referencia a

su modelo democrático y social, así como por el reequilibrio de unas relaciones multilaterales amparadas por el derecho internacional y el derecho humanitario, con un papel secundario de la fuerza militar, que quedaba al amparo de la OTAN. Se trataba del consenso europeo, liberal-conservador y socialdemócrata, embellecido en el discurso socioliberal de un potencia democrática-pacífica compensadora en el conflictivo concurso mundial.

Ese ideal, teñido a veces de nostalgia de superpotencia neocolonial, se ha venido abajo. Europa dimite incluso de su pretensión de superpotencia autónoma y específicamente de referencia política, todavía más con un derrumbamiento estrepitoso de su legitimidad moral ante el genocidio en Palestina. Queda atada a los intereses geopolíticos y militares de EE.UU., al amparo de su primacía internacional y su prepotencia autoritaria; así es vista por gran parte de sus poblaciones y, especialmente, por las del Sur global.

El mayor atisbo de autonomía estratégica, por parte del eje francoalemán y la gran movilización pacifista de las sociedades europeas, se produjo, precisamente, hace un cuarto de siglo frente a la invasión y la guerra de Irak por parte estadounidense, y la colaboración de los gobiernos, británico, de Blair, y español, de Aznar. Estaba en primer plano el control geoestratégico de todo el Oriente Próximo y sus fuentes de materias primas energéticas, como eslabón relevante para el control de todo el arco de la crisis árabe-musulmana, de Marruecos hasta Indonesia, pasando por Irán y Afganistán. Y ese núcleo europeo, con gran apoyo de la ciudadanía española, señalaba su disconformidad estratégica y ética con esa opción militarista al margen del derecho internacional.

Estas décadas han servido a los Gobiernos de EE.UU. para intentar su reversión, el disciplinamiento europeo —incluidas las veleidades francesas— y la consolidación de su hegemonismo en esa parte del mundo. Al final, el gobierno israelí y el estadounidense han retomado, con la complicidad ahora de toda la Europa institucional, salvo los matices del presente Sánchez, ese objetivo imperial estadounidense-

occidental. Ese plan otanista pretende frenar a China (y Rusia), incluida su Ruta de la Seda como vínculo comercial con Europa, y complementa el intento de control estadounidense —con sus aliados subordinados europeos y del Asia Pacífico— del resto del Sur global —África, América Latina, Sur de Asia—, pendiente de su estrategia neocolonial y la contención de los BRICS.

El fiasco de la autonomía estratégica europea y el soberanismo oligárquico

Con ocasión del giro trumpista hacia el control económico de Ucrania, junto con el sometimiento energético y geoestratégico-militar europeo y la relativización del conflicto con Rusia por su prioridad hacia el Asia-Pacífico, ha resurgido el discurso de la necesidad de la autonomía estratégica de la UE.

La paradoja ha consistido en la resignificación del concepto ‘autonomía estratégica’ respecto de EE.UU. Inicialmente, tenía una orientación progresista, pacifista y soberanista, enraizada en la experiencia europea contra la guerra y su nuclearización. En este momento, con ocasión de la llamada amenaza rusa y el supuesto abandono estadounidense, se le ha dado el sentido contrario. Se ha convertido en la justificación para profundizar en el rearme y la militarización de los países europeos.

Finalmente, se está imponiendo una evidencia: es una simple retórica que esconde la mayor subordinación europea a los intereses geopolíticos, la estrategia y el complejo militar industrial estadounidenses. El plan de Rearme europeo, de ochocientos mil millones de euros, queda sin esa justificación embellecida de garantizar la seguridad europea. Rusia —tras el hundimiento del bloque soviético— no es suficiente enemigo para Europa y la OTAN, y la relativa estabilidad en el Este —hasta la expansión de la OTAN y la agresión rusa a Ucrania— se ha resuelto en las décadas pasadas por acuerdos de

seguridad y cooperación; además, era un socio comercial y energético para la UE y fundamental para Alemania, ahora roto en su perjuicio.

Tampoco el plan de Rearme es un motor neokeynesiano para estimular la industria o la innovación tecnológica europea. Trump impone y la Comisión Europea acata que el grueso inversor vaya hacia la industria militar estadounidense, con la dependencia operativa, estratégica, tecnológica e industrial que conlleva.

Se cierra la manipulación discursiva de la autonomía estratégica y su credibilidad. Trump su ufana de ello; las élites europeas están a sus órdenes. La pleitesía del secretario general de la OTAN, el holandés Rutte, y de la presidenta de la Comisión europea, la alemana Von der Leyen, constituyen el broche simbólico de la sumisión de los gobiernos europeos.

Todo ello ha afectado, particularmente, al estatus de Alemania, tras su unificación, como motor económico e institucional de la UE, y en el plano político discursivo a Francia y su ‘grandeza’, cada vez más minorada. La penetración económica alemana en el Centro y Este de Europa, con su preponderancia política, cada vez más hegemónica respecto de la decaída Francia, parecía compatible con el acompañamiento de la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia.

Alemania, especialmente con su socialdemocracia, compatibilizaba su complementariedad energética en un clima de colaboración pacífica con Rusia, aun con los recelos de los propios intereses estadounidenses para la contención rusa y la subordinación alemana. Hasta que con la expansión otanista hacia las fronteras rusas, cuestionando su seguridad, especialmente desde 2014, y sobre todo con la agresión rusa a Ucrania en 2022, se ha roto el marco de complementariedad económica y cooperación política y de seguridad. Se han impuesto los propios intereses estadounidenses, estratégicos, energéticos, económicos y geopolíticos. O sea, Europa (y Rusia) pierde, y EE.UU. gana. Se produce una crisis de la estrategia y la identidad alemana (y europea), que se ha decantado por la sumisión a EE.UU., mientras un Reino

Unido, formalmente laborista y con orientación conservadora, se hace más militarista y seguidista del amigo americano, y una Francia derechista intenta su recolocación.

Pero, además, tras varias décadas de dinámica neoliberal en la construcción de la UE, incluida la estrategia de austeridad (2010-2014) ante la grave crisis socioeconómica y, a pesar de algunas políticas expansivas frente a la pandemia, se prioriza este vasallaje a EE.UU. con transferencia de fondos, aumento y reorientación de su gasto militar y su dependencia estratégica y energética respecto de sus objetivos geopolíticos; primero, con el incremento de la hostilidad imperialista al resto del mundo y, segundo, con una regresión social y autoritaria en el interior de Europa.

El presidente alemán, el democristiano Merz, ha dicho recientemente que era el momento de la independencia de Europa, es decir, de un nuevo hegemonismo alemán, para el que refuerza su poderío militar y su expansionismo económico, con un macro plan financiero y militar. También se pueden recordar las ínfulas de dirigentes franceses de derechas sobre la refundación del capitalismo o la muerte de la OTAN, o sea, del protagonismo de las élites francesas y su poder nuclear. Mientras tanto, el Reino Unido, se declara leal al amigo anglosajón y se separa de Europa, pero reclama su poder político-militar para la seguridad europea.

Se trata del gran soberanismo de las élites y grupos de poder de los principales países, en busca del interés de sus oligarquías respectivas y sus elementos comunes frente a sus mayorías sociales y a terceros países, más subalternos. En ese camino, las derechas tradicionales se aprestan a colaborar con las derechas extremas, cada vez más potentes e influyentes, seguidistas del reaccionarismo imperial del trumpismo, en contradicción con su supuesto nacionalismo como bienestar de sus poblaciones y cada vez más argumento esencialista pro oligárquico. El resultado es neutralizar a las izquierdas y movimientos progresistas y monopolizar el poder institucional y cultural-ideológico.

La socialdemocracia europea, particularmente la alemana, la danesa y la británica, con posiciones de gobierno, se va derechizando, en especial con el exclusivismo nacional, el militarismo y la segregación racista.

El presidente Sánchez, aunque ostente la jefatura de la Internacional Socialista, apenas se distancia un poco de alguno de los aspectos más problemáticos del nuevo orden imperial y reaccionario en construcción: aplicación otanista del 5% del PIB para gasto militar, que declara que va a incumplir; rendición comercial y estratégica europea, ante la que se muestra poco entusiasta; genocidio israelí, sin oposición contundente y que solo reclama el reconocimiento formal del estado palestino... Su actitud de limitado distanciamiento discursivo, dentro del consenso europeo y sin incomodar mucho a EE.UU., busca mantener una mínima estabilidad gubernamental ante sus socios y las bases de izquierda, pero no es capaz —o no tiene la voluntad— de articular una posición española y europea diferenciada y consistente, que refuerce su legitimidad cívica y frene los procesos de derechización interna y externa.

De pronto, Trump ha corrido el telón del orden mundial y aparece la cruda realidad del poder y la disponibilidad estratégica de las distintas élites supremacistas. Se produce un proceso de adaptación y jerarquización de la nueva estructura imperial en formación. Aparte de la cobertura de las extremas derechas al nuevo poder reaccionario, los tres campeones geopolíticos y económicos europeos, Alemania, Francia y Reino Unido, con sus respectivos soberanismos nacionales, se aprestan a reconducir la supervivencia de su dominio relativo en sus sociedades, sus cercanías geoestratégicas y a nivel mundial, en un proceso adaptativo y subordinado con el jefe del imperio. No sin tensiones, con graves problemas de cohesión y legitimidad internas, y quizá esperando no ejecutar todo el sometimiento y que escampe a medio plazo, tras esta presidencia de Trump; pero prestos a cooperar entre ellos para mantener sus ventajas oligárquicas relativas, neocoloniales y de control de sus ciudadanías.

Ello explica la sumisión y el reacomodo de las élites europeas al liderazgo estadounidense, la renuncia a la autonomía estratégica, la dimisión como polo autónomo con un sentido progresista y pacífico. La apuesta geopolítica frente al Sur global y el autoritarismo interno, están compartidos o, mejor, acatados respecto de EE.UU. y su actual estrategia extrema de dominación. Es la traición oligárquica a los supuestos valores fundacionales, a los intereses de sus países y sus pueblos; supone el retraimiento (gran) nacionalista y colonial, al amparo de la nueva hegemonía autoritaria.

Dentro del reajuste jerárquico con primacía estadounidense, los principales grupos de poder europeos tratan de construir un nuevo orden de ventajas relativas para súbditos leales y con mayor dependencia del resto de países para trasladar los daños a sus poblaciones. Todo ello, nada patriótico; solo beneficioso para los poderes de arriba, y con una gran fragilidad retórica, ética y cívica.

Ante esa dinámica se recrudece la pugna de las élites de ambas derechas y sus respectivos grupos poderosos, cada vez más extremos, por conseguir una posición relativa de mayor influencia en su orientación estratégica, así como en el reflejo, en las instituciones comunitarias, de los intereses de esos poderes nacionales renegociados, con nuevos equilibrios políticos. Atrás quedan las democracias liberales, en especial, para las instituciones europeas, incluida la OTAN, que se van vaciando de participación y confianza cívicas. Se avanza hacia sistemas políticos postdemocráticos.

Su designio autoritario está claro: Las mayorías sociales de los distintos pueblos europeos, si no se rearticulan, pasarán a estar más subordinadas, en particular, las izquierdas y los movimientos progresistas; el Sur global seguirá su camino, más o menos disperso, aunque habrá que aislar a China y contener a los BRICS y, en particular, a los grandes países de izquierda (Brasil, México, Colombia, Sudáfrica...), mandando algún recado intimidatorio a posibles aliados díscolos (incluido el gobierno de coalición progresista español).

En todo caso, por su peso económico y político, el futuro de la humanidad también va a depender de la articulación de una nueva Europa, social y democrática, con los valores progresistas auténticos de igualdad, libertad y solidaridad, ajenos al poder establecido y la nueva jerarquía imperial. Entonces, se podrá hablar de un nuevo polo geopolítico autónomo, de referencia mundial multipolar y colaborativo. Pero la salida no vendrá de las élites europeas, sino de la capacidad democratizadora de sus sociedades.

Otra Europa, otro mundo, son posibles

La Europa liberal progresista se derrumba. Se ha hundido el proyecto y el discurso de la Europa social y democrática, como polo autónomo y pacífico de referencia mundial, basado en el derecho internacional, la cooperación y las reglas multilaterales pactadas. La rendición económica y estratégica ante el reaccionarismo imperialista estadounidense ha quebrado su legitimidad social, con el broche de su complicidad ante el genocidio de Palestina. La presión autoritaria y regresiva está en marcha.

No todo está perdido para una perspectiva de progreso. Queda una base social y una cultura democrática, pacífica y solidaria en la ciudadanía europea, así como los intereses de las mayorías populares y los proyectos y fuerzas sociopolíticas progresistas. Se produce la descomposición de la ideología de centroderecha liberal, más o menos posibilista respecto del poder establecido, que gira hacia el autoritarismo postdemocrático e iliberal, aun con el refuerzo de elementos liberales y/o neoliberales autoritarios, conservadores y reaccionarios.

El ultra conservadurismo pugna y se alía con el nuevo neoliberalismo supremacista y neo imperialista, en un nuevo nihilismo moral. Pero no ofrece perspectivas consistentes para resolver los problemas de la humanidad y legitimarse ante sus poblaciones. El poder duro, coactivo y militar, no es sostenible a medio plazo, menos ante las

exigencias perentorias de grandes sectores del Sur global. Es la tragedia de las élites europeas (y estadounidenses), que no pueden consolidar su poder estratégico, en esta fase histórica, y están condenadas al fracaso, no sin provocar, quizá, fuertes sufrimientos humanos.

La actual reorientación derechista europea, con ausencia de trayectoria autónoma y la adaptación a la subordinación económico-comercial y el interés geoestratégico del dominio de EE.UU. frente a China y el Sur global, tiene poco recorrido. Es insuficiente y contraproducente su prioridad del poder duro, militar y coactivo. Pretende una nueva hegemonía del capitalismo globalizado y la imposición de nuevas reglas económico-financieras-comerciales... con el imperio de la prevalencia estratégica-militar de EE.UU. Se había difuminado, como único poder fáctico mundial, tras el fin de la guerra fría y el hundimiento del bloque soviético, pero se reafirma con el actual desborde económico y tecnológico chino y la aspiración europea — francoalemana— por potenciar su capacidad comercial y la autonomía de su mercado único.

Hay una reestructuración del orden internacional, de la dominación y la primacía jerarquizadas y de las normas, con nuevas regulaciones apropiadas al nuevo poder. Se rompe la ilusión de que el orden internacional se debe regir por ‘normas’ consensuadas -ONU y organismos internacionales sin privilegios de poder- y criterios éticos, como los derechos humanos.

Ahora, desde el centro imperial, se dictan nuevas reglas... a beneficio de parte y como castigo político. Se genera el descrédito de la referencia universalista moral o de derecho internacional y derecho humanitario de las instituciones pactadas, con un nuevo reajuste de los grupos de poder dominante. Los derechos humanos y la democracia constituyen una referencia menor para implementar la política... del más fuerte, que es el que impone su ley.

Se produce un engaño entre la ciudadanía, por la fragilidad de las normas consensuadas en el ciclo anterior de la globalización neoliberal, del equilibrio hegemónico ‘multilateral’, con predominio de EE.UU. y

socios europeos (y G-7), con virtualidad de su operatividad por organismos internacionales y la ONU y su Consejo de Seguridad. Aparece la brutalidad del poderío trumpista, político-militar y geoestratégico, de las élites estadounidenses, aun con su poder económico comercial en declive, sin capacidad articuladora del conjunto del planeta, sin respuesta a los grandes retos ecológicos y sociodemográficos y con el distanciamiento del Sur global.

Se comienza la transición hacia un nuevo orden hegemónico de la parte occidental (y Japón) y, sobre todo, el reajuste de los sistemas políticos, la democracia iliberal y sus élites, al igual que la propia dinámica comunitaria de la UE. Hay una recomposición de los grupos de poder ultras, la derecha tradicional y la interacción con las oligarquías económico-financieras-tecnológicas. Afecta al tipo de estrategias, cómo se elaboran y ejecutan las normas —órdenes, aranceles, armamento, materias primas—, así como las nuevas relaciones de poder —Oriente Próximo, Centroeuropa... Sudeste asiático, África, América Latina—.

Todo ello tiene un impacto en las relaciones sociales y la democracia, en la constitución del sujeto de ciudadanía y el imperio de la ley, en la soberanía popular política, frente al poder duro —militar, económico, mediático, de aparatos de poder—. En las élites europeas se produce la tendencia adaptativa hacia la negociación a la baja, por su propia supervivencia y la transferencia hacia abajo de las desventajas, hacia la mayoría poblacional, especialmente la más vulnerable y de origen inmigrante, con mayor subordinación, precariedad y explotación. Conlleva la disgregación sociocultural, la segmentación social, el autoritarismo político y la desigualdad en las estructuras sociales y familiares, con mayor discriminación por sexo/género.

De no frenar esta tendencia antigualitaria, opresiva e insolidaria, la consecuencia sería el hundimiento de la ilusión democrática, de la soberanía popular, vía elecciones, y la desafección ciudadana a la clase política vinculada a sus electorados y, en general, a la acción colectiva y pública frente al poder autoritario. Supondría el descrédito de la

credibilidad de la élite político-gestora del Estado —incluida la Justicia y los medios de comunicación—, del liberalismo político, dependiente de las estructuras de poder y la dominación. Cuentan con que no habría suficiente fuerza social autónoma y referencia cultural de racionalidad o moralidad. El plan neoconservador y autoritario y el cierre postdemocrático en el Norte global pasarían a ser posibles... salvo por un detalle fundamental: perjudica a la mayoría de la humanidad, no tiene legitimidad cívica y genera resistencia popular.

El proceso dominante de las élites europeas es el adaptativo u oportunista, respecto de la fuerza hegemónica estadounidense. Es el cinismo y el nihilismo del poder, sin convencimiento ni entusiasmo, pero de sumisión posibilista que expresa la falta de sus convicciones democráticas y éticas. Expresa la debilidad, en los poderosos, del universalismo moral o el progresismo ilustrado, al mismo tiempo que manifiesta la ilegitimidad del poder político ‘duro’ e impositivo; renuncian a ‘convencer’ socialmente y practican el cinismo, la prepotencia y la crispación. Es la degradación ética y democrática del neo autoritarismo del poder establecido.

El proyecto europeo, social y democrático, está en crisis. La alternativa progresista está en declive. La opción ‘universalista europea’, sobre el eje francoalemán... de centroderecha o consenso liberal, da paso al interés ‘soberanista’ de las élites alemanas y en menor medida francesas (y británicas, italianas...). Queda difuminado el papel progresista de la socialdemocracia europea, incluida la española, particularmente con el giro a la derecha británico, alemán y danés en los temas de inmigración, el rearme y Palestina, al igual que el de los Verdes alemanes.

En vez de una relativa autonomía europea respecto de la actitud con el Sur global y China, dentro del ‘multilateralismo’, ahora se promueve un neo soberanismo, no solo de las derechas extremas, sino de los núcleos dominantes de poder europeo, sobre todo, alemán —e incluido Reino Unido y Francia— con su nuevo plan hegemónico y militarista,

con subalternidad socialdemócrata y la justificación del pretendido freno y/o concesión para la desactivación ultra y la total deriva autoritaria.

En sectores españoles de izquierda hay cierta reacción de lucidez analítica sobre la impotencia estratégica y discursiva del gobierno de coalición y su desconcierto político y de orientación. No obstante, la socialdemocracia depende de su actitud contemporizadora ante el conflicto de fondo con el poder establecido y de adaptación socioelectoral posibilista, lo que les incapacita para articular una dinámica diferenciada y consistente que frene a las derechas y su involución social y democrática.

Aunque hay indicios de descontento cívico por esta deriva regresiva y autoritaria y cierta reactivación crítica y movilizadora, todavía no se han producido grandes y continuadas movilizaciones progresistas, ni un gran sujeto cívico transformador. La perspectiva depende de tres factores: la aplicación para las mayorías sociales y su experiencia directa en los recortes sociales y vitales y el deterioro de los servicios públicos y el Estado de bienestar; la regresión autoritaria de las instituciones y políticas públicas, con impacto generalizado iliberal; la capacidad articuladora de la izquierda social y política para afrontar su vinculación ciudadana y una dinámica democratizadora.

El actual gobierno de coalición intenta achicar las dinámicas más reaccionarias; no es suficiente. El grueso del impacto regresivo quizá venga con un gobierno de derechas, si ganan las próximas elecciones generales. Mientras tanto, se mantiene una fragmentación y una dificultad articuladora de la izquierda política, cuya trayectoria es incierta, afectando a la legitimidad social de sus representaciones públicas.

La reacción popular progresista se construye sobre la base de evidencias sufridas de desigualdades y recortes de estatus, reconocimiento y poder. No son suficientes los discursos preventivos o la denuncia pública; los programas son necesarios para los sectores avanzados o críticos y para la elaboración de línea política partidista, constitutiva del contrato socioelectoral con sus bases sociales. Pero la

formación y articulación de un sujeto sociopolítico y un conglomerado electoral de izquierdas o progresista, más con la plurinacionalidad española, con su implementación práctica y su representación pública, es más compleja. Depende de encrucijadas o coyunturas estratégicas, donde confluyen relación de fuerzas, legitimidades, actores... y representantes —políticos, sociales e intelectuales— con teoría, organización y discurso.

El futuro está abierto. El ciclo de progreso no está muerto. Hay motivos y condiciones para la pugna democratizadora o, si se quiere, igualitaria y emancipadora. Para avanzar, es insuficiente señalar solo el horizonte o expresar simples gestos diferenciadores. Hay que precisar el camino y concretar la formación de las fuerzas sociopolíticas para caminar. La trayectoria inmediata es difícil, pero, al mismo tiempo, estimulante para las izquierdas. No es inevitable la salida reaccionaria. En la sociedad siguen vigentes los grandes valores de igualdad, libertad y solidaridad. Frente a la involución social y democrática, otra Europa, otro mundo, son posibles.

1.3 Europa ante el supremacismo trumpista

La Administración estadounidense de Trump ha formalizado su proyecto geopolítico en el documento de su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, donde define el nuevo orden internacional bajo los intereses y la supremacía de EE.UU. En particular, pretende reforzar su hegemonía en el hemisferio occidental (Europa y Latinoamérica) y

alinearse y subordinar a sus élites dirigentes, completar su control sobre Oriente Medio, acumular fuerzas geoestratégicas para contener al adversario principal (China y sus aliados BRICS) y reajustar el sistema social, económico e institucional hacia un autoritarismo postdemocrático y regresivo.

En este ensayo, en primer lugar, se analiza la actitud de la ciudadanía europea ante los temores y los dilemas estratégicos y de seguridad. En segundo lugar, se valora el sometimiento europeo a la estrategia trumpista, con el fracaso de la autonomía estratégica de Europa, y las características del supremacismo trumpista.

Temores de la ciudadanía europea sobre seguridad

Un reciente estudio demoscópico, realizado por *Cluster 17*, en los nueve países europeos más relevantes (más de mil encuestas por cada país), y publicada en *Gran Continent* (4/12/2025), sobre los temores y deseos de la población, relacionados con la seguridad pero sin entrar en la seguridad social o las relaciones sociales, expone resultados interesantes de la opinión de la ciudadanía europea y española. Destaco varios aspectos significativos, con la media general y, entre paréntesis, la media española [entre corchetes, detallo algunos casos extremos de distintos países]:

- *¿En cuál de los siguientes ámbitos se siente hoy más inseguro?*

La respuesta sobre los distintos ámbitos es la siguiente:

seguridad militar derivada de los *riesgos geopolíticos y conflictos*, 25% de la muestra europea (22% en España);

la seguridad tecnológica y digital, 28% (37%);

la seguridad energética de abastecimiento y precios, 22% (16%), y

la seguridad alimentaria, 13% (13%).

- *¿Cree usted que Rusia podría entrar en guerra abierta con su país en los próximos años?*
Riesgo alto, 51% (49%) [Polonia, 77%; Italia, 34%];
Poco o nada de riesgo, 46% (48%).
- *¿Qué postura debería adoptar Europa en las relaciones entre las grandes potencias?*
Aliarse con EE.UU. frente a China, 20% (25%);
Aliarse con China frente a EE.UU., 4% (5%);
Mantener la misma distancia entre ambos o No aliarse con ninguno de los dos, 71% (68%).
- *¿Cuál cree que debe ser la postura de la Unión respecto al gobierno estadounidense?*
El compromiso, 48% (35%);
La oposición, 33% (41%) [Francia, 41%; Polonia, 13%];
La alineación, 19% (24%).
- *Para usted, la inmigración en los próximos años será sobre todo*

Una necesidad para compensar el envejecimiento de la población, 33% (49%).
Ni una necesidad ni una amenaza, 18% (16%).
Una amenaza para la cohesión del país, 46% (33%) [Polonia, 61%; Italia, 35%].
- *En los próximos años, ¿desea que el poder político sea ____*
Más centralizado y autoritario, 13% (10%) [Francia, 20%; Alemania, 7%].
Más participativo y deliberativo, 33% (50%).
Un equilibrio entre ambos o Ninguno de los dos, 48% (39%).

- *Si tuviera que elegir entre estas dos opciones para el futuro, ¿cuál le parecería más deseable?*

Una transformación radical de las instituciones políticas, 47% (53%). [En Francia, 67%].

Mantenimiento del orden y la estabilidad, 46% (42%). [En Francia, 28%].

Los datos muestran la diversidad de posiciones interpretativas y normativas de las sociedades europeas sobre estos problemas cruciales que representan los campos sobre los que se expresan los principales temores, preocupaciones o miedos, relacionados con la seguridad, así como las preferencias de sus respuestas. Ofrecen algunas paradojas según las trayectorias político-ideológicas dominantes y la situación geográfica.

Primero, sobre el temor por la inseguridad militar derivada de los riesgos geopolíticos y los conflictos geoestratégicos. La asociación directa es con la guerra en Ucrania y el miedo al expansionismo ruso hacia el resto de Europa. Solo una minoría (25%) expresa ese temor, pero ante la siguiente respuesta sobre la posibilidad de la agresión rusa a su país hay una gran polarización: la mitad cree que sí (y gran mayoría en Polonia), siguiendo la gran campaña mediática del poder establecido, y casi la otra mitad dice que no (una minoría en Italia).

Segundo, aunque hay una minoría significativa de aliarse con EE.UU. frente a China, la gran mayoría de más de dos tercios defiende la autonomía estratégica europea respecto de esos dos bloques contendientes, aunque sólo una tercera parte (41% en España y Francia) es partidaria de una oposición (firme) al gobierno de Trump, mientras casi la mitad prefiere la negociación de un compromiso e incluso una minoría (19%; un 24% en España) se vincula con esa opción ultra del trumpismo.

Tercero, existe un sector de casi la mitad de la población europea (y un tercio de la española) que considera a la inmigración una amenaza

para la cohesión del país, caldo de cultivo para políticas de contención migrante y racistas.

Cuarto, respecto de la actitud democrática, solo hay una minoría (13%), que apuesta por un poder político más centralizado y autoritario, es la base social más ultra; no obstante, es preocupante el porcentaje, de sólo un tercio, de los partidarios de una mayor participación democrática, mientras casi la mitad se sitúan en esa zona intermedia de continuismo contemporizador con esa tendencia postdemocrática, o sea, sin la reafirmación democrática antifascista de un aislamiento hacia los ultras.

El quinto aspecto es paradójico, ya que se plantea la simple estabilidad o transformación radical de las instituciones públicas, sin precisar qué significado tendría era reorientación. Así, la experiencia francesa manifiesta una exigencia transformadora profunda de dos tercios de la población. Se sumarían, por un lado, la opción ultraderechista de Le Pen y, por otro lado, la del frente popular de Melenchón, los clásicos dos extremos por un cambio drástico. Al mismo tiempo, según el enfoque de la encuesta, se consideraría que es el centro derecha tradicional en torno a Macron el que apuesta por el orden y la estabilidad.

Por tanto, esta pregunta y sus respuestas, aunque denotan la fragilidad institucional o el déficit de legitimidad de los actuales poderes públicos franceses (y en general, del poder establecido europeo del consenso liberal-conservador y socialdemócrata), no son suficientemente clarificadoras sobre el sentido del cambio político y el peso específico ciudadano por su derecha y por su izquierda. En ese sentido, es difícil valorar el significado de la ‘transformación radical’ (institucional) que desea más de la mitad de la muestra española, pudiéndose interpretar que es la suma, por una parte, de la gran mayoría de las derechas españolas, implicadas en la deslegitimación del gobierno de coalición con un plan regresivo y autoritario, y por otra parte, algunos sectores independentistas o incluso morados, críticos con el

modelo de Estado, cuyo cambio iría por una mayor democratización y justicia social.

Queda en el aire la interpretación sobre la legitimidad social de las tres principales dinámicas que se perfilan en esta encrucijada europea: el continuismo (derechizado) de la actual élite dirigente liberal-conservadora, la reorientación autoritaria ultraderechista y la resistencia democratizadora por la izquierda. Ahora, en la segunda parte, profundizamos en ello y se explica el marco estratégico y valorativo más general.

El sometimiento adaptativo de Europa

Con respecto a Europa y tras el diagnóstico de su declive, Trump reclama un doble objetivo: afianzar el soberanismo patriótico de cada país, junto con la mayor dependencia y el seguidismo al nuevo poder imperial trumpista. Ese nacionalismo sería funcional para debilitar la estructura institucional de la UE y su fragmentación serviría para facilitar el hegemonismo estadounidense. No obstante, tiene una incoherencia política y discursiva para articularse y legitimarse. Uno de esos conflictos oscila entre dos polos, autonomía / subordinación.

Por un lado, pretende reforzar la autonomía de cada país y su proteccionismo económico, frente a Bruselas y el aparato de la UE hegemonizado por las élites liberal-conservadoras (y el consenso socialdemócrata), con su modelo social y normativo más abierto y democrático. Pero, por otro lado, al mismo tiempo, persigue la incorporación subordinada de esos países a la estrategia dominante mundial del trumpismo y de confrontación con China (y sus aliados), junto con la implementación del autoritarismo postdemocrático en lo institucional y regresivo en lo económico y sociocultural.

Las actuales élites europeas liberal-conservadoras están en proceso de reacomodo a esa reestructuración jerárquica del supremacismo neocolonial e iliberal estadounidense. Asistimos, además, a una dinámica de recomposición de las derechas tradicionales con las

ultraderechas ascendentes, no exenta de tensiones por intereses corporativos, nacionalistas y de legitimación social de sus élites dirigentes.

El núcleo de poder francoalemán —con el aparato de la institucionalidad unitaria de Bruselas—, pretende cierto continuismo institucional y se resiste a perder influencia a pesar de su menguante capacidad. A ese eje se une la pretensión británica de conformar un trípode dominante en Europa para canalizar de forma compartida su papel preponderante respecto de los demás países europeos y sus respectivas sociedades. A la vez, los grupos dirigentes de esos tres países determinantes persiguen mejores condiciones respectivas en esa jerarquización internacional diseñada por el trumpismo, en esta nueva etapa neocolonial.

El fracaso de la autonomía estratégica europea

La llamada autonomía estratégica europea ha fracasado tras la imposición comercial y arancelaria trumpista y el disciplinamiento de la OTAN y la política compartida del rearme. Los países europeos no han sido capaces de levantar una estrategia autónoma y diferenciada a la de EE.UU., en particular ante el genocidio palestino o el conflicto de Rusia/Ucrania, a pesar de su respectivo descrédito ético y su tremendismo de crisis existencial y de seguridad.

Ahora, ante este desplante trumpista, amenazador del estatus del actual poder establecido, algunos sectores de centroizquierda pretenden resucitar cierta independencia respecto de esa estrategia estadounidense o algunos aspectos de ella. Es un gesto positivo, pero poco consistente; no se plantea oponerse a esa sumisión con firmeza, y menos salirse de la OTAN o elaborar otra alternativa pacífica y multilateral. La crítica parece un recurso retórico para hacerse valer en un mayor reconocimiento institucional y de legitimidad social. También para negociar una mejor recolocación en el tablero mundial de la mano estadounidense, incluido el posible acuerdo con Rusia sobre Ucrania.

La tendencia dominante de las élites europeas no abunda en la búsqueda de mayor autonomía sino en aceptar una mayor dependencia hacia EE.UU. y sus intereses geoestratégicos, además de imponer recortes sociales y del Estado de bienestar. Con ello siguen perdiendo credibilidad social y democrática y desplazándose hacia el autoritarismo dependiente que impone el trumpismo.

Esa dinámica subordinada ante EE.UU. contrasta con la opinión de la mayoría de la población europea (más de dos tercios) que prefiere mayor autonomía estratégica y de alianzas, según el estudio demoscópico antes comentado.

Es una realidad que las élites europeas no pueden sortear. Tampoco vale la manipulación de ese discurso de la autonomía estratégica para justificar el plan de rearme, cuando es evidente que es una estrategia imperial clave de Trump y la OTAN y que hace a Europa más dependiente respecto de EE.UU., en los distintos planos tecnológico, productivo, de seguridad, presupuestario y de política exterior. Pero a pesar de la gran presión mediática sobre el tremendismo de la crisis existencial europea, esa estrategia militarista y dependiente de la estrategia estadounidense no tiene suficiente legitimidad social. La amplia mayoría de la ciudadanía europea quiere ser autónoma de EE.UU. (y, por supuesto, también de China o Rusia).

Los tres países fundamentales de Europa, Alemania, como principal poder económico, con su pretensión de incrementar su potencia militar y asegurar su expansionismo en el Centro y Este de Europa, Francia y Reino Unido, como potencias político-militares y de tradición colonialista, sufren una crisis multidimensional profunda, que podría empeorar según los vaticinios trumpistas.

Las estrategias y trayectorias actuales de las cuatro fuerzas sociopolíticas básicas de estos países —unas élites dirigentes de centroderecha muy desgastadas políticamente, una fuerte y ascendente presencia ultra y una socialdemocracia con cierta incorporación a la gobernanza con las derechas, junto con un emergente espacio a su

izquierda, todavía poco consistente— están condicionando su reequilibrio y, en particular, el modelo europeo.

Las nuevas derechas europeas —incluidas las del Reino Unido— tienen la expectativa de compartir una posición de ventaja relativa respecto del Sur global, aunque subordinada a EE.UU., en el nuevo orden internacional, polarizado por la reedición de la primacía de la denominada civilización cristiana y blanca.

Ahí es donde encaja la diatriba ultraconservadora trumpista sobre su solución al supuesto declive europeo. Según su doctrina de seguridad nacional, esa anunciada debacle de Europa estaría derivada de los criticados excesos de su modelo social y democrático y su permisividad con la inmigración y su integración sociocultural, así como de los avances feministas y ecologistas. Constituyen las políticas a revertir en su nueva agenda reaccionaria, siempre con la imposición hegemónica de su poder duro, político-militar, con la ley del más fuerte y los nuevos valores y normativas que justifican la emergente reestructuración autoritaria del poder y el incremento de la desigualdad mundial.

El supremacismo trumpista

La estrategia trumpista tiene la prioridad inmediata de consolidar su supremacismo en América y Europa (el hemisferio occidental), al mismo tiempo que consigue más aliados ultras y dóciles entre sus élites dirigentes, y plantea un repliegue táctico ante China (y Rusia). No se trataría de un retraimiento estratégico, sino de una recomposición de su política hegemónica global frente a China y sus aliados, con una estrategia geoeconómica de prioridad de los intereses de EE.UU., el sometimiento geopolítico y económico europeo, un reajuste de su poderío político militar y unas normas políticas e internacionales favorables a la nueva jerarquización del poder mundial.

Para el trumpismo, el adversario, los objetivos estratégicos y los planes a medio plazo están claros: confrontar con China, para frenar su ascenso y doblegar su creciente influencia. Busca recuperar mayores

condiciones de ventaja neocolonial, tapar debilidades geoestratégicas estadounidenses (y occidentales) y recomponer unas élites europeas más dóciles y subalternas. Para esa tarea necesita a Europa, pero con un reajuste colaborativo de sus élites, subordinado respecto de ese rediseño imperial y autoritario.

Supone un desplazamiento hacia las posiciones postdemocráticas y de soberanía limitada, en el nuevo orden internacional, con el apoyo de las ultraderechas europeas (y mundiales), una reestructuración de las derechas tradicionales (y de la propia UE) y la tendencia hacia su pacto entre ambas. Significa la ruptura del tradicional consenso europeo (liberal-conservador y socialdemócrata), así como del cordón sanitario hacia la ultraderecha, con un reagrupamiento hacia la derecha y una gran presión a la socialdemocracia para que acepte su incorporación o su pasividad al nuevo plan. Implica el debilitamiento del propio sistema unitario de la UE, con mayor autonomía de sus gobiernos (respecto de Bruselas)... para adaptarse mejor a la dependencia estadounidense.

O sea, el nuevo orden internacional y su objetivo imperial es contrarrestar los avances del Sur global, a pesar de la heterogeneidad de los BRICS, y someter a las izquierdas, con la incorporación subordinada de las fuerzas dominantes (liberal conservadoras) europeas. Europa ya no sería una aliada, sino una vasalla; tampoco sería un enemigo, como temen algunas élites europeas, sino un súbdito del nuevo imperio, con algunas ventajas a implorar por ese reacomodo en que se sitúan las fuerzas dominantes europeas —no la mayoría de sus pueblos—.

El pronóstico trumpista es el declive irreversible de Europa, lo que la colocaría, según su opinión, en una situación inservible para colaborar en esa nueva misión histórica del hegemonismo mundial estadounidense: renovar y reforzar la llamada civilización occidental (autoritaria, cristiana y blanca), bajo su liderazgo.

Por tanto, para implementar su estrategia, exige la readecuación europea (y latinoamericana) para cumplir ese destino impuesto, cambiando todo que considera disfuncional para sus objetivos: la reestructuración de sus élites dirigentes, la derechización político-

cultural ultraconservadora y postdemocrática, y el refuerzo racista, antifeminista y antigualitario en las relaciones sociales. Se trata de imponer la adaptación subordinada de las clases políticas europeas (y los pueblos) al nuevo dominio estadounidense (y de su tecnocracia) para reorientarla frente al enemigo principal: China (y los BRICS).

Ante semejante encrucijada, no es suficiente la exclusiva expresión de indignación moral o la simple rabia discursiva antitrumpista. Ambas, junto con un refuerzo de la básica actitud democrática, son necesarias. Pero está en juego el avance —o el retroceso— de la igualdad, la libertad y la democracia. Y es crucial que se resuelva favorablemente porque afecta a las poblaciones europeas y mundiales. Ante ello, las izquierdas y las fuerzas progresistas sociales y políticas tienen la responsabilidad histórica de demostrar su capacidad transformadora, con su propio modelo social, democrático y pacífico.

1.4 El dominio imperial por la fuerza

La agresión militar de EE.UU. a Venezuela, con el bombardeo de Caracas, el secuestro de su presidente Maduro y el plan para el control imperialista sobre sus recursos energéticos, en una suerte de protectorado neocolonial, incumple las normas básicas del derecho internacional y el respeto a la soberanía de los Estados y sus pueblos.

Este hecho forma parte de la reordenación geoestratégica acelerada por la autocracia trumpista, basada en su prepotencia imperial. Veamos

algunas de sus características, su impacto para Europa y las perspectivas de salida.

Es una imposición unilateral del predominio estadounidense en el hemisferio occidental. América Latina es considerada su 'patio trasero', junto con la aplicación de la doctrina 'Donroe', que valora como incompatible la presencia significativa de otras potencias, en referencia a China. Significa una advertencia amenazante, especialmente, para los países progresistas latinoamericanos (Colombia, Brasil, México...) y a los que, en estas dos décadas, también han estrechado lazos con China en distintas latitudes.

Al mismo tiempo, de acuerdo con su Estrategia de Seguridad Nacional y su plan de apropiación de Groenlandia, supone un mayor sometimiento de Europa hacia sus designios imperiales y sus prioridades económicas, junto con la promoción de los grupos ultras, llamados 'patrióticos', y el debilitamiento de las instituciones comunitarias de la UE.

Conlleva la correspondiente humillación arancelaria y la exigencia del rearme otanista, dependiente de los intereses geoestratégicos estadounidenses y que sirve, bajo la sobredimensión del expansionismo ruso y la sobrevaloración de la crisis existencial europea, para reconducir el gasto social hacia la industria armamentista, ampliar el poder de las élites derechistas y forzar el disciplinamiento social.

Paralelamente, entra en crisis e irrelevancia el poder blando europeo, su autonomía estratégica con una visión multipolar, su modelo social y de integración socioeconómica equilibrada, sus valores democráticos y pacifistas y, por tanto, la legitimidad de sus élites gobernantes, el sistema político liberal y el proyecto comunitario.

Reagrupamiento del poder neocolonial

El plan de la administración trumpista forma parte de un reagrupamiento de su poder imperial, haciendo valer su primacía político-militar, en ese ámbito occidental de América Latina y Europa,

junto con sus aliados de Oriente Próximo (Israel, Arabia...) y Asia-Pacífico (Japón, Corea del Sur, Australia...).

Las élites de EE.UU. utilizan su poderío militar, cuyo gasto es superior al del resto del mundo, para recuperar su hegemonía económica, tecnológica, geoestratégica y política, cuestionada por el ascenso de la influencia comercial y económica de China y sus aliados de los BRICS —incluidos Rusia e Irán—, que constituyen su principal adversario estratégico. Su objetivo fundamental es contener ese polo autónomo, y excluirlo de esas zonas para ejercer su monopolio imperial, con amplios privilegios.

Su plan no se limita a establecer solo una zona de influencia neocolonial propia en esos ámbitos, sino que necesita ese refuerzo para consolidar una trayectoria de hegemonismo global en el planeta, frenar esa dinámica multipolar y mantener sus ventajas comparativas, ahora cuestionadas.

El actual orden internacional se había constituido bajo la victoria aliada frente a los nazi-fascismos en la segunda guerra mundial. Se configuraron los tres bloques: atlantista, del Este soviético y el de países no alineados. A pesar de la guerra fría y con la primacía relativa de EE.UU., se instauró cierto equilibrio de fuerzas que facilitó el desarrollo de normas e instituciones multilaterales (ONU, OMC...) con cierta capacidad regulatoria y cooperativa en estos ochenta años, aunque no impidió tensiones globales y guerras periféricas.

El hundimiento del Este dio paso, en los años noventa, a la completa globalización económica neoliberal, con un reequilibrio geoestratégico. Las élites estadounidenses y, en menor medida, las europeas creían en el fin de la historia, con su completo dominio y un marco institucional, legal y cultural favorable.

No obstante, el orden internacional liberal y las reglas dominantes de cierto multilateralismo han dejado de ser funcionales para mantener y ampliar esa hegemonía mundial. Desde hace varias décadas y, particularmente, con la crisis financiera de 2008, se ha acentuado el declive económico y político estadounidense, junto con una mayor

desigualdad y descohesión de su sociedad; sus élites han perdido credibilidad en el Sur global y han destacado otros actores geopolíticos.

El trumpismo consiste, frente a ese descenso de posición privilegiada, en una acentuación explícita y cruda de esas dos dinámicas: neocolonialismo belicista y autoritarismo interno postdemocrático. El relato, la ética, las normas y las instituciones anteriores ya no son convenientes para la nueva misión hegemónica de las oligarquías tecnocráticas y financieras de hacer de nuevo América grande, con el ‘América primero’. Se instaura la nueva ley, la del más fuerte en términos político-militares, que es su ventaja comparativa para cambiar a su favor los desfavorables desequilibrios geoeconómicos y estratégicos, encabezados por China.

El autoritarismo imperialista

La revolución neoconservadora o la guerra cultural trumpista, con sus provocaciones, chantajes, mentiras y escenificaciones, expresa el cambio de los procesos discursivos y normativos, y modifica los mecanismos para la legitimación propia y la descalificación de sus oponentes. Esa manipulación comunicativa, apoyada en el control tecnológico y operativo de los grandes medios y redes sociales, complementa esa estrategia de dominio imperial que, dada su debilidad estructural económico-política y de legitimidad cívica, tiene que ser por la fuerza.

Es la era de la violencia política y la coerción unilateral del más fuerte, no de la cooperación, la negociación y el consenso multilateral. Es la vuelta a la prioridad del poder estatal del Leviatán de Hobbes, frente al contrato social de Rousseau. Es la actualización de la primacía del poder absoluto del Estado, del teórico nazi Carl Schmitt, contra la democracia, los derechos humanos y los valores de libertad, igualdad y solidaridad de la mejor tradición ilustrada y de las izquierdas. Es la defensa de la dominación de las élites, frente al Estado social y democrático de derecho y la soberanía popular.

Es el momento del dominio del poder duro, del vencer con la fuerza y no del convencer o transaccionar. Lo que se deslegitima es la ficción liberal de la autorregulación del mercado y la subsidiariedad de la administración pública. Como en los siglos anteriores, los grupos dominantes en la actual fase capitalista necesitan el Estado y la coerción militar para garantizar la recuperación del poder, los privilegios y los beneficios de sus élites, no para garantizar el bien común o el interés general.

El Estado de derecho y la ética (kantiana), que informaban las constituciones y la gestión institucional del poder político de las democracias liberales se transforman, aunque mantienen la continuidad del núcleo del capitalismo y el liberalismo económico fundacional: la apropiación privada de los poderosos. Es el derecho del emperador a gobernar el mundo, por encima de los pueblos y sus sistemas políticos.

Tiene un sentido reaccionario ante los avances sociales, democráticos y emancipadores. Se trata de la regresión autoritaria y su intento de justificación, ya conocida con el nazi-fascismo de entreguerras, que se enfrenta a la cultura democrática y los intereses de las mayorías sociales del Sur global, pero también de las sociedades europeas y estadounidense.

Con su nacionalismo excluyente, supremacista y prepotente es particularmente racista, xenófobo, antinmigrante y contrario al respeto de la pluralidad étnico-nacional y la convivencia intercultural, al igual que es antifeminista o negacionista del cambio climático. Frente a la igualdad, real de condiciones y formal en derechos, y la cooperación humana promueve mayor segmentación jerárquica y un individualismo extremo. Significa un retroceso civilizatorio, basado en la desigualdad, la segregación y el darwinismo sociales, así como en el nihilismo moral.

Se persigue el acatamiento de la ciudadanía, basado en la pasividad y la resignación, con el instrumento de la amenaza y la fuerza, convertidos en disuasión impositiva. Se desprecia la razón, la conveniencia mutua y la legitimidad democrática. Se dice adiós al equilibrio liberal del dominio económico e institucional de las élites con

ciertos consensos y cohesión social. Se vacía la propia democracia política, deliberativa y participativa, y entran en crisis las referencias éticas universalistas y de los derechos humanos.

Se pretende imponer la subordinación de los aliados, convertidos en vasallos y con la promesa de participar, de forma escalonada y según lealtades, en el reparto de los esperados beneficios neocoloniales, para conseguir el fin perseguido: la primacía de las minorías poderosas.

Este proceso de involución autoritaria y regresiva se produce en el contexto del agotamiento del capitalismo neoliberal, las constricciones medioambientales y el desafío del Sur global. Conlleva el descontento de las mayorías sociales en el Norte ante el recorte del bienestar social y cierta desafección popular respecto de las instituciones gubernamentales, incluida la propia Unión Europea.

La adaptación de las élites europeas

Este giro iliberal ha generado una deslegitimación de las élites de las derechas tradicionales, que tienden hacia la derechización junto con el ascenso ultra, con más presión autoritaria y punitiva. Los grupos de poder europeos tienden al acomodo respecto de esta trayectoria imperial y reaccionaria del bloque supremacista estadounidense, distanciados de sus ciudadanías y temerosos del Sur global.

Las élites europeas son conscientes de que no cuentan con el apoyo ciudadano a su docilidad ante las imposiciones de la actual administración estadounidense, regidas por criterios neocoloniales y postdemocráticos. Para legitimarse ante su ciudadanía, deben articular algunos discursos críticos, distanciarse de una imagen de sumisión y adecuar el relato de su proceso adaptativo, sin modificar su posición realmente subordinada y nada patriótica, en el marco del conflicto con el Sur global.

Su falta de oposición contundente a esa deriva prepotente y la ausencia de firmeza en un proyecto europeo autónomo, de acuerdo con su modelo social y democrático, van definiendo una asimilación

estratégica al grupo dominante trumpista y de las oligarquías tecnocráticas. Esa actitud institucional está encaminada hacia la continuidad de la pertenencia a ese bloque de poder occidental hegemónico. Está alineada con los dos ejes fundamentales del nuevo imperialismo belicista: el refuerzo del dominio regresivo y autoritario de sus sociedades, y la confrontación neocolonial con China y el Sur global. Ambos son necesarios para la pretendida hegemonía mundial de la nueva élite postdemocrática. Falta por ver la capacidad de respuesta de esos dos actores: los pueblos del Norte y los países del Sur.

Por otro lado, ante estos grandes cambios, se ha producido el desconcierto y el acomodo de la izquierda socialdemócrata gobernante, que pierde representatividad social. En el ámbito sociopolítico e institucional, se está produciendo una recomposición de las élites dirigentes en los dos campos políticos básicos de las derechas y las izquierdas, con la generalización de la pugna competitiva entre ellas y en su interior. Quedan abiertas las expectativas para una reactivación cívica y democratizadora de los movimientos sociales progresistas y la renovación y reconstrucción de las izquierdas transformadoras, ineludibles para frenar esta dinámica reaccionaria, abrir una etapa más igualitaria y democrática y construir un mundo mejor y más sostenible.

Sujetos y proyectos

En definitiva, se pretende instaurar una nueva época de recolonización de la política imperialista y militarista estadounidense, con el vasallaje de América Latina y Europa, para hacer frente a su declive y el ascenso geoeconómico y político de China y sus aliados. Los intereses económicos y políticos estadounidenses, que siempre habían constituido una prioridad, se ponen por encima sobre todos los demás.

EE.UU., la autocracia trumpista, necesita a Europa, a la que no considera su enemigo, sino que le impone una posición de súbdito subordinado, situación ya acatada en la estructura de seguridad de la

OTAN. Supone un proceso de recolocación jerárquica que se amplía al campo de las relaciones económicas, más dependientes, al sistema político, más autoritario, menos democrático y con mayor reequilibrio ultraderechista, y un universo social y cultural más ultraconservador y reaccionario.

El grupo de poder estadounidense, el trumpismo y también las administraciones demócratas precedentes, pretende ser más hegemónico respecto de Europa para contener a China y los BRICS y asegurar y reordenar su dominación planetaria. Su plan, al menos de momento, consiste en una transferencia de capital, poder, estatus y prestigio desde Europa (y el resto del mundo) que hagan a las élites de EE.UU. más fuertes y determinantes en el plano interno y el orden internacional. Los grupos dirigentes europeos quedan más subordinados, expresan su angustia por su descenso jerárquico, pero son incapaces de desarrollar una alternativa democrática y civilizatoria de la mano de sus pueblos.

La trayectoria de integración de Europa, incluido el fiasco del Brexit, es todavía limitada en el plano económico, claramente insuficiente en el ámbito político y dependiente de la OTAN y EE.UU. en el campo de la seguridad, la defensa y las relaciones internacionales. No existe un *demos* europeo que dé legitimidad democrática a las instituciones comunes de la UE, ni voluntad política unitaria para ser un actor geopolítico. Los intereses nacionales de las principales élites europeas han impedido ese avance y su fragmentación muestra su incapacidad para articular un reequilibrio consensuado de poder, con un proyecto común.

Ante decisiones perentorias se prueban nuevas jerarquizaciones dominadas por las derechas tradicionales y la presión ultra, con el seguidismo liberal, socialdemócrata y verde, y a excepción, en algunos temas, del Gobierno de coalición español: el directorio tripartito de Alemania, Francia y Reino Unido, junto con el segundo escalón de las potencias medianas de Italia, España, Polonia y Países Bajos.

Pero el problema principal y su solución decisiva dependen del tipo de orientación estratégica del espacio común. Básicamente, se dibujan

dos opciones contrapuestas, tras las que se prefiguran distintas fuerzas sociopolíticas.

Una, más autoritaria y regresiva, así como neocolonial y dependiente de la recolocación en la dominante jerarquía imperial de EE.UU. Es la dinámica hacia la que tienden la mayoría de las élites europeas, en un proceso de adaptación seguidista a esa subordinación, temerosas de la democratización de sus pueblos y el empuje del Sur global.

Supone la apuesta de los principales grupos de poder del Norte por la hegemonía global, hacia un sistema autoritario posdemocrático, con el incremento de la confrontación de bloques, mayor rearme y belicismo atlantista, con riesgo de guerra generalizada, ante las resistencias del Sur global.

Otra opción es más social y democrática, con un diseño pacífico y multilateral, refundando la mejor tradición europea igualitaria y emancipadora. Este diferenciado proyecto geopolítico para Europa ya se vislumbra en los tres ejes que se vienen exponiendo: autonomía estratégica sin dependencia de la OTAN y EE.UU., con desarrollo de la multipolaridad colaborativa; oposición a los hegemonismos imperiales autoritarios y refundación comunitaria; refuerzo de la igualdad social, incluido por sexo/género, con respeto a la diversidad étnico-cultural, la convivencia intercultural y la sostenibilidad medioambiental; profundización de la democracia, con la promoción de la cooperación, la participación deliberativa, así como el reconocimiento de la pluralidad política y las libertades individuales y colectivas.

En ese sentido hay indicios sociopolíticos y culturales de las dinámicas sociopolíticas que ya están insertas en el panorama internacional. Por un lado, veremos la firmeza y las capacidades del pulso de China ante el objetivo trumpista de doblegarle, combinada con su paciencia estratégica, así como las de sus aliados de los BRICS. Estos tienen gran heterogeneidad de sistemas políticos, niveles económicos y tradiciones culturales, pero comparten la indignación y el resentimiento derivados del extractivismo y la prepotencia colonial

occidental, y se mueven en esa tensión entre la sumisión adaptativa y la firmeza por mejorar su posición.

Por otro lado, se encuentra la resistencia democrática de las ciudadanía estadounidense y europeas y su capacidad articuladora en el ámbito sociopolítico, cultural e institucional, que pueden resquebrajar la legitimidad cívica y la representatividad electoral e institucional del propio plan autoritario del trumpismo y la derecha ultra europea.

En particular, habrá que ver el impacto de las elecciones parlamentarias en EE.UU., de mitad de mandato en noviembre de 2026, sobre las que Trump ya amenaza con la insubordinación en el caso de que las pierda y, por otra parte, el grado del ascenso ultra en países europeos clave como Francia, Alemania y Reino Unido que, junto con lo ya conseguido en otros países como Italia, Polonia o Hungría, daría lugar a un vuelco completo a la involución reaccionaria en Europa.

Y en ese marco europeo aparecen las decisivas elecciones generales en España de 2027, probablemente algo adelantadas si se hace difícil la gobernabilidad, en las que se ventila el posible agotamiento del ciclo institucional de progreso o su renovación e impulso, con la recomposición de las izquierdas.

Por tanto, junto con las dinámicas autoritarias y regresivas de los grupos de poder y las trayectorias resistentes y adaptativas del Sur global, en ambos ámbitos del Norte, EE.UU. y Europa, se pueden reforzar las tendencias democratizadoras, frenar este ciclo autoritario amenazante y abrir nuevas perspectivas para el avance social y democrático, así como para la paz mundial y los derechos humanos. El futuro está en manos de la gente.

1.5 Resistencia antitrumpista

Los últimos emplazamientos trumpistas a Europa, con el intento de apropiación y control de Groenlandia, bajo soberanía danesa, ‘por las buenas o por las malas’, sus amenazas a los países solidarios con Dinamarca, y las filípicas dirigidas a los dirigentes europeos reunidos en Davos, el foro del capitalismo mundial, han terminado por tocar la fibra sensible de las élites europeas, que han mostrado su indignación.

Particularmente, el líder liberal centrista canadiense, Mark Carney, ha respondido con claridad a lo que considera una ruptura de la alianza atlántica, haciendo un llamamiento al rechazo a esas pretensiones prepotentes contra la soberanía de un país socio y a la articulación defensiva de las ‘potencias medianas’.

El acuerdo marco negociado entre Trump y el sumiso secretario general de la OTAN, Rutte, parece que deja fuera el cambio de soberanía o el empleo unilateral de la fuerza militar por parte de EE.UU., aunque le garantiza su mayor presencia militar, el refuerzo de su papel en la seguridad -occidental- en el Ártico y sus rutas marítimas, con participación de la OTAN, y su acceso prioritario a los recursos naturales de la gran isla. Todo ello, sería aceptado por los dirigentes daneses y groelandeses, desactivando la irritación europea, incluso con cierto alivio de no iniciar una confrontación seria.

Clamor cívico contra la prepotencia trumpista

La estrategia trumpista está definida: objetivos de máximos, con chantajes y amenazas y, según las capacidades y resistencias del contrario, negociación prepotente de lo sustancial con concesiones secundarias o reelaboraciones discursivas para su consumo interno, con refuerzo de su dominación global. Pero dejando aparte el pulso geoestratégico más importante para EE.UU., según su Estrategia de

Seguridad Nacional, el de su adversario principal, China y sus aliados BRICS, para lo que quiere hegemonizar el hemisferio occidental (América Latina y Europa), nos concentramos en la situación y la estrategia de las élites europeas (incluyendo a Reino Unido) ante esta deriva imperial y reaccionaria del trumpismo.

Las élites europeas son conscientes de que no cuentan con el apoyo ciudadano a su docilidad ante las imposiciones de la actual administración estadounidense, regidas por criterios neocoloniales y postdemocráticos. Para legitimarse ante su ciudadanía, deben distanciarse de una imagen de sumisión y articular algunos discursos críticos.

Lo significativo de este momento es que algo se ha movido en la UE en cuanto a expresar, no solo palabras de contrariedad, sino elementos de disuasión... simbólicos: la amenaza de contramedidas arancelarias o la presencia de unos destacamentos militares.

Lo que sí se ha levantado ha sido un clamor entre expertos y la sociedad civil sobre el diagnóstico de la inaceptable subordinación europea, así como la conveniencia y los instrumentos de una respuesta contundente. Incluso algunos autores significativos de la socialdemocracia han llegado a propugnar una revolución antitrumpista. Lo positivo es que se rompe la actitud de simple resignación seguidista e impotente.

Europa posee varios mecanismos de poder para disuadir al imperialismo autoritario del trumpismo, principalmente derivados de su poderío económico, comercial y financiero. Desde el pulso con los aranceles recíprocos, hasta la posesión de un billón de dólares de la deuda estadounidense que al acelerar su liquidación gradual (como China y Japón, los otros dos grandes acreedores), dañarían la hegemonía mundial del dólar y la situación financiera estadounidense.

En el ámbito político, además de profundizar en los valores democráticos, Europa podría modificar su estrategia geopolítica y de defensa, empezando por salir de la OTAN, fortalecer su autonomía estratégica, exigir la retirada de las bases militares estadounidense,

abanderar una paz con Rusia que dé seguridad al continente y avanzar en la colaboración multipolar con China y otros bloques económicos, renunciando al militarismo y el neocolonialismo.

Sin suficiente voluntad autónoma y democrática

Sin embargo, el problema es que no hay una voluntad política en las instituciones europeas que apueste por su independencia, afrontando los riesgos de confrontación con EE.UU. por no doblegarse a su dominio. Las élites europeas todavía no han adoptado una acción contundente y de firmeza, ni han modificado su posición realmente subordinada, ni se atreven a definir una senda para ello.

La tendencia dominante de los grupos de poder europeos es caminar por un proceso adaptativo al nuevo orden mundial que va imponiendo el imperio estadounidense, con la consiguiente recolocación de las distintas élites nacionales en la nueva jerarquización neocolonial, a veces con distintos forcejeos en su coordinación y el liderazgo conjunto.

Su trayectoria dubitativa y temerosa deriva de su interés por mantener sus privilegios de poder o su posición político-económica relevante, de la mano de una alianza renovada con EE.UU., no demasiado subordinada y, sobre todo, que no se note tanto.

Pero la pretensión trumpista consiste en imponer unas condiciones de estatus económico, geopolítico y estratégico más desventajosas, en beneficio de la hegemonía planetaria estadounidense —con algunas prebendas a sus leales vasallos—. Y sus formas prepotentes están amplificadas mediáticamente para su legitimidad entre su base reaccionaria, estadounidense y de la ultraderecha europea.

Ese plan estratégico, común a las anteriores administraciones estadounidenses y, probablemente, continuadas por la siguiente, es claramente desventajoso y antidemocrático para ser consentido por la mayoría de la población. Por ello, el simple ajuste adaptativo pretendido por las élites europeas se encuentra con tensiones democráticas de fondo. Su sometimiento, con su pasividad o colaboracionismo, no es

sostenible legítimamente ante la ciudadanía europea. Les fuerza a una involución autoritaria, con una reestructuración de la derecha tradicional con el condicionamiento cada vez mayor de las ultraderechas. Acentúa la crisis social y política.

Resistencia democrática, pacífica y solidaria

La involución ultra ya la han conseguido en varios países europeos, como Italia; avanza peligrosamente en el núcleo europeo: Francia, Alemania y Reino Unido. Es lo que acarician en España, con un cambio de ciclo derechista. Todo ello daría un vuelco definitivo, más regresivo y autoritario, a las instituciones comunitarias, y un realineamiento más sumiso en la OTAN trumpista.

Los hechos que demuestran el carácter reaccionario, imperialista y postdemocrático del trumpismo son evidentes, y entran en confrontación con la conciencia cívica y democrática europea: el amparo al genocidio en Palestina, el control neocolonial en Oriente Próximo y su prepotente ‘Junta por la paz’; los aranceles a todo el mundo y, particularmente, a la Unión Europea; la exigencia del rearme europeo con beneficio para el complejo militar-industrial estadounidense y perjuicio para el gasto social, el pacifismo y el intervencionismo de los pueblos; la involución sociopolítica y cultural ultraderechista y neoconservadora, con el apoyo a las extremas derechas europeas (e internacionales), su represión racista hacia la inmigración, su carácter iliberal respecto de los derechos civiles, las libertades públicas y el Estado de derecho, o su posición contraria a los derechos feministas y negacionista del cambio climático; en fin, la agresión a Venezuela, con su despótica advertencia al conjunto del hemisferio occidental y su desprecio a la soberanía nacional y el derecho internacional.

Los grupos dirigentes europeos tratan de sobrevivir, con cierta actitud de apaciguamiento, minorando los costes de la subordinación y, subsidiariamente, negociar los ajustes más bochornosos para la opinión

pública para conservar cierta legitimidad en sus propias sociedades, la mayoría en una situación convulsa.

Se conocen los métodos amenazantes y chantajistas del trumpismo, para conseguir lo fundamental de sus objetivos y alardear de ello, con concesiones mínimas para coadyuvar a la imagen de pacto cosa que, ante tanto matonismo desafortado, es funcional para frenar la disminuida credibilidad de sus socios. Sigue el criterio posibilista de cambiar algo para que nada cambie... de la estrategia de fondo del refuerzo del dominio imperial autoritario, y siempre condicionado por la dimensión del empuje de la ciudadanía democrática.

Junto con la resistencia democrática, pacífica y solidaria de gran parte de la ciudadanía europea, así como de la estadounidense, que amenaza su mayoría parlamentaria, hay otro factor fundamental que impide esta deriva neocolonial. Se trata del ascenso del Sur global, con China y sus aliados BRICS, muy heterogéneos políticamente, pero que van conformando un polo autónomo de Occidente, particularmente por su potencialidad económica.

Para Europa, la cuestión es que la bifurcación estratégica se produce entre un camino autoritario y neocolonial, con la recolocación de las élites europeas en la nueva jerarquía imperial, o una apuesta democratizadora, autónoma y social. Pero no son capaces de lo segundo, de empezar por una resistencia contundente y firme al trumpismo. Por tanto, comienza su recomposición, incluido su sistema partidario e institucional, con una fuerte tensión, por una parte, con las ultraderechas y, por otra parte, por la legitimidad cívica.

Por otro lado, hay un vacío respecto de las capacidades de las izquierdas sociales y políticas y, sobre todo, por la reestructuración y unidad de su representación partidaria. Hay cierta incertidumbre respecto de un proceso de formación de nuevas élites representativas, especialmente de las articulaciones progresistas y de izquierdas renovadas, cuyo parto es difícil y doloroso. Es toda una encrucijada transitoria, como decía Gramsci, con dinámicas contrapuestas y

peligrosas, donde pueden aparecer vacíos, monstruos y oportunidades transformadoras.

En definitiva, existe una inconsistencia de la indignación de las élites europeas ante el trumpismo, que esconde su incapacidad para articular el modelo social y democrático europeo en beneficio de las mayorías sociales. Tienen el deseo de acomodarse a la nueva jerarquía imperial occidental, temerosos del Sur global y lejos de la multipolaridad cooperativa, democratizadora y pacífica. La alternativa de las fuerzas progresistas es la resistencia, no como pasividad sino como firmeza activa y afirmación autónoma, democrática y transformadora de progreso.

2. FRENTE A LA AMENAZA ULTRA Y EL RACISMO

El segundo capítulo, *FRENTE A LA AMENAZA ULTRA Y EL RACISMO*, estudia esos dos rasgos principales, el ascenso de las tendencias ultraderechistas y el auge del racismo y la antiinmigración de las sociedades europeas y, específicamente, en España, junto con el tercer elemento la corrupción, para valorar las respuestas de la sociedad y las fuerzas progresistas.

La primera sección, *La imperiosa regeneración democrática*, a partir de la evidencia de los casos de corrupción en dirigentes socialistas, señala que es imprescindible un proceso profundo de regeneración democrática y que las derechas españolas no pueden liderarlo.

La segunda sección, *Frente al racismo y la corrupción*, explica la existencia y características de la violencia racista y la necesidad de una catarsis democratizadora frente a la corrupción de las élites políticas e económicas.

La tercera, titulada *Respuestas a la amenaza ultraderechista*, trata sobre el avance de la influencia política, cultural, electoral e institucional de las ultraderechas, con el riesgo de involución sistémica, las condiciones político-sociales del ascenso ultra y el contexto europeo de la actual dinámica reaccionaria. A partir de ahí, señala el descrédito del poder establecido, el descrédito y el reajuste del poder establecido, las estrategias socioliberales fallidas, junto con el factor segregador y los fundamentos del ascenso ultra, para terminar con la interacción entre la pugna sociopolítica y la ideológica en el combate contra esta ola reaccionaria.

La cuarta sección, *Golpismo y grietas en el Estado de derecho*, expresa las causas históricas y estructurales de las dinámicas ultraderechistas en España, el carácter antipluralista de las derechas y las tendencias golpistas, con la actitud democrática de prevenir un golpe blando.

La quinta y última sección, *Conciencia democrática y perspectiva electoral*, detalla con datos demoscópicos la opinión ciudadana sobre la democracia y el franquismo, así como la predisposición del Partido Socialista y todos los partidos políticos para adentrarse en una prolongada campaña electoral que culminará en el año 2027.

2.1 La imperiosa regeneración democrática

Los dos secretarios de organización del Partido Socialista, consecutivos en estos últimos ocho años, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, junto

con su asesor Koldo García, están involucrados en una trama de corrupción, según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, dependiente del Juez del Supremo, Leopoldo Puente.

Aunque la dimensión de los delitos se tenga que sustanciar por parte de la Justicia, son evidentes los hechos fundamentales que permiten hablar de grave corrupción política, con indicios consolidados de delitos: manipulación por parte del poder político de contratos de obra pública, en beneficio de determinadas empresas constructoras — corruptoras— y los propios personajes corruptos, perceptores de ‘mordidas’.

La investigación, además de los tres encausados directos, también señala diversas ramificaciones en los dos ámbitos, político y empresarial. En el primero, ya hay indicios de irregularidades en varios responsables del Ministerio de Transportes, así como del comienzo de la trama, hace más de una década, vinculada al Gobierno de Navarra.

Respecto del ámbito empresarial, aparecen responsabilidades de directivos de varias empresas constructoras, como Acciona, que ya estaban activas entre las corruptelas sancionadas judicialmente de la anterior administración del Partido Popular.

La investigación policial y judicial de esta corrupción política está en marcha y no sabemos todavía si se han traspasado dos líneas rojas que afectarían a la propia estabilidad del Gobierno de coalición y la legislatura: la financiación ilegal del PSOE y el grado de conocimiento e implicación del Presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez.

En todo caso, Pedro Sánchez tiene ya responsabilidades políticas por el nombramiento de esos dos altos cargos, deshonestos y de su máxima confianza, para gestionar el poder orgánico y territorial del Partido Socialista y la mayor capacidad inversora y de contratación privada de la administración pública, sin suficiente vigilancia y control colectivo. Ha perdido credibilidad y capacidad de liderazgo, en particular para la democratización del Estado, más todavía tras la fallida intentona retórica

de hace un año, tras sus cinco días de reflexión por el acoso judicial a su entorno familiar.

En este último año se ha generado una mayor ofensiva ultra y de la derecha extrema del PP y Vox, así como la activación de todos los resortes reaccionarios en los aparatos del Estado y medios de comunicación, con el objetivo de acabar, definitivamente, con este alicaído ciclo de progreso, imponer una involución social y democrática y desalojar a las izquierdas de posiciones institucionales fundamentales en las que todavía permanecen, como el Gobierno estatal.

Las derechas españolas no pueden liderar la regeneración democrática

Por una parte, porque su gestión política en los quince años de los dos mandatos de Aznar y Rajoy ha estado llena de corrupción, mucho más amplia y grave que la actual socialista. Por otra parte, PP y VOX muestran una degradación ética y autoritaria y apenas esconden su opción socioeconómica regresiva. Se consideran propietarios del Estado, de su modelo centralista, excluyente y anti pluralista, con el sometimiento de las izquierdas y los nacionalismos periféricos. Los procedimientos democráticos solo les sirven si ganan ellos, y su mecánica institucional y discursiva, llena de crispación y manipulación, es instrumental para ese fin: vale cualquier medio. Es la corrupción moral y sistémica.

En un contexto de derechización europea y mundial, esta mayor corrupción política y moral, está derivada de su escasa tradición y cultura democráticas que se enraízan en el franquismo, en particular con los núcleos de poder estatal, económico y mediático. Desde su particular poderío institucional y económico, las derechas no ofrecen una salida democratizadora, sino de refuerzo de sus privilegios.

Para las izquierdas, más allá de las convenientes peticiones socialistas de disculpas a la ciudadanía y su electorado, estos acontecimientos tienen un impacto político mayor. Cuestionan la

capacidad y la voluntad de la dirección socialista y el liderazgo de Sánchez para guiar la regeneración democrática, la reforma social progresista y la articulación de la plurinacionalidad en España.

Son las tres tareas cívicas fundamentales de la gestión gubernamental de este ciclo progresista, desde la moción de censura al Ejecutivo corrupto de Mariano Rajoy, en 2018, la constitución del primer Gobierno de coalición, con Unidas Podemos, y el segundo, con Sumar y el apoyo nacionalista.

Por supuesto, en estos siete años se han hecho reformas positivas, derivadas del empuje global, aunque menguante, de la activación cívica de la década anterior y la presión por su izquierda. No obstante, la mayoría de los avances sociales y democráticos, incluidos los feministas y la amnistía, han sido lentos y limitados en un contexto de continuismo político, bloqueo institucional y dificultades externas. Muchos de ellos han sido muy costosos de aprobar, no se han ejecutado o han sido boicoteados por las derechas, desde su poder autonómico.

No obstante, dada la actual correlación parlamentaria, la gravedad del impacto político de la corrupción socialista y la perspectiva a medio plazo de las elecciones generales, con previsiones demoscópicas de victoria de las derechas, se necesita un plan reformador contundente en esos tres planos: económico y social, incluido el feminismo, en un sentido igualitario; democratizador del Estado y la intermediación partidista y de los medios de comunicación; y de articulación intercultural de la diversidad nacional, incluida la inmigración.

En todos ellos la oposición derechista es terrible, y la activación de todas las energías y representaciones progresistas es imprescindible. La duda es si la actual dirección socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, va a ser capaz o tener la disponibilidad para afrontar esa tarea regeneradora, necesaria para activar el electorado progresista y ganar las próximas elecciones generales (y municipales y autonómicas).

A corto plazo, parecen desechadas las opciones de una moción de censura de las derechas, por su impotencia parlamentaria, así como una moción de confianza o una dimisión del Presidente del Gobierno, con

una nueva investidura con otra figura socialista. Caben otras fórmulas intermedias, como la planteada reestructuración de la dirección socialista y una remodelación gubernamental. Todo ello para asegurar una similar mayoría parlamentaria que dé cierta estabilidad gubernamental... para continuar con similares procesos continuistas, con leves reformas regeneradoras y esperando ganar confianza ciudadana para disputar con las amenazantes derechas las próximas elecciones. No es suficiente.

La imprescindible regeneración democrática

Aquí, aparece el dilema de la orientación estratégica de este nuevo periodo, con la pretensión de superar con credibilidad el trauma de la corrupción en el PSOE, arbitrar las medidas regeneradoras imprescindibles y, más en general, profundizar en la democratización del Estado y el poder económico, en beneficio de la mayoría social.

La lucha contra la corrupción es fundamental para la democracia. En ese sentido, es más importante para las izquierdas, con valores igualitarios y emancipadores, que para las derechas, asentadas en los privilegios socioeconómicos y de poder.

Los electorados de izquierda son mucho más críticos con la corrupción de sus representantes, que los de derechas respecto de los suyos. Esta ética de la convicción o, si se quiere, de la primacía de los derechos humanos y los valores universales de libertad, igualdad y solidaridad, deben permear la democracia social, la política y el Estado de derecho.

Esta ética kantiana o weberiana sirve para fundamentar la política institucional y el Estado, que deberían defender el interés general de la ciudadanía, no el beneficio privado de unos pocos. Puede ser interpretada como una desventaja por las personas arribistas, los grupos privilegiados y, en particular, los corruptos. Pero supone una superioridad ética y democrática de las bases sociales de izquierdas. Posibilita la superación cívica de esta fase en la que se venía

constatando cierta desconfianza popular por la ausencia de un plan reformador progresista y la pérdida de calidad democrática de sus gestores partidarios.

El sanchismo nació como cierto giro hacia la izquierda en política social y de talante democrático frente a la gestión prepotente y austericida y el descrédito del bipartidismo gobernante. Todo ello derivado de la presión cívica igualitaria y democratizadora de una fuerte corriente social a su izquierda. Ese impulso se ha ido debilitando y el sanchismo como expresión renovadora y de izquierdas se ha ido agotando. La puntilla puede ser la presente corrupción... si la estructura dirigente socialista no demuestra suficiente capacidad regeneradora y democrática.

Así, aunque el liderazgo de Sánchez está debilitado y a corto plazo su reemplazo produce vértigo —con su coste correspondiente—, la dirección socialista, dada su actual representatividad electoral, tiene la responsabilidad de abordar ese proceso de renovación dirigente, regeneración democrática y de impulso reformador. Debe negociar un plan reactivador integral en esos tres ámbitos para encarar los retos de la ciudadanía y las elecciones con algunas garantías de victoria del conjunto progresista.

Pero, por sí solo, el Partido Socialista y su actual liderazgo no va a ser capaz de encabezar ese proceso, que exige una renovación orgánica y de la confianza ciudadana. Depende de la activación cívica progresista y la capacidad articuladora de su izquierda social y política, en particular de Sumar, Podemos y la izquierda nacionalista, como foco compensador de las inercias continuistas socialistas. Tienen su propia responsabilidad para el reinicio de otro ciclo de progreso.

Veremos si ese conjunto de fuerzas progresistas y de izquierda son capaces de articular una oferta política creíble y transformadora. Existen fuertes retos internos, sociales y democráticos, y externos, como el freno al rearme y a la ofensiva neocolonial e imperialista, cuyo ejemplo más nefasto lo vemos en Palestina. La alternativa derechista del PP/Vox, con el trumpismo a la cabeza, ya la conocemos.

En definitiva, la corrupción política es un abuso de poder. Supone la instrumentalización de los resortes del Estado para alcanzar ventajas económicas e institucionales ilegítimas, para beneficio propio, de terceros o de un grupo social. Su erradicación es fundamental para la democracia y la supervivencia de las izquierdas. Un plan coherente de regeneración democrática, reforma social y articulación plurinacional es imprescindible para derrotar la involución de las derechas y abrir un proceso democratizador y de progreso. Hay que reiniciar el camino.

2.2 Frente al racismo y la corrupción

En estas últimas semanas han adquirido gran relevancia dos hechos: la violencia racista en Torre Pacheco, impulsada por las ultraderechas, y la corrupción política —asimétrica— en las élites del PSOE y el PP, así como en el ámbito empresarial. Afectan, respectivamente, a los cimientos de la convivencia intercultural y la institucionalidad democrática. Con ambos incidentes se resquebrajan los fundamentos éticos, normativos y discursivos en que descansan la cohesión social y la legitimación del poder político y económico.

La situación interpela a las derechas tradicionales, el poder económico y las autoridades estatales, incluida la UE, la mayoría inclinados hacia la involución autoritaria y antipluralista. El poder establecido se va deslizando hacia una nueva hegemonía iliberal, con un imperialismo militarizado frente al Sur global, con el total descrédito ciudadano por su complicidad en el genocidio palestino. Además, en la

UE se generalizan un fuerte rearme y unos planes económicos y presupuestarios que conllevan un retroceso de los derechos sociales y servicios públicos.

La alternativa derechista extrema aparece en el horizonte de muchos países: autoritarismo político y segregación social y étnico-cultural. Se profundiza en la desvertebración de las sociedades, con la acentuación de los privilegios de unos grupos sociales y las desventajas de otros, más subordinados, junto con la involución antifeminista y el negacionismo climático. Ante ello, las fuerzas derechistas y parte de los poderosos, estadounidenses y europeos, ya están empujando hacia la reacción postdemocrática, regresiva, belicista y antipluralista, para imponer un retroceso social y democrático. El foco se pone en la marginación y subalternidad de la población inmigrante y la división popular.

Esta dinámica exige, sobre todo a las izquierdas políticas y sociales, un ejemplarizante esfuerzo regenerador y democratizador. Supone un reto para la cultura democrática de la ciudadanía y la calidad representativa de las instituciones. La actual trayectoria muestra una profunda quiebra moral y cultural de las élites políticas, y refleja, en particular, la gran reducción de la confianza ciudadana en los partidos políticos, inferior al 10%, cuestionando su papel mediador y articulador. Afecta, especialmente, a la gobernabilidad progresista y al proyecto democratizador de país, bastante estancado, así como a las problemáticas perspectivas demoscópicas para las fuerzas de izquierdas y la incertidumbre sobre la nueva legislatura.

La violencia racista

El racismo y la violencia racista no son nuevos en España. El acoso racista masivo ya se produjo hace un cuarto de siglo en el Ejido (Almería) y en Terrassa y otras poblaciones catalanas, con la confrontación entre las dos comunidades, la inmigrante,

mayoritariamente la de origen magrebí y musulmán, y la autóctona. Tres características nuevas hay que añadir en los acontecimientos actuales.

Una, la existencia de un plan organizado de la extrema derecha para generar odio y violencia racista en un marco de espectacularización y acusación colectiva contra la comunidad musulmana. Dos, la cobertura institucional y mediática que tienen las ultraderechas, al amparo del ascenso político de VOX, en gran parte normalizadas legal y policialmente. Tres, el gran crecimiento de la extrema derecha europea y, especialmente, del trumpismo y las nuevas derechas autoritarias, que dan una mayor legitimidad pública a las políticas racistas, antiinmigración y de nacionalismo excluyente.

La cacería del inmigrante o la alusión a su deportación masiva buscan su segregación, su sometimiento sociolaboral y su exclusión habitacional y vital, y rechazan el necesario diálogo intercultural y la integración ciudadana. La inmigración actual no destruye la supuesta identidad nacional autóctona; exige respeto, tolerancia, reconocimiento mutuo, intercambio cooperativo y cierto mestizaje voluntario. Es el esfuerzo básico para la población receptora ante la creciente diversidad étnico-cultural, acumulada a la plurinacionalidad española, como marco para la convivencia cívica, especialmente entre las capas populares, y desde el cumplimiento de los derechos humanos y el acceso a las condiciones vitales dignas de la población inmigrante.

Ello choca con el nacionalismo españolista, esencialista y excluyente, de los sectores reaccionarios tradicionales, que hay que erradicar y transformar en convivencia y valores compartidos.

La igualdad, la solidaridad y la no dominación todavía son más imprescindibles en una sociedad plural. Es un gran reto en las sociedades europeas, particularmente, para las fuerzas progresistas, cuya dinámica va a definir la calidad de las democracias y las características de su estructura social y sus sistemas políticos. Contando con las variables sociodemográficas, económicas y geopolíticas en el mundo, no cabe el simple continuismo sociopolítico y cultural. Frente a la

respuesta reaccionaria y divisiva que amenaza nuestra trayectoria, la solución debe ser proactiva, intercultural y solidaria.

La violencia racista es una estrategia disgregadora de grupos poderosos hacia las capas populares, que busca su fragmentación y la mayor subalternidad de los grupos inmigrantes y racializados, más vulnerables. Es una dinámica de dominación y segregación hacia abajo.

La corrupción de las élites y la catarsis democratizadora

La corrupción política y económica constituye una relación social de las élites; está vinculada al sistema capitalista y los grupos de poder institucional. Se necesita, por un lado, control de los recursos económicos y, por otro lado, dominio en la administración pública. El Estado y la regulación pública, en vez de cumplir su función, más o menos neutra, en favor del interés general, se instrumentalizan para ponerlos al servicio privado de unos pocos, para beneficiar ilegítimamente su posición económica o de poder. Solo es corregida por la democracia social y el Estado de derecho.

Desde una antropología realista se puede destacar la ambivalencia del ser humano, su bondad y su maldad, sus virtudes —su solidaridad y reciprocidad— y sus vicios —su egoísmo individual y su apropiación—. Ya a principios del siglo XVIII, el filósofo Bernard Mandeville explicaba que «los vicios privados —el egoísmo— constituyen las virtudes públicas —la prosperidad general—». Es la fundamentación del liberalismo económico; el beneficio propio sería el motor de la economía y de la sociedad; el Estado, con su Administración, su coerción y su legislación, debería actuar a su servicio, apoyando la autorregulación del propio mercado, es decir, de los grupos empresariales. La moral convencional que priorizaba el bien común o los derechos humanos, se declara obsoleta y disfuncional para el crecimiento económico.

En estos tres siglos algo hemos aprendido, en particular que es la democracia, la articulación participativa de la población, la que debe

definir los objetivos colectivos y los mecanismos productivos, reproductivos, protectores y redistributivos. La historia de estos siglos ha supuesto la pugna entre democracia y ética colectiva, desde la soberanía popular, frente a corruptores y corruptos empresariales e institucionales, que buscan mayores beneficios particulares, desbordando las ventajas proporcionadas por el control de la propiedad y unas relaciones desiguales de poder.

La corrupción, a gran escala institucional y económica, precisa oportunidades, poder y degradación ético-democrática. El caso Cerdán-Ábalos, más cutre, daña la credibilidad de la dirección socialista, que debe demostrar mayor exigencia moral y democrática que la de las derechas. El caso Montoro, más grave y generalizado, ha mostrado mayor refinamiento estructural de un sistema corrupto, y expone la gran imbricación de los gobiernos de derechas con la apropiación del Estado y la corrupción empresarial. Todo ello, presuntamente, a la espera del dictamen de los tribunales; pero refleja la bajeza moral y democrática en los núcleos de poder económico y político y la necesidad de la exigencia de responsabilidades.

Las élites políticas (y económicas) necesitan una catarsis para comenzar el curso con las tres misiones fundamentales para asegurar la democratización de las instituciones y su refuerzo ético: regeneración democrática inmediata e ineludible, tras varios intentos fallidos; políticas igualitarias para las mayorías sociales, incluida por sexo/género; articulación de la diversidad cultural y nacional.

Y termino con una concreción que conecta con las tres tareas reformadoras: el incremento redistributivo de la financiación autonómica, junto con el desarrollo territorial federalizante, una reforma fiscal progresiva y una articulación igualitaria de los servicios públicos fundamentales como la sanidad y la educación que, junto con la vivienda y el empleo de calidad, impidan su deterioro privatizador y segregador y el malestar social de fondo. Son políticas clave para facilitar el bienestar colectivo y, particularmente, la integración de la

población inmigrante, y son decisivas para fortalecer la cohesión social y la convivencia intercultural en la próxima década.

Quizá sea difícil lograrlo para esta legislatura, que se está agotando, pero debería ser fundamental como plan progresista ahora y para la siguiente, en la que se juega el futuro del país, como contrato social con la ciudadanía.

2.3 Respuestas a la amenaza ultraderechista

El avance de la influencia política, cultural, electoral e institucional de las ultraderechas, en esta última década, es evidente. Desde un enfoque democratizador, se trata de explicar la especificidad del ascenso actual de esta tendencia ultraderechista y analizar sus causas, para aportar fundamentos analíticos, teóricos y estratégicos para hacerle frente hoy y superarla.

Avanzo su sentido general, con algunos rasgos comunes: nacionalismo excluyente, autoritarismo institucional, prepotencia económica, dominio neocolonial, militarismo. Supone una involución de los derechos sociales, civiles y políticos, mayor segregación étnico-racial y antifeminista y el negacionismo climático.

Una involución sistémica

El derechismo extremo es, sobre todo, un fenómeno político y social, no principalmente cultural o ideológico, que es lo que se

manifiesta mediáticamente. Se trata de una penetración en el Estado, con un cambio de las estructuras de dominación y de poder.

Se modifican las jerarquías de las relaciones sociales en tres ámbitos fundamentales que expresan las mayores fracturas de la sociedad: las brechas por clase social y la desigualdad socioeconómica; las desventajas por sexo/género, incluidos la dominación patriarcal, el reparto desigual de los papeles reproductivos, laborales y de cuidados, así como la intolerancia ante la diversidad sexual y de género, y la discriminación por origen étnico-nacional-racial, incluyendo el campo de las relaciones internacionales, con la dependencia nacional, el neocolonialismo y el imperialismo, así como las actitudes racistas e intolerantes respecto de la inmigración y la diversidad cultural.

Por tanto, estamos ante una reacción profunda ante los avances igualitarios, democráticos y emancipadores de las últimas décadas, con una transformación autoritaria del sistema político liberal, derivada del deterioro de la credibilidad de los grupos de poder y la deslegitimación de las élites gobernantes.

La presión y la gestión ultras replantean el carácter de las políticas públicas, normalmente, acentuando los procesos neoliberales de privatización, mercantilización y segmentación de los servicios públicos y la protección social, así como la precarización del mercado de trabajo y las relaciones laborales. Así, se debilita el contrato social y, en particular, el Estado de bienestar europeo y su modelo social y democrático.

Intentan la relegitimación y la recomposición de las élites institucionales y partidarias, y la modificación del marco jurídico del Estado de derecho, con su instrumentalización, el vaciamiento de la democracia y la soberanía popular y el refuerzo del poder ejecutivo, junto con la militarización.

Aunque mantienen ciertas formas del régimen político liberal y constitucional, refuerzan una intensa socialización cultural e ideológica, a menudo impuesta desde los resortes del poder, los grandes medios privados o algunas instituciones religiosas.

En consecuencia, propugnan una transformación política, social y cultural en los distintos planos, estatal, internacional y, específicamente, en estructuras sociales básicas, como las relaciones familiares y las interacciones nacionales o interétnicas. Junto con el individualismo consumista neoliberal y un modelo de homogeneización ultraconservadora, conllevan la disgregación convivencial, el reequilibrio regresivo del contrato social y cívico y nuevas dinámicas de precarización, vulnerabilidad y exclusión social.

Los avances feministas, la inmigración, con los retos de la interculturalidad y, además, en España, los desafíos del independentismo catalán y la necesaria articulación plurinacional constituyen importantes focos de reacción ultraderechista, con soluciones falsas y autoritarias a las incertidumbres vitales y convivenciales existentes.

Por tanto, el derechismo ultra tiene un sentido político global reaccionario y postdemocrático. No se queda en su palanca fundamental de la reestructuración despótica del poder institucional, sino que aborda una recomposición de la desigualdad y la dominación en esas relaciones sociales, con su correspondiente justificación y su intento de primacía ideológico-cultural. Constituye un freno a las fuerzas y dinámicas democratizadoras, progresistas y de izquierda.

Igualmente, tiene una dimensión internacional frente a la nueva realidad multipolar, mientras intenta preservar los fundamentos económicos de un capitalismo neoliberal, con una adecuación a nuevos aspectos fundamentales como la innovación tecnológica y la crisis ambiental y de recursos materiales.

Supone la reestructuración jerárquica de países, grupos sociales y sectores productivos y financieros frente a los desajustes de la globalización, hacia otro orden mundial, mediante el militarismo, la prepotencia neocolonial y nuevas reglas, que aseguren la primacía imperial estadounidense, con la subalternidad geopolítica europea, en el marco de la OTAN y, en particular, la de su motor económico alemán.

Condiciones político-sociales del ascenso ultra

Los agentes promotores son una fracción de los grupos de poder, económicos y de los aparatos del Estado, con un reajuste tenso, de pactos y desencuentros, con la derecha tradicional y nuevos mecanismos de coacción institucional y presión social.

Necesitan la reconstrucción de una base social de apoyo, que buscan entre capas acomodadas, conservadoras y en descenso relativo. Mantienen una constante polarización y manipulación respecto de las demandas sociales y democráticas de las mayorías populares occidentales, así como la contención y el sometimiento de los intereses de las poblaciones del Sur global, con la ayuda de algunas de sus oligarquías despóticas.

La responsabilidad principal de esta involución, aparte de sus promotores grupos de poder, deriva de la escasa firmeza democrática y social de las derechas convencionales, que se van desplazando hacia este plan como salida autoritaria al agotamiento de la legitimidad de su dominio. Demuestran su dificultad para afrontar los graves retos de la humanidad, el capitalismo y el orden internacional, con el suficiente consenso y cohesión social.

En especial, las élites gobernantes no tienen suficiente credibilidad para movilizar a la población europea y legitimar socialmente la estrategia de rearme y belicismo, ante la autonomía estratégica y la competencia económica de los países emergentes de China y los BRICs. Su complicidad con la limpieza étnica y el genocidio palestino les desarma como referencia moral y democrática.

Pero el estancamiento respecto de unas perspectivas de progreso social, constreñidas por el impulso de conseguir mayores ganancias para las oligarquías económicas, las presiones de los grandes poderes fácticos y los límites de las tendencias progresistas y transformadoras, las lleva hacia el deslizamiento autoritario.

Su punto débil es que esa dinámica regresiva y autoritaria va en contra de las demandas de bienestar vital de las mayorías populares y, en particular, se enfrenta a la mayoritaria actitud cívica y democrática de las sociedades europeas y los intereses poblacionales en el Sur global.

Históricamente, esa trayectoria está condenada al fracaso, quizá imponiendo antes grandes desastres ecosociales, institucionales, geopolíticos y sacrificios humanos. La experiencia del siglo XX, con sus dos guerras mundiales y sus precedentes respectivos, nos aportan enseñanzas que determinados grupos de poder se empeñan en sortear en defensa de sus privilegios. Se alejan de la universalidad de los derechos humanos y los principios democráticos básicos.

En este proceso de derechización, también tiene una parte de responsabilidad la inacción de las izquierdas y fuerzas democrático-liberales, por interés corporativo, desorientación estratégica o impotencia transformadora. Se agrava cuando se presentan grandes necesidades sociales y se genera una frustración cívica por la ausencia de cambios de progreso o, al menos, dinámicas y expectativas para afrontarlos.

Es el debilitamiento de la legitimidad y la esperanza populares en las fuerzas progresistas, cuya situación aprovechan las trayectorias ultras o las propias tendencias neoliberales para imponer sus respuestas como las únicas posibles. Las nuevas dominaciones y desigualdades se presentan como garantía de futuro para esas capas emergentes rearticuladas desde un gran nacionalismo autoritario y excluyente.

La respuesta democrática y progresista debe ser firme y multidimensional, frente a esa ofensiva ultraderechista, en todos los ámbitos y al conjunto de esferas políticas, sociales, económicas y culturales.

En ese sentido, la acción colectiva de los movimientos sociales progresistas —desde el feminismo, hasta el antirracista, el ecopacifista o el sindicalismo— debe tener un sentido sociopolítico o sociocultural, a diferencia de la sociología estadounidense, dominante en muchos ámbitos, que los asocia casi exclusivamente a un movimiento cultural.

Con esa lógica, esa tendencia culturalista prioriza un cambio necesario de ideas y mentalidades, o unas simples garantías formales individuales, pero son insuficientes, especialmente, para las capas populares, condicionadas por más desventajas materiales, relacionales y culturales.

Por tanto, es necesario el impulso ciudadano por la igualdad real y la emancipación en las relaciones de dominación, con la modificación de las conductas y las costumbres en común. La activación cívica es imprescindible para modificar esas desventajas en las estructuras sociales básicas. La práctica social masiva y la acción político-institucional progresista es indispensable para plantear transformaciones institucionales y de las relaciones sociales, más generales. El cambio de las conductas personales y las mentalidades está en conexión con un cambio sociocultural, político y estructural de las condiciones vitales desiguales y discriminatorias.

La ofensiva ultra es multidimensional, en todos esos campos. La respuesta democrática también debe interrelacionar la acción igualitaria y solidaria en todos esos ámbitos.

Europa frente al avance ultra

A nivel mundial, el caso más relevante del ascenso de la ultraderecha es el de la administración Trump, con nuevo imperialismo expansivo que conlleva un deterioro de la democracia liberal a nivel interno y un refuerzo de la hegemonía de EE.UU. frente al Sur global, con la subordinación europea.

Se pueden citar otros casos significativos, como la Argentina de Milei, que se alinean con los objetivos imperialistas de EE.UU., con similar dinámica reaccionaria.

En el caso europeo, en estos años, con cerca del 30% de representatividad en las recientes elecciones europeas, las derechas extremas han ido dando un paso cualitativo en su influencia estructural por su acceso a posiciones gubernamentales, en más de media docena de países, entre ellos Italia, y con importantes condicionamientos

institucionales en otros tantos, con alianzas con las derechas tradicionales o simple aceptación -como el laborismo británico-, de medidas relevantes, por ejemplo, en materia de discriminación inmigrante. En el futuro próximo, tras su reciente ascenso en Portugal y en Polonia, está el reto de las elecciones presidenciales francesas que afectaría todavía más al núcleo directivo de la UE.

No entro en los matices de este diagnóstico, hoy bastante admitido, ni en algunas diferencias por países, con sus respectivas relaciones de poder y tradiciones políticas y culturales. Tampoco se analizan las similitudes y distinciones con el nazi-fascismo de la primera mitad del siglo XX. De todo ello hay abundante literatura y experiencia, incluida la española, desde la República, la guerra civil y el franquismo y el antifranquismo.

Aparte de las tendencias nazi-fascistas que desembocaron en la segunda guerra mundial, vencidas por las fuerzas aliadas, y el continuismo de dictaduras como la franquista en España, han existido precedentes inmediatos hasta un nuevo resurgimiento en segunda década del siglo XXI, al calor del nuevo contexto social derivado de la crisis socioeconómica, las políticas dominantes de austeridad y la fuerte presencia inmigrante. En particular, se puede mencionar, por su impacto en el conjunto de la Unión Europea, el ascenso ultra en países centrales de la Unión Europea, como Alemania, Francia e Italia y, en gran medida, el Brexit del Reino Unido las décadas.

En España, se añaden algunas particularidades, que explican el avance ultraderechista en la última década, representado por Vox, con una apuesta reaccionaria. Por un lado, las importantes raíces derivadas del franquismo, con fuerte presencia ultra en los aparatos del estado, y una derecha política y mediática con grandes insuficiencias democráticas, de respeto al pluralismo político y nacional.

Por otro lado, la relevante indignación cívica con una protesta social masiva (años 2010/2014), por la justicia social y la democracia, frente a las políticas de austeridad y la prepotencia institucional del bipartidismo, así como la amplia ola feminista desde 2018 y el

emplazamiento nacionalista y democrático del *procés* catalán, a partir de 2017.

Todo ello con un ensanchamiento del espacio político-electoral a la izquierda del Partido Socialista, que ha condicionado la gobernabilidad en estos años y se han conformado gobiernos de coalición progresista y democrática que han paliado esos retrocesos, de tal forma que se habla de la isla progresista en Europa.

El contexto europeo de la actual dinámica reaccionaria

Volviendo al marco general de la Unión Europea, la grave y generalizada crisis socioeconómica, derivada de la rapiña de los conglomerados financieros, agudizada por la imposición autoritaria de la austeridad, de los años 2008/2013, ha generado una profunda brecha popular de desafección cívica hacia los poderosos y las élites gobernantes, que han sufrido un fuerte desgaste de su legitimidad ciudadana.

Una parte de esas capas directivas se ha lanzado a su relegitimación y reajuste político-institucional, para conservar lo fundamental: su posición de poder y control social. Han impedido una salida progresista, pero no han remontado una trayectoria de relativo estancamiento económico, bloqueo del Estado de bienestar y débil credibilidad democrática, afectando al núcleo dirigente francoalemán y la propia Comisión Europea, que pretenden salir con sus grandes y controvertidos planes de competitividad económica y de rearme, dejando de lado la Europa social, pacífica y democrática.

En particular, la dinámica principal de las contrarreformas laborales y sociales ha seguido con la reestructuración regresiva del Estado de bienestar, con recorte, privatización y segmentación de los servicios públicos y sistemas de protección social, así como con la precarización y división del mercado de trabajo o el incremento de dificultades vitales y habitacionales para mayorías sociales, especialmente jóvenes.

Además, a ese cuestionamiento en el Norte de las élites económicas —el mercado del neoliberalismo extremo- e institucionales -un Estado insuficiente en lo social y democrático—, se ha añadido una mayor autonomía del Sur global, con el reequilibrio multipolar y el freno a la dinámica neocolonial, extractivista e imperialista de EE.UU., y con menor peso europeo y mayor subordinación.

El descrédito del poder establecido

El problema de fondo es la falta de confianza de las mayorías ciudadanas en ese poder establecido y su gestión neoliberal y autoritaria favorecedora de las oligarquías financieras, empresariales e institucionales.

Al mismo tiempo que se evidenciaba su gestión regresiva y autoritaria, o bien impotente, se ha desacreditado su retórica del bienestar de la sociedad, el interés colectivo o el bien común que, más o menos, había legitimado su gestión estatal en las décadas pasadas. Queda desacreditada su cultura ética de la responsabilidad (Weber) y, paralelamente, su ética de la convicción, de sus principios morales y democráticos.

Junto con dificultades de gobernabilidad, se produce una crisis de legitimidad de las capas gobernantes, de los sistemas de intermediación con la sociedad, los partidos políticos y los grandes medios de comunicación, y de los propios sistemas políticos representativos. O sea, la democracia liberal se debilita como regulación de los conflictos sociales, así como la articulación de los consensos básicos para definir los proyectos de país y del orden internacional.

Es conocido que, algunos grandes dirigentes de la derecha europea (Sarkozy), en esas fechas, hablaron sobre la necesidad de la refundación del capitalismo, evidentemente para reforzarlo con algunas variaciones cosméticas.

No obstante, las derechas tradicionales, hasta ahora, han sido incapaces de implementar una salida equilibrada que garantice la

superación de esos retos para los poderes fácticos, económicos e institucionales: la hegemonía mundial, el control económico con suficiente flujo de ganancias para sus oligarquías, así como una mínima cohesión social y legitimación ciudadana con estabilidad de las estructuras institucionales y sociales de dominación.

En ese sentido, las fuerzas de izquierda, la activación cívica y la acción colectiva de distintos movimientos sociales progresistas, no han podido forzar una trayectoria global de progreso. Ha servido para contener algunos retrocesos y plantear ciertas mejoras parciales, como en España, pero en el conjunto de países europeos hay un bloqueo transformador progresista.

Y, especialmente, la socialdemocracia europea ha participado mayoritariamente en el consenso centrista, con la expectativa de cierto continuismo económico-social y político de acuerdo con las derechas tradicionales y con una profunda crisis de desafección respecto de sus electorados tradicionales.

Estrategias socioliberales fallidas

En particular, hay dos estrategias del centro derecha y el centro izquierda tradicionales, es decir, del consenso socioliberal europeo, que se están demostrando como fallidas.

Por un lado, la política de apaciguamiento —dominante en la preguerra mundial— frente a los ataques antidemocráticos provenientes del poder establecido y la presión ultra, particularmente, en los aparatos estatales y grandes medios.

Por otro lado, el oportunismo electoralista de esas fuerzas políticas y mediáticas de asumir supuestas banderas mayoritarias de sentido común derechista, promovidos por los habituales grandes poderes mediáticos y culturales de las derechas, para intentar conservar suficiente representatividad electoral y mantener el poder institucional.

Ese giro derechista de las fuerzas demoliberales, junto con el iniciado por la llamada tercera vía o nuevo centro, ha llevado a la

socialdemocracia europea y el consenso socioliberal, a no defender condiciones y derechos sociales y renunciar a políticas igualitarias y solidarias, en particular con la inmigración, que generasen nuevas y masivas actitudes democratizadoras y de cambio. Era el camino que podía ampliar el sentido común progresista y los electorados transformadores. Esta evolución ha generado su crisis de su representatividad, ha debilitado las dinámicas de progreso, ha generado mayor impotencia en las izquierdas transformadoras y ha permitido más facilidades a esta dinámica reaccionaria, de involución social y democrática, de las derechas extremas.

Es momento de aprender de la experiencia, analizar el nuevo y difícil contexto, reafirmar los valores democráticos y de justicia social y fortalecer las tendencias progresistas y de izquierda para frenar al ultraderechismo y reforzar una Europa democrática y solidaria.

El reajuste del poder establecido

La cuestión para profundizar es el análisis de los factores y motivos del ascenso de las derechas extremas desde un enfoque sociohistórico, multidimensional y relacional de las distintas dinámicas e interacciones, superando las versiones más economicistas o más culturalistas.

Los tres elementos más significativos y combinados que explican esa reactivación ultraderechista, en esta fase histórica y, al mismo tiempo, permiten reforzarla, son los siguientes.

Primero, la necesidad de (parte) del poder establecido —la presencia de oligarcas tecnológicos en la investidura de Trump es significativa— de implementar una estrategia económica y política que le refuerce en los dos planos: en el interno, su poder y primacía con la garantía de sus ganancias, respecto de su mayoría poblacional; en el internacional, su prevalencia mundial y la correspondiente adecuación jerárquica según el potencial de cada país.

Por supuesto, no hay homogeneidad en el conjunto del poder económico en los distintos países del Norte, dada la dimensión de los

retos tecnológicos, productivos, medioambientales y de recursos primarios. Igualmente, existen distintas condiciones para el reequilibrio multipolar, el rearme estratégico o la cooperación internacional. Así mismo, influyen diversas tendencias respecto del ritmo y la dimensión de los procesos regresivos de derechos sociales, democráticos, redistributivos y protectores que permitan evitar grandes convulsiones sociales.

No hay que descartar, a medio plazo, grandes ofensivas neocoloniales, como la del genocidio palestino de especial gravedad, el desencadenamiento de guerras periféricas importantes y la militarización generalizada, así como el agotamiento y la pugna por los recursos naturales y los efectos del cambio climático.

De forma inmediata, hay un objetivo bastante definido: el desmantelamiento gradual del Estado de bienestar, el deterioro a gran escala de un contrato social equilibrado, todavía relevante en el Norte y en retroceso por las políticas neoliberales y de austeridad.

Ese avance social y económico fue el mecanismo de salida de la crisis de los años treinta, fruto de cierto keynesianismo y un acuerdo social en Europa Occidental y EE.UU., en la segunda posguerra mundial, con el dominio de sus élites en el marco de la guerra fría con el bloque soviético y unas relaciones de fuerza con preponderancia de las derechas, aunque con cierto peso equilibrador de las izquierdas. Tras una primera ofensiva neoliberal en los ochenta y, sobre todo, en los noventa, el nuevo capitalismo globalizado ha sido incapaz de superar los grandes desafíos de las sociedades del Norte, de avance socioeconómico, igualitario y democrático.

Ahora, el Estado de bienestar (social y democrático de derecho) se presenta como el adversario a batir por la presión ultra (y neoliberal) a través de su privatización, segmentación y recorte, en beneficio de los grandes poderes financieros y de servicios privados. Se pretende un nuevo darwinismo social, con el desamparo para las mayorías populares y una mayor subordinación hacia las élites dominantes. Con diversos matices, el trasfondo del proyecto de las extremas derecha rezuma

ultraliberalismo antisocial hacia abajo y apropiación autoritaria hacia arriba.

El fundamento segregador

El segundo factor asociado al avance ultra es la recomposición de una base social vertebradora de su apoyo sociopolítico y electoral, sobre el fundamento segregador. Su plan trata de promocionar los sectores populares con ventajas comparativas, en una o varias de sus posiciones sociales, respecto de los grupos con desventajas, aunque sean parciales o solo en algún ámbito situacional específico.

Utilizan el resentimiento de determinados sectores poblacionales por los retrocesos relativos de privilegios o posiciones de dominación para trasladar el foco y las responsabilidades a los grupos sociales en mayor desventaja histórico-estructural por su posición de clase social, étnico-cultural (o racial y nacional) y por sexo/género.

Es particularmente intenso por la fuerte presencia inmigrante en EE.UU. y en algunos países europeos —de gran origen musulmán—, y menor en España, con una parte de la composición inmigrante —latina— más afín culturalmente.

La presión derechista trata de incrementar las distancias entre las clases acomodadas y las clases trabajadoras y sectores precarizados, particularmente cuando se producen retrocesos de condiciones y expectativas que causan mayor resentimiento hacia abajo en las capas medias o nativas en descenso.

Pretende reforzar, como prioridad de estatus, el supremacismo blanco, frente a las personas de color, e implantar la prioridad nacional excluyente y su identidad sociocultural dominante —el caso del nacionalismo españolista en un país plurinacional como España—, frente a las personas inmigrantes o de otra nacionalidad o cultura (es el caso de la islamofobia), en vez de articular un proceso de convivencia intercultural.

Impone la continuidad de los privilegios y ventajas masculinas, y los modos patriarcales de dominio y desigualdad, frente a trayectorias igualitarias entre los sexos y la libertad sexual y de género, promovidos por los procesos feministas.

En definitiva, el plan ultraderechista trata de consolidar, en esas esferas fundamentales que han experimentado avances significativos estas décadas pasadas, unas relaciones sociales de dominación que reproducen la segmentación y la división social, con efectos disgregadores en el campo popular.

Persisten la discriminación para unos grupos sociales y las ventajas parciales para otros. Para los primeros, desigualdad de condiciones y oportunidades. Para los segundos, aspiración a mejorar, comparativamente, su estatus, aunque sigan castigados o dependientes en otras esferas vitales. Por ello, pueden favorecer, ocasionalmente, ese orden social emanado de los grupos de poder que se benefician de esa debilidad popular estructural.

La ofensiva ideológica ultra

El tercer factor del ascenso ultra es la generación y difusión de una nueva cultura legitimadora de los nuevos ordenes desiguales en esas estructuras sociales —sociolaborales, étnico-raciales-nacionales y de sexo/género—; y en el ámbito internacional, con un nuevo neocolonialismo e imperialismo. Esa dinámica la realizan desde sus fuertes apoyos en el poder económico, institucional y mediático, a veces en connivencia con las derechas tradicionales (y de alguna izquierda).

Así, para consolidar la dominación social de esas estructuras desiguales y justificar la superioridad de su estatus social ventajoso, son funcionales: el individualismo extremo, posesivo, mercantilizado, consumista y (falsamente) meritocrático; el nacionalismo etnocéntrico y el racismo, para someter a minorías raciales o nacionales, especialmente de origen inmigrante, incluso de varias generaciones anteriores; e, igualmente, la subordinación de las mujeres, dirigidas hacia una función

subalterna o en desventaja en el ámbito público o profesional, así como en el familiar, sexual, reproductivo y de cuidados.

En la percepción de la sociedad, ya no estaríamos en la polarización de la mayoría popular frente a las élites dirigentes y los grupos de poder (o del 99% frente al 1%, o de las clases trabajadoras frente a la gran propiedad y su Estado), típica de las izquierdas transformadoras y otras fuerzas progresistas. Tampoco en la visión liberal de la concurrencia y regulación consensual de grupos de interés, o del reconocimiento de la libertad y la igualdad jurídica solo del individuo abstracto, al margen de sus condiciones sociales, necesidades vitales e identificaciones colectivas.

La formación del nuevo sujeto ‘populista’ de las ultraderechas estaría delimitado por un ‘nosotros’, basado en un etnonacionalismo identitario y esencialista, frente a los ‘otros’, en posición subalterna o excluyente. Ese supremacismo (*¡mi patria, primero y por encima!*) tiene cierta apariencia universalista instrumental y un ropaje de innovación tecnológica, pero está impregnado de ultra conservadurismo social y moral, un discurso manipulador, una ética nihilista y un pensamiento irracional.

Supone una reestructuración de (parte) las capas privilegiadas, desconfiadas del sostenimiento del convencional orden social liberal-capitalista, con dos niveles distintos de posiciones de dominio.

Por un lado, por los grupos de poder oligárquico, autoritarios y neocolonialistas, sin suficiente competencia articuladora de lo económico y lo social y sin capacidad consensual respecto de la democracia, y beneficiados por ese reajuste de poder y sometimiento popular.

Por otro lado, de forma subordinada, por los grupos sociales con ventajas relativas, en distintas esferas, respecto de los sectores en desventaja comparativa, aunque también estén sometidos a discriminación y desigualdad, en otras facetas vitales, por esos poderes fácticos. Es una posición contradictoria que deviene en bandazos

adaptativos según las realidades y expectativas de ganancias de estatus y reconocimiento.

Frente a la amenaza ultraderechista, los valores de igualdad, libertad y solidaridad siguen vigentes para guiar la actitud cívica progresista y democrática que el mundo necesita.

La interacción entre la pugna sociopolítica y la ideológica

Las guerras culturales de las ultraderechas —con sus diferentes medios, fundaciones e iglesias—, asumen la preponderancia del nacionalismo, el supremacismo racista y el machismo, y pretenden reforzar esas bases estructurales de dominación. Se genera una combinación entre, por una parte, un sector de los poderosos, junto con una reestructuración centralizadora del poder ejecutivo y una penetración profunda en los aparatos del Estado —judicatura, fuerzas armadas y de seguridad, alta burocracia estatal...— y, por otra parte, una nueva segmentación de las relaciones sociales, con la adhesión de una parte popular con ventajas comparativas y conservadora.

Su ofensiva ideológica y cultural es complementaria y justificativa de su cambio reaccionario, estructural y sociopolítico, y tiene una función doble. Por un lado, afronta la relegitimación de un poder establecido deslegitimado e incapaz, con una recomposición de las élites partidarias y gestoras. Por otra parte, se produce una rearticulación de su base social ‘populista’, sobre el resentimiento por la pérdida (real o imaginaria) de unas ventajas relativas y la promesa de su restitución.

Esa situación de parcial vulnerabilidad poblacional deriva de dos factores distintos. Uno, provocado por la propia globalización económica y cultural neoliberal, que daña la estabilidad de su estatus vital, relacional y laboral. Otro, producido por los cambios —progresistas— respecto de unas estructuras tradicionales sobrepasadas, la familia patriarcal, las jerarquías conservadoras y la preeminente homogeneidad nacional dominante: *¡se hundén la nación y el orden social y moral!!*

Por tanto, el discurso ultra modifica el marco interpretativo hacia la polarización sociopolítica y cultural entre amigos / enemigos (buenos y malos), para condicionar la actitud de la sociedad. El adversario principal de la ciudadanía democrática, ya no serían los desacreditados ricos y poderosos, desprestigiados en estas últimas décadas, sino que se construye un nuevo enemigo (ficticio). Así, se canalizan el odio y el sometimiento hacia los de abajo, con el principal chivo expiatorio: inmigrantes (pobres), con distintos rasgos étnico-culturales a marginar (musulmanes). Y, en un plano más general, se va combatiendo contra la dinámica ‘progre’, las fuerzas de izquierda y la propia democracia liberal.

En definitiva, las fuerzas ultraderechistas, aun con elementos irracionales, idealistas y voluntaristas, tienen un fundamento realista: están incrustados y refuerzan su poder en las estructuras estatales, sociales y económicas, implementan sus políticas reaccionarias, de forma directa o condicionando las instituciones políticas, y utilizan sus guerras culturales para dar legitimidad a sus avances estructurales y ensanchar su representatividad.

La crítica y la oposición democráticas y de izquierdas frente al ascenso ultra o, si se quiere, la resistencia antifascista, se fundamentan en la acción cívica frente al carácter reaccionario de su proyecto y su trayectoria de dominación: regresivo, segregador y antiigualitario en lo social y relacional; ultraconservador en lo cultural; y autoritario y antidemocrático en lo político-institucional.

En consecuencia, la ofensiva ultra no solo, ni principalmente, es cultural, por lo que no es suficiente la prioridad por la pugna ideológica contra ella. Su intensa labor de socialización cultural, con nuevos discursos e instrumentalización de todo un cúmulo de aparatos comunicativos, buscan asentar un nuevo sentido común o hegemonía ideológica. Es imperioso desplegar una actividad de elaboración de pensamiento crítico y una acción divulgativa y de debate público para contrarrestar las falacias y argumentos derechistas.

No obstante, el plan global de las derechas extremas pretende imponer una transformación profunda de las relaciones de dominación en el conjunto de las estructuras sociales hacia: un sistema político postdemocrático, la reducción del Estado social y de derecho, un orden internacional neocolonial con la primacía estadounidense.

La respuesta transformadora, democrática y solidaria sigue estando en la acción cívica de las mayorías sociales, con el ejercicio de su principal arma, la participación democratizadora respecto de las relaciones desiguales y las estructuras de dominación. El problema es, sobre todo, sociopolítico, donde confluyen intereses sociales, sujetos colectivos y agenda de cambio.

La solución pasa, principalmente, por la masiva activación popular y democrática, por la participación activa de la ciudadanía y su reflejo representativo e institucional. El factor clave es la práctica social, la experiencia popular en el conflicto sociopolítico y cultural, con su articulación plural y unitaria frente a las dinámicas de involución socioeconómica, sociocultural e institucional.

2.4 Golpismo y grietas en el Estado de derecho

Estas semanas se han visualizado las grandes grietas que padece el Estado de derecho en España. Obedece a dos circunstancias. Por un lado, a la persistencia desde la transición política, de grupos de poder derechista y ultraconservadores. Está derivado de los déficits democratizadores de una Transición no modélica, con diversos lastres

de la reforma pactada: conservación de los principales grupos de poder del franquismo, en particular el poder judicial, junto con el militar y de seguridad, los grupos económicos oligárquicos, la alta burocracia del Estado y el aparato mediático.

Por otro lado, el bloqueo reformador y legislativo progresista y la impaciencia acosadora de las derechas, en un marco de cierta frustración social por la persistencia de graves problemas socioeconómicos y democráticos, junto con la ofensiva ultra y del aparato judicial.

Está derivado de la encrucijada estratégica en que se encuentra el proceso político, con la primacía gubernamental de un gobierno de izquierda, con apoyo democrático parlamentario a su investidura, y la imposibilidad de una moción de censura derechista. Existe una dinámica de gestión reformadora limitada, menor en esta segunda legislatura dada la composición parlamentaria menos escorada hacia la izquierda, junto con la persistencia de un campo socioelectoral progresista, debilitado en su articulación y con una presencia menor de su izquierda, pero todavía suficiente para contrarrestar el campo social de las derechas.

El carácter antipluralista de las derechas

En este equilibrio inestable, producto de la frágil mayoría parlamentaria con la que cuenta el gobierno de coalición que, a veces, ante los emplazamientos de Junts (y Podemos), se torna en minoría, y junto con la prepotencia derechista de deslegitimación permanente del Ejecutivo presidido por el socialista Sánchez, las derechas utilizan todos sus recursos de poder para conseguir el recambio gubernamental y la reorientación del ciclo político.

La presión de las derechas no solo la realizan con la oposición parlamentaria legítima y la exigencia de elecciones generales anticipadas, sino con todos los procedimientos —incluido los ilícitos— a su alcance. En primer lugar, con el acoso judicial combinado con su poderío mediático, en esta ocasión, hacia el PSOE, tras su ofensiva

anterior contra el independentismo y Podemos: ‘El que pueda hacer, que haga’, del expresidente Aznar.

Por tanto, aprovechando los resortes de poder que escapan a la democracia, se refuerza la amenaza ultra de utilizar ‘todos’ sus recursos. Es la estrategia, sobre todo, de VOX y Ayuso (y Aznar y Feijóo), descalificando a las izquierdas y los nacionalistas como antipatria, anti-Estado, antidemocráticos... y guerra civilistas. Ante la imposibilidad de una moción de censura exitosa para su acceso al poder gubernamental, las derechas están configurando un clima político y mediático que permita articular golpes ‘blandos’ de raíz jurídico-política, para hacer insostenible la gobernabilidad, activar a su base socioelectoral junto con la inhibición del electorado de izquierdas y, así, asegurarse la próxima victoria electoral.

La reacción derechista, en este ciclo político de ascenso democratizador, ha obedecido inicialmente a combatir el riesgo de desborde independentista y neutralizar la presión cívica de izquierdas por un giro social y democrático que, junto con la masiva ola feminista, han estado condicionando al PSOE —el sanchismo— y los gobiernos de coalición progresista hacia una agenda de reforma social y democratizadora. Aunque cada vez está más estancado, este ciclo de progreso, inédito en Europa, con la hegemonía de las izquierdas, todavía enerva a los poderes fácticos derechistas que pretenden revertirlo.

El sanchismo ha sido una reafirmación socialista frente a las derechas, como respuesta a sus propios descrédito y desafección masiva sufridos por su anterior política gubernamental de austeridad, con la ruptura de su contrato social con su electorado y su desconcierto estratégico centrista (2010-2016). Estaba condicionado por la existencia de un campo sociopolítico y electoral sustantivo a su izquierda y por el nacionalismo democrático periférico. Al final, ha conseguido su gradual recomposición, su primacía en el campo socioelectoral de las izquierdas y su nuevo acceso gubernamental durante estos siete años y tras la moción de censura de 2018, con ocasión de la corrupción y el autoritarismo del PP de Rajoy.

Las derechas tienen un sentido antipluralista, consideran al Estado de su propiedad y su derecho a su primacía política, al creer, de forma esencialista, que son los auténticos representantes de la nación o del pueblo. Así, descalifican a ese sanchismo y estigmatizan a todas las izquierdas, particularmente a la transformadora y la nacionalista. Refuerzan su legitimidad utilizando un nacionalismo supremacista, excluyente y conservador y, ante nuevas realidades inmigratorias, refuerzan el racismo segregador para imponer la subordinación de la creciente población inmigrante, su control social y su asimilación cultural. La estrategia derechista configura su enemigo y se polariza, ahora, con el sanchismo, como actor dominante dentro del bloque democrático, tras la neutralización del proceso independentista y la acción transformadora y plurinacional de su izquierda.

Al mismo tiempo, la dirección socialista consigue la primacía del campo democrático y modera su proyecto con la vista en el centro sociológico. Pero, sobre todo, muestra su dependencia respecto de los grandes poderes económicos, institucional-burocráticos, especialmente judiciales y de seguridad, así como europeos e internacionales.

Por tanto, existe un giro de los poderes fácticos españoles (y occidentales) hacia la derechización política, el desmantelamiento del Estado de bienestar y por el mayor control social y la homogeneización étnico-cultural, con el intento de recomposición y relegitimación de sus élites dirigentes en un régimen más regresivo y autoritario.

Se produce ante los retos geoeconómicos y estratégicos mundiales, incluida la sostenibilidad del planeta, derivados del deterioro del peso internacional europeo, así como de sus capacidades económicas, tecnológicas y de materias primas, incluida las tierras raras. Estas, puestas de relevancia últimamente, son necesarias en diversos ámbitos tecnológicos y para el desarrollo de su competitividad, aunque todavía supongan un volumen productivo limitado respecto de la dimensión comercial y financiera de los hidrocarburos y la energía fósil.

De fondo se encuentra, lejos de su supuesto modelo social, democrático, multilateral y de economía verde, la pretensión

neocolonial e imperialista de las élites europeas, subordinadas a EE.UU., de fortalecer su dimensión político-económica, asegurar su mínima legitimidad y cohesión social y garantizar la extracción de beneficios, en sus sociedades y a nivel mundial, aun con un papel subalterno en la pretendida hegemonía occidental.

Supone una reorientación hacia un neoliberalismo más agresivo y autoritario, con más rearme y militarismo, y restrictivo del gasto público social. Está marcando las prioridades de la UE, de acuerdo con los reequilibrios geoestratégicos y geoeconómicos, cuya máxima expresión la conforman la competencia entre EE.UU. y China y los conflictos geopolíticos de Ucrania/Rusia e Israel/Oriente Próximo-Palestina.

Todo ello, acentúa el carácter antipluralista y antidemocrático de las élites dirigentes europeas y estadounidenses que pretenden reforzar su poder, frente a unas sociedades en las cuales todavía prevalece la cultura y las instituciones democráticas.

¿Hacia un golpe de Estado blando?

El hecho más significativo del actual acoso judicial/político/mediático de las derechas ha sido la condena al fiscal general, sin pruebas. Se trata, además, de tapar la (presunta) corrupción del entorno de la presidenta Ayuso y advertir al Gobierno de quién manda, la derecha y su partido judicial. El mensaje es claro: hay que cerrar el (limitado) ciclo de progreso con hegemonía socialista, estigmatizado como ‘sanchismo’, y abrir un nuevo ciclo regresivo y autoritario de manos del pacto PP-VOX.

Se veía venir el plan para inhabilitar al Fiscal General, como paso relevante para deslegitimar al Ejecutivo y demostrar el poder fáctico de la derecha. El Tribunal Supremo lo ha hecho con una sentencia política, sin suficiente respeto a los fundamentos jurídicos: la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo e imparcial, la desconsideración de pruebas favorables a la defensa, como las declaraciones de

periodistas, o la no demostración de la existencia de pruebas acusatorias reales y justificadas.

La derecha política, judicial, económica y mediática quiere mandar e imponer otra etapa regresiva y de involución política, siendo un estorbo su falta de legitimidad parlamentaria. Tenemos mucha derecha antidemocrática en España, sin reciclar, y ahora se une a la nueva ola ultra europea y mundial. La ofensiva derechista —discursiva, política y judicial—, siguiendo el plan trumpista, va invirtiendo el sentido político e ideológico de ambos bloques, conservador-autoritario y progresista-democrático: El sanchismo y sus aliados, el nacionalismo y la izquierda alternativa, estarían implantando una dictadura; las derechas estarían defendiendo la libertad y el Estado de derecho. Es la versión de la presidenta Ayuso de la Comunidad de Madrid, ante la pretensión de la fiscalía de juzgar a su entorno (su novio como presunto delincuente, con pruebas fehacientes de Hacienda) y su deseo de levantar una alternativa trumpista en España.

El objetivo de las derechas es batir a Sánchez y el gobierno de coalición, debilitar a las izquierdas y neutralizar y revertir este pequeño ciclo de progreso. Visto en perspectiva, este cambio progresista ha sido limitado: cierta reforma social y laboral, feminista e institucional/democrática, con la amnistía, la convivencia y la articulación territorial de Catalunya (y plurinacional) como especial revulsivo para las derechas y su nacionalismo excluyente, así como factor decisivo para consolidar la actual mayoría parlamentaria e impedir la investidura de Feijóo tras el 23J y durante esta legislatura.

Persiguen el recambio de poder gubernamental como sea, con la cada vez mayor presión ultra. Pero ante su impotencia para conseguir suficientes apoyos parlamentarios para una moción de censura se encuentran ante dos dinámicas: la frustración total, dependiendo del ritmo y las condiciones decididos por el Gobierno y su —frágil— mayoría parlamentaria; o la tentación de ir hacia un golpe de Estado blando que sea efectivo.

No obstante, la última raya roja que separa la democracia liberal de una dictadura es la legitimidad de unas elecciones generales libres y el correspondiente aval parlamentario. Y dada la mayoritaria conciencia democrática de la sociedad española y el marco europeo, todavía sujeto al Estado de derecho, es difícil que haya suficientes fuerzas autoritarias y estamentos de poderes fácticos con la determinación de imponer un golpe de Estado exitoso, y que no revierta en su fracaso —incluido para la Corona— y una reafirmación democrática.

Quizá, el ascenso de VOX y las tensiones en la dirección del PP, tengan que ver con el cálculo de los riesgos de esa apuesta golpista, cuando en Europa (y EE.UU.), avanzan en un proceso gradualista hacia el autoritarismo: por una parte, con ocupación y control de los órganos del Estado, judicial y mediáticos, aparte de los económicos, gubernamentales y de la Administración pública; y por otra parte, con mayor control social, reducción de las libertades civiles y contención de los grupos sociales y políticos progresistas. Sin embargo, todavía hay algunos límites a esa involución política de las nuevas élites dirigentes: la persistencia de elecciones parlamentarias y libertades políticas básicas. Hay algunas diferencias con el fascismo de entreguerras, más totalitario y militarista.

La conclusión es que la actual dirección socialista y el presidente del Gobierno son quienes están fijando el calendario político-electoral. Aunque haya cierto parón legislativo y presupuestario, parece que se entra en una prolongada campaña preelectoral, con las elecciones autonómicas inmediatas que darán nuevos datos demoscópicos y de equilibrios institucionales. Junto con sus expectativas electorales y las dificultades de la gobernabilidad, Sánchez decidirá la oportunidad de la convocatoria electoral, más o menos anticipada, en sus mejores condiciones ventajosas y con la impaciencia de las derechas. El peligro involucionista es serio y hay que seguir preparándose contra ello en el doble campo, político-institucional y socioelectoral.

2.5 Conciencia democrática y perspectiva electoral

En el marco de la ofensiva derechista para imponer un nuevo ciclo autoritario y regresivo, conviene analizar dos factores que condicionan el proceso político. En primer lugar, la opinión ciudadana sobre la democracia y el franquismo, o sea, la actitud mayoritaria de freno a la involución política. En segundo lugar, las perspectivas electorales para las izquierdas en esta prolongada campaña preelectoral.

La opinión ciudadana sobre la democracia y el franquismo

Es interesante la radiografía de la sociedad española que muestran los resultados de la reciente encuesta de noviembre de la agencia 40dB. Entresaco, sintéticamente, las variables que me parecen más significativas para evaluar la opinión de la ciudadanía española sobre la democracia:

- **«La ciudadanía valora el Régimen de Franco»** como: *Bien y Muy bien* (15%), *Ni bien ni mal* (25%), *Mal y Muy mal* (55%). Pero en VOX contestan (respectivamente): 42%, 37%, 17%. Y en PP: 20%, 37%, 38% (la diferencia hasta 100%, *No lo sé*).
- **«El cambio que siguió a la muerte de Franco fue»:** *Para bien* (68,7%); *Ni para bien, ni para mal* (19,2%), y *Para mal* (9,9%).

- **«La Transición permitió construir una democracia, aunque se podría haber ido más lejos»** (*Muy de acuerdo y De acuerdo*): La mayoría de la ciudadanía considera que la Transición construyó una democracia comparable a las europeas (71,7%) y que fue un ejercicio colectivo de reconciliación (67,4%), aunque casi 8 de cada 10 (77,5%) piensan que se podría haber ido aún más lejos; y el 47,1% considera que ‘las derechas y las izquierdas no tuvieron las mismas oportunidades durante la Transición’: mayoría entre las izquierdas y minoría entre las derechas.
- **«El franquismo dejó consecuencias que todavía se perciben hoy»** (*Bastantes o Muchas*): en la política, 59%; la iglesia, 56,8%; la sociedad, 56,5%; el ejército, 51,5%; los cuerpos y fuerzas de seguridad, 49,6%; el poder judicial, 46,8%. (en torno al 10%, *no sabe*). Esas medias esconden que en los electorados de derechas perciben menos consecuencias del franquismo -particularmente en el aparato estatal, o sea, el ejército, las fuerzas de seguridad y el poder judicial-, mientras que los votantes de izquierdas las observan en todos los ámbitos e instituciones.
- **«Preferencia por la democracia»:** En la población general: 73,7%. En votantes de Podemos, 93,6%; Sumar, 91,4; PSOE, 85,9%; PP, 81,9%, y de VOX, 48,9%. Por edad, entre 18-28 y 29-44 años: 65%; entre 45 y 60 años: 75%; más de 60 años: 84%. El resto de porcentaje hasta 100%: *preferible un régimen autoritario en determinadas circunstancias o me es indiferente*.
- **«Lazos ideológicos y simbólicos con el franquismo»** (*Mucho o bastante*): de votantes de VOX, 68,5%; de PP, 48,1% (sobre todo es la opinión del electorado de la izquierda, no del propio del PP que se considera distante).

Los datos se comentan solos, particularmente en la actitud ciudadana ante la democracia que la prefieren cerca de las tres cuartas partes, con abrumadora mayoría de la base electoral de las izquierdas (y se supone que la de los grupos nacionalistas), y también en la del PP,

con el dato preocupante de que no llega a la mitad en el electorado de VOX. Además, una valoración nítidamente antifranquista solo la tiene el 55%, frente al 15% que avala el franquismo -una parte significativa, aunque minoritaria, jóvenes- y el 25% intermedio.

Por otro lado, la mayoría popular es consciente de las lacras persistentes dejadas por el franquismo (algo más de la mitad, según aspectos), cree que se mantuvo la desigualdad de oportunidades entre derechas e izquierdas en la Transición (cerca de la mitad), y que ésta, aunque supuso cambios democráticos positivos, podría haber ido más lejos (70%).

El PSOE (y todos) en precampaña electoral

El segundo aspecto que conviene resaltar es la actitud global socialista ante esta incertidumbre política, que pretende generar confianza en su victoria electoral. Para ello me valgo de la última encuesta del CIS, con una conclusión: El CIS de Tezanos profundiza el sesgo demoscópico favorable al PSOE, que se inserta en plena campaña preelectoral prolongada. Por supuesto, las encuestas privadas privilegian el ascenso de las derechas.

Esos sesgos muestrales y analíticos ponen en cuestión la rigurosidad de los estudios demoscópicos, que reflejan su dependencia de los respectivos intereses partidistas, y dejan más oscuro el análisis realista de las ciencias sociales. Expongo un breve comentario crítico del estudio del 19 de noviembre 2025 de esa institución pública, sin que los datos del reciente Barómetro de diciembre (12/12/2025), [que pongo entre corchetes] modifiquen sustancialmente estas valoraciones.

Si en la encuesta de octubre pasado, según la muestra del CIS, la representatividad del electorado del PP, respecto de las elecciones generales de 2023, disminuía en 4,9 puntos y la del PSOE aumentaba en 6,5 puntos, en el estudio actual de noviembre la disminución del PP es de 7,7 puntos y el incremento del PSOE es de 9,4 puntos, es decir, hay un sesgo de la muestra, respecto de la realidad electoral del 23J, de **más**

de veinte puntos favorable para el Partido Socialista, respecto del PP.

La estimación de voto al PSOE es del 32,6% [31,4%], a mucha distancia del PP (22,4%) [22,4%], y gran objetivo estratégico para su dirección, por la importancia de su traducción en escaños en las provincias pequeñas.

No obstante, dado el ascenso de VOX [hasta el 17,6%], el estancamiento del PSOE y la división de Sumar/Podemos (7,1%+4%) [7,8% y 4,1%], con su impacto en la menor adjudicación de escaños (¿9+3?), ya que no llegaría a la mitad de los actuales, es probable que la mayoría parlamentaria sea de las derechas... si no hay cambios estratégicos en las izquierdas o en el panorama político general. Es el reto socialista para esta fase preelectoral, sin aparentes nuevas cartas que jugar, más allá de la propaganda, y con las amenazas judiciales de corrupción por el caso Koldo/Ábalos/Cerdán por delante y los escándalos recientes de agresiones machistas de algunos de sus dirigentes sin respuesta adecuada.

Además, es una situación delicada, especialmente, para la izquierda alternativa, incapaz de recuperar su espacio electoral anterior y, sobre todo, de convertirlo en escaños, dada su división. Por parte de la dirección de Sumar, se da por desechado el arreglo interesado propuesto por el PSOE, de darle su voto en las provincias pequeñas y medianas, debido a que sería improbable el trasvase de su electorado, diluiría a (Movimiento) Sumar y le dejarían ese espacio a Podemos. Sus dirigentes hablan de unidad, pero bajo su primacía estratégica y organizativa, con una posición subalterna de Podemos. Por parte de la dirección de Podemos, sigue en su estrategia de levantar su propio proyecto político diferenciado y de confrontación con el gobierno de coalición, considerándose el motor ideológico de la izquierda.

En ambos casos, hay un bloqueo práctico respecto de la posibilidad de acercamiento y colaboración mutua, desde sus pretensiones respectivas de primacía política, hoy irresolubles ante la polarización de estrategias políticas y la ausencia de confianza entre sus dirigentes y de

procedimientos democráticos compartidos. Incluso la competencia sectaria puede ir a más, con consecuencias más perniciosas.

Por tanto, habrá que esperar a la experiencia de los resultados electorales autonómicos que se están iniciando, las expectativas electorales de cada cual, la reflexión de sus liderazgos y las potencialidades de una deseable reactivación cívica en la esfera sociopolítica. Y, en último término, habrá que valorar el panorama político tras las elecciones generales, las responsabilidades partidarias, las características del próximo ciclo político y la recomposición de la izquierda transformadora.

En definitiva, aunque no hay adjudicación de escaños, la primacía del PSOE que vaticina el CIS, aún con ese sesgo demoscópico que perjudica al PP, todavía sería insuficiente para conseguir una mayoría parlamentaria de izquierdas y democrática (incluido los nacionalistas).

Por tanto, ese estudio público forma parte de la propaganda preelectoral prosocialista y sigue sin convencer sobre su rigurosidad demoscópica, el diagnóstico socioelectoral y las estrategias adecuadas para responder a la ciudadanía y garantizar la victoria electoral. Como ya he dicho en otra parte, pongo en duda que Sánchez se crea las conclusiones del CIS para decidir sobre la convocatoria inmediata de elecciones generales. Forma parte de la estrategia comunicativa para activar su electorado. De ahí su opción por una campaña prolongada hasta 2027 (o finales del 2026).

Sin embargo, parece que la gestión gubernamental actual continuista, con la simple participación en la guerra mediática y la crispación discursiva, no modifica lo suficiente los campos electorales hacia la izquierda, aunque sí se beneficia la ultraderecha.

Por tanto, persiste el reto para las izquierdas de evitar un ciclo regresivo y autoritario, sin muchas soluciones políticas desde la gestión gubernamental y con relativa impotencia estratégica frente a la ola reaccionaria española e internacional y ante los graves problemas que afectan a la mayoría social. Se necesita un revulsivo de expectativas

transformadoras creíbles. Es una responsabilidad conjunta de las izquierdas sociales y políticas. Todavía hay tiempo. Veremos.

3. IGUALDAD Y LIBERTAD: FUNDAMENTOS DE LA JUSTICIA SOCIAL

(Una versión inicial se ha publicado en la *Revista Internacional de Educación para la Justicia social* —RIEJS—, volumen 2, número 1 (2013) (Antón, 2013c). Forma parte del marco teórico de la Investigación Multidisciplinar bianual de la Universidad Autónoma de Madrid *Educación y Justicia Social: Una mirada multidisciplinar.*)

Justicia es dar a cada uno lo que le corresponde; es decir, en proporción a su contribución a la sociedad, sus necesidades y sus méritos personales.
(Aristóteles, siglo IV a. c.)

El sujeto es individual porque es social (y viceversa).
(Alonso, 2009: 63).

El tercer capítulo, *IGUALDAD Y LIBERTAD: FUNDAMENTOS DE LA JUSTICIA SOCIAL*, es de carácter teórico, con la reelaboración de una investigación académica.

El primer tema tratado es el *Concepto de justicia: principios normativos*, en el que se explican los fundamentos, las dimensiones y los tipos de justicia, con la interrelación de la igualdad y la libertad,

En segundo lugar se expone *Una interpretación social y crítica*, con alusión a distintos autores de ciencias sociales para destacar el doble carácter social e individual de la persona, así como la ambivalencia del ser humano.

En tercer lugar, se profundiza en los *Tipos de justicia: solidaridad, igualdad jurídica o derechos humanos y méritos*, seguido, en cuarto lugar, del análisis de las *Dimensiones de la justicia: redistribución, reconocimiento y representación*.

La quinta sección, *Desigualdad, bienes primarios (Rawls) o capacidades (Sen)*, compara las posiciones de esos dos ilustres pensadores que han fundamentado el pensamiento ético sobre la justicia social, con un enfoque liberal y progresista, matizando sus ideas.

Finalmente, en sexto lugar, *Un reformismo fuerte: ampliar la igualdad y la libertad*, expongo las conclusiones del estudio, con la interrelación de la igualdad y la libertad desde una perspectiva universalista de los derechos junto con una aplicación concreta transformadora y según las necesidades sociales, con el principio añadido de la solidaridad.

3.1 Concepto de justicia: principios normativos

Igualdad y libertad son principios fundamentales de la justicia. Son valores o componentes normativos que constituyen la idea de justicia. Desde Aristóteles la justicia ya era la virtud más importante desde el punto de vista relacional. El adjetivo de ‘social’, se incorporó en el siglo XIX y se consolidó con la constitución del moderno Estado social y de derecho, los actuales Estados de bienestar. La justicia social define el contenido sustantivo y procedimental de las normas que deben regular la interacción social: la distribución de los recursos y bienes económicos, políticos o culturales, así como la posición, el reconocimiento y la participación de los individuos y grupos en la estructura social.

En relación con el concepto de justicia social hay que distinguir sus *fundamentos* (igualdad, libertad), sus *dimensiones* (distribución, reconocimiento, representación) y los distintos *tipos* (solidaridad, derechos básicos, méritos o incentivos).

La definición de los fundamentos de la justicia hace referencia a los principios normativos que la constituyen e incorpora esos dos valores fundamentales, igualdad y libertad, aun con distintos énfasis y equilibrios. Así, diferentes autores hablan de «paridad (igualdad participativa)», «reconocimiento» (igualitario), «igualdad de trato», «igualdad de oportunidades» (o capacidades) ... Esa expresión de la igualdad, como principio normativo, aunque se enuncie en primer plano, normalmente, se le hace depender jerárquicamente del objetivo de la libertad. Este último concepto posee también distintos matices: autorrealización, autonomía personal, capacidad de elección o desarrollo humano..., o bien, libertad ‘real’ o no-dominación. En distintas expresiones, junto con la idea de igualdad se enlazan otras como

capacidad, oportunidad o participación, que son componentes sustantivos de la idea de libertad. Dicho de otro modo: se trata de asegurar una igualdad básica, incluido el derecho y el ejercicio de las libertades, para garantizar el bien individual y colectivo expresado, mayoritariamente, en términos de libertad.

Por tanto, aparece ya una cierta jerarquía, con el valor de la libertad como finalidad central y la igualdad como medio o condición para la realización de esa libertad de las personas. La concreción de la igualdad se establece a través de dos niveles: en el primero, es mínima y universal, derivada de la condición social y la dignidad del ser humano; en el segundo, los bienes y las posiciones sociales se deberían corresponder, de forma ‘equitativa’ o proporcional, al mérito o la contribución del individuo y el grupo social. El contenido de esa libertad también está lleno de diversos énfasis. Se puede poner el acento en la eliminación de interferencias externas, o bien en la superación de la necesidad y la subordinación. Puede ser expresada en términos de capacidad de elección, afirmación de identidad o participación.

Aquí nos centramos en los principios o fundamentos de la justicia social, la igualdad y la libertad, desde una perspectiva sociológica, atendiendo a su impacto en las relaciones sociales, entendidas en sentido amplio y multidimensional. La pregunta pertinente es *qué igualdad y qué libertad*. Se trata de definir qué grado o intensidad tienen cada uno de esos fundamentos. O, desde otro punto de vista, qué relación se establece con sus contrarios, qué equilibrios se producen y pueden ser justificados entre igualdad y desigualdad o bien entre libertad y dominación o subordinación. E, igualmente, abordaremos las diferencias entre los distintos igualitarismos y los conflictos entre diferentes derechos o libertades, siguiendo a Sen (1997: 73):

Si no se puede eludir el asunto de la igualdad, el hecho de que haya muchas nociones diferentes de igualdad implica que también hay que enfrentarse con los conflictos entre concepciones igualitaristas diferentes.

O bien, Sen (2004: 14):

Sostengo que el verdadero conflicto es el que existe entre los distintos tipos de libertades y no entre libertad 'sin más' y las ventajas en general.

Explicaremos las tensiones existentes en la interrelación entre los dos componentes. Ambos pueden ser complementarios y también conflictivos y son, al mismo tiempo, imprescindibles e irreductibles entre sí, dando lugar a una compleja combinación de ambos principios normativos. No estamos ante un 'monismo moral' sino ante la ambivalencia de valores con una relación compleja.

Ya hemos dicho que la justicia social hace referencia, fundamentalmente, al carácter relacional de los individuos. Especialmente, el fundamento de la igualdad remite a la comparación entre los individuos y grupos sociales, a la regulación equitativa de su relación. En la libertad aparecen más disociados los dos aspectos, el carácter individual y el social de la persona. Desde el punto de vista estrictamente individual este concepto se centra en el sujeto autónomo, su autorrealización, su dignidad y sus derechos individuales. Es un tema ya clásico en el pensamiento liberal e ilustrado, desde el humanismo renacentista y la reforma protestante hasta Hegel. La variante más reduccionista o economicista de la libertad sería la prioridad del derecho a la propiedad privada o la libertad de empresa, definido (por Locke y Smith) como el pivote desde el que se juzgaría la libertad individual o la capacidad de elección y el reconocimiento social.

Desde el plano de su componente social, la libertad hace referencia a unos vínculos libres de dominación y de subordinación, a los derechos civiles, políticos y sociales que garanticen a los individuos la superación de la dependencia en relación con la necesidad o la imposición del poder u otras estructuras sociales. Hacer hincapié en este enfoque social nos permitirá superar la primera acepción individualista de la libertad como el valor supremo y exclusivo del individuo. Para la variante más

reduccionista, el componente social (las interacciones sociales) se considera ajeno o contraproducente al sujeto, a su individualidad y su libertad. Y, en esa medida, se infravalora ese segundo aspecto de los vínculos colectivos en que está metida la libertad. Igualmente, la igualdad se infravalora, como si fuera un componente externo al individuo, una constricción que frena su libertad y la libre expansión de sus intereses y sentimientos. Y se jerarquiza y hace depender de esa primera faceta de la libertad. La igualdad se acepta, pero en la medida que favorece la libertad como bien superior y específico del ser humano, es decir, como elemento secundario y variable dependiente. Cuando entran en conflicto, para esa lógica individualista extrema está clara la opción: el interés propio es la libertad, que sería la guía para la razón práctica. La igualdad aparece como medio instrumental y condición mínima para el desarrollo humano basado en la libertad. O bien se muestra como referencia ética genérica y ‘relacional’ favorable y complementaria a la libertad, aunque externa al individuo y dependiente de la misma. La igualdad sería, en todo caso, un criterio normativo para la sociedad, para mantener la cohesión social y aportar legitimidad a las instituciones sociales. Aunque se ve siempre un elemento de segundo orden, frente al componente de libertad, considerado el ‘esencial’ del ser humano. Pero la igualdad, la equidad en las relaciones interpersonales y sociales, es un principio constitutivo de la sociedad en su conjunto o los grupos sociales, y también de la propia persona, de su proceso en la construcción del yo.

En definitiva, igualdad y libertad están interrelacionadas, y constituyen dos polos fundamentales de la justicia social. Ambos componentes pueden ser complementarios pero también opuestos y entrar en conflicto. No se pueden reducir la una a la otra, ni priorizar o jerarquizar de forma absoluta la primera a la segunda o la segunda a la primera. Todas las doctrinas, al menos las modernas y democráticas, incluido las liberales y las de izquierdas, socialdemócratas o marxistas, tienen una base igualitarista. Es importante la interrogante planteada por Sen (2004, y 2010): *¿igualdad de qué?* Este autor se refiere

principalmente a dos opciones: 1) de recursos o bienes primarios (Rawls, 1971), o 2) de capacidades (Sen, 2010; Nussbaum, 2012). Y, frente al enfoque procedimental e institucional de la primera, apuesta claramente por la perspectiva sustantiva y ligada directamente a las personas, de la segunda. La primera posición consiste en opciones distributivas, de una igualdad específica en un aspecto de las necesidades y de nivel mínimo, como base para la libertad real de las personas. Por tanto, desde esa idea, con una base igualitaria básica aspiran a proporcionar a los seres humanos mayor libertad.

Una cuestión importante, como veremos, es la definición de ese umbral mínimo para la distribución igualitaria. A partir de él, la justicia, particularmente en Rawls, se basa en otro tipo distributivo relacionado con los incentivos proporcionales al mérito y, por tanto, desiguales. Al contenido del mérito se incorporan el patrimonio y el poder acumulado y ejercido.

En consecuencia, la combinación de los distintos tipos de justicia y su peso respectivo tiene grandes implicaciones para la realidad social, la percepción popular de la justicia y la legitimidad de las instituciones. En la formulación de los actuales principios normativos de la justicia nos encontramos con distintos énfasis y conexiones entre ambos valores, igualdad y libertad. Desde ahí, analizaremos las dimensiones y los tipos de la justicia, después de clarificar la perspectiva sociológica.

3.2 Una interpretación social y crítica

Para comprobar la función social de la justicia habrá que establecer su conexión con la realidad social, es decir, contrastar las ideas de la justicia social con la situación actual de la sociedad y señalar su potencial transformador. Ello nos lleva a una breve alusión crítica de la desigualdad y la subordinación, ya explicada antes. El contexto social está definido por transformaciones profundas en diversas esferas: una situación de crisis socioeconómica, fuertes procesos de desigualdad social, grandes cambios productivos y demográficos, diversidad sociocultural y conflictos interétnicos; igualmente, existen tendencias sociales ambivalentes, con dinámicas de privatización, repliegue individualista y competitividad, por un lado, y procesos de indignación social, defensa de lo público y reafirmación democrática, por otro. En ese marco se sitúan los distintos agentes sociales y políticos y la existencia de una ciudadanía activa, con pugnas sociopolíticas y amplios procesos de activación y participación democrática junto con significativos déficits de confianza popular en las élites políticas gestoras.

Paralelamente, según distintas encuestas de opinión, en España y en el ámbito europeo, se expresa una amplia conciencia popular de justicia social que define el posicionamiento crítico de amplias franjas de la población frente a la existencia de injusticia social y el apoyo a los derechos sociales y los valores democráticos. Existe una significativa disociación entre una cultura de justicia social, presente en mayorías sociales, y las políticas liberal-conservadoras, dominantes hoy en la Unión Europea, que cuestionan la ciudadanía social y laboral. Frente a la prioridad por reducir el déficit público y aplicar medidas de austeridad, se levanta una significativa opinión ciudadana de defensa del

empleo, unas condiciones socioeconómicas decentes y unos servicios públicos de calidad.

Todo ello supone una base y un estímulo para avanzar en una teoría social crítica, una posición normativa y ética que defina, renueve y adapte los fundamentos de la justicia social, necesarios para desarrollar una actitud transformadora.

El enfoque sociológico aquí utilizado parte del doble carácter del ser humano: individual y social. Reconocer esa ambivalencia es fundamental para evitar los dos extremos de distintas corrientes de pensamiento: el individuo aislado de lo social, cuyo desarrollo se contrapone a la sociedad vista como constricción de su libertad; o bien, la visión totalizadora o colectivista extrema, con la ausencia de la autonomía individual y la imposición de la realidad del grupo social o el poder. La sociedad no es solo la suma o agregación de individuos, ni un agente totalizador en el que se subsumen las personas. Y el sujeto no es solo su estricta individualidad, cuyo mayor reflejo es su componente biológico; su conciencia, su comportamiento y sus vínculos sociales conforman también su identidad individual y colectiva. Así,

el individuo real siempre actúa en grupos humanos concretos, y estos grupos son fundamentos reflexivos de las sociedades complejas (los grupos forman la sociedad, pero los grupos portan y reproducen los elementos instituyentes de lo social)
(Alonso, 2009: 61).

No se trata ahora de detallar las características de las distintas corrientes teóricas para definir al ser humano o la sociedad. Solamente destacamos ese amplio campo de pensamiento, presente en los fundadores de la sociología (Marx, Durkheim y Weber), de integrar lo individual y lo social, frente a la unilateralidad de las corrientes extremas que apuestan por la exclusividad de un aspecto (individuo aislado o abstracto) o su contrario (sociedad como totalidad indiferenciada).

En estos mismos autores clásicos, así como en las diferentes escuelas, más o menos afines y heterogéneas que han tenido lugar en el siglo XX, ha sido difícil la interrelación de esos dos componentes del ser humano, el individual y el social. Ha habido inclinaciones más hacia un lado u otro, sin el equilibrio específico adecuado según los momentos y temas. En un extremo, desde ciertas tradiciones marxistas o colectivistas se ha llegado a despreciar al sujeto individual, a su libertad y autonomía, llegando a posiciones antipluralistas y totalitarias (Judt, 2010; del Río, 2007). En sentido contrario, en las últimas décadas también se ha exacerbado el individualismo antisocial o asocial, típico de algunas tendencias liberales y postmodernas, con la prioridad del interés propio ‘egoísta’ a costa o en conflicto con el bien de la sociedad. Como dice Sen (2011: 33): *El enfoque egoísta de la racionalidad supone, entre otras cosas, un firme rechazo de la visión de la motivación ‘relacionada con la ética’*. En particular, la justificación liberal de que el interés privado, el beneficio propio, iba a llevar a la prosperidad pública (Antón, 1997), ha sido contradicha por la actual experiencia de empobrecimiento masivo con fuertes desigualdades y brechas sociales, derivada de la crisis socioeconómica y las políticas de ajuste y austeridad (Milanovic, 2012; Stiglitz, 2012). En la perspectiva de combinar los dos componentes del sujeto, podemos apuntar otros autores actuales significativos, como Giddens (1993) y Victoria Camps (1999).

Por tanto, siguiendo con Alonso (2009: 67), es imposible la construcción aislada de una identidad individual, pues el individuo solo logra tomar conciencia de su individualidad por medio de la mirada del otro. Así, el vínculo social no es externo a la persona sino que es una de sus dimensiones constitutivas; la subjetivación solo puede formarse en procesos intersubjetivos, por lo que el individuo únicamente es capaz de individualizarse, en el sentido más literal de término, en la sociedad. Por ello, en la sociedad actual, los marcos de subjetivación y elección siguen estando fuertemente condicionados por la posición ocupada en la estructura social, que condiciona fuertemente el acceso, la cantidad y

calidad de los recursos no solo materiales sino también culturales y expresivos. Y, continúa señalando este autor, todo ello nos lleva a considerar muy seriamente la necesidad de soportes colectivos (materiales, sociales, culturales, simbólicos), para el desarrollo de la individualidad. Estos soportes pasan por el grupo, la acción colectiva y las instituciones, instancias todas ellas íntimamente vinculadas e interpenetradas. Porque las instituciones no solo obligan, constriñen o limitan, sino también suministran recursos insustituibles para la construcción de la identidad. Los marcos de referencia colectivos no solo sujetan o encarcelan el yo, también le dan los modelos para pensar, ser y actuar.

Hay que ser conscientes del conflicto entre el ideal ético (bien común) y el pragmatismo (beneficio propio, bien parcial), ya planteado por Kant. El 'bien' debe ser del conjunto, de todos y de cada uno, cuestión compleja. Existe un conflicto de valores, particularmente entre los dos principales tratados aquí, la igualdad y la libertad. Pero también, entre ellos y otros como entre la libertad y la responsabilidad, o entre la igualdad y la mejora del bienestar, el crecimiento económico y el desarrollo humano. Resolver esas polarizaciones es fácil cuando existe homogeneidad sobre lo 'bueno' y lo 'malo', con una gran legitimidad social sobre las normas adoptadas. No obstante, es difícil la armonía social y el consenso ético en torno a unos valores universales aceptados de forma generalizada.

El riesgo es doble. Por un lado, el relativismo extremo, la ausencia de normas colectivas legítimas y una fragmentación y desagregación social. Por otro lado, el incremento de la competitividad individual y grupal por imponer la propia verdad o la capacidad de poder y apropiación de bienes, llegando hasta nuevas formas autoritarias y fundamentalistas. Cada vez existe mayor diversidad cultural y ética, así como intereses contradictorios por las graves brechas y desigualdades sociales. O, simplemente, queda patente la dificultad para definir lo moral y lo amoral de un hecho ya que también está sujeto a otras consideraciones no estrictamente éticas. Todo ello hace más

problemática la elección y su carácter justo. A veces se produce la situación ‘trágica’, y solo cabe la elección entre dos males, debiendo escoger el mal ‘menor’, aunque como ‘mal’ también produce sufrimiento, desigualdad o deterioro de la libertad.

Para completar esta perspectiva sociológica, hay que citar la idea antropológica o filosófica con la que enfocamos este trabajo: la ambivalencia del ser humano, frente a una mirada unilateral y la visión esencialista o determinista. El sujeto no es, por naturaleza, ni absolutamente bueno ni absolutamente malo. No es adecuada una visión antropológica optimista (presente en Rousseau) que lleva al libre desarrollo ‘natural’ del niño, como perfeccionamiento de la ‘naturaleza’ humana. Tampoco es correcta la visión pesimista de la maldad (inadaptación o indisciplina) intrínseca del ser humano (y la idea de la bondad de la sociedad o el Estado, implícita en Comte), con la conclusión normativa del refuerzo institucional del control y el orden social y la imposición del Estado o la autoridad.

Por otro lado, hay que distinguir la polarización entre lo social y lo individual de los diferentes planos de la sociedad —y la naturaleza—. Y diferenciar el tipo de relaciones sociales (económicas, culturales y jurídico-políticas o institucionales), sus ámbitos (local-global, individuo-instituciones/orden social) y sus esferas (clase, sexo, etnia, nación, cultura...).

En conclusión, lo individual y lo social del ser humano incluye su autonomía moral y su vínculo social, su identidad individual y su identidad colectiva. Su componente social abarca las relaciones socioeconómicas, la dominación o la subordinación, la participación política y las relaciones interpersonales y culturales. Esta ambivalencia del ser humano y este rechazo a la visión esencialista o determinista se completa con una visión social, histórica y contextual: los individuos y grupos sociales se construyen histórica y culturalmente en determinados contextos y condiciones sociales, y su desarrollo moral y humano está imbricado con la evolución de la sociedad.

3.3 Tipos de justicia: solidaridad, igualdad jurídica o derechos humanos y méritos

Históricamente, aparecen dos tipos o ámbitos distintos de la justicia como igualdad, anticipados en la cita inicial de Aristóteles: 1) la solidaridad respecto a las ‘necesidades’ individuales o grupales; 2) la proporcionalidad de las recompensas (incentivos y reconocimientos) en relación con las ‘contribuciones’ o los ‘méritos’. Le añadiremos un tercero, central en la modernidad: 3) los derechos básicos como ser humano o la igualdad jurídica fundamental de todos los individuos (o ciudadanos). Honnet (2006), discípulo y continuador de Habermas, habla también de tres tipos de justicia similares a los aquí planteados (aunque tienen un contenido parcialmente diferente, en el que no vamos a entrar). Son dependientes de su núcleo normativo basado en el reconocimiento: amor y afecto en el núcleo familiar, méritos e igualdad jurídica.

El primer tipo de justicia, la correspondencia de los bienes con la *necesidad* se puede contemplar como fundamento de las relaciones familiares o de amistad, del pacto intergeneracional de los adultos respecto de los niños y ancianos, así como de la reciprocidad en las relaciones de pareja; de manera más institucional, es la base normativa de una parte de la acción protectora de los modernos Estados de bienestar. Está amparado en el reconocimiento de la ciudadanía social (Alonso, 2007; Marshall y Bottomore, 1998) en el contexto del pacto keynesiano o el contrato social de reciprocidad intergeneracional y de grupos sociales para hacer frente de forma mancomunada a los riesgos sociales (enfermedad, paro y vejez). Y se da por supuesto la contribución masiva en el empleo y los impuestos y las obligaciones cívicas. En particular, se aplica, sobre todo, para el sistema de salud y muchos servicios sociales: la pertenencia a determinada sociedad

permite el derecho a recibir la atención y las prestaciones imprescindibles que se ‘necesitan’, independientemente del nivel contributivo o meritocrático concreto, para asegurar la salud. En un sentido más general, se fundamenta en el valor de la solidaridad (la ‘fraternidad’ de la ilustración francesa), también interrelacionado con la igualdad y la libertad. Más allá de las grandes transformaciones en el ámbito familiar y en las bases de la solidaridad ‘orgánica’, y lejos del optimismo del predominio de los lazos de cooperación entre los individuos y grupos sociales, este criterio de justicia como respuesta a la necesidad individual o social todavía existe en muchas relaciones interpersonales. Igualmente, fundamenta una parte de las responsabilidades y garantías institucionales de protección social de los Estados de bienestar, particularmente centroeuropeos y del norte socialdemócrata.

El segundo tipo, basado en la distribución proporcional al *mérito*, representa el sistema habitual de remuneración en el empleo: salario igual ante trabajo igual, pero proporcional a la cantidad o calidad — productividad— del trabajo, aspecto central en la remuneración empresarial y en la justificación liberal y marxista. Así, el derecho obrero a disfrutar del producto de su trabajo era valorado por Marx como ‘derecho burgués’ y conllevaba una pugna por la distribución más equitativa respecto de las ganancias del capital. Pero, también, esta forma distributiva es la base del sistema (contributivo) de pensiones, con una prestación mensual proporcional al nivel contributivo previo (aunque indefinida en cuanto cubre todo el tiempo del riesgo de la vejez hasta la muerte). Igualmente, son contributivas otras prestaciones, como las de protección al desempleo. Este sistema está completado, ante la ausencia de ese derecho y la existencia de necesidad, con otra parte de subsidios o rentas básicas no contributivos, cuya justificación se basa en el tercer tipo de justicia. Por otro lado, la meritocracia, la recompensa proporcional a la aportación realizada o méritos demostrados, es también fundamental en el sistema educativo, como reconocimiento equitativo de las credenciales que corresponden a un nivel de esfuerzos,

habilidades, competencias o capacidades alcanzado. Aunque la educación es un derecho universal (y un deber, en la etapa obligatoria), su acceso se basa en la igualdad de oportunidades y se asocia al siguiente tipo de justicia.

Existe un tercer tipo de justicia, la igualdad distributiva asociada a los derechos humanos: la *igualdad de trato*, sin discriminación, y la existencia de unos derechos básicos, individuales y colectivos. Ambos aspectos son dependientes de la dignidad del ser humano y como reconocimiento del vínculo social. Superados los criterios premodernos de linaje o de casta, se ha ido implantando progresivamente —con el precedente del derecho romano— la igualdad jurídica o ante la ley, los derechos civiles y políticos. Se empezó por los ‘propietarios’ y los varones o cabezas de familia, originarios de un país determinado, y se amplió a los llamados derechos humanos universales y a la moderna ciudadanía social. No deriva del nivel de aportación del individuo a la sociedad. Consiste en asegurar unas condiciones mínimas de supervivencia, participación cívica y productiva e integración social y cultural. No hay exigencia de contraprestación proporcional. No obstante, se dan por supuesto las relaciones de reciprocidad general dentro de un contrato social (o nacional) y los equilibrios globales entre derechos y deberes u obligaciones. Tiene sus fundamentos en la igualdad ante la ley de todos los individuos (igualdad jurídica) y en el derecho a unos bienes básicos, como ser humano y/o partícipe de una sociedad. Son fuente de la libertad y la autonomía individual, en el contexto de los vínculos cooperativos en la sociedad.

3.4 Dimensiones de la justicia: redistribución, reconocimiento y representación

La justicia social tiene tres dimensiones (Fraser, 2008; Fraser y Honneth, 2006): redistribución, reconocimiento y participación (o representación), cuya síntesis y desarrollo histórico se expone en Murillo y Hernández (2011). La distribución básica puede ser de bienes primarios (Rawls, 1971), recursos (Dworkin, 1981) o capacidades (Nussbaum, 2012; Sen, 2001; 2004, y 2010). Se trata de conseguir una igualdad mínima de medios que permita garantizar la libertad real de los individuos, sus capacidades reales y su ejercicio. El reconocimiento hace referencia a la necesidad de superar la insuficiencia de respeto o estima social, de discriminación o subordinación de un individuo o un grupo social respecto de otros, para garantizar una posición igualitaria en la interacción social. La representación, como cauce y expresión de la participación cívica en la esfera pública, es incorporada más tarde por Fraser (2008) y desarrollada por Nussbaum (2012) desde el *enfoque de las capacidades*. Vamos a comentarlo, dejando para más adelante las posiciones más específicas de Rawls y Sen.

Las dimensiones del reconocimiento y la participación se sostienen en principios igualitarios y están íntimamente relacionadas con la distribución y la ciudadanía (Alonso, 2003; Fraser, 2008; Fraser y Honneth, 2006). Es el derecho a ser tratado igual y sin discriminación, derivado de la propia dignidad humana, con derecho a la estima, el respeto y el reconocimiento sociales, así como a la participación cívica y política. También convendrá distinguir los niveles de capacidad participativa igualitaria, desde unos derechos y cauces básicos (Nussbaum, 2012) hasta llegar a la ciudadanía plena o la participación democrática en la regulación institucional de la economía y el control del poder político. Estas dimensiones de distribución, reconocimiento y

representación, dada la grave y persistente crisis social y económica actual y su gestión regresiva y con déficit de legitimidad democrática, están cobrando una nueva magnitud que desborda el marco en que se situaban anteriormente.

Respecto de la distribución y, particularmente del reparto de los cuidados, Fraser (2006, y 2019) ya apuntaba, en un plano más profundo que el enfoque de mínimos de Rawls, que era necesaria una amplia reestructuración económica progresista. El problema, ahora más evidente, ya no solo es ‘distributivo’, sino que afecta al conjunto de las relaciones económicas, en particular a la capacidad de ‘regulación’ institucional de los mercados. Con la actual crisis económica y financiera han pasado a primer plano la realidad de la desigualdad socioeconómica, el retroceso de condiciones y derechos sociolaborales y el desastre producido por la ausencia de controles (políticos, normativos y éticos) a la libertad de empresa o del mercado de capitales y los límites de una fiscalidad regresiva.

Por tanto, el problema se plantea en unos términos más amplios: redistribución profunda y progresiva (freno a la distribución regresiva), regulación política e institucional de la economía, defensa de la ciudadanía social, servicios públicos de calidad, equidad en la gestión y la salida de la crisis. Se ha demostrado el fracaso del modelo igualitarista de tipo soviético que llevó al estancamiento económico, además de los componentes autoritarios y elitistas de la burocracia de su poder político. El sistema capitalista, estas décadas pasadas, ha sido más eficiente y capaz de asegurar el crecimiento económico y la mejora de las condiciones laborales y sociales de la población (Milanovic, 2012). Pero, también se han evidenciado, masivamente, sus límites y lacras. Y una vez demostrado también el fracaso de las políticas neoliberales, dominantes estos últimos años, causantes de la actual crisis económica, se abre el espacio para el debate y la renovación de la tradición keynesiana y la izquierda democrática, del reequilibrio entre la política, la participación ciudadana y las instituciones democráticas respecto de los poderes económicos. Se vuelve a poner de actualidad la necesidad de

un nuevo equilibrio entre el papel del Estado y las instituciones internacionales (desde los grandes Estados hasta el G-20, la ONU, la OMC o la OCDE) en relación con los mercados, particularmente, los financieros (Nussbaum, 2012). O bien, entre lo público y las garantías de igualdad y no subordinación, y lo privado y su amparo en la ley del más fuerte o la libertad del poderoso.

Todo ello supone avanzar en el reconocimiento y la participación de una ciudadanía plena y en la profundización democrática de los sistemas políticos representativos. El *reconocimiento* y la *representación* ya no se quedan en los importantes temas del papel de los nuevos movimientos sociales y los viejos movimientos sindicales, en la relación entre políticas de identidad y políticas de clase o en la regulación de la representación de los diversos agentes sociales (Alonso, 2007). Ya antes, tanto el movimiento sindical como los llamados nuevos movimientos sociales tenían una composición interclasista. No se podía afirmar que el primero era reflejo solo de los intereses económicos o distributivos de la clase trabajadora, y los segundos, respondían frente a opresiones sociales diversas (de sexo, etnia, origen nacional...), exclusivamente, con aspiraciones culturales de las clases medias. Esos contenidos y conflictos también eran transversales a las distintas clases sociales: las clases medias tienen problemas distributivos y las clases trabajadoras sufren ese tipo de discriminaciones y subordinaciones.

En las características y la identidad de las clases trabajadoras es fundamental también su componente de ‘subordinación’ y las deficiencias de su libertad, es decir, su necesidad de mejorar su reconocimiento y su estatus. Y una de las particularidades de esta situación económica es el bloqueo o el descenso de la capacidad adquisitiva y el estatus socioeconómico de sectores de capas medias. La igualdad económica y la igualdad de estatus se entrelazan, las identidades son más débiles, pero más variadas e interrelacionadas (Antón, 2008a). Y el propio concepto de estatus se amplía, al ponerse en riesgo el llamado modelo social europeo, la integración social y cívica y la calidad democrática o la impotencia de las instituciones políticas. Así,

se plantean nuevas propuestas de mejora democrática y de equidad socioeconómica.

En la actualidad, estas dimensiones se han transformado e integrado en una nueva dinámica más general, derivada de la crisis: la inestabilidad y el retroceso en el acceso a los bienes y recursos y las garantías de los derechos. En esta situación de ‘incertidumbre’ se ha puesto de manifiesto la fragilidad del estatus de ciudadanía y el déficit democrático de las grandes instituciones. Esto es debido a la disociación entre sus medidas políticas y la opinión ciudadana, no suficientemente reconocida cuando no despreciada por muchos poderes públicos y económicos.

En definitiva, reconocimiento y representación, cobran gran importancia y nueva dimensión: por un lado, la exigencia de reconocimiento público e institucional de una ciudadanía activa, como conjunto de movimientos sociales y expresiones colectivas en que se manifiesta una corriente social indignada y crítica; por otro lado, la demanda de regeneración democrática de las instituciones políticas, con un mayor impulso participativo, la revitalización del tejido asociativo y la integración social y cultural. El actual contexto de crisis socioeconómica se caracteriza por una gestión institucional predominantemente regresiva, con fuertes presiones y pugnas en torno al reparto más o menos desigual de sus costes o la exigencia de un tipo de salida justa o equitativa. Y aparece un profundo conflicto sociopolítico entre dos dinámicas: por una parte, la afirmación de la soberanía popular y el principio democrático de la participación cívica y política, como derechos fundamentales e igualitarios del conjunto de la ciudadanía; por otra parte, la libertad de los grandes poderes financieros que deciden unilateralmente sobre el movimiento de capitales y sus ganancias y condicionan la política fiscal y presupuestaria. Es un conflicto ético entre la defensa de la legitimidad de la capacidad de decisión de las sociedades articuladas en sus instituciones representativas y la de las minorías poderosas. Estas élites dominantes se defienden desde ‘su’ libertad al beneficio privado, pretenden evitar

interferencias públicas o utilizan instituciones públicas y sus gestores para reforzar su autonomía respecto de la opinión democrática de la mayoría ciudadana.

Tradicionalmente, la legitimación del actual orden socioeconómico se ha amparado en los beneficios de crecimiento económico que esa dinámica reportaba a la sociedad, consistente en un reparto del conjunto de los bienes con una parte para los desfavorecidos (siguiendo el segundo principio de Rawls). Pero, dados los límites derivados de la actual crisis económica y siendo evidentes los desastres producidos por la explosión de la burbuja financiera y las dinámicas especulativas, ahora ha perdido legitimidad. Así, resulta insuficiente la justificación basada en la libertad económica, aunque mantengan su poder los grandes grupos financieros, con cierto amparo legal o en situación alegal, por ausencia de regulación precisa y suficientes instituciones internacionales (Milanovic, 2012). Esa justificación desde la libertad de empresa y su supuesta eficiencia general entra en conflicto no solo con la igualdad, sino, específicamente, con la dimensión participativa y de reconocimiento de la ciudadanía. Esta faceta de la justicia adquiere una mayor importancia práctica y requiere una profundización de su valor y su legitimidad frente a la relativa impotencia de la acción democrática, particularmente en el plano internacional.

3.5 Desigualdad, bienes primarios (Rawls) o capacidades (Sen)

Rawls y Sen —que se declara deudor del primero— son dos autores con una gran influencia en las teorías de la justicia social. Ambos parten de la igualdad (distribución de bienes elementales o capacidades básicas) como base para la libertad. Libertad como elección de preferencias (Rawls), o como desarrollo de capacidades individuales y acumulativas (Sen). Sus diferencias se establecen, fundamentalmente, en el contenido de esa igualdad básica: bienes primarios o capacidades humanas. Ante el planteamiento ‘procedimental’ de Rawls, Sen hace una amplia valoración crítica de sus insuficiencias y le opone un enfoque ‘sustantivo’. La polarización se establece entre 1) la constitución de instituciones justas que garanticen la igualdad de bienes primarios para garantizar la libertad real; o 2) igualdad y desarrollo de capacidades (libertad sustantiva) para garantizar los logros de las personas y el valor propio de la libertad.

Así, Sen (2004: 97) cuestiona la pretendida suficiencia, para una teoría de la justicia orientada hacia la libertad, de esta atención a los ‘medios’ para conseguir la libertad, en vez de la ‘extensión’ de la libertad de que una persona goza realmente. Dado que la ‘transformación’ de esos bienes elementales y esos recursos, en libertad de elección entre combinaciones de ‘funcionamientos’ alternativos y de otros logros, podría variar de una persona a otra, la igualdad de bienes elementales o recursos puede ir unida a serias desigualdades en las libertades realmente disfrutadas por distintas personas. La cuestión clave, en este contexto, es si tales desigualdades de libertad son compatibles con la satisfacción de la idea fundamental de la concepción política de la justicia. En la valoración de la justicia basada en las capacidades, las demandas y los títulos individuales no tienen que

evaluarse en términos de los recursos o de los bienes elementales de que realmente las personas disfrutan. Se deben valorar en relación con la capacidad o la posibilidad de poder elegir las vidas que definan con sus propias razones personales. Es esta libertad real la que está representada por las ‘capacidades’ de la persona para conseguir varias combinaciones alternativas de funcionamientos. Es importante distinguir entre, por un lado, la capacidad, que representa la libertad realmente disfrutada, y por otro lado, dos aspectos interrelacionados: 1) los bienes elementales y otros recursos, y 2) los logros, incluidos combinaciones de funciones realmente disfrutadas, y otros resultados alcanzados. Y termina afirmando que si nuestra inquietud es la igualdad de la libertad, es igualmente improcedente exigir la igualdad de sus ‘medios’ que buscar la igualdad de sus ‘resultados’.

Aun con esas diferencias, ambos combaten y superan el liberalismo clásico o el utilitarismo de Bentham, e incorporan ese componente fundamental de la igualdad como base de la libertad real, frente a la exclusividad por la libertad y su dimensión utilitaria en conseguir ‘resultados’ prácticos. Para el utilitarismo, el fundamento de la justicia es la ley, la libertad y la igualdad jurídica, aunque los distintos tipos de libertad aparecen jerarquizados. En el primer orden de los derechos civiles aparece la libertad de decisión sobre el patrimonio propio y su utilización. El estatus del individuo se basaría, fundamentalmente, en la propiedad privada o la posesión de bienes y recursos, cuyo origen no se cuestionaba y que constituía la fuente de obligaciones (contribución con impuestos) y derechos.

Por otro lado, particularmente, Rawls se diferencia de la tradición keynesiana y socialdemócrata en que se asientan los modernos Estados de bienestar europeos más avanzados (continentales y nórdicos), y enlaza, con matices, con el modelo liberal o anglosajón (Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Australia). Amplía y renueva el bagaje normativo del liberalismo social (Darhendorf, 1994) y el liberalismo político (Rawls, 1997). Y, confluye, en cierta medida, con el giro hacia la tercera vía de sectores socialdemócratas europeos (Giddens, 1999).

Sin embargo, la experiencia ciudadana de lo más avanzado de ese modelo social europeo y la tradición igualitaria de las izquierdas democráticas europeas, tienen una fundamentación ética de la justicia social, basada en una igualdad de oportunidades ‘fuerte’. Así que, respecto a esta tradición más igualitaria de las izquierdas europeas, las posiciones de ese liberalismo progresista representan un perfil intelectual y normativo que podemos definir como ‘débil’, respecto de la distribución y la igualdad. Esa insuficiencia está clara en la formulación de los bienes primarios de Rawls.

Nussbaum (2012) da un paso más con sus ‘capacidades combinadas’. En su caso, de las diez capacidades básicas, las dos principales son: 1) la de *afiliación* (poder vivir con y para los demás, reconocerlos y poder participar en la interacción social, así como disponer de unas bases sociales en que afirmar la dignidad), y 2) la *razón práctica* (poder formarse una concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia vida). Es una base mínima importante que conlleva una igualdad básica en un primer peldaño. La cuestión es la definición de los límites a partir de los cuales es permisible la desigualdad derivada del mérito desigual y, sobre todo, de la persistencia de diversos factores socioeconómicos, políticos y culturales que continúan creando ventajas para unos y desventajas para otros.

En el caso de Sen, con una perspectiva mundial de los grandes déficits de pobreza, recursos y capacidades humanas, su propuesta y el horizonte promovido, particularmente desde sus responsabilidades en el *Programa de Desarrollo Humano* de la ONU, significa un gran avance progresista, que le acerca a una concepción de la igualdad más sustantiva. Su enfoque de capacidades llega más allá, al estar incardinado en el desarrollo humano, hacer hincapié en su carácter ‘inmanente’ y apostar por cubrir las necesidades fundamentales de educación y sanidad, todavía perentorias en muchos países poco desarrollados. Por tanto, puede desbordar los límites de un umbral mínimo y ser sensible a remover los obstáculos de todo tipo que

impiden el desarrollo de estas capacidades básicas, sustantivas para ejercer la libertad y la autonomía de las personas concretas. Su enfoque de ‘capacidades’ o de ‘desarrollo humano’ enlaza con una igualdad de ‘oportunidades’ fuerte y una visión más densa de la libertad de las personas. Supone cierta diferencia con Nussbaum, más dependiente del enfoque de mínimos de Rawls y su liberalismo político convencional. En definitiva, al completar Sen su concepto de libertades ‘sustanciales’, con la realización práctica de capacidades humanas, desarrolla una orientación igualitaria fuerte, con significativo impacto transformador.

La idea de justicia como equidad en Rawls está basada en la ‘imparcialidad’ de la correspondencia respecto de los méritos o proporcionalidad. La posición ‘original’ con el ‘velo de la ignorancia’ es partir de cero (sin contar intereses y opiniones) y es cuando surgen los principios de la justicia. Después viene el ‘trato igual’, apoyando a los más desfavorecidos con una base de *bienes primarios mínimos*. En Sen, ese concepto de equidad es ‘objetividad’ o neutralidad junto con tener en cuenta a los ‘otros’ y sus particularidades. Es decir, contempla sus condiciones concretas de existencia, sus necesidades, para estimular las *capacidades* que le puedan hacer libres y tomar sus decisiones.

Frente a la ‘trascendencia’ de un ‘modelo institucional justo’ de Rawls (procedimental), que sirva de referencia para aplicar por las instituciones políticas, Sen acentúa la ‘inmanencia’. Se trata de la vinculación directa a las personas, su comportamiento práctico y su desarrollo de capacidades, e incorpora la ‘libertad real’ o *sustantiva* derivada de sus capacidades y oportunidades (o posibilidad de transformar sus capacidades). Señala la dificultad e inconveniencia de diseñar una sociedad y un sistema alternativo o una teoría social completa y acabada. Los riesgos, en ese sentido, son la simple adaptación a lo existente y su legitimación como lo posible. Ello llevaría a valorar el necesario impulso ético y la dinámica transformadora, con la clarificación de qué sujetos, condiciones y bases normativas son necesarias: ciudadanía, élites, movimientos sociales, y su convergencia y sus bases sociales transversales de clase, sexo..., cuestiones en las que

Sen apenas entra. E, igualmente, a tener una visión mundial y analizar la fragmentación entre bloques de países y su diferenciación interna, que trata parcialmente Nussbaum (2012) y que sí aborda ampliamente Fraser (2008).

La deficiencia teórica más significativa de los enfoques de Rawls y, parcialmente, de Sen viene determinada por la jerarquía dominante de la libertad y la dependencia de la igualdad, ya comentada, a la que se deja en una posición más secundaria. Sin embargo, existen diferencias significativas entre ambos. En el conflicto entre igualdad y libertad, en su explicación en el capítulo *Igualdad ¿de qué?*, Sen (2004: 15 y ss.) critica a Rawls el carácter indiferenciado de su propuesta de bienes primarios, respecto a las particularidades de las situaciones y necesidades de cada individuo y grupo social:

La ética de la igualdad tiene que adaptarse a las diversidades generalizadas que afectan a las relaciones entre los diferentes ámbitos. La 'pluralidad' de las variables focales puede crear una gran diferencia justamente por la 'diversidad' de seres humanos...

Sen plantea en esas páginas que la *igualdad de capacidad es clave para la libertad*, y, paralelamente, aborda la existencia de una *igualdad mínima y la desigualdad como condición y expresión de la libertad*. Además, en el mismo prefacio sostiene que *el verdadero conflicto es el que existe entre los distintos tipos de libertades y no entre libertad 'sin más' y las ventajas en general*. Es decir, vincula la libertad a la existencia de una igualdad sustancial, pero prioriza la libertad y justifica la existencia de la desigualdad si ésta viene derivada de la libertad.

Por mi parte, ya he realizado una valoración crítica del enfoque teórico de Rawls (Antón, 2000); así como de algunas propuestas sobre el papel de los ingresos sociales mínimos o rentas básicas como fundamento de la libertad real y la ciudadanía (Antón, 2003, y 2005).

Aquí solamente destacamos los límites de su teoría de la justicia para frenar la desigualdad social e impulsar la igualdad sustantiva.

Los dos principios de *La teoría de la justicia* de Rawls (versión de 1987) son:

- 1. Todas las personas tienen el mismo derecho a un esquema plenamente suficiente (en la versión de 1971 en vez de suficiente aparece más amplio posible) de libertades básicas iguales compatible con un esquema de libertades semejante para todos.*
- 2. Las desigualdades sociales y económicas han de cumplir dos condiciones. Primera, tienen que corresponder a oficios y puestos accesibles a todos bajo condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades; y segunda, tienen que beneficiar grandemente a los miembros menos favorecidos de la sociedad.*

Ya hemos comentado el carácter limitado de esos bienes elementales aludidos en el primer principio y su distribución indiferenciada respecto a las condiciones y necesidades reales de la gente. La cuestión ahora es el segundo principio y la justificación de las desigualdades. Según la primera condición, son permisibles siempre que en el acceso a los empleos haya habido ‘igualdad de oportunidades’, cosa difícil si la interpretamos en un sentido fuerte, de superación de los condicionantes (socioeconómicos y de estatus) de origen, contexto y trayectoria. Esa situación de desigualdad, derivada del incumplimiento de ese principio, no es una cosa excepcional sino bastante amplia. Y si se concibe en un sentido débil, que es lo usual, se dejan de abordar muchas situaciones de injusticia. Pero, el acento más crítico se plantea respecto de la segunda condición: la legitimación de las desigualdades sociales y económicas siempre que se beneficie a los más desfavorecidos.

Esa dinámica es la habitual en las grandes etapas de crecimiento económico bajo el capitalismo. Ha sido evidente en el largo proceso de la posguerra mundial, con altas tasas de crecimiento hasta finales de los años sesenta, época en que se sitúa Rawls. En menor medida, también se

ha visto en las dos décadas anteriores a la actual crisis, los años noventa y primeros dos mil. En esos periodos, el conjunto de la sociedad, incluido los sectores pobres, han mejorado su situación económico-social, respecto de las generaciones anteriores. Se cumple el principio de mejora de los desfavorecidos. Pero ese principio hace abstracción de las distancias y brechas sociales que se producen entre las distintas clases sociales, es decir, la evolución de la desigualdad social. Así, ante la abundancia y el crecimiento del conjunto de los bienes a repartir siempre se deja algo para los pobres, que mejoran respecto a su situación anterior. No obstante, la distribución principal, cada vez más acumulativa y distanciada respecto de las capas bajas, se realiza en la cúpula económica y, parcialmente, entre las clases medias ascendentes.

Ello es especialmente evidente a escala mundial, con una fuerte desigualdad global, a la que Rawls no quiere aplicar sus principios, acotados a la escala de un país, en una sociedad ‘ordenada’. En palabras de Milanovic (2012), *la brecha entre países ricos y pobres es enorme y creciente...*, y según sus datos (p. 172) el 10% más rico del mundo recibe el 56% de la renta. Mientras el 10% más pobre recibe el 0,7%. El 5% más rico, el 37%, y el 5% más pobre el 0,2%. En dólares normales el 10% más rico recibe más de dos terceras partes de la renta mundial total, y el 5% más rico se apropia del 45%. Y siguiendo con su pirámide global (p. 178), en la que expone el porcentaje de habitantes del mundo necesario para generar los sucesivos 20% de la renta global, nos encontramos con una estratificación social con los siguientes cinco tramos, del más bajo al más alto: el primer tramo del 20% de la renta mundial es repartido entre el 77% (personas más pobres); el segundo tramo entre el 12% (personas no pobres pero por debajo de la media); el tercer tramo entre el 5,6% (en torno a la media, aunque algo más de la mitad por debajo de la renta media y algo menos de la mitad por arriba de la línea que define a la clase media-media); el cuarto tramo entre el 3,6% (la típica clase media-alta), y el quinto tramo entre el 1,75% (personas más ricas, la élite mundial). No hay una clase media global. Existe una gran capa pobre, baja o trabajadora precaria de más de las

tres cuartas partes de la población mundial (77%), una minoritaria clase trabajadora medio-baja (15%), una clase media-media y media-alta de apenas el 6,2%, y las capas altas, las élites poderosas y ricas son el 1,75%.

Pero la desigualdad también es profunda en los países desarrollados. Con palabras de Stiglitz (2012), en EE.UU. los integrantes del 1 por ciento (superior) se llevan a casa la riqueza, pero al hacerlo no le han aportado nada más que angustia e inseguridad al 99 por ciento. Sencillamente, la mayoría de los estadounidenses no se ha beneficiado del crecimiento del país. Incluso en países emergentes con un gran crecimiento económico y aumento del nivel de vida general, como China, se hace patente el incremento de las desigualdades (con unos de los mayores índices GINI) y deben enfrentarse a graves problemas de cohesión social de sus sociedades, así como de legitimidad de sus poderes políticos.

En ese sentido, la justificación de que al mejorar también los pobres, la situación social es justa, no es asumida por amplias capas populares, por mucho que parte de ellas lo pueda ver como un problema menor. Así, mayorías sociales perciben el aumento desproporcionado de las riquezas (a veces, fraudulento) en los polos superiores de la estructura social y política. Se producen más distancias entre los aventajados y los no aventajados. Es un significado clave de la desigualdad social, como comparación de la situación 'relativa' entre las distintas capas y no solo como empeoramiento respecto a la situación anterior de cada cual. Además, con la actual crisis, amplios sectores sociales han visto descender sus condiciones de vida y sus derechos sociales y laborales. Así mismo, rebajan su estatus, con menos inclusión y participación democrática y con deterioro de su capacidad de influencia en la representación política y las grandes instituciones. Todo ello agrava la situación de desamparo y la deslegitimación social de los poderes económicos y políticos. Esa dinámica de empobrecimiento y retroceso absoluto todavía se puede combatir con los propios criterios de justicia de Rawls. De hecho, las políticas dominantes de ajuste y austeridad se

ven, mayoritariamente, como injustas. Pero, como hemos explicado, esos criterios son insuficientes para abordar la justicia respecto de la actual crisis económica y social, la disminución de la desigualdad e, incluso, la garantía y el avance de la libertad desde una perspectiva más participativa y democrática, como la del republicanismo cívico (Pettit, 1999).

En definitiva, la posición de Rawls puede justificar una desigualdad creciente y muy amplia, en la que las ganancias adicionales recaigan desproporcionadamente sobre los ricos, siempre que se produzca alguna ganancia, aunque sea muy modesta, en la renta de los pobres (Milanovic, 2012: 46). Por otra parte, siguiendo con Milanovic (pp. 140 y ss.), el lugar de nacimiento explica más del 60% de la variabilidad en las rentas globales. Los niveles de renta de los distintos países son tremendamente diferentes y constituyen el principal factor para explicar la desigualdad global. Su ciudadanía y el nivel de renta de sus padres explican por sí solos más del 80% de los ingresos de una persona. El restante 20% se debe, por tanto, a otros factores sobre los que el individuo no tiene control (género, raza, edad, suerte) y a factores que sí puede controlar (esfuerzo o trabajo duro). Esta explicación de la renta personal deja bien claro que la porción debida al esfuerzo personal es muy pequeña respecto a la posición en la renta global (tiene mayor impacto respecto a la posición dentro del propio país). Así que los esfuerzos individuales, la buena actuación económica del propio país y la emigración son las tres maneras en que las personas pueden mejorar su posición en la renta global. Esta mención demuestra el poco peso que tienen en la distribución a escala global los derechos básicos así como los incentivos directos derivados de la meritocracia o los trabajos personales. No es de extrañar la amplia percepción, incluso en EE.UU. y Europa, de una grave situación de injusticia, condicionada en su expresión, entre otras cosas, por la profunda fragmentación social, la gran diversidad cultural y de los procesos de legitimación política, los distintos itinerarios por países y las dificultades de la solidaridad a nivel mundial o en ámbitos regionales, como el europeo.

Milanovic (2012) también habla de una desigualdad ‘mala’ y una desigualdad ‘buena’. Se refiere a que la igualdad no es un valor absoluto, siempre por encima de todo, en particular respecto de la ‘eficiencia’, como motor para ampliar la riqueza y, por tanto, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Ya hemos comentado que el igualitarismo económico extremo no permite ‘incentivar’ suficientemente el esfuerzo y la inversión productiva de los distintos agentes y que el modelo soviético fracasó en esa tarea de incrementar la capacidad productiva y de bienes para asegurar el desarrollo económico y social de su población. Por tanto, estamos ante la necesidad de un nuevo equilibrio entre igualdad y desarrollo económico, entre la capacidad democrática de la sociedad mediante una adecuada regulación económica para asegurar el interés general (o el bien común), incluida la sostenibilidad medioambiental, y la libertad de los agentes económicos para producir y conseguir sus expectativas de beneficios privados. Dicho de otra forma, entre la libertad de los mercados y la regulación de los estados democráticos (u organismos internacionales), basada en una ética de la justicia social global.

La clásica cuestión social, la desigualdad socioeconómica y la diferenciación de capas sociales, cobra nueva importancia. No valen los mismos esquemas interpretativos rígidos del pasado sobre las clases sociales. Aparecen distintas formas y articulaciones, tanto en la diferenciación de capas sociales como en la conformación de nueva subjetividad de rechazo a la subordinación, de descontento respecto de los poderosos. Se han ido generando fuertes brechas sociales que ponen en riesgo la cohesión social y la legitimidad de las instituciones políticas, que pueden dar soporte a una mayor conciencia social de la existencia de minorías o élites, arriba, y mayorías sociales o capas populares, abajo, por supuesto, con sectores intermedios. Ello permite, desde la justicia social, generar nuevas demandas y sujetos colectivos progresistas y promover un cambio social más igualitario y justo. Así, en voz de Stiglitz (2012: 34):

En vez de corregir los fallos del mercado, el sistema político los estaba potenciando... aunque puede que intervengan fuerzas económicas subyacentes, la política ha condicionado el mercado, y lo ha condicionado de forma que favorezca a los de arriba a expensas de los demás... La élite económica ha presionado para lograr un marco que le beneficia, a expensas de los demás, pero se trata de un sistema económico que no es eficiente ni justo.

Esa percepción crítica, entre sectores amplios y más indignados, se extiende a los principales ejes del sistema económico y político, cuestionando la actual dinámica y exigiendo un cambio de rumbo que se puede resumir en dos ideas básicas relacionadas con nuestro hilo conductor de igualdad y libertad: 1) menor desigualdad social, mayor regulación de los mercados y suficientes derechos sociales, y 2) mejor democracia junto con mayor participación cívica, libertad y no-dominación.

3.6 Un reformismo fuerte: ampliar la igualdad y la libertad

Enlazando con los distintos tipos de justicia, hay que advertir las diferencias de grado o intensidad en los niveles garantizados con carácter universal y el mayor peso de los mecanismos complementarios o privados dependientes de otras contribuciones, méritos o incentivos.

Es un aspecto clave de las desigualdades en los niveles de la ‘distribución’. Por tanto, aun manteniendo la retórica de la universalidad de ciertos derechos, muchos dispositivos, prestaciones y garantías concretas son desiguales, ya que deben ser adecuadas a las ‘necesidades sociales’ que pueden ser distintas. No son universales sino particulares, para determinados sectores o capas de la sociedad y fruto de segmentación y desigualdad en el ejercicio de esos derechos. Afecta, especialmente, a los llamados derechos sociales, económicos y laborales, a la específica ciudadanía social, en los que se combina la prestación pública de un nivel mínimo de bienes básicos (primarios, en palabras de Rawls) con la cobertura de otros niveles complementarios dependientes de otros tipos de justicia (meritocrática). El criterio de suficiencia de los bienes públicos se rebaja hasta el nivel de las necesidades básicas de los sectores más empobrecidos. Al mismo tiempo, los servicios públicos pierden calidad respecto de las exigencias, primero, de capas medias y, luego, de sectores intermedios de las clases trabajadoras. Así, se promueve una dinámica de traspaso a otros sistemas complementarios o privados si pueden ser sostenidos con nuevos compromisos de pago.

El proceso de reestructuración regresiva de la política social va desde el objetivo de una cobertura, intensidad y calidad suficientes de los mecanismos y bienes fundamentales para la gran mayoría de la población hacia la exclusiva responsabilidad de las instituciones públicas, en ese nivel mínimo de protección, del tercio más precarizado y empobrecido o incluso reducido solo a evitar la exclusión social. La lógica de la justificación ética se traslada desde una igualdad sustancial y para el conjunto de la ciudadanía a una igualdad de mínimos, asistencializada, y para los sectores desfavorecidos, merecedores todavía de la solidaridad pública para garantizar su supervivencia y asegurar la cohesión social.

La fundamentación universalista de los derechos humanos, el desarrollo de capacidades y el criterio de reciprocidad personal o solidaridad social ante las ‘necesidades humanas’ son fundamentales

para entender los Estados de bienestar y la experiencia ciudadana de la justicia social, conformada durante las últimas décadas, desde la posguerra mundial. Pero esas bases de la ciudadanía social se producen dentro del pacto global (keynesiano) de los activos (y mientras se es activo o contribuyente) por garantizar la seguridad de los pasivos y necesitados frente a los riesgos sociales (vejez, enfermedad, paro...). Es decir, se amplió mucho la distribución horizontal en el interior de sectores socioeconómicos similares, y no tanto la redistribución vertical entre las clases sociales. En los últimos tiempos se acelera el desdoblamiento de dos niveles de coberturas de las prestaciones y servicios o intensidad protectora: uno contributivo, proporcional a las aportaciones (méritos), y otro no contributivo, derivado de la pertenencia colectiva y las garantías mínimas para todos. Es decir, en la igualdad distributiva hay una imbricación entre los tres tipos de justicia, y se reajusta la función de cada uno de ellos, conformando un nuevo (des)equilibrio.

Las bases de la ciudadanía social y laboral están en crisis (Alonso, 2007; Antón, 2008a). Los actuales procesos de reestructuración regresiva de los Estados de bienestar están reformulando sus fundamentos normativos, de tal forma que el contenido asistencial y la intensidad protectora públicos se están reduciendo, se rebaja la calidad de los servicios públicos y se segmentan los distintos mecanismos, con privatizaciones parciales o sistemas mixtos. Pierden peso el primer y el tercer tipo de justicia social, a lo que se resisten capas populares. Gana importancia el segundo, el contributivo (o directamente el aseguramiento privado), más apropiado para las capas medias.

Estamos ante dos niveles del concepto de igualdad de oportunidades: uno débil y otro fuerte. O, más allá de la formulación de la amplitud de los derechos humanos, ante un grado *mínimo*, todavía importante para muchos países poco desarrollados, pero muy insuficiente respecto a la experiencia de un grado *máximo* como los mecanismos y garantías construidas particularmente en los países más avanzados de Europa. No obstante, en la Unión Europea existe una

relativa ambigüedad que permite cierta flexibilidad entre los dos niveles en distintos países. Sin embargo, la base común en que tiende a definirse el llamado modelo ‘social’ europeo se va quedando en el grado mínimo.

Todo ello tiene gran trascendencia para la educación, particularmente la tensión entre la igualdad (oportunidades o capacidades iguales para todos, atendiendo a los condicionantes del origen, contexto y trayectoria) y la libertad (de elección de centro y red escolar, tiempo y diseño de la carrera educativa, etc.) (Antón, 2013d).

En conclusión, la realidad social y los límites de las tradiciones dominantes en la fundamentación de la justicia, hace más imperiosa la necesidad de profundizar y renovar los fundamentos (igualdad y libertad) de la justicia social, reevaluar sus dimensiones (redistribución, reconocimiento y representación o participación) y reequilibrar sus distintos tipos (solidaridad, mérito, derechos básicos o igualdad jurídica). El enfoque aquí planteado es el de fortalecer la igualdad y la libertad, las capacidades reales de las mayorías sociales para definir un modelo social progresista y una sociedad más justa. Se enmarca en un reformismo ‘fuerte’, con grandes transformaciones en los distintos planos, en este proceso de gestión y salida de la crisis socioeconómica lleno de incertidumbres, con efectos particulares en países europeos periféricos, como España, que apuesta por una salida más equitativa y emancipadora.

Bibliografía

Alonso, L. E. (2007). *La crisis de la ciudadanía laboral*. Barcelona: Anthropos.

—(2009). *Controversias sobre el individualismo contemporáneo*. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid.

—(2003). *Ciudadanía, reconocimiento y distribución*. Cuadernos de Relaciones Laborales, 21(1), 5-12.

Antón, A. (1997). *La justificación del egoísmo en Mandeville*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.

—(2000). «Crisis del trabajo y ciudadanía social». En A. Antón (Coord.), *Trabajo, derechos sociales y globalización* (pp. 43-67). Madrid: Talasa.

—(2003). *Rentas básicas y nuevo contrato social*. Madrid: GPS-Fundación Sindical de Estudios.

—(2005). *Rentas básicas y protección social*. Cuadernos de Relaciones Laborales, 23(2), 1-20.

—(2008). *La crisis de la ciudadanía laboral*. Arxius, 18(3), 1-20.

—(2009). *Reestructuración del estado de bienestar*. Madrid: Talasa.

—(2011). *Resistencias frente a la crisis. De la huelga general del 29-S al movimiento 15-M*. Valencia: Germanía.

—(2012). *Política social en tiempos de crisis*. Cuadernos de Trabajo Social, 25(1), 49-62.

—(2013). «La escuela pública, clave para la igualdad». En E. J. Díez y A. Guamán (Coords.), *Educación Pública: de tod@s para tod@s. Las claves de la «marea verde»* (pp. 55-76). Albacete: Bomarzo-Albalá.

Aristóteles (2003) [siglo IV a. c.]. *Ética Nicomáquea*. Madrid: Gredos.

Camps, V. (1999). *Paradojas del individualismo*. Barcelona: Crítica.

Dahrendorf, R. (1994). *El conflicto social moderno*. Barcelona: Mondadori.

Del Río, E. (2007). *Crítica del colectivismo europeo antioccidental*. Madrid: Talasa.

Dworkin, R. (1981). *What Is Equality? Equality of Resources*, *Philosophy and Public Affairs*, 10(4), 283-345.

Fraser, N. (2008). *Escalas de justicia*. Barcelona: Herder.

Fraser, N. y Honneth, A. (2006). *¿Distribución o reconocimiento?*. Madrid: Ediciones Morata.

Giddens, A. (1993). *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza.
—(1999). *La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia*. Madrid: Taurus.

Judt, T. (2010). *Algo va mal*. Madrid: Taurus.

Marshall, T. H. y Bottomore, T. (1998). *Ciudadanía y clase social*. Madrid: Alianza.

Milanovic, B. (2012). *Los que tienen y los que no tienen. Una breve y singular historia de la desigualdad global*. Madrid: Alianza Editorial.

Murillo, F., J. y Hernández, R. (2011). *Hacia un concepto de justicia social*. REICE, Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 9(4), 7-23.

Nussbaum, M. (2012). *Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano*. Barcelona: Paidós.

Pettit, P. (1999). *Republicanism. Una teoría sobre la libertad y el gobierno*. Barcelona: Paidós.

Rawls, J. (1971). *Teoría de la justicia*. Madrid: FCE.

—(1987). *The idea of an overlapping consensus*. Oxford Journal of Legal Studies, 7(1), 1-25.

—(1997a). *Teoría de la justicia*. Madrid: FCE. Rawls, J. (1997b). *Liberalismo político*. Madrid: Crítica.

Sen, A. (1997). *La desigualdad económica 1997*. México: Fondo de Cultura Económica.

—(2001). *La desigualdad económica 2001*. México: Fondo de Cultura Económica.

—(2004). *Nuevo examen de la desigualdad*. Madrid: Alianza Editorial.

—(2010). *La idea de la justicia*. Madrid: Taurus.

—(2011). *Sobre ética y economía*. Madrid: Alianza.

Stiglitz, J. (2012). *El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita*. Madrid: Taurus.

4. REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE LA ACCIÓN COLECTIVA

(Extractos reelaborados del libro *Clase, nación y populismo. Pensamiento crítico y estrategias políticas* (2019) y de mi aportación y presentación del libro colectivo «La clase trabajadora ¿Sujeto de cambio en el siglo XXI?» (2018). Mantengo la bibliografía completa).

El análisis de los movimientos sociales y la acción colectiva debe tener en cuenta tres elementos: 1) estructura de oportunidades políticas; 2) razones o contenido de las protestas, y 3) cultura sociopolítica. Es fundamental la mediación sociopolítica-institucional, el papel de los agentes y la cultura. Junto con el análisis de las condiciones materiales y subjetivas de la población, el aspecto principal es la interpretación, histórica y relacional, del comportamiento, la experiencia y los vínculos de colaboración y oposición de los distintos grupos o capas sociales, y su conexión con esas condiciones y los contextos históricos y culturales.

En las ciencias sociales existen muchas ideas razonables y hay que partir de ellas. Pero el acento hay que ponerlo en su renovación y en la superación de sus principales errores y límites, en el análisis concreto y la elaboración de una nueva interpretación de los hechos sociales actuales.

Este capítulo, *REFLEXIONES TEÓRICAS SOBRE LA ACCIÓN COLECTIVA*, tiene cinco secciones. La primera, *Discurso, estructura y experiencia*, explica la necesidad de superar la pugna entre populismo (progresista) y marxismo (democrático) para situarse en otro marco interpretativo y teórico de la tradición crítica. La segunda, *Importancia del sujeto: Hermenéutica social y realismo crítico*, reflexiona sobre el carácter relativo, relacional e histórico del antagonismo (o del agonismo adversarial), junto con el análisis de un componente populista: su idealismo discursivo o postmoderno. Tercera, *Superar la teoría populista*, es una valoración crítica de ese pensamiento o lógica de acción, con un nuevo enfoque relacional e histórico. La cuarta, *Sujeto de cambio: Ni determinismo ni idealismo*, revaloriza la experiencia popular frente al determinismo y el idealismo discursivo. La quinta, *La formación del sujeto, nuevo enfoque sociohistórico*, profundiza en el papel de los intereses y las ideas y su interacción, resaltando la capacidad de agencia.

4.1 Discurso, estructura y experiencia

En primer lugar, explico la necesidad de superar la pugna entre populismo (progresista) y marxismo (democrático) para situarse en otro marco interpretativo y teórico de la tradición crítica.

La dialéctica del antagonismo, como ley histórica de origen hegeliano, la pone Laclau, por su supuesta universalidad, por encima de cualquier teoría científica, en particular del marxismo, como se sabe, también de raíz dialéctico-hegeliana. La diferencia con éste sería que la ‘lucha de clases’, como antagonismo también basado en la dialéctica conflictual, sería reduccionista al no valorar la ‘doble articulación del discurso político’: la combinación del componente populista del antagonismo de la formación social con el socialismo como ideología de ‘clase’, en las relaciones económicas. Da por supuesto que para la clase dominante (burguesía, oligarquía o fracción reaccionaria) respecto de la mayoría popular, o para un Estado (o élite nacionalista) frente a otro, también es válido ese mecanismo de conflicto, aunque con un sentido diferente y contrapuesto, para homogeneizar al pueblo frente a su adversario y derrotarlo.

Las diferencias entre Laclau y Marx no vendrían tanto del componente dialéctico sino de su conexión respectiva con el idealismo o el materialismo. Particularmente, la confrontación principal de esta teoría populista, presentada como postmarxista (o posestructuralista y posmoderna), es con el estructuralismo de Althusser (1967, y 1969) o determinismo económico dominante en el comunismo francés de los años sesenta y setenta.

Pero un punto intermedio en las ciencias sociales es el que pone el acento en la interacción entre estructura y acción (agentes), entre condiciones materiales y realidad subjetiva (Giddens, 1981). Dentro de esa tradición menos determinista y menos idealista, están autores

críticos con un enfoque más social e histórico, que revalorizan el sujeto, su experiencia y su cultura, como Gramsci, Thompson, Tilly o Jessop. Es el terreno en que me sitúo, pero tratando de dar un paso más y señalar los límites de la polémica estructuralismo / posestructuralismo, o bien marxismo (determinista) / populismo (idealista). Además, hay que recordar que según E. P. Thompson (1981) el marxismo estructuralista no es, estrictamente, materialismo sino idealismo. Es decir, estaríamos ante una confrontación entre dos tipos de idealismo: uno, orgulloso de serlo (populismo postmarxista); otro, con la apariencia de materialismo o marxismo estructuralista, diferenciado de Gramsci (Fernández Liria, 2015). La debilidad es la limitada presencia y el escaso reconocimiento de un verdadero pensamiento crítico, realista, social y transformador.

No entro ahora en el trasfondo político de la polémica y la pugna de legitimidades, en la medida que están involucrados, en una parte, líderes de Podemos y, en la otra, dirigentes de Izquierda Unida. Parto de la base de que el debate teórico es muy incipiente y esquemático y está condicionado por la pugna por el liderazgo y su reequilibrio dentro de Unidas Podemos y las convergencias y, posteriormente, con el neolaborismo de Movimiento Sumar y el liderazgo de Yolanda Díaz en la coalición Sumar. Por tanto, afecta a la hegemonía ideológica y a la cohesión de las fuerzas alternativas.

En todo caso, en España, el populismo y el marxismo están vinculados a unas élites insertas en un movimiento popular democrático, progresivo y de izquierdas, y comparten la lógica (dialéctica) del conflicto entre capas populares y oligarquías. Las diferencias vienen en algunas de sus características concretas, especialmente, en su mayor moderación o radicalismo, existente en el interior de las dos corrientes políticas, Podemos e Izquierda Unida y, más tarde en el conglomerado de Sumar. Es decir, hay varios populismos y varios marxismos, así como la influencia de otros pensamientos (republicanismo, socioliberalismo, nacionalismo, anarquismo, eurocomunismo —más o menos transformador o pragmático—, laborismo, movimentismo...) y cierto eclecticismo; todo ello con coincidencias y discrepancias tácticas

y organizativas transversales a las distintas inclinaciones político-ideológicas.

Ambas tendencias, moderadas (o posibilistas) y radicales (o transformadoras), están presentes en cada una de las dos formaciones y el resto de las fuerzas del cambio. Así, las discrepancias estratégicas se entrecruzan con discursos y fundamentaciones ideológicas y prácticas dispares y con objetivos organizativos y de liderazgo diferentes. Muchas veces, de forma simplificada y tendiendo, en combinaciones, tensiones y treguas variadas, entre la rigidez y el eclecticismo. El debate sereno, unitario y argumentado, diferenciando los distintos planos, se hace difícil. Es ineludible una mejora en los métodos y talentos de la discusión política y, especialmente, de las cuestiones estratégicas y teóricas.

Las orientaciones estratégicas de cada organización política están condicionadas por la cultura política y el pensamiento teórico de sus líderes, pero suelen obedecer más a otros intereses políticos y orgánicos más concretos y a opciones tácticas según los contextos. No obstante, en el ámbito teórico en que se sitúa esta reflexión, la división ideológica en la que me centro ahora es en la otra dicotomía, idealismo / materialismo, la importancia del discurso o de las condiciones sociales y cómo se articula su interacción para la conformación del sujeto de cambio.

Sin embargo, a mi parecer y como cuestión previa, la solución viene por superar esa vieja dicotomía, dominante en el marxismo de los años setenta y en la reacción postmoderna de los años ochenta y noventa. Hoy, esa polémica está agotada y el problema teórico hay que abordarlo desde otra perspectiva más sugerente, realista e integradora (thompsoniana y gramsciana), aunque parcialmente sepultada en estas décadas.

Por tanto, el factor clave para el cambio social y político de progreso es relacional e histórico; se refiere al comportamiento, la diferenciación y la conformación del propio sujeto social, su experiencia, participación y actitud respecto de las relaciones de poder y la subordinación, así como a la construcción de hegemonía política y cultural. En ese sentido,

aun reconociendo aspectos interesantes de ambas doctrinas, populismo progresista y marxismo democrático, algunos compartidos, me parece más fructífera la posición, sobre todo en estos tiempos de grandes transformaciones sociopolíticas, de avanzar en un nuevo enfoque diferenciado, crítico y realista, siguiendo el camino abierto por algunos de los autores citados y con un esfuerzo de renovación.

En segundo lugar, señalo el carácter del antagonismo como lógica analítica y política, sus distintos niveles de intensidad y los sentidos políticos diversos y contrapuestos a los que da lugar.

Dejo al margen la valoración de la dialéctica hegeliana de lucha de contrarios (tesis y antítesis) con la superación (*aufhebung*) en una síntesis en la que queda suprimida una parte, conservando otra aunque subsumida (en algunas versiones se sustituye el todo por una realidad completamente nueva), ya explicada en otra parte (Antón, 2015b).

En todo caso, es importante recalcar los matices de la propia Mouffe (2007, y 2012) al oponer su ‘agonismo’ democrático al antagonismo excluyente de Schmitt. La cuestión de la compatibilidad de populismo y democracia es fundamental frente al totalitarismo antidemocrático del nazi-fascismo o el autoritarismo reaccionario del etnopolulismo. Hoy día asistimos a un populismo de extrema derecha que, aunque de momento respeta el Estado de derecho y el sistema representativo y sus libertades básicas, empuja hacia un mayor autoritarismo regresivo y segregador que encuentra eco en las derechas liberal-conservadoras. Actualmente, se ha acelerado con el hegemonismo imperialista y autoritario del trumpismo. El riesgo es la consolidación de una democracia débil, con fuertes tendencias hacia regímenes postdemocráticos, con grandes poderes económicos e institucionales autónomos respecto de la soberanía popular o con derechos democráticos y sociales restringidos. Por tanto, hay que recalcar, como hace Laclau y Mouffe, la identificación de populismo (progresista, republicano o de izquierdas) con radicalización democrática y pluralismo político, así como su radical oposición al populismo autoritario, insolidario o de derechas extremas.

Sin embargo, cabe interrogarse: ¿por qué la afirmación de que existe universalmente el antagonismo y es la base sobre la que se asienta la política y el poder y luego la idea de que el agonismo lo ‘regula’ o ‘civiliza’? ¿Y si no hay acuerdo respecto de los procedimientos democráticos a seguir, la pulsión básica de lo primero lleva a la guerra? Debajo de esa posición está el esquema hobbesiano de una antropología pesimista del ser humano y una dialéctica hegeliana de la superación como exclusión total del otro. El ser humano y los grupos sociales, incluido las clases sociales, tienen un vínculo doble de conflicto y cooperación. Está basado en las dos dinámicas básicas: la contraposición de intereses y el compartir intereses y proyectos comunes. No hay determinismo unilateral económico, ni político-institucional, ni biológico-pasional. No es inevitable la pulsión utilitaria hacia la guerra o hacia el contrato social. Hay construcción relacional e histórica, no determinismo mecanicista o esencialista. En ese sentido, respecto de las tensiones entre las clases dominantes y las clases dominadas o entre dinámicas nacionales de dominación o reafirmación, así como en otras situaciones de opresión y desigualdad, como la de sexo/género y la neocolonial o el racismo, se produce una dinámica de conflicto para resolver (o forzar) la ausencia de igualdad y libertad. Pero, al mismo tiempo, la propia realidad social, los seres humanos y los grupos sociales, integra dinámicas y trayectorias compartidas e interseccionales.

El liberalismo, nacido como ideología moral en base al beneficio propio individualista, precisamente frente al bien común aristotélico, pretende compatibilizar esa competencia de disparidad de intereses en un resultado beneficioso para la sociedad. Es el lema de Mandeville (Antón, 1997; Macintyre, 1984), precursor del fundador liberal Smith, de que el egoísmo como vicio privado genera la prosperidad pública, el beneficio colectivo. Acepta la competencia relativa en un orden global supuestamente armonioso, aunque sabemos que el capitalismo reproduce las relaciones de subordinación y desigualdad, aun cuando genere crecimiento económico. Como contrapeso institucional a esa

dinámica de conflicto, especialmente dura entre las dos guerras mundiales, se desarrolla el pacto social keynesiano y la ciudadanía social (Antón, 1999, y 2000) hasta que las nuevas fuerzas neoliberales cuestionan el Estado de bienestar y el modelo social europeo pretendiendo un Estado social de mínimos y una democracia débil (Antón, 2009; 2014b, y 2016a).

En tercer lugar, hay que tener en cuenta el contexto estructural e histórico. El paradigma dominante es el de un nuevo tipo de capitalismo financiero y del conocimiento, con innovación tecnológica y gestora y con un reajuste de los mecanismos de control institucional: de la gobernanza entre distintos niveles, con menor peso de lo estatal, aunque sigue siendo fundamental, respecto de —por abajo— lo local-regional y —por encima— lo europeo-mundial, y de ámbitos, predominio del mercado y el interés privado de los grandes poderes económicos, en detrimento de la protección social pública y la regulación estatal. Con la crisis económica y la política de austeridad, la estrategia liberal-conservadora acentúa una trayectoria con un nuevo modelo de dominación / subordinación. Está basado en el esfuerzo competitivo de los agentes económicos (*schumpeteriano*) en beneficio de las élites poderosas, con garantías para su mayor capacidad de dominación, con un incremento de la subordinación popular respecto del poder establecido, así como de la desigualdad social (incluidas la de género y la étnico-cultural) y económica con la precarización de la mayoría social.

El plan del poder financiero e institucional, liberal-conservador, junto con el empuje de los populismos xenófobos y autoritarios de derecha extrema, pretende salir de la crisis y estabilizar una nueva etapa de acumulación capitalista, con un fuerte autoritarismo político, una nueva supremacía de capas acomodadas y poderosas y una cultura individualizadora y segregadora de las mayorías sociales en fragmentación. No obstante, ese proyecto de dominación tiene unos límites (de momento) para la acción de los Estados y las instituciones políticas: asegurar una cohesión social básica y una legitimidad

democrática mínima para las élites gobernantes junto con el mantenimiento del Estado de derecho y una estabilidad institucional funcional para reproducir ese orden socioeconómico y político (Alonso y Martínez, 2012; Jessop, 2008, y 2017a; Navarro, 2015). En el plano europeo (y mundial) se trata de la conformación de una clase dominante con una redistribución de sus jerarquías según su procedencia nacional y capacidad oligárquica, bajo la hegemonía de las élites tecno-financieras estadounidenses, según el proyecto trumpista, y en el caso europeo bajo primacía alemana y la coparticipación francesa y británica. Frente a esa dinámica y para condicionarla, en el fondo, está la capacidad de respuesta democrática de las mayorías ciudadanas y el desarrollo de dinámicas alternativas de nuevas fuerzas sociopolíticas por el cambio de progreso (Antón, 2016b; 2016c; 2017b; 2024, y 2025).

Por tanto, al afirmar que «aunque en conflicto [los oponentes] se perciben a sí mismos como pertenecientes a la misma asociación política... compartiendo un espacio simbólico común», Mouffe (2007: 28) está dando por supuesto, acertadamente, que ello supone pertenencia e intereses comunes, colaboración y unidad, no exclusivamente antagonismo. Y la politización no se consigue solo vía antagonismo con discurso polarizado, sino que hay objetivos universales o transversales a asumir de forma normativa. Es el complemento ético kantiano o republicano a la dialéctica hegeliana de la oposición de contrarios, sin caer en el consenso abstracto o la armonía idealista. En el fondo se supera la antropología pesimista (hobbesiana) del ‘hombre es un lobo para el hombre’ que tiende a justificar el estado autoritario para imponer el orden (Leviatán), así como la antropología optimista (rousseauiana), de la bondad intrínseca del ser humano y su tendencia a la colaboración, al margen de la desigual estructura social e institucional y las relaciones de dominación.

En consecuencia, el antagonismo (no solo discursivo) es clave para entender el moderno conflicto social, las relaciones de poder y emancipación. Pero no se puede generalizar al conjunto de la sociedad, a las relaciones entre naciones y grupos sociales; y menos en el interior

de las capas populares, entre las que los conflictos, las contradicciones y la diversidad de intereses o identidades son ‘no antagónicos’, no excluyentes, y se deben resolver por la vía del diálogo, la negociación, el acuerdo, la convivencia (ante el desacuerdo) y la democracia. El antagonismo, ni siquiera es la única dinámica que rige la relación entre los dos polos principales de la sociedad (pueblo / poder oligárquico, o clases populares / élites dominantes) sino que, aparte de tendencias intermedias o mixtas, existen intereses y valores compartidos de toda la humanidad, de todos los seres humanos y grupos sociales y nacionales, incluidas las élites dominantes, cuyos derechos y libertades también hay que respetar. De ahí la necesidad de una ética básica y universalista de la democracia y los derechos humanos, con el respeto al pluralismo político e ideológico.

4.2 Importancia del sujeto: Hermenéutica social y realismo crítico

Esta reflexión matizando el carácter relativo, relacional e histórico del antagonismo (o del agonismo adversarial), debe ser completada con el análisis del otro componente populista: su idealismo discursivo o postmoderno. En primer lugar, vinculado con el antagonismo, empiezo por una valoración crítica. Luego explico mi enfoque social y crítico.

Si la política, según el enfoque populista, se basa en el antagonismo, con la conformación de identidades colectivas contrapuestas y éstas se construyen a través del discurso, nos encontramos con que la

radicalización del discurso, la retórica y la comunicación son centrales. Si la construcción de realidad se realiza solo (o fundamentalmente) a través de las ideas, la expresión radical o antagónica de esas ideas se convierte en la tarea política fundamental, infravalorando la conexión con las ‘cosas sociales’ (Beltrán, 2016). Éstas no existirían al margen de su interpretación y nominación. Ese idealismo postmoderno, que viene de Nietzsche, se incorpora a la razón populista de Laclau, matizada por Mouffe.

Lo que me interesa recalcar es que, así, la acción política se desliza hacia la prioridad de la pugna cultural, a conseguir la hegemonía ideológica en base a discursos polarizados y en detrimento de las prácticas masivas de la gente. Los excesos del antagonismo verbal o comunicativo, sin confrontación ni participación de las mayorías sociales, suplen los defectos de la ausencia de empoderamiento cívico y centran el escenario público. El idealismo discursivo antagonista, a menudo, deriva en sectarismo e inoperancia transformadora, y no sirve para la legitimación de los liderazgos.

En la condición postmoderna (o posestructuralista) del populismo la política, como acción para el acceso y la gestión del poder institucional, se convierte en polarización discursiva sobre una realidad contingente y, por tanto, efímera y cambiante. El populismo derechista (con apoyo de poderes fácticos como en Trump) utiliza la simplificación, la mentira y la manipulación para ‘construir la realidad’, convertirla en posverdad y configurar ‘hechos alternativos’. Aquí, habría que recordar la vieja idea materialista de Lenin: «cuando a la realidad la arrojas por la puerta, te entra por la ventana». A pesar del poderío actual de los grandes medios de comunicación y aparatos políticos y culturales controlados por las clases dominantes, la realidad real de las relaciones sociales y las condiciones de vida de la gente persiste.

Es cierta la relativa incertidumbre e imprevisibilidad de los procesos sociopolíticos, pero la acción política debe estar conectada con las tendencias sociopolíticas y las demandas, los intereses y el ‘mundo de la vida’ de las mayorías sociales. Así, deben tener una conexión fuerte con

las dinámicas sociohistóricas, políticas y culturales expresadas en la polarización real entre el poder y las capas populares.

Otro aspecto para destacar es la versátil aplicabilidad del enfoque populista respecto a distintos procesos sociopolíticos. Ese originario método dialéctico hegeliano, aparte de que enseguida aparecieron discípulos de izquierda y de derecha, se refería a dos procesos históricos diferentes. Uno, al desarrollo de la burguesía ascendente (y el capitalismo) frente a la aristocracia y el antiguo Régimen que culminaría en el Estado moderno, con su máxima expresión, la Revolución Francesa. El otro, en el reconocimiento y autoafirmación de la nación-Estado frente a otras naciones, con el despliegue alemán. El primero, lo reconvierte Marx en la lucha de clases entre burguesía y clase trabajadora con la superación del capitalismo hacia un nuevo modelo social y económico: socialismo y comunismo. El segundo, lo retomará Schmitt para establecer la pugna entre amigo / enemigo como base de construcción identitaria etnicista, homogénea y total, de la nación alemana frente a los ‘otros’ y su pretendida superación (eliminación) a través del Tercer Reich; y se extiende a las relaciones internacionales de dominio / resistencia nacional. Es la lógica actual el trumpismo imperialista y neocolonial.

Vemos que ya en sus orígenes (por no citar a Heráclito), ese ‘método’ analítico del antagonismo puede estar asociado a diferentes intereses de ‘clase’, nación o grupo social y a distintas estrategias políticas. Pues bien, Laclau retoma ese tronco común dialéctico, frente al kantismo o el liberalismo consensual-competitivo, desde una perspectiva postmarxista, es decir, volviendo al idealismo de Hegel en detrimento del materialismo histórico de Marx.

En segundo lugar, mi enfoque, realista y crítico, está ligado a la *hermenéutica social* y el *análisis crítico del discurso* (Alonso, 1998, y 2009; Beltrán, 2016; Ricoeur, 1999; Van Dijk, 2000) y al *realismo crítico e histórico* con la revalorización del sujeto y su experiencia, vivida e interpretada, como agente de cambio de las relaciones de poder y la hegemonía política y cultural (Domènech, 2016; Gramsci, 1978, y

2011; Jessop, 2008; 2017a, y 2017b; Tilly, 1984; 2004; 2009, y et al., 2005; Thompson, 1977; 1979; 1981, y 1995).

Caben unas precisiones conceptuales, a través de varias citas ilustrativas. La primera para definir qué es la hermenéutica social, diferenciada del análisis del discurso:

La hermenéutica social es la forma de análisis adecuada para analizar e interpretar los discursos y las acciones e interacciones en que se manifiesta el sentido de las ‘cosas sociales’. La hermenéutica social no se interesa solo por el discurso, sino que tiene como objetivo básico la identificación, el análisis, la interpretación y la comprensión de algo que está más allá del discurso, a lo que el discurso (y no solo este) sirve de vehículo: el sentido de las cosas sociales (Beltrán, 2016: 92).

Igualmente, conviene destacar esta cita del Charles Taylor, filósofo canadiense, con postulados de comunitarismo republicano, que explica la relación entre las ideas y el comportamiento de los actores sociales:

Las significaciones y normas implícitas en esas prácticas no solo están en la mente de los actores sino en las propias prácticas, que no pueden concebirse como una serie de acciones individuales y, en cambio, son en esencia modos de relación social, de ‘acción mutua’, y es que tales significados, por ser intersubjetivos, no son creencias o valores subjetivos, sino constituyentes de la realidad social (2005: 170).

Y otra cita de Miguel Beltrán (2016) que incluye una reflexión sobre Taylor y la importancia de los significados intersubjetivos, que están en las prácticas sociales mismas, no solo en las mentes individuales, y que son modos de relación, por tanto, objetivos. Su conclusión es evidente: el sentido es una creación colectiva; el pensamiento, construido

socialmente y a través de la reflexividad, interactúa con la realidad y se generan mutuamente:

Los partidarios de la hermenéutica hacen descansar la interpretación y la comprensión de la realidad social en la existencia de significados intersubjetivos, mientras que la tradición positivista los atribuye a los individuos en términos de opiniones, creencias o actitudes subjetivas. Para Taylor, las que llama realidades prácticas no pueden ser identificadas haciendo abstracción del lenguaje que usamos para referirnos a ellas; la realidad social es una realidad con significados, que no son subjetivos, sino intersubjetivos, y que «no están solo en la mente de los actores, sino fuera de ellas, en las prácticas mismas... que son esencialmente modos de relación, de acción recíproca» (2016: 112).

En este detallado repaso sobre el sentido, las ideas y la práctica social, comento otras tres citas referidas al historiador británico E. P. Thompson, que realzan su enfoque que él definía no de marxista sino de materialista e histórico.

Por un lado, destaca la importancia del análisis empírico e histórico de la formación del sujeto social y la prioridad por su problemática:

*Ningún modelo puede proporcionarnos lo que debe ser la ‘verdadera’ formación de clase en una determinada ‘etapa’ del proceso... **Lo que debe ocuparnos es la polarización de intereses antagónicos y su correspondiente dialéctica de la cultura** (Thompson, 1979: 39).*

*Para él lo central no era la cultura, ni el viraje cultural ahora transmutado en lingüístico, sino **la problemática del sujeto en su devenir en el proceso de vida** (Domènech, 2016: 127).*

Por otro lado, expresa los importantes matices que él mismo explica para revalorizar no solo la experiencia ‘vivida’ sino la experiencia ‘interpretada’ o pensada; con ello enlaza con una de las prioridades del análisis crítico del discurso sobre las mediaciones interpretativas en la conformación de la experiencia:

Yo utilizaba el término ‘experiencia’ de una manera central en este estudio sin definirla de una forma aceptable. Ahora me doy cuenta de que ‘experiencia’ se puede utilizar de dos maneras muy diferentes: por un lado en el sentido que la encontramos en nuestro trabajo histórico, acontecimientos reales que afectan la vida de la gente, su experiencia ‘vivida’, y de otro lado en el sentido de experiencia experimentada, es decir, como se interpreta la experiencia vivida. Entre los dos sentidos existe un gran vacío... considero que este es el talón de Aquiles, el punto débil de Miseria de la teoría (Thompson, 1974, citado en Benítez, 2016: 304).

Y una última cita que realiza una crítica desde una mirada marxista-gramsciana a los límites del populismo de Laclau y Mouffe:

*En suma, Laclau y Mouffe han efectuado un valioso servicio teórica y políticamente al contestar el esencialismo y el reduccionismo, pero al hacerlo de un modo unilateral, que pone de relieve los aspectos discursivos de las relaciones sociales, no han logrado proporcionarnos nuevos conceptos para abordar las características no discursivas específicas de las relaciones sociales sedimentadas y los obstáculos planteados a la práctica política por estructuras que se han sedimentado por razones materiales, objetivas, y no meramente porque (todavía) no se hayan deconstruido y hayan contestado discursivamente... **Yo estoy proponiendo una tercera opción entre el estructuralismo fatalista y el instrumentalismo voluntarista.** Para decirlo de nuevo, esta opción se remite a la concepción estratégico-*

relacional del Estado como una relación social, una relación entre las fuerzas políticas mediada por la materialidad institucional del sistema estatal (Jessop, 2017b).

Su conclusión realista es que para analizar las relaciones sociales, es necesario desarrollar una tercera opción entre esos dos polos, estructuralismo fatalista e instrumentalismo voluntarista, y poner el acento en la relación entre las fuerzas socioeconómicas y políticas mediadas por las estructuras estatales.

En definitiva, comparto este enfoque realista, social y crítico, diferenciado del populismo idealista y del marxismo determinista o mecanicista. Pone el acento en el propio sujeto, en su experiencia vivida e interpretada, sus condiciones de vida y su cultura, así como su participación en el conflicto sociopolítico frente a los poderosos en un contexto histórico-estructural y de relaciones de fuerzas sociales y políticas determinado. Por tanto, es un proceso interactivo de conformación de su identidad colectiva a través de su práctica social y cultural, incluida su acción por la hegemonía política respecto del poder.

4.3 Superar la teoría populista

La apuesta es por una interpretación basada en la interacción entre estructuras y sujetos, por un paradigma social, relacional e histórico que parte del conflicto social, de la conformación de procesos de movilización social y cambio sociopolítico progresista. Se trata de la

revalorización del papel de la propia gente, de su situación, su experiencia y su cultura, así como de los sectores más activos y su representación social y política, su capacidad articuladora y sus discursos, es decir, de los sujetos sociopolíticos. Concluyo con dos aspectos: resumen de las aportaciones e insuficiencias de la teoría populista de Laclau y necesidad de un pensamiento crítico transformador.

La teoría política como análisis y guía para la acción (emancipadora)

La teoría de Laclau interpreta dos tipos (y otros intermedios y diferentes) de populismos similares en la lógica y distintos en su contenido, sentido y orientación. También sirve para construirlos y transformar las relaciones de poder. Este pensador no valora solo el análisis, sino la conquista de la hegemonía y el poder. Su teoría es, fundamentalmente, normativa. Pero sin caracterizar el poder y el sujeto transformador, así como su interacción, se queda incompleta, indefinida o ambigua sobre su sentido sustantivo y el significado de su discurso.

Su teoría ‘procedimental’ (formalista), con parecidos mecanismos de amigos-enemigos a los de Schmitt, han sido parcialmente superados por Mouffe (2007); pero puede servir para transformar la realidad en dos (o más) sentidos: autoritario-regresivo y emancipador-progresivo. Es incompleta para la función de orientación, pero también para la de análisis, al no clarificar (desvelar) las dos dinámicas contradictorias, claves para la contienda política. No es antipluralista, crítica convencional desde ámbitos de la derecha y la socialdemocracia, sino ambigua, es decir, que su función depende de según qué contexto, dinámica popular, liderazgo y estrategia la acompañe.

Esa indefinición sustantiva le aporta flexibilidad o capacidad adaptativa con distintos procesos políticos, proyectos dispares e ideologías contrarias. Le confiere, en momentos de crisis sistémica como los actuales, cierto ‘ecumenismo’ o universalidad como dialéctica

(hegeliana) del conflicto frente a las teorías liberal-conservadoras del orden. Pero, su lógica de polarización la debe completar con una determinada cultura sociopolítica incardinada en sujetos concretos. La combinación ofrece resultados contrapuestos.

El problema analítico, normativo y estratégico principal es interpretar y favorecer un proceso democrático-progresivo confrontado con una dinámica autoritaria-regresiva. Y la teoría populista no aporta instrumentos interpretativos y transformadores suficientes. Debe complementarse con otros contenidos teóricos, ético-ideológicos y político-estratégicos, ya divididos en la sociedad desde la ilustración, en torno a los dos grandes valores de igualdad y libertad. Es decir, lo principal de un movimiento popular es su carácter democrático-igualitario-solidario. No la intensidad del conflicto sino su sentido.

Esa teoría recoge la pluralidad de formas como se pueden configurar dinámicas populistas. Laclau admite la posible construcción no unívoca del pueblo y su posible fracaso hegemónico. Pero englobar distintos sentidos bajo el mismo rótulo es confuso. Hay que explicar e impulsar la dinámica popular emancipadora-igualitaria, renovando expresiones convencionales (gramscianas) del conflicto social: acumulación de fuerzas transformadoras y cambio hegemónico de las relaciones de poder.

Este pensador reconocería la construcción ambivalente o contradictoria de un ‘pueblo’ desde el punto de vista ético-político-ideológico; su crítica al etnopopulismo lo refleja. Aunque Laclau (1978) tempranamente se declara partidario de un populismo ‘socialista’ o de clases dominadas —y Mouffe (2003, 2007 y 2015) de un populismo de ‘izquierdas’—, infravalora sus límites interpretativos y normativos en ese campo. Su teoría aporta el análisis de unos mecanismos constructivistas de hegemonía (cultural) pero no se centra en lo principal: la orientación ideológico-política o ética de ese movimiento popular en el plano principal emancipatorio-igualitario-solidario, su conformación realista y, por tanto, del tipo de cambio político y su modelo socioeconómico.

Esa ambigüedad ideológica y su idealismo son su insuficiencia sustantiva. Como dice Fernández Liria (2016): *Más Kant y menos Laclau*. O como señala Villacañas (2015), menos populismo y más republicanismo. Ambos en el sentido de priorizar no el antagonismo como lógica política sino el republicanismo ilustrado como contenido emancipador con un sesgo institucionalista (Antón, 2016b). Por otro lado, Monedero (2016) critica la ineficacia transformadora de su idealismo: *Laclau quiere convertir el cambio social en un discurso y, con bastante probabilidad, lo desactiva*.

La validez de una teoría social o política (democrática) y sus criterios analíticos y valorativos, incluye la discusión sobre su objeto, enfoque y prioridad, que deben ser ‘conocer para transformar’... en un sentido igualitario-emancipador de las capas oprimidas frente a las oligarquías opresoras. No obstante, este autor clasifica a los movimientos populares según su vinculación con sus criterios procedimentales, no sustantivos, de ‘lógica política’: antagonismo y hegemonía de un sujeto construido discursivamente. Pero el resultado de ese cajón de sastre ‘populista’ es heterogéneo o contradictorio según su contenido u orientación sustantivos (ideológico-políticos o éticos). No clarifica sino obscurece la realidad.

Esa clasificación populista es secundaria (y contraproducente) al asemejar movimientos distintos u opuestos con una particularidad supuestamente común. No sirve como principal guía u opción política, ética o normativa. Es insuficiente construir ‘pueblo’, apoyar movimientos ‘populistas’ o defender el populismo, sin precisar su contenido, su papel y su contexto. Desde la perspectiva de cambio de progreso, es fundamental el ‘empoderamiento’ cívico (o poder popular)... en un sentido ético-político progresivo y el refuerzo de movimientos populares... igualitarios-emancipadores, frente a movimientos ‘populistas’ autoritarios-regresivos.

Esa ‘pluralidad de formas’ (y contenidos) populistas, algunas contrarias entre sí por su sentido político y ético, no valida esa teoría, sino la invalida como análisis y guía adecuados para la acción

transformadora... igualitaria. Hay que tener elementos críticos suficientes (ideas, valores, enfoques) para cuestionar la ausencia 'sustantiva' en esa teoría.

Un pensamiento crítico transformador

La diferencia con Laclau es doble. Por un lado, al meter en el mismo concepto de populismo fenómenos distintos y contrarios, oscurece más que clarifica la interpretación de esos procesos. No tiene sentido su alarde de superioridad por la universalidad del mecanismo del antagonismo (1978: 233), cuando él mismo reconoce el sentido tan contrario entre el populismo de la clase dominante (o de derechas) y el populismo de las clases dominadas (o de izquierdas).

Por otro lado, y es lo más importante, en su componente orientador, de guía para la acción, su teoría se queda corta, es ambigua, polisémica y confusa. No aporta suficiente orientación en el aspecto más crucial para el cambio político, su sentido democrático-igualitario. Aporta un mecanismo (polarización como identificación del pueblo y construcción de hegemonía) pero no precisa el carácter de los dos polos (pueblo-oligarquía) y su interacción, el contenido o componente principal de esa guía (estrategia o programa) y su impacto 'sustantivo' en las relaciones de dominación.

La elección del llamado significativo (nominación) se realiza por esa supuesta eficacia articuladora contra-hegemónica (culturalmente), en cómo conseguir apoyo popular y ganar poder; pero se relativiza el carácter de ese sujeto (y del poder), el sentido de su interrelación y el para qué. Ese contrapoder popular es frágil si no está enraizado en una función (ética-ideológica) arraigada y liberadora de la gente subordinada. Al desconsiderar este aspecto, Laclau llama 'vacío' a su significativo, porque es independiente de la realidad material de subordinación y de la experiencia y los valores de igualdad, libertad o democracia.

A efectos discursivos, puede escoger alguno de ellos, pero solo instrumentalmente si cumple coyunturalmente con esa función identificadora del pueblo. Ese espontaneísmo seguidista de la opinión del pueblo es positivo frente al elitismo de las oligarquías regresivas y autoritarias, desligadas y en contra de las demandas populares, pero todavía es insuficiente y manipulable por otras fracciones oligárquicas para determinar el papel y los objetivos del movimiento frente al poder establecido.

El proceso articulador es más complejo y ‘mediado’ y, sobre todo, debe definir el horizonte en diálogo con la dinámica real. No al estilo de la estrategia y la ideología comunista, determinista y global; tampoco al giro socioliberal. Pero sí con una guía de alcance medio y principios o valores democráticos e igualitarios. Es la línea para discernir los distintos tipos de populismos y construir un pueblo libre e igual.

En definitiva, la cuestión analítica y política principal es si un movimiento popular es regresivo-autoritario o progresivo-democrático (o, bien, etnicista, solidario, nazi-fascista, izquierdista, centrista, soviético-gramsciano, republicano, postmoderno, etc.), y adoptar una posición política sobre ese eje político-ideológico. Luego, dentro del populismo democrático-progresista, vienen las diferencias entre transversalidad ‘político-ideológica’ o ‘popular’, entre confrontación con el poder más débil o más fuerte. Son secundarios otros rasgos como el emocional o el liderazgo (Fernández Liria, 2016; Innerarity, 2015).

La teoría populista de Laclau es una teoría del ‘conflicto’, más adecuada que el mecanismo de uniformización del ‘consenso’ liberal-conservador o el estructuralismo funcionalista, a las que se opone. Pero tiene unos inconvenientes de fondo, particularmente su ambigüedad ideológica, que no le permiten aportar suficiente claridad interpretativa y orientación política a las tareas estratégicas del movimiento popular (en España y Europa). Y la creencia en que tiene la llave de la interpretación de la acción política le obstaculiza para avanzar en la elaboración de una estrategia adecuada. La reafirmación en ella (salvando aspectos parciales) no es un avance respecto de un

pensamiento crítico sino un lastre teórico a superar. Su indefinición la complementa con todo tipo de aportaciones contrapuestas, aunque en España está ligada a posiciones progresistas. Su déficit hay que corregirlo con una teoría política que priorice un enfoque social y crítico, un sujeto y un proyecto sustantivo para un proceso emancipador-igualitario. Es una tarea difícil y compleja, la mejor intelectualidad europea está, cuando menos, perpleja, pero dadas las necesidades del cambio político de progreso es necesaria abordarla. Esa es la pretensión de estas reflexiones.

Un nuevo enfoque crítico, social y realista

El esfuerzo teórico, analítico y crítico, es necesario para interpretar la nueva realidad sociopolítica, en particular, el proceso de indignación y protesta social y los nuevos reequilibrios del espacio político-electoral e institucional de las izquierdas; y es todavía más perentorio desde el punto de vista normativo o de estrategia política.

La caracterización del ‘momento’ populista como expresión del conflicto de nuevas fuerzas populares frente a las viejas élites tradicionales, aparte de la acertada clasificación en un campo o en otro de dichas fuerzas, es un asunto analítico y normativo secundario. Visto desde el poder establecido es un problema de descenso de la legitimidad pública de la élite política normalizada o clase gobernante, es decir, de su necesidad estratégica de recomponer su credibilidad y, por tanto, su poder. Es una situación de crisis política, más o menos profunda, que puede llegar a la transformación del régimen político (y económico y nacional-neocolonial). Como todas las crisis, son una oportunidad para el cambio al estar debilitadas las estructuras de poder.

Pero, dentro de las dinámicas sociopolíticas emergentes y sus pugnas y equilibrios con el poder establecido (la clase o fracción dominante) para establecer una nueva hegemonía, hay que explicar dos cosas: la profundidad del cambio y el doble (o diverso) sentido transformador. Es decir, si las tendencias ‘nuevas’ solo llegan a una

remodelación superficial de las élites gobernantes y el sistema político o alcanzan modificaciones profundas de los núcleos del poder institucional, socioeconómico y nacional-territorial. Y respecto de su trayectoria y orientación si van en un sentido democrático-igualitario-solidario o en un sentido autoritario-regresivo-segregador (o con fórmulas intermedias o mixtas según qué aspectos).

Fenómenos populistas se han producido en regímenes políticos inestables, es decir, sin la hegemonía de una clase gobernante potente y creíble, y que ha incumplido su función colectiva. O sea, que ha frustrado con su gestión los fundamentos de legitimidad ciudadana y cohesión política y nacional derivados del cumplimiento del contrato social o pacto colectivo de seguridad y bienestar colectivo.

Por tanto, junto con la base social de descontento popular emerge una o varias dinámicas de reajuste o recomposición de esa clase política o régimen institucional, con mayor o menor nivel de ruptura o continuidad con el viejo orden y la vieja élite política gobernante. Estos procesos se pueden dar, no solo en países desestructurados institucionalmente, sino en los Estados más avanzados y/o democráticos (como EE.UU., Reino Unido y Francia, o bien, Holanda, Austria y Suecia); al igual que en otro momento los Estados ‘modernos’ del Eje (Alemania, Italia y Japón) aun con fuertes fracasos históricos respecto de sus expectativas imperiales o hegemónicas y un pasado de gran descontento social, a menudo, con importantes movimientos de izquierdas. Así, el contexto es diferente al del típico populismo latinoamericano con unas clases gobernantes más frágiles y fragmentadas, aunque con unos desafíos nacionales, institucionales y de cohesión social también relevantes.

Dos elementos de fondo son comunes: crisis de legitimidad de las élites político-institucionales y grandes retos geoestratégicos, socioeconómicos y nacionales. La vieja clase política (o el sistema institucional) es incapaz de abordarlos bien y necesita una mayor movilización popular y de recursos estructurales para recomponer la nueva élite y la nueva hegemonía o reequilibrio del poder. El populismo,

por tanto, es una lógica de acción política antagonista y discursiva frente a las viejas élites políticas con la tarea de instaurar un nuevo orden hegemónico o supremacista.

Hasta ahora, prácticamente, no he definido el sentido de las oportunidades de cambio con esa crisis y la nueva movilización política. No obstante, lo principal para el poder establecido y las fuerzas emergentes y, especialmente, para el análisis y la posición política y estratégica de progreso es el peso (u oportunidad como relación de fuerzas) de la tendencia hacia una salida igualitaria-democrática-solidaria frente a otra reaccionaria-regresiva-autoritaria. Es decir, los procesos históricos y los campos políticos se deben definir, fundamentalmente, por su sentido sustantivo, no procedimental. La tarea de las fuerzas del cambio de progreso es, por una parte, el debilitamiento del poder establecido de las clases poderosas, incluido la presión derechista-xenófoba y el imperialismo trumpista, y por otra parte, el empoderamiento ‘popular’ democrático-igualitario. Ese es el eje principal de la polarización en los últimos siglos, por supuesto con diferencias en cada campo y con zonas intermedias y transversales.

Y no es un asunto menor el papel contradictorio y ambivalente que juega la socialdemocracia u otros actores intermedios (pertenecientes a los de arriba y a los de abajo y, según qué temas y momentos, al medio), así como la necesaria diferenciación entre la derecha y la extrema derecha. Otra cosa es la ‘composición social’ de una fuerza oligárquica, de derecha o extrema-derecha, que puede apoyarse en sectores populares o de clase trabajadora (descendientes) o su supuesto perfil ‘social’ pero divisionista y segregador respecto de otras capas populares (inmigrantes, extranjeros). Y aunque cuenten, desigualmente, con apoyos ‘populares’ o sean más o menos patrióticos o ‘protectores’. O sea, su valoración política y ética no depende, sobre todo, de su composición y su perfil (que son un síntoma significativo), sino del ‘sentido’ de su trayectoria sociopolítica y cultural y su proyecto de sociedad, aspectos que conforman su identidad real.

Los poderes establecidos liberal-conservadores y todo su aparato académico y mediático no ven mal esa caracterización polisémica de los distintos populismos: son todos los que cuestionan la gobernabilidad de su poder, del ‘sistema’ político. Si ayer se les llamaba radicales o antisistema, hoy se les denomina populistas. Enlaza con su lógica de mezclar y desprestigiar a ‘ambos extremos’. Pero esa delimitación de campos, poder liberal-conservador frente a ‘extremistas’ o antisistema de ambos colores —izquierdistas y derechistas— es nefasto desde una óptica transformadora progresista. No deja ver los grandes conflictos políticos y de valores por la igualdad, libertad y solidaridad contra los que, a veces, hay coincidencias entre la extrema derecha y la derecha liberal. Por tanto, desorientan sobre las estrategias políticas y las alianzas emancipadoras.

En definitiva, hay que superar, aparte de las teorías funcionalistas, liberal conservadoras o socioliberales, el enfoque populista, del simple antagonismo ligado al idealismo discursivo postmoderno, así como el determinismo economicista, de la sobrevaloración de las estructuras económicas e institucionales que se imponen a la propia gente como actor sociopolítico y conllevan un inevitable futuro. Hay que desarrollar un enfoque realista, social y crítico con el acento puesto en la importancia del propio sujeto, de sus condiciones de vida y sus contextos relacionales de dominación y subordinación, de su experiencia y su subjetividad, de su práctica social y su diferenciación cultural y política. Sobre esa faceta interpretativa se podrá elaborar una estrategia de cambio de progreso más clara y acertada.

4.4 Sujeto y política: Ni determinismo, ni idealismo

Clase es una categoría histórica... Ningún modelo puede proporcionarnos lo que debe ser la 'verdadera formación de clase en una determinada 'etapa' del proceso... Lo que debe ocuparnos es la polarización de intereses antagónicos y su correspondiente dialéctica de la cultura... El error previo: que las clases existen, independientemente de relaciones y luchas históricas, y que luchan porque existen, en lugar de surgir su existencia de la lucha (E. P. Thompson, Tradición, revuelta y consciencia de clase, 1979: 38 y 39).

Estas referencias iniciales representan bien mi posición. Comparto con mi colega de la UAB y excoordinador de *En Comú Podem*, Xavier Domènech, una primera valoración: E. P. Thompson es el historiador más importante, al menos, sobre este tema del sujeto social que se forma a través de su experiencia relacional en el conflicto socioeconómico, la pugna sociopolítica y la diferenciación cultural.

El concepto de sujeto colectivo

Antes de avanzar, una consideración previa sobre el concepto sujeto. En las democracias liberales existe la soberanía nacional o la soberanía popular, en las que el sujeto (soberano) es la nación o el pueblo que constituyen el *demos*. El sujeto político es la ciudadanía con derechos políticos (excluyendo, por tanto, a los extranjeros residentes), que se expresa (aunque no solo) como electorado. No voy a entrar en ese

aspecto general de la soberanía del Estado moderno, que está también vinculado a los procesos de co-soberanías y gobernanzas multinivel, la realidad plurinacional y su articulación, los derechos de las personas inmigrantes o el universalismo de los derechos humanos. Me centro en el tema más específico del sujeto social como la parte de la sociedad que puede ejercer una dinámica de cambio, en particular la clase social en cuanto actor o agente sociopolítico y, de forma similar, la problemática de los movimientos sociales, la activación cívica y la formación de unidad popular en cuanto sujeto colectivo.

El concepto clase social expresa una relación social, una diferenciación con otras clases sociales. Su conformación es histórica y cultural y se realiza a través del conflicto social. Por tanto, es un concepto analítico, relacional e histórico. Existe una interacción y mediación entre posición socioeconómica y de poder, conciencia y conducta, aunque no mecánica o determinista en un sentido u otro. Pero hay que analizar a los actores en su trayectoria, su interacción, su multidimensionalidad y su contexto.

Este enfoque realista y crítico de clase social como actor o sujeto se opone a dos posiciones influyentes entre las izquierdas y fuerzas alternativas. Una, la versión determinista del marxismo economicista de tipo althusseriano, que prioriza las ‘condiciones objetivas’ en su definición y desarrollo, habitual en la izquierda de tradición comunista. No obstante, hay que citar que Alberto Garzón, excoordinador de IU, se ha distanciado de esa idea rígida, revalorizando la práctica social y siguiendo a Thompson. Dos, el enfoque constructivista o idealista de ‘pueblo’, que sobrevalora la acción discursiva en su formación, según la teoría populista de E. Laclau, influyente en dirigentes de Podemos. Además, hay que señalar la diferenciación respecto de otros dos enfoques, de influencia liberal y postmoderna. El primero, la simple estratificación social como un *continuum* de agrupamiento de individuos, con una explicación funcionalista o adaptativa. El segundo, la simple constatación de la fragmentación postmoderna, individual o grupal, teñida de una justificación mixta o ecléctica de determinismos

esencialistas (institucionales, biológicos o étnicos) y culturalismos idealistas.

Por tanto, la tarea más importante es el análisis del conflicto social y su expresión sociopolítica desde una óptica de la polarización de intereses y la diferenciación de posiciones sociales, comportamientos, demandas y pautas culturales. Por una parte, el bloque de poder o clase dominante, arropado por las capas acomodadas y sectores conservadores. Por otra parte, la mayoría social subordinada y su diferenciación cultural y su actitud sociopolítica, la ciudadanía indignada, particularmente su parte más activa o crítica. Ello, con sectores intermedios o mixtos. La interpretación de ese diagnóstico tiene impacto en la legitimidad de los liderazgos políticos y sociales. Por tanto, hay una interrelación entre análisis y política. En todo caso, es imprescindible el rigor intelectual y evitar la instrumentalización partidista.

Este tema de la formación del sujeto sociopolítico de cambio, su carácter y el sentido de su trayectoria sociocultural y político-institucional no solo tiene interés analítico o interpretativo. El tipo de diagnóstico es crucial para determinar una línea política transformadora, para encarar el bloqueo y las dificultades del movimiento popular progresista y poder avanzar las fuerzas alternativas en un cambio de progreso. Es decir, afecta a la capacidad estratégica y la legitimidad y el liderazgo de su representación político-institucional, al sentido del proceso político y su carácter democrático-igualitario. La cuestión es en qué medida la teoría social crítica permite acertar con los mecanismos estratégicos de intervención adecuados para una transformación democrático-igualitaria a partir de un diagnóstico realista, superando los prejuicios deterministas e idealistas y sin caer en la adaptabilidad socioliberal. De ahí, que este debate sobre el sujeto de cambio tenga una gran transcendencia, no solo analítica o teórica sino, sobre todo, política, aunque nos situemos ahora en el primer plano interpretativo.

La experiencia de unidad popular

Los grandes movimientos sociales progresistas o los procesos de protesta social más masivos han tenido una composición popular (o interclasista, transversal y frente-populista) de clases trabajadoras y clases medias (incluso de algún sector de las élites dominantes). Esa base social popular es evidente en el movimiento antifranquista de los años setenta, así como en los llamados nuevos movimientos sociales (pacifista, ecologista, feminista, vecinal, de solidaridad, etc.), para terminar en el nuevo movimiento popular configurado por el ciclo de protesta social democrático-progresista (años 2010-2013) simbolizado por el 15-M.

Este último proceso de activación popular, en el contexto de la gestión prepotente y regresiva de la crisis socioeconómica y nuevas dinámicas reaccionarias, ha tenido un estilo participativo y unitario y una orientación democratizadora, igualitaria y antiausteridad frente a la clase gobernante y sus políticas autoritarias y antisociales. Incluye no solo la gran expresión pública en torno al 15-M de 2011 y meses posteriores, sino también las tres huelgas generales (años 2010 y 2012), las distintas mareas (enseñanza, sanidad... de carácter mixto, laboral y sociopolítico en defensa de lo público) y grandes manifestaciones unitarias... hasta la más reciente del movimiento feminista, con la cuarta ola contra la violencia machista a partir de 2017. Es la experiencia democrático-progresista más masiva, con un mayoritario apoyo ciudadano, que ha modificado el sistema político-representativo y su agenda político-social, ha facilitado la configuración de las fuerzas políticas del cambio, así como ha producido un cambio cultural hacia actitudes más justas y participativas y mentalidades más cívicas y solidarias. Dejo al margen los movimientos nacionales y las dinámicas reaccionarias-conservadoras.

La interpretación es realista, relacional y crítica. Hay que superar el determinismo economicista y el idealismo discursivo en la explicación del sujeto popular, sobre todo, para definir mejor la tarea de su consolidación.

Integrar posición de clase (trabajadora) e identidad popular

Demos un paso más en esta clarificación. El propio movimiento sindical (incluidos grupos corporativos) también tiene una composición y un perfil popular. Hoy día no es solo obrero o de clase (trabajadora), como el viejo movimiento obrero, sino más amplio y general. Así, incorpora y defiende a capas medias (técnicas y profesionales del sector público y privado). Además, tiene cada vez más importancia para su representación y orientación la llamada élite o burocracia sindical, compuesta por asesores, expertos y dirigentes con un estatus socio-profesional y una función de mediación y gestión institucional similar a la de la clase media ‘pública’, al igual que otras organizaciones sociales y políticas relevantes, incluidas las grandes ONGs.

Por tanto, es falsa o unilateral la distinción interesada durante estas décadas entre viejos movimientos de ‘clase’ trabajadora (el sindicalismo, la vieja izquierda) y nuevos movimientos de clase media (pequeñoburgueses, nueva izquierda). Entre las justificaciones se caracteriza al primero como económico y a los segundos como culturales; por supuesto, desde el sesgo economicista, jerarquizador de la prioridad de las transformaciones económicas y sus genuinos representantes (obreros). No obstante, ambos tipos de movimientos, organizaciones y expresiones públicas tienen los dos componentes básicos de redistribución, socioeconómica y de poder, y reconocimiento, simbólico-cultural y de empoderamiento individual y colectivo. Es decir, tienen un impacto sociopolítico y cultural, así como, en la medida que son amplios y profundos, una repercusión estructural e institucional.

En definitiva, esta dinámica de la contienda popular progresista abarca, por una parte, la transformación económica, social y política y, por otra parte, el empoderamiento personal y colectivo y la afirmación cultural y simbólica. Los procesos de dinamización y unidad popular y los de institucionalización son interactivos y se complementan y reequilibran mutuamente.

Mientras tanto, en estas décadas la socialdemocracia se desplazaba hacia la representación de las clases medias. Es el giro centrista de la tercera vía o en nuevo centro. Pero su particularidad no es la simple búsqueda del ensanchamiento de su base social, sino la vinculación con el poder establecido y sus intereses y demandas que culminan en su gestión gubernamental neoliberal. En lenguaje marxista podríamos decir que tienen un carácter de clase mixto, popular y oligárquico, y una posición política ambivalente: dominadora, regresiva y reaccionaria frente a representativa y progresista; la mayoría de las veces es lo primero en lo sustancial, socioeconómico y político-institucional, con efectos legitimadores-discursivos, y lo segundo, en algunos componentes simbólico-culturales para consumo de su electorado progresista. De ahí, la crisis estratégica y de relato de la socialdemocracia. No obstante, la diferenciación alternativa con la socialdemocracia no es por su pretexto de representar también a las clases medias o tener un perfil ‘ciudadanista’ al que oponer una posición de clase trabajadora. La crítica principal, aunque mantenga cierta representatividad popular, es por ese papel de imbricación con el poder establecido en una dinámica de políticas públicas regresivas con debilitamiento democrático y conciliación, incluso, con tendencias reaccionarias.

Veamos otros factores que dificultan la unidad popular, particularmente el sectarismo. En la tradición de las izquierdas y sectores alternativos se han producido pugnas de distintas élites (viejas y nuevas, o tradicionales y emergentes) por la representación y el liderazgo de ese campo sociopolítico progresista, al menos desde la explosión del mayo francés y el otoño italiano y los movimientos por los derechos civiles en los años sesenta. Ha sido una disputa por conseguir la hegemonía cultural y asociativa y ser eje articulador del conjunto, de tener ventajas de legitimidad para dirigir los procesos de cambio y afirmar el estatus asociativo y político-institucional de las élites respectivas.

Así, en los procesos de conformación de unidad popular o representación político electoral se han generado tensiones y falta de entendimientos unitarios, aunque no en todas las ocasiones ha sido así. En nuestra historia reciente se han conformado dinámicas de confrontación global con los poderosos, aceptación de un interés colectivo o proyecto común y credibilidad de una representación y un cauce articulador unitario, aunque el motivo desencadenante y la representación sociopolítica fuese parcial. Hay ejemplos significativos de configuración de unidad popular amplia con representaciones sociopolíticas, articulaciones asociativas o coordinaciones político-mediáticas coyunturales y flexibles, como he avanzado antes: desde el movimiento antifranquista, hasta el movimiento pacifista contra la OTAN o la guerra de Irak, la gran huelga general del 14-D-1988 contra la precariedad laboral y por el giro social o, en fin, los más recientes del movimiento 15-M por la democratización y la justicia social y el movimiento feminista por la igualdad y contra la violencia machista.

Unidad desde la pluralidad

La peor fuente de desencuentros ha sido el intento de subordinación de los nuevos movimientos, supuestamente de clase media, al viejo movimiento, supuestamente de clase trabajadora, o la izquierda tradicional, que no ha sido capaz de articular toda esa diversidad. Esa actitud está elaborada desde una visión homogénea y esencialista de clase obrera y su condición económica a la que habría que subordinar los distintos segmentos populares y la diversidad de sus problemáticas socioculturales, de género, étnico-nacionales, etc. Sobre ello se edifica el discurso de la legitimidad de su función de vanguardia legítima del sujeto central del cambio. Confunde el deseo legítimo de unidad de ese conglomerado popular, con la prevalencia prepotente de un segmento y su problemática específica por su supuesto carácter objetivo y representada por una élite particular.

Esa pretensión de injustificado hegemonismo de una vanguardia con el pretexto de auto representar a la clase (económica), evidente durante décadas en Europa, está ya bastante desacreditada. Más, si cabe, ante su impotencia frente a una realidad de fragmentación multicultural y social, relativismo postmoderno o individualización de la relación social, a la que no puede hacerle frente con argumentos convincentes. Así, más allá de evitar la alabanza a esa dinámica dispersa hay que superar las deficiencias políticas y teóricas de ese enfoque uniformizador contraproducente para la acción colectiva emancipadora. Supone una clara incompreensión de la realidad diversa y multifacética de las clases populares y, en particular, de las características, intereses y demandas de las clases trabajadoras, en plural, empezando por las cuestiones de género con la necesidad de una visión integradora, plural y democrática de sus distintas dinámicas.

Esa auto consideración de vanguardia de una base social homogénea ha entrado en crisis por la realidad multidimensional, sus escasos vínculos sociales y su limitada capacidad representativa y transformadora. Así, tendencias de la vieja izquierda trataban de ganar su hegemonía organizativa, con su argumento fallido de legitimación ideológica de clase, pero con escasa proyección electoral e incluso en el movimiento sindical de ‘clase’. Es uno de los factores de su declive. Era imperiosa su renovación, ya iniciada, precisamente, en la primera constitución de Izquierda Unida y ahora con la orientación de unidad popular, y que es imprescindible reforzar para que pueda jugar un papel significativo en el futuro inmediato.

Una derivación todavía más distorsionadora es la asimilación de que la situación de explotación económica es la principal y la subordinación social y cultural es la secundaria y dependiente. Pero la opción para configurar un bloque social alternativo debe ser un enfoque global, integrando la diversidad analítica y real de la situación de dominación y desventaja y la respuesta real de la gente. En el fondo persiste una pugna por constituirse en el eje articulador, sociopolítico e intelectual, de un conjunto popular heterogéneo.

Durante mucho tiempo la mayor tensión se ha producido en su traslación a la hegemonía política y electoral, en particular entre las tres tendencias históricas que resurgen en los años sesenta: la socialdemocracia, la corriente comunista y los sectores de nueva izquierda y movimentistas (incluido los partidos verdes). Ahora, dejando al margen las dinámicas nacionalistas, la competencia y la posibilidad de acuerdos progresivos se produce entre el Partido Socialista, con su ambivalencia, y las fuerzas alternativas o del cambio de progreso.

La sobrevaloración unificadora del discurso

En sentido contrario al determinismo (economicista o biologista) está la sobrevaloración unificadora a través del discurso de una élite interesada. Es la posición idealista o culturalista del populismo de Laclau, que destaca el resultado homogeneizador de un fuerte liderazgo discursivo. Es decir, sobrevalora la acción discursiva de una élite, directamente o a través del poder institucional al que accede, que construye la identidad popular y determina su comportamiento.

Conlleva dos efectos problemáticos. Por un lado, similar resultado impositivo al vanguardismo de clase, sin articular bien la diversidad y el pluralismo. Por otro lado, la dificultad operativa para crear, sumar y converger con distintos actores, así como la incapacidad para ensanchar o ganar credibilidad en sectores no afines, es decir, para conformar un bloque social y político heterogéneo y plural.

Por tanto, esos dos desenfoques, objetivista-economicista e idealista-discursivo, impiden desarrollar mejor la doble dinámica de reconocimiento de la diversidad y respeto a la pluralidad de las capas populares, con la experiencia e interacción unitaria, la capacidad expresiva del conjunto y la acción articuladora de sus sectores más activos, evitando vanguardismos autodesignados.

Por otra parte, los nuevos movimientos sociales han ido afirmando su autonomía respecto de un supuesto interés general que se

adjudicaban los viejos actores de la izquierda política y marcando su especificidad respecto del pretexto de su monopolio de la representación del interés común del conjunto asociativo progresista. O sea, se ventila la hegemonía sociopolítica y orgánica de los distintos movimientos sociales y su representación institucional. Y, al revés, ha sido habitual la desconsideración postmoderna de la importancia de las estructuras sociales y el carácter del poder institucional para avanzar de forma unitaria en los derechos civiles, la igualdad social y el cambio de mentalidades.

Esa dinámica se rompe con la superación de la pasividad social y la resignación política ante los nuevos retos que plantean las élites dominantes en su gestión de la crisis sistémica: su carácter regresivo y autoritario. Se conforma una corriente social progresista y crítica, un movimiento popular, unitario, democrático y participativo, representado simbólicamente por el movimiento 15-M y la configuración de un electorado indignado, crítico y distanciado de la socialdemocracia. Y terminan por conformarse las llamadas fuerzas del cambio, incluido Izquierda Unida, con el predominio de la capacidad política, representativa e institucional de Podemos como eje articulador, aunque todavía con cierta fragilidad unitaria y estratégica.

No obstante, para avanzar en su consolidación hay que reconocer y prevenir estas insuficiencias que han llegado hasta los nuevos movimientos populares y en la configuración de su representación político-institucional y en su interior (Unidas Podemos, Izquierda Unida..., junto con sus aliados y convergencias y las candidaturas municipalistas). Y por último, la recomposición de todo el conglomerado bajo la coalición Sumar y la posterior ruptura con Podemos, tratado en otra parte.

A ello hay que añadir la complejidad y la ambivalencia de las relaciones con el Partido Socialista, los acuerdos y desacuerdos en los ámbitos locales y autonómicos y el objetivo de avanzar en una alianza de progreso que abra un nuevo escenario de cambio en España, con la experiencia de los gobiernos de coalición progresista.

Por tanto, se han dado pasos unitarios positivos, pero todavía frágiles y contradictorios, dadas las tareas estratégicas pendientes. Es una dinámica que conviene reflexionar para superar las dificultades, prejuicios y limitaciones teóricas e interpretativas.

Aunque perviven dinámicas sectarias, competitivas, prepotentes y hegemónicas y una cultura particularista, públicamente ha ganado el discurso de la autonomía de cada actor y la importancia de la convergencia o la unidad popular, el ‘frente-populismo’ o frente amplio. Ello sobre la base del respeto mutuo, el talante democrático y las demandas, iniciativas y proyectos compartidos, así como con el componente sociopolítico unitario por un horizonte de cambio democrático y de progreso frente a adversarios fácticos poderosos. Es una base positiva para avanzar.

Desde esta perspectiva, es más secundaria la discusión del carácter de clase o popular de los sujetos por su composición. Habría que definirlos por su sentido político y el grado de polarización con el bloque de poder o sus adversarios fácticos. Y, respecto a la *formación* de un sujeto o tendencia social o bloque histórico, mejor que *construcción* que tiene una acepción más voluntarista desde la nada, se abre otra discusión: ¿Cuál es la realidad previa de los actores realmente existentes, su sustancia relacional y cultural? ¿Cómo se pasa de su relativa pasividad, diversidad y fragmentación a una convergencia activa o unidad popular democrática y antioligárquica? ¿Cómo se fortalece su cultura democrática y de justicia social y, sobre todo, su implicación activa en los procesos participativos de progreso? Ya he señalado algunas enseñanzas de la experiencia. Ahora planteo algunas respuestas de carácter más general.

La clase social como sujeto colectivo

Las clases populares (trabajadoras y medias), la gente corriente o los pueblos, han cambiado su composición y sus características. Pero, sobre todo, en España, se ha modificado su comportamiento social y político,

su diferenciación cultural. Es necesaria una clarificación conceptual, una nueva interpretación que explique la emergencia de nuevos sujetos colectivos y dinámicas de cambio en este contexto global.

Primero, expongo una breve explicación del impacto de las tendencias estructurales en la configuración sociodemográfica de las clases subalternas y una valoración del proceso de protesta cívica en España, incluyendo el fenómeno de Podemos. Segundo, analizo la problemática más general de la conformación del sujeto de cambio, así como el debate sobre el papel de los actores colectivos en la transformación social en este comienzo de siglo, con el fondo del marco europeo.

Para definir a las clases o grupos sociales de forma completa y como sujetos colectivos, hay que considerar sus condiciones objetivas y su conciencia social: subjetividad, identidad, sentido de pertenencia colectiva. Comparativamente son cuestiones más fáciles de analizar. Pero, sobre todo, hay que explicar su comportamiento o experiencia relacional: práctica social y cultural, estilos de vida, participación en el conflicto social o pugna sociopolítica. El concepto clase social (o pueblo) expresa una relación social, una diferenciación con otras capas y clases sociales. Su conformación es histórica, relacional y cultural y se realiza a través del conflicto social y según su posición en las relaciones políticas, económicas y sociales, así como los equilibrios y tensiones de género, interétnicos y nacionales.

En los últimos años, con la crisis socioeconómica y las políticas de austeridad, se han acelerado grandes cambios en los tres planos, ya iniciados en las décadas anteriores. Los más evidentes son la precarización de las condiciones materiales y de derechos de la mayoría de la sociedad, la configuración de una conciencia de indignación cívica y democrática frente a la injusticia social y una nueva dinámica sociopolítica que ha terminado por configurar un nuevo sujeto político: primero, Unidas Podemos (y confluencias) y, después, el conglomerado de Sumar con la división de Podemos, y aparte de la izquierda nacionalista.

Se ha generado una polarización de amplios sectores populares con el poder económico, financiero y gubernamental. En la agenda sociopolítica ha reaparecido un amplio y prolongado conflicto social, distinto a los procesos de la etapa anterior. Es la suma y convergencia de movilizaciones y grupos sociales; pero, sobre todo, es la superación de cierta fragmentación representativa y expresiva, con una mayor dimensión, duración y polarización sociopolítica. Se va configurando una identificación del adversario común, así como una conciencia emergente de un bloque social alternativo y democrático en defensa de la mayoría social que padece el paro masivo, la austeridad y los recortes sociolaborales y de derechos, con una gestión política regresiva de la crisis socioeconómica, además del autoritarismo y la corrupción entre las élites dominantes. Son aspectos que aparecieron como blanco de las movilizaciones y la contienda política de estos años, junto con la deslegitimación del poder financiero e institucional, incluido el europeo —la troika—. Es una dinámica social con importante impacto político-electoral que apuntó a un cambio institucional significativo.

Se reconfiguran las clases sociales en su dimensión de actores y vuelven al espacio público agentes sociales y políticos con una dinámica de empoderamiento ciudadano frente a los poderosos. Se reafirma una cultura cívica de justicia social, se conforman nuevos y renovados sujetos colectivos con fuerte impacto sociopolítico, con un laborioso proceso, lleno de altibajos y vacilaciones, de conformación de una representación social, unitaria y arraigada en un amplio y diverso tejido asociativo, incluido el movimiento sindical. Todo ello ha cristalizado en el campo político, con el declive de la derecha y la socialdemocracia, la emergencia de nuevas fuerzas alternativas y la conformación de nuevos gobiernos municipales y autonómicos progresistas y de izquierda, así como un nuevo ciclo político, que culminó con un Gobierno de coalición progresista en España, y que ha iniciado un prolongado declive representativo con fuerte división y heterogeneidad interna.

Clase social ‘objetiva’ y ‘subjctiva’

La interpretación sobre el sujeto del cambio es fundamental para impulsar un proceso transformador democratizador y emancipador-igualitario. Sintéticamente, en primer lugar, expongo los cambios más significativos en este triple plano, de las condiciones objetivas de las distintas clases sociales, su conciencia social y su comportamiento sociopolítico. En segundo lugar, explico la importancia de la experiencia popular en la construcción del sujeto, frente a las ideas deterministas (marxistas deterministas) y las constructivistas (populistas).

El elemento fundamental para un análisis de clase ‘objetiva’, partiendo de la relevancia de la situación ‘material’ en las relaciones sociales y económicas, es el de la *posición de dominio, control o posesión respecto de los medios de producción* (y distribución y reproducción) y la fuerza de trabajo, incluida la capacidad de decisión y gestión productiva y de los recursos humanos y su relación con los educativos y familiares.

Esta idea de clase social, por sus condiciones ‘objetivas’, anclada también en el (neo)marxismo de influencia weberiana (representado por E. O. Wright), aborda mejor la realidad sustantiva de las posiciones de explotación y poder en las relaciones económicas y productivas. Es significativa la diferencia entre la posesión y el control efectivo y la situación derivada de la propiedad jurídica.

Podemos simplificar la realidad de tres grandes clases sociales ‘objetivas’, con fuerte diferenciación y segmentación interna: dominantes, medias y trabajadoras. Con la diferenciación interna de las clases medias se produce la formación, por un lado, de un bloque de poder, al que se incorporan capas acomodadas (20%) (y el aval de capas populares conservadoras), y, por otro lado, las clases populares, trabajadoras y medias estancadas o descendentes.

Respecto de su configuración subjetiva debemos renovar la clásica idea de conciencia de clase, como sentido de pertenencia e identidad colectiva. Los contenidos y referencias han cambiado, empezando por la palabra clase, que vuelve a resurgir, pero persisten elementos de

diferenciación. Existen percepciones de la existencia de las tres clases fundamentales, con tres niveles distintos respecto del estatus socioeconómico y la posición de poder y dominación o bien de subordinación: élites dominantes (poder establecido, casta, clase gobernante, poderosos, 1%...), capas medias (acomodadas y ascendentes) y gente común o popular: clases trabajadoras, más o menos precarizadas, y clases medias estancadas o descendentes. No hay una conciencia profunda de pertenencia de clase y existen muchos rasgos transversales o interclasistas y mucha fragmentación interna en cada una de ellas; pero sí existen rasgos diferenciadores y fuertes segmentaciones, incluido en el consumo, el ocio y la cultura.

Aunque hay sectores conservadores y acomodaticios, la mayoría popular tiene una cultura democrática y de justicia social que, ante la crisis socioeconómica y la austeridad, una parte significativa se ha reafirmado en la indignación cívica y la exigencia de cambios de progreso frente a los poderosos. Es decir, ha reforzado su actitud popular o de clase respecto del poder. Aparte del nacionalismo independentista catalán y la reacción españolista, no ha habido una reacción populista indeterminada que enlace con una opción autoritaria-regresiva de derecha extrema, hasta estos últimos años de refuerzo y ascenso ultra. Por tanto, ahora hay cuatro tendencias sociopolítico-culturales globales: autoritarias, con componentes racistas y antinacionalistas; conservadoras-continuistas; intermedias o moderadas y adaptativas; ciudadanía crítica o cívica democrático-igualitaria. Son asimilables a ultraderecha, derecha, centro e izquierda, con la distorsión del socioliberalismo y la ambivalencia del PSOE.

El determinismo economicista o de clase es un idealismo

No es adecuada la posición de la prioridad a la ‘propiedad’ (no la posesión y el control) de los medios de producción —la estructura económica— que explicaría la conciencia social y el comportamiento sociopolítico. Tampoco es acertada la idea de la inevitabilidad histórica

de la polarización social, la lucha de clases y la hegemonía de la clase trabajadora. El error estructuralista es establecer una conexión necesaria entre ‘pertenencia objetiva’, ‘consciencia’ y ‘acción’. El enfoque marxista-hegeliano de ‘clase objetiva’ (*en sí*) y ‘clase subjetiva’ (*para sí*) tiene limitaciones. La clase trabajadora se forma como ‘sujeto’ al ‘practicar’ la defensa y la diferenciación de intereses, demandas, cultura, participación..., respecto de otras clases, el poder dominante. La situación objetiva, los intereses inmediatos, no determinan la conformación de la conciencia social (o de clase), las ‘demandas’, la acción colectiva y los sujetos. Es clave la mediación institucional-asociativa y la cultura ciudadana, democrática, de justicia social y derechos humanos (o su contrario reaccionario).

Hay que partir de la *experiencia* y el *comportamiento social* sobre la base de intereses compartidos, demandas colectivas, relaciones sociales y expresión cultural. Estos aspectos son claves para la formación de las ‘clases’ o el ‘pueblo’ en cuanto son sujetos colectivos, como pertenencia o identidad y práctica social, o sea los ‘agentes’ o sujetos sociopolíticos. No hay que quedarse en la clase ‘objetiva’ (*en sí*), considerando que la conciencia puede venir por añadidura, espontáneamente o de élites políticas, y desde ahí construir la clase (*para sí*). La existencia de una clase, un pueblo, una nación o un gran sujeto social debe comprobarse en la ‘experiencia’, en el comportamiento público, en la práctica social y cultural diferenciada, aunque no llegue a conflicto social (lucha de clases) abierto o esté combinado con consensos o acuerdos. La conciencia social de ‘clase’, crítica y opositora ante la subalternidad o dominación, se ‘crea’, sobre todo, con la participación popular masiva y solidaria en el conflicto por intereses comunes frente a los de las clases dominantes.

El idealismo de la construcción discursiva de pueblo

En la relación entre intereses e ideas y frente al determinismo, tampoco sirve el otro extremo del idealismo discursivo o el

culturalismo. Contiene una sobrevaloración del discurso y el liderazgo apropiado para construir movimiento popular. Infravalora las mediaciones, las ‘costumbres en común’, la experiencia compartida de los actores, así como la teoría crítica y la estrategia democrático-igualitaria.

Pongo una cita: *No son los ‘intereses sociales’ los que construyen sujeto político. Son las identidades: los mitos y los relatos y horizontes compartidos* (Twitter Errejón, 2-4-2016).

Las identidades colectivas no son previas al conflicto, a la práctica social, y las que construyen el sujeto. Ellas mismas se crean en ese proceso y lo refuerzan. Los componentes subjetivos, los mitos, relatos u horizontes, son fundamentales para conformar un movimiento popular... en la medida que son compartidos por la gente. Entonces, con esa incorporación, se transforman en fuerza social, en capacidad articuladora y de cambio. Pero no es la subjetividad, las ideas (por sí solas), en abstracto, las que construyen el sujeto político. Sino que son los actores reales, en su práctica sociopolítica y de conflicto, en los que se encarnan determinada cultura ética y proyectos colectivos y en un contexto concreto, los que se convierten en sujetos políticos y transforman la realidad. Así, esa segunda frase, sin esta precisión, denotaría una sobrevaloración de la capacidad articuladora del discurso, de las ideas transmitidas por una élite, en la construcción del sujeto político. La consecuencia es que se infravalora el devenir relacional de la gente, de sus condiciones materiales, su experiencia y su cultura; el sujeto no se puede disociar (solo analíticamente) de su posición social, sus vínculos y su identidad colectiva.

Es la gente concreta, sus diferentes capas con su práctica social, quien articula su comportamiento sociopolítico para cambiar la realidad. Y lo hace, precisamente, desde una interpretación y valoración de su situación social de subordinación o desigualdad, con un relato o un juicio ético, que le da sentido. Es la experiencia humana de unas relaciones sociales, vivida, percibida e interpretada desde una cultura y unos valores, y teniendo en cuenta sus capacidades asociativas, la que

permite a los sectores populares articular un comportamiento y una identificación con los que se configura como sujeto social o político. Su estatus, su comportamiento y su identidad están interrelacionados mutuamente.

Ambigüedad ideológica e idealismo de la lógica populista

La teoría populista de Laclau (1978, y 2013), en relación con este tema de la construcción del sujeto, tiene una gran insuficiencia: su ambigüedad ideológica. O sea, es incompleta y necesita ir acompañada de una ideología o estrategia particular que explique el carácter de los contendientes, el sentido político de su antagonismo y su proyecto de cambio.

En el plano analítico y transformador es central explicar y apoyar (o no) el proceso de identificación y construcción de un sujeto, llamado ‘pueblo’, precisamente por su papel, significado u orientación político-ideológica, es decir, por su dinámica emancipadora-igualitaria (o nacionalista, xenófoba y autoritaria). Lo que critico de la teoría de Laclau es, precisamente, que se queda en la lógica política de unos mecanismos, como la polarización y la hegemonía, pero que son indefinidos en su orientación igualitaria-emancipadora si no se explicita el carácter sustantivo de cada uno de los dos sujetos en conflicto (amigo/enemigo) y el sentido de su interacción.

La segunda insuficiencia de Laclau es que parte del proceso de conformación de las demandas ‘democráticas’ de la gente como algo dado; y a partir de ahí expone toda su propuesta (equivalencias, discurso, articulación) para transformarlas en ‘demandas populares’ frente a la oligarquía. Sin embargo, la explicación y el desarrollo de ese primer paso es clave, ya que está condicionado por todo lo que expreso como relevante para mi enfoque crítico: condiciones, estructura, cultura, experiencia, conflictos... de los actores y su sentido emancipador-igualitario. El segundo paso se convierte en ‘constructivista’.

Pero, además, Laclau admite ese constructivismo, esa ‘independencia’ de las condiciones materiales y relacionales de la gente y los actores, porque lo considera una virtud, como superador del marxismo o estructuralismo. Como efecto péndulo de su crítica al determinismo, se pasa a otro extremo idealista (como Touraine), que prioriza como causa explicativa el cambio cultural del sujeto individual. En ese eje —estructura/agencia— me pongo en el medio, en su interacción, en la importancia de la experiencia de la gente (como Thompson), aun con sus límites.

En conclusión, se ha abierto una nueva etapa sociopolítica en España. El cambio se conforma con la suma e interacción de tres componentes: 1) La situación y la experiencia popular de empobrecimiento, sufrimiento, desigualdad y subordinación. 2) La participación cívica y la conciencia social de una polarización (social y democrática) entre responsables con poder económico e institucional y mayoría ciudadana. 3) La conveniencia, legitimidad y posibilidad práctica de la acción colectiva progresista, articulada a través de los distintos agentes sociopolíticos y la conformación de un electorado indignado, representado mayoritariamente por la izquierda alternativa, junto con la posibilidad de acuerdos progresistas más amplios.

En definitiva, en la construcción de la identidad de clase o ‘pueblo’, del sujeto popular transformador, hay que combinar los dos planos – intereses populares y discursos emancipadores- de la experiencia popular y la cultura cívica, junto con la afirmación, no la indefinición, del primer polo, progresivo o republicano, de cada eje: abajo / arriba; igualdad / desigualdad; libertad / dominación; democracia / oligarquía; solidaridad / segregación.

Qué autonomía de la política

Por último, en esta reflexión frente al mecanicismo determinista y el idealismo discursivo, voy a hacer referencia a las aportaciones de Mario Tronti (2019), importante intelectual del ‘operaismo’ italiano de los años

sesenta/setenta que, posteriormente, ha desarrollado, desde cierto eurocomunismo heterodoxo, el tema de la 'autonomía de lo político'. Una derivación más radical de su pensamiento ha sido reelaborada, más tarde, por Toni Negri, con sus conceptos de obrero social y multitud.

Los dos conceptos habría que precisarlos. Autonomía no es independencia ni, por supuesto, completa determinación causal, como en ciertas posiciones mecanicistas o estructuralistas. La cuestión es analizar, en términos sociohistóricos y concretos el papel mediador o interactivo entre esos dos componentes: estructura (contexto) y acción (agencia).

El concepto de político está vinculado con las relaciones de poder, con la dominación, de unos grupos sociales, y la subordinación, de otras capas, más o menos jerarquizados, así como con su gestión y sus componentes principales: la democracia o el sistema institucional; la normativa o Estado de derecho; la ciudadanía o soberanía del pueblo (o la nación), de donde emanaría el poder, y la finalidad o las aspiraciones de la sociedad y sus agentes, definidas como su bien común o su interés general.

Puede ser polisémico, pudiéndose interpretar en tres planos predominantes: la gestión institucional o desde el aparato estatal y conectado con los grupos de poder; la actividad sociopolítica, de articulación de fuerzas sociales y políticas, incluido la formación de campos socioelectorales y de contrapoder popular; la acción cultural e ideológica, con la relevancia programática y del discurso, desarrollada por minorías intelectuales, aparatos comunicativos o medios y redes sociales. Adelanto mi posición, coherente con lo que hemos expuesto aquí.

La política expresa unas relaciones de poder, en las que se combina el conflicto, entre intereses socioeconómicos y de clase, nacionales o entre distintos grupos sociales, y la colaboración y el acuerdo, con la referencia a objetivos y trayectorias compartidas, transversales o universales del ser humano o el planeta. Refleja la pugna por la hegemonía política y cultural o, bien, respecto del estatus relativo en las

jerarquías del orden social y las estructuras de dominación y/o subordinación y sus respectivos procesos de cambio.

La política tiene autonomía respecto de la economía o, si se quiere, en relación con los intereses materiales inmediatos de una clase social, grupo de poder o corporación institucional. De acuerdo con Tronti y la tradición realista, desde Maquiavelo y Weber, hay que valorar la función de mediación interpretativa, institucional y articuladora de la acción política de los agentes sociales, frente a las dos tendencias dominantes en las izquierdas. Por una parte, el mecanicismo de la dependencia y la correspondencia directa de una acción política respecto de esos intereses materiales de clase o estatus. Por otra parte, la contraria, el idealismo discursivo o voluntarismo propagandístico, de completa independencia de una élite corporativa respecto de la realidad sociopolítica, en la construcción de un sujeto y el cambio político.

Por tanto, la acción política está vinculada con una articulación política de la formación de un sujeto sociopolítico e institucional, en conexión con su realidad concreta, sus demandas y sus aspiraciones. La tarea central progresista, conformar fuerzas transformadoras que incidan en el cambio político y estructural de progreso o, si se quiere, de carácter igualitario y emancipador, está condicionada, sobre todo, por los niveles de experiencia popular en el conflicto social, con esa dinámica doble de conexión y arraigo social: en defensa de unos intereses (materiales, democráticos, de estatus, simbólicos...) y la interpretación y orientación práctica por unas ideas o teorías de cambio. Pero el núcleo que interactúa y acumula experiencia sociopolítica, subjetividad transformadora y poder relacional, es la propia gente y su activación cívica, con sus diferentes niveles participativos y orgánicos.

En ese sentido, Tronti, dentro de cierto marxismo heterodoxo, parcialmente deudor de Gramsci y de Togliatti, o sea, de un eurocomunismo consecuente, critica y se distancia del economicismo dominante en el PCI (y más fuerte en el PCF y el PCUS), para reinterpretar el papel de la clase obrera de forma no mecánica y revalorizando esa función de la política. No obstante, tiene los límites de

un sujeto que sigue siendo algo esencialista (como en Negri), al no aterrizar suficiente en la articulación concreta y sociohistórica de las fuerzas progresistas y populares.

Por tanto, su posición puede llevar a la sobrevaloración de la política, entendida como acción cultural o lucha ideológica, como la palanca fundamental para conformar las fuerzas sociales. Derivaría en una interpretación desde el idealismo subjetivista de la política, del ‘sí se puede’, positivo como actitud, pero problemático como subjetividad voluntarista al margen de las circunstancias estructurales, capacidades institucionales, relaciones de fuerzas y procesos sociales. El riesgo es el irrealismo y la impotencia transformadora de las relaciones sociales de desigualdad y dominación.

La autonomía de la política es positiva respecto de la economía, de las fuerzas productivas; debe ser algo articulado desde el exterior de la ‘objetividad’ de la realidad económica, pero no fuera de la realidad del conflicto social de los actores concretos; es decir, depende de la capacidad articuladora y subjetiva de la fuerza social transformadora real, no desde un operismo esencialista o una multitud indeterminada.

La cuestión es que la —acción— política debe estar conectada con la realidad sociopolítica de la lucha de clases (en sentido amplio), o sea, de la política como conflicto social, no solo o preferentemente como lucha ideológica o de ideas que, desde esa lógica idealista, sería la que conformase el sujeto colectivo, frente a la lógica realista del papel fundamental de la participación experiencial de las mayorías (o minorías significativas) populares. Los dos enfoques contrapuestos definen las principales prioridades de la acción política: la comunicación divulgativa por un núcleo irradiador y sus seguidores; o bien, la articulación de la ciudadanía activa, con el énfasis en el arraigo social y la capacidad movilizadora.

Es decir, habría que superar el equilibrio del PCI y Togliatti, en su máxima expresión en los años setenta, entre sus dos tendencias básicas: eurocomunismo reformador pero posibilista adaptativo político-cultural y electoral, o bien, entre estructuralismo economicista o de clase

abstracta y voluntarismo politicista o de hegemonía cultural. Esa combinación de los dos polos se hizo insostenible, en un marco global dificultoso; diversas dinámicas insistieron en una trayectoria u otra, de forma esquemática y unilateral, y la experiencia terminó en fracaso, incluidas las variantes de eurocomunismo renovado, neolaborismo, nueva izquierda o izquierda radical.

En todo caso, queda abierto este tipo de reflexiones críticas sobre la autonomía de la política, según los sugerentes enfoques, auténticamente gramsciano y thompsoniano (o leninista), para superar la tradición mecanicista / objetivista, y la populista / idealista, tensión en la que se mueve Tronti.

Democracia y articulación popular, claves para las izquierdas

Hay que reseñar las diferencias del papel de la política entre las derechas (y el nazi Schmitt), que tienen el control-propiedad de la realidad económica e institucional, del poder real, y las izquierdas, vinculados casi solo a su base social y a la democracia; o sea, su prioridad debe ser la acumulación de fuerzas sociopolíticas o contrapoder popular (y en las instituciones). La imbricación de la representación política de las derechas respecto del gran poder económico es mucho más directa; véase, por ejemplo, la actual conexión del trumpismo con los grandes oligarcas tecno-financieros.

Para las izquierdas, sin tanta vinculación con el poder económico o institucional del aparato estatal, necesita un mayor refuerzo de la articulación democrática de su base social. Ello supone que su mayor riesgo es la tendencia corporativa de priorizar los intereses de esa élite política respecto de su base representativa popular. Las dinámicas burocráticas, elitistas y de privilegios grupales lleva a esa nomenklatura aristocrática de las capas gobernantes socialistas, aislada de las clases trabajadoras o del pueblo, con la conformación de una casta autónoma de su base social. Practican la autonomía de la política para imponerse a la población de a pie, en beneficio del grupo dirigente.

En definitiva, para la representación popular transformadora, es todavía más decisivo un profundo arraigo social, la actitud y regulación democrática y la ética conductual y orgánica. Se trata de la prevención de la corrupción político-ideológica, material y de estatus, con la priorización de sus privilegios de casta diferenciada.

Dando por supuesta la necesidad de la configuración de una representación popular (representativa), élite política (experta), partido de vanguardia (organizativo) o núcleo irradiador (cultural), pasa a primer plano la problemática de su carácter democrático y su papel mediador con las capas sociales o la ciudadanía a las que aspirar a representar, orientar o articular.

De todo ello hay una amplia literatura en la teoría política, desde el estudio de las tendencias oligárquicas en los partidos políticos hasta las respuestas tradicionales desde el anarquismo, el consejismo o la experiencia de las organizaciones y movimiento sociales y de plataformas más o menos formales y coyunturales, sobre las que no entramos en detalle y que necesitan una adecuación y reinterpretación a las nuevas realidades.

Por tanto, son de interés las aportaciones sobre la autonomía de lo político (o la cultura) y la formación del sujeto de cambio. Por una parte, con la diferenciación respecto de esa tradición mecanicista dominante en la vieja izquierda comunista. Por otra parte, hay que criticar las reinterpretaciones subjetivistas o voluntaristas provenientes, entre otros, del populismo postmarxista de Laclau, con su idealismo discursivo, que considera lo fundamental de la política la lucha ideológica de la élite intelectual transformadora, con cierto hiperliderazgo, que fundamentaría y crearía el sujeto social posterior.

También hay que superar a Tronti y sus límites —y los de cierto marxismo o eurocomunismo cultural— y matizar la dimensión de la autonomía de lo político y su interacción con la experiencia articuladora concreta de los agentes sociopolíticos. El factor fundamental es la mediación entre, por un lado, las estructuras socioeconómicas y relaciones de poder y, por otro lado, la cultura, la subjetividad y la

capacidad organizacional de las capas populares por un cambio igualitario.

En definitiva, el elemento clave es la articulación participativa en el conflicto social por los intereses, demandas y aspiraciones democrático-populares. Es el principal componente de la acción política transformadora, sobre el que se interconectan la realidad material e institucional y la dinámica cultural o ideológica a través de esa experiencia popular. Se trata de realismo sociohistórico y multidimensional, junto con voluntad transformadora, conciencia ética y actitud democrática.

4.5 Formación del sujeto y experiencia popular

Existen distintas teorías sobre el papel y el proceso de construcción del sujeto social y político, llámese pueblo, clase o nación. Aquí, tras desechar las doctrinas convencionales, se evalúan las insuficiencias de la teoría marxista tradicional o determinista y los límites del discurso populista. Defiendo un enfoque relacional y dinámico que basa la formación de un sujeto colectivo en la experiencia de la gente en sus relaciones sociales y económicas y los conflictos sociopolíticos, evaluada por su cultura, en nuestro caso, democrática y de justicia social.

No es adecuada la visión atomista, individualista extrema e indiferenciada, de carácter liberal o postmoderno que, fundamentalmente, contempla a individuos aislados y diferentes entre

sí, sin vínculos con otros individuos y sectores de la sociedad. La visión funcionalista también tiene insuficiencias ya que solo plantea una agregación de individuos, con la distribución en estratos continuos. Igualmente, es unilateral el idealismo, presente en enfoques ‘culturales’, porque sobrevalora la importancia de la subjetividad y el voluntarismo de la ‘agencia’ e infravalora la desigualdad socioeconómica y de poder o el peso de los factores estructurales, contextuales e históricos. Y aunque valoro los componentes identitarios de carácter nacional, étnico o de género y generacional, también considero insuficientes las interpretaciones esencialistas basadas en esos criterios ya que no analizan sus particularidades. La conformación de las identidades colectivas es diversa y compleja, con la interrelación de diversas dimensiones y con distinto impacto según su desarrollo histórico, contextual y relacional (Antón, 2006b).

El determinismo economicista o de clase es un idealismo

Me detengo en la crítica a la idea marxista más determinista o estructuralista, de amplia influencia en algunos sectores de la izquierda. No es adecuada la posición de la prioridad a la ‘propiedad’ (no la posesión y el control) de los medios de producción –la estructura económica- que explicaría la conciencia social y el comportamiento sociopolítico, así como la idea de la inevitabilidad histórica de la polarización social, la lucha de clases y la hegemonía de la clase trabajadora. El error estructuralista es establecer una conexión necesaria entre ‘pertenencia objetiva’, ‘consciencia’ y ‘acción’. El enfoque marxista-hegeliano de ‘clase objetiva’ (*en sí*) y ‘clase subjetiva’ (*para sí*) tiene limitaciones. La clase trabajadora se forma como ‘sujeto’ al ‘practicar’ la defensa y la diferenciación de intereses, demandas, cultura, participación..., respecto de otras clases (el poder dominante). La situación objetiva, los intereses inmediatos, no determinan la conformación de la conciencia social (o de clase), las ‘demandas’, la acción colectiva y los sujetos. Es clave la mediación institucional-

asociativa y la cultura ciudadana, democrática, de justicia social y derechos humanos (o su contrario reaccionario).

El determinismo es un idealismo. Es imprescindible superar ese determinismo económico, dominante en el marxismo ortodoxo y derivado de la influencia de Althusser (1967; 1969). E, igualmente, el determinismo político-institucional (Tarrow, 2012) o el cultural (Touraine, 2005; 2009, y 2011) de otras corrientes teóricas, desarrollados, muchas veces, como reacción al primero (Antón, 2015c).

La clase trabajadora, a diferencia de la burguesía que controlaba ya muchos resortes de la economía en su lucha contra el Antiguo Régimen, no domina los medios de producción y distribución, ni tampoco el Estado. No puede apoyarse en el control económico que no tiene, sino en desplegar su capacidad de influencia como fuerza social, su hegemonía política en la sociedad como sujeto transformador. De ahí que su acción sociopolítica, cultural y democrática sea más decisiva. Además de ser consecuentemente partidaria de las libertades civiles y políticas y la democratización del sistema político, debe apuntar a una democracia social y económica más avanzada. Es ahí donde entra en conflicto abierto contra la desigualdad socioeconómica y los privilegios de las capas acomodadas que utilizan los resortes del poder político e institucional para defender la estructura social y económica desigual. La conformación de ese sujeto es fundamental, pero no nace mecánicamente de su situación material de explotación sino de la evolución relacional e histórica de sectores sociales subordinados que se indignan frente a las injusticias, participan en el conflicto social y desarrollan la democracia.

Un enfoque histórico y relacional

Aquí, como adelantábamos, adoptamos una visión relacional o interactiva, dinámica o histórica y multidimensional de la configuración de las clases sociales y su actuación como actores o sujetos a través de sus agentes representativos. Hay que partir de la *experiencia* y el

comportamiento social sobre la base de intereses compartidos, demandas colectivas, relaciones sociales y expresión cultural. Estos aspectos son claves para la formación de las ‘clases’ o el ‘pueblo’ en cuanto son sujetos colectivos, como pertenencia o identidad y práctica social, o sea los ‘agentes’ o sujetos sociopolíticos. No hay que quedarse en la clase ‘objetiva’ (en sí), considerando que la conciencia puede venir por añadidura, espontáneamente o de élites políticas, y desde ahí construir la clase (para sí); la existencia de una clase, un pueblo, una nación o un gran sujeto social debe comprobarse en la ‘experiencia’, en el comportamiento público, en la práctica social y cultural diferenciada, aunque no llegue a conflicto social (lucha de clases) abierto o esté combinado con consensos o acuerdos. La conciencia social se ‘crea’, sobre todo, con la participación popular masiva y solidaria en el conflicto por intereses comunes frente a los de las clases dominantes.

Por tanto, es imprescindible superar ese determinismo económico, dominante en el marxismo ortodoxo, así como el determinismo político-institucional o cultural de otras corrientes teóricas.

En consecuencia, es importante la mediación sociopolítica/institucional, el papel de los agentes y la cultura, con la función contradictoria de las normas, creencias y valores. Junto con el análisis de las condiciones materiales y subjetivas de la población, el aspecto principal es la interpretación, histórica y relacional, del comportamiento, la experiencia y los vínculos de colaboración y oposición de los distintos grupos o capas sociales, y su conexión con esas condiciones. Supone una reafirmación del sujeto individual, su capacidad autónoma y reflexiva, así como sus derechos individuales y colectivos; al mismo tiempo y de forma interrelacionada que se avanza en el empoderamiento de la ciudadanía, en la conformación de un sujeto social progresista. Y todo ello contando con la influencia de la situación material, las estructuras sociales, económicas y políticas y los contextos históricos y culturales.

El papel de los intereses y las ideas

Empiezo con un ejemplo ilustrativo del papel de los intereses y las ideas en la construcción del sujeto político, valioso por su carácter sintético y procedente de una personalidad relevante de Podemos, Íñigo Errejón (Twitter, 2-4-2016) y desarrollado posteriormente (Errejón, 2016):

*No son los ‘intereses sociales’ los que construyen sujeto político.
Son las identidades: los mitos y los relatos y horizontes
compartidos.*

Es cierta la primera expresión, los ‘intereses sociales’ (las condiciones objetivas) no construyen el sujeto político. Admitirlo sería prueba de un burdo determinismo económico. Los intereses o las condiciones materiales (por sí solos) no construyen nada y menos una determinada dinámica social u orientación política. Es insuficiente el esquema de la relación entre ‘condiciones objetivas’ y ‘condiciones subjetivas’, y la preponderancia causal de las primeras sobre las segundas, aunque se introduzcan conceptos ambiguos como el de la determinación ‘en última instancia’ (de la infraestructura económica) o la ‘autonomía relativa’ (de la superestructura política e ideológica), que dan por supuesto la prioridad explicativa de la sociedad y su dependencia respecto de la estructura (económica).

Por otra parte, las identidades colectivas no son previas al conflicto, a la práctica social, y las que construyen el sujeto. Ellas mismas se crean en ese proceso y lo refuerzan. Los componentes subjetivos, los mitos, relatos u horizontes, son fundamentales para conformar un movimiento popular... en la medida que son compartidos por la gente. Entonces, con esa incorporación, se transforman en fuerza social, en capacidad articuladora y de cambio. Pero no es la subjetividad, las ideas (por sí solas), en abstracto, las que construyen el sujeto político. Sino que son los actores reales, en su práctica sociopolítica y de conflicto, en los que se encarnan determinada cultura ética y proyectos colectivos, los que se

convierten en sujetos políticos y transforman la realidad. Así, esa segunda frase, sin esta precisión, denotaría una sobrevaloración de la capacidad articuladora del discurso, de las ideas transmitidas por una élite, en la construcción del sujeto político. La consecuencia es que se infravalora el devenir relacional de la gente, de sus condiciones, experiencia y cultura; el sujeto no se puede disociar (solo analíticamente) de su posición social y su identidad colectiva.

Es la gente concreta, sus diferentes capas con su práctica social, quien articula su comportamiento sociopolítico para cambiar la realidad. Y lo hace, precisamente, desde una interpretación y valoración de su situación social de subordinación o desigualdad, con un relato o un juicio ético, que le da sentido. Es la experiencia humana de unas relaciones sociales, vivida, percibida e interpretada desde una cultura y unos valores, y teniendo en cuenta sus capacidades asociativas, la que permite a los sectores populares articular un comportamiento y una identificación con los que se configura como sujeto social o político. Su estatus, su comportamiento y su identidad están interrelacionados mutuamente.

Para explicar la conformación de los sujetos sociales y el conflicto sociopolítico, hay que superar esa falsa bipolaridad abstracta (idealista), asentada por el marxismo determinista y estructuralista, y partir de la realidad de la gente, su experiencia y su interacción. Como dice uno de los mejores historiadores, E. P. Thompson (1979: 39):

Ningún modelo puede proporcionarnos lo que debe ser la 'verdadera formación de clase en una determinada 'etapa' del proceso... Lo que debe ocuparnos es la polarización de intereses antagónicos y su correspondiente dialéctica de la cultura.

En sentido estricto, los grandes sujetos colectivos se conforman en los procesos históricos con la participación en el conflicto social de sus componentes más relevantes y desde una posición e intereses específicos. Tienen un carácter relacional: la configuración de un bloque

social o un campo sociopolítico se genera por la diferenciación social, cultural y política frente a otro (u otros).

El aspecto fundamental de la investigación sobre las clases o capas y grupos sociales en cuanto que sujetos colectivos, de su papel como actor o agente social, debe empezar por el análisis de ese comportamiento sociopolítico de cierta polarización y su interpretación a la luz de sus valores o su cultura en determinado contexto.

Aquí, deseamos el enfoque determinista, dominante en muchos ámbitos, sociopolíticos y académicos, de partir de la situación material de la población, su situación objetiva, para deducir su conciencia social, sus condiciones subjetivas y, por tanto, su identificación de clase y su comportamiento social y político. La crítica a esta posición la expresa bien Thompson en esta larga y clarificadora cita:

Clase es una categoría 'histórica' ... Las clases sociales acaecen al vivir los hombres y las mujeres sus relaciones de producción y al experimentar sus situaciones determinantes, dentro del 'conjunto de relaciones sociales', con una cultura y unas expectativas heredadas, y al modelar estas experiencias en formas culturales... El error previo: que las clases existen, independientemente de relaciones y luchas históricas, y que luchan porque existen, en lugar de surgir su existencia de la lucha (Thompson, 1979: 38).

El determinismo, como decía, es un idealismo. Hace depender el proceso histórico de una causa explicativa, cuando la realidad es más compleja, multicausal e interactiva. El determinismo economicista, por mucho que priorice un factor material (las relaciones económicas y productivas) y su papel determinante en el desarrollo del resto de las relaciones sociales, es también idealista. Sustituye el análisis concreto, empírico, de la gente, de los pueblos o las clases sociales, en el que se combinan los diferentes componentes y tendencias sociales, por la

aplicación de leyes generales abstractas que no facilitan la comprensión de la realidad, sino que la distorsionan.

Es lo que le ha pasado al estructuralismo más dogmático de Althusser, de amplia influencia en la izquierda comunista europea. Explica también su dificultad para analizar y adaptarse a los cambios reales de estas últimas décadas, particularmente con los procesos de los nuevos movimientos sociales, de las nuevas energías populares por el cambio social y político. La utilidad y la credibilidad política y científica de ese marxismo, funcional para el estalinismo, como ya vaticinaba Thompson (1981), ha entrado en crisis, incluso como forma de legitimación de los supuestos representantes de la clase obrera.

Pero de un tipo de determinismo economicista (idealista), a veces, se ha pasado a otro idealismo, incluso en el llamado postestructuralismo o postmarxismo, en que se desprecia las realidades materiales de la gente y las estructuras económicas, medioambientales o de seguridad y sobrevaloran el papel transformador de las ideas o la subjetividad individual. Es la posición culturalista, dominante en el último Touraine (2005; 2009; 2011) o la discursiva de Laclau (2013), ambas como reacción a su posición estructuralista anterior, pero con la continuidad de un enfoque idealista, aunque de distinto signo.

En particular la teoría populista de Laclau (2013), cuya valoración completa se realiza en otra parte (Antón, 2015c: 179-282), en relación con este tema de la construcción del sujeto, tiene una gran insuficiencia: su ambigüedad ideológica. En el plano analítico y transformador es central explicar y apoyar (o no) el proceso de identificación y construcción de un sujeto, llamado ‘pueblo’, precisamente por su papel, significado u orientación político-ideológica, es decir, por su dinámica emancipadora-igualitaria (o nacionalista, xenófoba y autoritaria). Lo que criticamos de la teoría de Laclau es, precisamente, que se queda en la lógica política de unos mecanismos, como la polarización y la hegemonía, pero que son indefinidos en su orientación igualitaria-emancipadora si no se explicita el carácter sustantivo de cada uno de los dos sujetos en conflicto (amigo/enemigo) y el sentido de su interacción.

La segunda insuficiencia de Laclau es que parte del proceso de conformación de las demandas ‘democráticas’ de la gente como algo dado; y a partir de ahí expone toda su propuesta (equivalencias, discurso, articulación) para transformarlas en ‘demandas populares’ frente a la oligarquía. Sin embargo, la explicación y el desarrollo de ese primer paso es clave, ya que está condicionado por todo lo que expresamos como relevante para nuestro enfoque: condiciones, estructura, cultura, experiencia, conflictos... de los actores y su sentido emancipador-igualitario. El segundo paso se convierte en ‘constructivista’.

Pero, además, Laclau admite ese constructivismo, esa ‘independencia’ de las condiciones materiales y relacionales de la gente y los actores, porque lo considera una virtud (como superador del marxismo o estructuralismo). Como efecto péndulo de su crítica al determinismo, se pasa a otro extremo idealista, como Touraine, que prioriza como causa explicativa el cambio cultural del sujeto individual. En ese eje —estructura/agencia— me pongo en el medio, en su interacción, en la importancia de la experiencia de la gente, aun con sus límites (Thompson, 1981: 18 y ss.).

En el caso de Touraine (2005; 2009, y 2011), nos parece insuficiente su paradigma del cambio cultural del sujeto individual, tal como detallo en el libro citado (Antón, 2015c: 93-105): expresa una parte significativa de la realidad, pero sus límites quedan más en evidencia con el impacto de la crisis sistémica, la austeridad y la fuerte involución social y democrática, junto con las nuevas dinámicas de desigualdad, subordinación individual y segregación. Especialmente, no permite explicar adecuadamente los actuales procesos de protesta social progresista y la reconfiguración de los campos sociopolíticos y electorales. Sus textos principales están publicados en Francia antes de esos cambios relevantes, en los años 2005 y 2007, y parte de ellos ha quedado rápidamente envejecida. Su investigación publicada el año 2011, posterior al inicio de la crisis, incorpora algunos hechos e ideas de interés, pero los sigue enmarcando en su enfoque cultural. Para la

realidad actual, su mirada todavía es más unilateral para analizar la importancia de la nueva cuestión social, la conformación de sujetos y movimientos sociales y la pugna sociopolítica y cultural por los derechos económicos, sociolaborales y democráticos. Su reciente investigación no supera ese enfoque. Por tanto, junto con el cambio ‘cultural’ individual, es cada vez más perentoria la acción individual y colectiva por la transformación de sus vínculos y relaciones sociales y la participación activa en movilizaciones populares progresistas que pugnen por el cambio social y político y la defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo que profundizan en el cambio cultural y procuran el desarrollo personal y la autoafirmación de sus participantes.

Por tanto, habrá que reafirmar el realismo analítico y desechar el determinismo, el culturalismo y el idealismo discursivo, integrando la pugna de intereses y los conflictos de valores de la gente en una visión más relacional y dinámica:

Cada contradicción es tanto un conflicto de valor como un conflicto de intereses; que en el interior de cada ‘necesidad’ hay un afecto, una carencia o ‘deseo’ en vías de convertirse en un ‘deber’ (o viceversa; que toda lucha de clases es a la vez una lucha en torno a valores; y que el proyecto del socialismo no viene garantizado por NADA —por supuesto no por la ‘Ciencia’ o el marxismo-leninismo—, sino que solo puede hallar sus propias garantías mediante la ‘razón’ y a través de una abierta ‘elección de valores’ (Thompson, 1981: 263).

En conclusión, se ha abierto una nueva etapa sociopolítica en España. El cambio se conforma con la suma e interacción de tres componentes: 1) La situación y la experiencia popular de empobrecimiento, sufrimiento, desigualdad y subordinación. 2) La participación cívica y la conciencia social de una polarización (social y democrática) entre responsables con poder económico e institucional y mayoría ciudadana. 3) La conveniencia, legitimidad y posibilidad

práctica de la acción colectiva progresista, articulada a través de los distintos agentes sociopolíticos y la conformación de un electorado indignado, representado mayoritariamente por Podemos y sus aliados. A continuación, valoramos la transversalidad y su relación con la igualdad y la hegemonía.

Transversalidad e importancia de los valores igualitarios y democráticos

En la sección anterior hemos explicado la importancia de la experiencia popular en la construcción de un sujeto colectivo (llámese clase, pueblo o nación) y la relación entre intereses e ideas en la articulación de ese proceso. En esta parte nos centramos en el alcance de la transversalidad entre izquierda y derecha, señalando la relevancia de la igualdad y la democracia, y en el análisis sobre el papel del discurso y la hegemonía (Antón, 2015c).

La existencia de una ideología completa y cerrada no es positiva, pero sí es necesario algo de doctrina, normativa, estrategia, ideas y valores o propuestas políticas que enlacen con la cultura ciudadana (o conciencia social) y una actividad articuladora de élites o representantes ‘populares’ (en la tradición marxista eran vanguardias). Los grandes valores o ideas clave (igualdad, libertad, solidaridad, democracia, laicismo...) de la historia ilustrada y la mejor izquierda democrática reflejan el esfuerzo colectivo y el proyecto transformador de amplias capas populares, forman parte de su experiencia y su cultura para cambiar las dinámicas de fondo de desigualdad, dominación y subordinación. No son significantes vacíos sino componentes fundamentales de un proyecto emancipador-igualitario, elementos de identificación para construir un ‘pueblo’ liberado de las oligarquías autoritarias.

La construcción de un sujeto sociopolítico, su identificación como pueblo (libre e igual), está ligada a su propio comportamiento y su experiencia articuladora del conflicto... por la igualdad y la libertad...

frente a las oligarquías y el autoritarismo. En ese sentido, es similar y recoge las mejores tradiciones democráticas, igualitarias y emancipadoras de las izquierdas y otros movimientos de liberación popular. Están justificadas las reservas a la denominación ‘izquierda’ (política) al estar asociada a la última evolución socioliberal de la socialdemocracia (o al autoritarismo de los regímenes del Este).

Pero como dice Mouffe (2015), aludiendo a Bobbio, el valor de la igualdad es clave como identificación de la(s) izquierda(s). Es una señal de identidad diferenciada del populismo de ‘izquierda’ frente al populismo de ‘derecha’. No hay ‘un’ populismo; sus rasgos comunes son lo secundario, y algunos de ellos similares a los de otras corrientes políticas. Hay, como mínimo, dos populismos, diferenciados por lo sustancial, su significado ético-político: democrático-igualitario o autoritario-segregador. Y el llamado populismo de izquierdas (al igual que la izquierda social) debe basarse en la igualdad, en la defensa de los derechos políticos, civiles, sociales y laborales de las mayorías populares.

El problema que tiene esa teoría populista es que, precisamente, debe construir un relato, un mito, para profundizar en la trayectoria igualitaria-emancipadora, de las mejores experiencias democráticas y populares. Dicho de otra forma, el eje izquierda / derecha, en cuanto a identificación política, es confuso, ya que incorpora dos realidades contraproducentes para una dinámica democrática y de igualdad: el giro socioliberal o centrista de la socialdemocracia y la tradición autoritaria de los regímenes comunistas del Este. Mucha gente asocia esa referencia izquierda (social) a una posición progresiva en la política económica y fiscal y defensora de los derechos sociales y laborales y el Estado de bienestar. Y es bueno que por ello se auto ubique ideológicamente en la izquierda.

No obstante, es positiva la ‘transversalidad’ respecto de esa denominación como cuestión determinante en la identificación política y electoral. La principal es la apuesta por el continuismo o por el cambio. La cuestión es que no es irrelevante la identificación político-

ideológica de la gente en torno al eje de fondo igualdad/desigualdad o, si se quiere, intereses de los de abajo y los de arriba, o bien, de la democracia y la oligarquía. En estos campos no es adecuada la transversalidad, como indefinición o posición intermedia entre los dos polos. La apuesta por un polo debe estar clara: la igualdad, los de abajo, la democracia. Muchas personas pueden estar menos ‘ideologizadas’ en esos aspectos o tener posiciones intermedias. Pero la línea de identificación alternativa pasa por su posicionamiento en esos campos democráticos-igualitarios frente a los grandes poderes regresivos. Es lo que en el actual proceso de indignación se ha conformado, superando, las viejas representaciones de las élites socialistas, liberales o comunistas.

Es fundamental la conformación ‘ideológica’ o cultural de la gente en ese eje de contenido sustantivo, hacia los valores y actitudes de un polo del conflicto (igualdad, libertad, democracia, intereses y demandas de la gente) y frente a otro (desigualdad, dominación, autoritarismo, privilegios de las oligarquías). En estos planos es negativa la transversalidad como indefinición ante ellos, eclecticismo o posición intermedia; al contrario, es positiva la educación y la identificación cívica con esos valores y estrategias fundamentales, basadas en los derechos humanos, la justicia social o la emancipación.

Eso quiere decir que la construcción de un sujeto emancipador (el pueblo o el sujeto del cambio) no se puede dissociar de esa experiencia social y esa cultura igualitaria y democrática. La construcción del ‘pueblo’ no se puede quedar en la afirmación de un mecanismo identificativo (la polarización con el adversario) o el llamamiento a la importancia de los mitos y relatos, desconsiderando los intereses y demandas de la gente en la contienda política y su papel y significado.

Por ejemplo, una sobrevaloración del papel del discurso es la afirmación de P. Iglesias en el programa de TV La Tuerka, sobre *Podemos y el populismo* (noviembre de 2014): *La ideología es el principal campo de batalla político*. Por supuesto, es importante la batalla de las ideas, la hegemonía cultural y por el ‘sentido común’.

Podemos ha conseguido ser reconocido como su representación política por una gran parte de la ciudadanía indignada. Y en ello ha tenido un papel central su discurso y su liderazgo. Sus propuestas han conectado con la experiencia y las aspiraciones de gente descontenta, han sabido presentarse como cauce institucional de esas demandas y se ha modificado el sistema político.

No obstante, esa base social, en gran medida, estaba ‘construida’, incluso con sus ideas clave, o sea, con una hegemonía cultural: más democracia, menos recortes y más derechos sociales (igualdad). La conformación de ese nuevo campo político ha sido posible por la masiva pugna sociopolítica de la ciudadanía activa española, democrática en lo político y cultural y progresista en lo social y económico, frente a las graves consecuencias de la crisis económica y las políticas de austeridad de las direcciones del PSOE y luego del PP, que habían quedado desacreditadas. El sentido común básico de justicia social y democratización, junto con el apoyo a dinámicas de cambio de progreso, ya estaba asumido por amplios sectores de la ciudadanía indignada. Su cultura, su relato y su identificación dentro de la polarización política (la gente descontenta frente a los poderosos) ya estaban asumidos por millones de personas y reafirmados por esa experiencia popular.

El nuevo paso del fenómeno Podemos (y sus aliados y confluencias) ha consistido en crear un nuevo instrumento representativo como cauce de ese proceso popular y esas demandas cívicas, con suficiente representatividad y credibilidad. Ello permite promover y visualizar el cambio institucional, ofrecer nuevas oportunidades de cambio social y político y reforzar ese campo o sujeto sociopolítico. Esa tarea específica de representación política desborda el ámbito ideológico y, aun con el componente cultural aludido, es fundamentalmente político-institucional.

La formulación por el líder de Podemos de esa frase genérica de carácter teórico podría tener solo un carácter retórico y convivir con una estrategia política más realista, como se puede deducir de su otra fuente de inspiración, la serie *Juego de Tronos* (*SUPRIMIR*) desde la influencia

del pragmatismo maquiavélico de las relaciones de poder. Pero, la prioridad jerárquica y determinante de esa expresión, precisamente para todo el periodo anterior y posterior, tiende a infravalorar, como si fuera secundario, el campo propiamente de las relaciones sociales y los conflictos políticos: el proceso real de construcción de ese movimiento popular; la articulación del amplio electorado indignado; el cambio del sistema político e institucional y la propia delegación ciudadana en unas élites representativas; así como las pugnas ciudadanas por sus intereses y demandas sociales, económicas y democráticas. Son aspectos políticos, socioeconómicos e institucionales que están pasando a un primer plano, como el propio P. Iglesias reconoció en el debate de investidura, y que tras el 26-J adquiere todavía una nueva y mayor dimensión en el campo de batalla político y europeo.

Papel del discurso y hegemonía

Antes he comentado una cita de I. Errejón, revalorizando el papel de los mitos frente a los intereses materiales. Veamos otro ejemplo: *En la política las posiciones y el terreno no están dados, son el resultado de la disputa por el sentido* (Errejón y Mouffe, 2015: 46). Es cierto que las posiciones políticas no son ‘naturales’ ni están predeterminadas por condiciones ‘objetivas’; están conformadas y sujetas a cambio por el comportamiento de la gente y los distintos sujetos activos. La cuestión es que son resultado no solo de la disputa por el sentido, sino por la pugna en las relaciones de fuerza y de poder, además y en conexión con la legitimación social o hegemonía cultural.

La acción por la hegemonía político-cultural o ideológica es importante. Aunque ya hay alusiones en el propio Marx, ese concepto lo ha desarrollado Gramsci (1978; 2011) y, ahora, Laclau (2013, y junto con Mouffe, 1987). Ambos resaltan la cultura nacional-popular, aunque con planteamientos distintos. Digamos que en la construcción del ‘pueblo’, el primero conserva parte de un enfoque ‘determinista’ (posición objetiva de las clases sociales, lucha de clases) sobre el papel

de eje hegemónico de la clase trabajadora, y el segundo, defiende una mirada ‘constructivista’ (discursos, significantes vacíos) en la configuración identitaria y hegemónica de ese pueblo.

Los cambios culturales y de mentalidad son fundamentales para las fuerzas progresistas cuya capacidad transformadora depende más del tipo de subjetividad, valores e ideas incorporados por las capas populares para desarrollarlos como capacidad de cambio social y político. No lo son tanto para los poderosos y las élites dominantes que cuentan con el control de los recursos económicos e institucionales, aunque también se vean influidos por el grado de legitimidad pública o consenso representativo respecto de su poder o el orden desigual existente. Desde una óptica popular, el cambio cultural precede, se combina y se refuerza con el cambio político, cultural y de las estructuras económicas, con la experiencia cívica compartida en el conflicto social frente a unas relaciones de dominación. Como dice Thompson (1979: 38), los sujetos colectivos surgen de la lucha sociopolítica, de su vida y experiencia en el conjunto de relaciones sociales, modeladas por su cultura.

Por otro lado, el discurso articulador de un proceso igualitario-emancipador no se construye con significantes vacíos, funcionales solo para cohesionar a la gente y ganar hegemonía. El sentido de esos significantes y la orientación de su papel constructivo son fundamentales. Y esos valores son clave para definir el camino y el proyecto. El asunto es que esos grandes objetivos globales y transformadores hay que rellenarlos con estrategias, programas y relatos y, sobre todo, con una experiencia popular, participación democrática o articulación masiva en el conflicto social y político de carácter emancipador-igualitario.

El término izquierda además de confuso (ampara élites y actuaciones regresivas y prepotentes) es restrictivo (deja fuera a gente progresista, democrática y antioligárquica). La palabra ‘izquierda’ se puede resignificar, según propone Mouffe (2015), particularmente en el ámbito de la izquierda social, donde su significado está más asociado a

la experiencia popular europea de tradición democrática y defensora de los derechos sociales y laborales de las capas populares, el papel de lo público y el Estado de bienestar. Pero en el campo político-institucional es más dificultoso, dada la deriva socioliberal de la socialdemocracia y su ambivalencia.

No obstante, sigue siendo positiva y fundamental la tradición igualitaria, emancipadora y solidaria de la(s) izquierda(s) democrática(s) europea(s), aunque no exclusiva de las mismas. Ahí entra la rica experiencia de movimientos sociales emancipadores. La solución es triple: superar, renovar y reforzar elementos de esa tradición de izquierdas. Y, específicamente, levantar un nuevo relato, una nueva aspiración, con una nueva denominación. Pero no es suficiente una alternativa procedimental (polarización, hegemonía) o sociodemográfica (abajo/arriba). Debe incluir, para fortalecer su sentido democrático, emancipador e igualitario, esos valores ilustrados, progresistas y de izquierda y adecuarlos a la tarea de construcción de un movimiento popular (nacional-solidario) progresivo, es decir, cuya expresión enlace con sus demandas y aspiraciones de progreso. Ese ideario-proyecto, con el horizonte de una democracia social en una Europa más justa y solidaria, está por desarrollar.

Conclusión

Se puede afirmar, junto con Pablo Iglesias, que se ha generado un espacio distinto de la actual y vieja socialdemocracia europea, con su dinámica dominante socioliberal (de ‘tercera vía’ o ‘nuevo centro’), para configurar un nuevo sujeto político con una orientación y un papel ‘social’ y ‘democrático’, una ‘nueva socialdemocracia’. Se conforma un nuevo eje articulador de las identidades colectivas en torno a posiciones, intereses e ideas favorables a la igualdad/democracia/capas populares frente a la desigualdad y el autoritarismo de minorías oligárquicas. Es decir, la polarización sociopolítica y cultural, con zonas intermedias y mixtas, tiene un contenido sustantivo de carácter político-ideológico. Se

supera la posición de transversalidad o neutralidad ideológica, se recogen las mejores tradiciones de la izquierda democrática y otros sectores progresistas pero, sobre todo, se afirma un nuevo proyecto-ideario emancipador cuya denominación y perfil está por contrastar.

Es fundamental un discurso o un pensamiento crítico que, conectado a la experiencia democratizadora, de oposición a los recortes sociales y defensa de los derechos y demandas populares, pueda favorecer la construcción de una identificación popular democrática-igualitaria. Dicho de otro modo, el perfil del nuevo sujeto popular y cívico debe basarse en la igualdad y la democracia, aunque se distancie de determinadas posiciones ideológicas, completas y cerradas, de las izquierdas (u otras corrientes), hoy contradictorias y superadas o, bien, se acerque a otras tradiciones, algunas de la propia izquierda democrática, social o política. Se trata de profundizar el republicanismo cívico y el carácter social-igualitario de la democracia.

En definitiva, en la construcción de la identidad ‘pueblo’, del sujeto popular transformador, hay que combinar los dos planos –intereses (populares) y discursos (emancipadores)- de la experiencia popular y la cultura cívica, junto con la afirmación (no la indefinición) del primer polo, progresivo, de cada eje: abajo / arriba; igualdad / desigualdad; libertad / dominación; democracia / oligarquía; solidaridad / segregación.

Bibliografía

Alegre, L. y Fernández Liria, C. (2010). *El orden de El Capital. Por qué seguir leyendo a Marx. Madrid, Akal.*

Alonso, L. E. (1998). *Una mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpretativa. Madrid, Fundamentos.*

—(2009). *Controversias sobre el individualismo contemporáneo. Madrid, UAM.*

Alonso, L. E. y Fernández, C. J. (eds.) (2012). *La financiarización de las relaciones salariales. Una perspectiva internacional*. Madrid, La Catarata.

Alonso, L. E. y Fernández, C. J. (2014). *Los discursos del presente. Un análisis de los imaginarios sociales contemporáneos*. Madrid, Siglo XXI.

Althusser, L. (1967). *La revolución teórica de Marx*. México, Siglo XXI.

—(1969). *Para leer El Capital*. México, Siglo XXI.

Antón, A. (1997). «La justificación del egoísmo en Mandeville», en *Rif-Raff*, n° 8/9, septiembre, Universidad de Zaragoza.

—(1999). “Liberalismo y ciudadanía social”, en *Página Abierta*, noviembre (Comunicación a las *I Jornadas de Filosofía Moral y Política* de la Asociación Española de Ética y Filosofía Política).

—(2000). «Crisis del trabajo y ciudadanía social», en A. Antón (coord.), *Trabajo, derechos sociales y globalización* (pp. 192-291). Madrid, Talasa.

—(2003). *Rentas básicas y nuevo contrato social*. Madrid, GPS-Fundación Sindical de Estudios.

—(2006a). *Precariedad laboral e identidades juveniles*. Madrid, GPS-Fundación Sindical de Estudios.

—(2006b). *El devenir del sindicalismo y la cuestión juvenil*. Madrid, Talasa.

—(2008): «Cambios de identidades laborales y de clase», en *Revista de Sociología del Trabajo*, n° 63, Universidad Complutense de Madrid, Siglo XXI.

—(2009). *Reestructuración del Estado de bienestar*. Madrid, Talasa.

—(2011). *Resistencias frente a la crisis. De la huelga general del 29-S al Movimiento 15-M*. Valencia, Alemania.

- (2013a). *Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica*. Madrid, Sequitur.
- (2013b). «Igualdad y libertad: fundamentos de la justicia social», en *Revista Internacional de Educación para la Justicia social —RIEJS* — 2(1), pp. 173-194.
- (2014a). *Sujetos y clases sociales*. Madrid, *Fundación 1 de Mayo*, Estudio 83, marzo (41 pp.).
- (2014b). *Desigualdad, recortes y respuestas*. Madrid, *Fundación 1 de Mayo*, Informe 99, julio (53 pp.).
- (2015a): *Cambios en las clases sociales*, Comunicación al II Congreso: Trabajo, Economía y Sociedad, Fundación 1 de Mayo, 22 y 23 de octubre de 2015.
- (2015b). *Poder, protesta social y cambio institucional*. Albatana, Ediciones Dyskolo.
- (2015c). *Movimiento popular y cambio político. Nuevos discursos*. Barcelona, UOC.
- (2016a). *La democracia social hoy. Un nuevo ciclo sociopolítico por la democracia y la igualdad*. Madrid, Editorial Académica Española.
- (2016b). *Crisis Política. Necesidad de una teoría alternativa*. Madrid, *Rebelión* (76 pp.). En línea: <http://www.rebellion.org/docs/219969.pdf>
- (2016c). *La estrategia de Syriza a debate*. Madrid, *Rebelión* (43 pp.). En línea: <http://www.rebellion.org/docs/212048.pdf>
- (2017a). «El debate sobre la transversalidad», en *Página Abierta* n° 248, enero-febrero.
- (2017b). *¿Hacia una alianza de progreso?*. Madrid, *Rebelión* (93 pp.). En línea: <http://www.rebellion.org/docs/230995.pdf>
- (2018). «El sujeto de cambio», en *La clase trabajadora, ¿sujeto de cambio en el siglo XXI?*, A. Tarín y José M. Rivas (coords.), Madrid, Siglo XXI (pp. 71-102).
- (2024): *Izquierda transformadora*. Albatana, Dyskolo.

—(2025): *Encrucijadas. Para la democracia, las izquierdas y el feminismo*. Albatana, Dyskolo.

Antón, A. (coord.) (2010). *La reforma del sistema de pensiones*. Madrid, Talasa.

Arent, H. (1993). *La condición humana*. Barcelona, Paidós.

Beltrán, M. (2016). *Dramaturgia y hermenéutica: para entender la realidad social*. Madrid, CIS.

Benítez, P (2016): «La actualidad política de E. P. Thompson. Multitud y 15-M» en J. Sanz, J. Babiano y F. Erice (eds.): *E. P. Thompson. Marxismo e Historia social*. Madrid, Siglo XXI (pp. 299-328).

Bobbio, N. (1995). *Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política*. Madrid, Taurus.

Carnes, N. y Lupu, N. (2017). “Los votantes de Trump no son obreros” en diario *El País*, 4 de agosto.

Cruells, M^a e Ibarra, P. (eds.) (2013). *La democracia del futuro. Del 15-M a la emergencia de una sociedad civil viva*. Barcelona, Icaria.

Domènech, X. (2016). «La condescendencia de la posteridad: lucha de clases, clases y conciencia de clase» en J. Sanz, J. Babiano y F. Erice (eds.), *E. P. Thompson. Marxismo e Historia social*, Madrid, Siglo XXI (pp. 115-151).

Errejón, I. (2016). «Podemos a mitad de camino», en *CTXT*, núm. 61, de 20 de abril. En línea: <http://ctxt.es/es/20160420/Firmas/5562/Podemos-transformacion-identidad-poder-cambio-Tribunas-y-Debates.htm>

—(2017): «Occidente en su momento populista», en *CTXT*, núm. 113, de 19 de abril. En línea:

<http://ctxt.es/es/20170419/Firmas/12306/populismo-izquierda-errejon-le-pen-trump.htm>

Errejón, I. y Mouffe, Ch. (2015). *Construir pueblo. Hegemonía y radicalización de la democracia*. Barcelona, Icaria.

Fernández Liria, C. (2015). *El marxismo hoy. La herencia de Gramsci y Althusser*. Madrid, Batiscafo.

—(2016). *En defensa del populismo*. Madrid, La Catarata.

Giddens, A. (1981). *Sociología*. Madrid, Alianza.

Gramsci, A. (1978). *Antología*. México, Siglo XXI.

—(2011). *¿Qué es la cultura popular?*. Valencia, Universidad de Valencia.

Innerarity, D. (2015). *La política en tiempos de indignación*. Barcelona, Galaxia Gutenberg.

Jessop, R. (2008). *El futuro del Estado Capitalista*. Madrid, La Catarata.

—(2017a). *El Estado: Pasado, Presente; Futuro*. Madrid, La Catarata.

—(2017b). «La renovación del pensamiento de Gramsci: entrevista con Bob Jessop», por Carlos Prieto y Juan Carlos Monedero. *Público*, 26 de abril (40 pp.). En línea:

<http://www.publico.es/opinion/renovacion-pensamiento-gramsci-entrevista-bob.html>

Laclau, E. (1978) [1977]. *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo*. Madrid, Siglo XXI.

—(2013) [2005]. *La razón populista*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

Laclau, E. y Mouffe, Ch. (1987). *Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización democrática*. Madrid, Siglo XXI.

Macintyre, A. (1984). *Tras la virtud*. Barcelona, Crítica.

McAdam, D., McCarthy, J. D. y Zald, M. N. (eds.) (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Madrid, Istmo.

McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, CH. (2005). *Dinámica de la contienda política*. Barcelona, Hacer.

Monedero, J. C. (2016). «Las debilidades de la hipótesis populista y la construcción de un pueblo en marcha», en *Público* (11-5-2016). En línea: <http://blogs.publico.es/juan-carlos-monedero/2016/05/11/las-debilidades-de-la-hipotesis-populista-y-la-construccion-de-un-pueblo-en-marcha/>

Mouffe, Ch. (2003) [2000]. *La paradoja democrática*. Barcelona, Gedisa.

—(2007). *Retorno a lo político*. Buenos Aires, FCE.

—(2012). *El desafío de Schmitt*. Buenos Aires, Prometeo.

Navarro, V. (2015). *Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante*. Barcelona, Anagrama.

—(2016). «El redescubrimiento de la clase trabajadora en los países a los dos lados del Atlántico Norte», en *Público*, 19 de diciembre. En línea: <http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2016/12/19/el-redescubrimiento-de-la-clase-trabajadora-en-los-paises-a-los-dos-lados-del-atlantico-norte/>

—(2017). «Los costes de enfatizar género y raza sin considerar clase social: el caso de EE.UU.», en *Público*, 26 de enero. En línea: <http://blogs.publico.es/dominiopublico/19109/los-costes-de-enfatizar-genero-y-raza-sin-considerar-clase-social-el-caso-de-eeuu/>

Pettit, Ph. (1999). *Republicanism. Una teoría sobre la libertad y el gobierno*. Barcelona, Paidós.

Recio, A. (2017). «Stagers y Kellys: precariedad y clase obrera», en *Mientras Tanto*, n° 158, junio.

Requena, M, Salazar, L. y Radl, J. *Estratificación social*. Madrid, McGraw-Hill. 2013.

Ricoeur, P. (1999). *Ideología y utopía*. Barcelona, Gedisa.

Río (del), E. (1997). *Modernidad, postmodernidad*. Madrid, Talasa.

Rodríguez, E. (2016). *La política en el ocaso de la clase media*. Madrid, Traficantes de sueños.

Sousa Santos, B. (2003). *Crítica de la razón indolente*. Bilbao, Desclée de Brouwer.

—(2016). *La difícil democracia. Una mirada desde la periferia europea*. Madrid, Akal.

Subirats, M. *Barcelona: de la necesidad a la libertad. Las clases sociales en los albores del siglo XXI*. Barcelona, UOC. 2012.

Tarrow, S. (2012) [1994]. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, Alianza.

Taylor, Ch. (2005). *La libertad de los modernos*. Buenos Aires, Amorrortu.

Tezanos, J. F. (ed.). *Clase, estatus y poder en las sociedades emergentes*. Madrid, Sistema. 2002.

Thompson, E. P. (1977) [1963]. *La formación histórica de la clase obrera. Inglaterra: 1780-1832* (tres tomos). Barcelona, Crítica.

—(1979). *Tradicción, revuelta y consciencia de clase*. Barcelona, Crítica.

—(1981). *Miseria de la teoría*. Barcelona, Crítica.

—(1995). *Costumbres en común*. Barcelona, Crítica.

Tilly, Ch. (1991) [1984]. *Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes*. Madrid, Alianza.

—(2007) [2004]: *Contienda política y democracia en Europa 1650-2000*. Barcelona, Hacer.

—(2010) [2009]. *Los movimientos sociales, 1768-2008. De sus orígenes a Facebook*. Barcelona, Crítica,

Touraine, A. (2005). *Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy*. Barcelona, Paidós.

—(2009) [2007]. *La Mirada social. Un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI*. Barcelona, Paidós.

—(2011). *Después de la crisis: por un futuro sin marginación*. Barcelona, Paidós.

Tronti, M. (2019): *Autonomía de lo político*. Madrid, Prometeo.

Van Dijk, T. A. (comp.) (2000). *El discurso como interacción social (Estudios sobre el discurso: introducción multidisciplinaria –vol. 2)*. Barcelona, Gedisa.

Villacañas, J. L. (2008). *Poder y conflicto: ensayos sobre Carl Schmitt*. Madrid, Biblioteca Nueva.

—(2014). *Historia del poder político en España*. Barcelona, RBA.

—(2015). *Populismo*. Madrid, La Huerta Grande.

—(2017a). «Pasado, presente y futuro de los populismos», en Fran Carrillo (coord.) *El porqué de los populismos. Un análisis del auge populista de derecha e izquierda a ambos lados del Atlántico* (pp. 17-46). Bilbao, Ed. Deusto.

—(2017b). *El lento aprendizaje de Podemos: Historia del presente*.
Madrid, La Catarata.

5. ESTRATEGIAS E IDENTIDADES

Este quinto capítulo, *ESTRATEGIAS E IDENTIDADES*, tiene siete secciones, en las que se abordan varios ejes estratégicos para un cambio sociopolítico de progreso, la importancia de las identidades colectivas y la formación de los sujetos sociales y políticos, y las características de tres procesos relevantes de activación cívica.

La primera sección, *Rearme y oportunismo*, analiza cuatro temas controvertidos en los debates y tradiciones de las izquierdas, el concepto de ‘régimen de guerra’, el significado del malmenorismo, el error de la prioridad anti reformista y la crisis centrista o liberal derivada, sobre todo, por la derecha autoritaria.

La segunda sección, *Guerras culturales y cambio sociopolítico*, explica tres aspectos de la relación entre el cambio cultural o ideológico de la población y las transformaciones sociopolíticas, institucionales o estructurales de la sociedad, profundizando en la instrumentalización cultural ultra, el conflicto geopolítico y el universalismo moral y el papel de las ideas en el cambio político.

La tercera sección, *El debate sobre las identidades colectivas*, expone desde un enfoque sociohistórico el sentido de las identidades

colectivas, su combinación y su interseccionalidad. Se trata de analizar el proceso de conformación de los sujetos sociales y superar, por un lado, el simple identitarismo particularista posmoderno, y por otro lado, el universalismo abstracto e indiferenciado, de carácter liberal.

La cuarta sección, *Acerca de lo woke: experiencia, identitarismo y universalismo*, tras aclarar el significado de lo *woke*, recalca la importancia del análisis concreto de la situación concreta, la rica y particular experiencia cívica en España, la necesidad de un esfuerzo crítico y renovación teórica particularmente en este campo, el sentido de la justicia social y el enfoque de un universalismo concreto, emancipador, igualitario y solidario.

Las tres últimas secciones muestran las dinámicas de reactivación cívica en tres ámbitos significativos, con importantes efectos sociopolíticos. La quinta trata de la experiencia y la victoria de Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, con su combinación de reforma social y políticas de identidad, y su relación con la izquierda española. La sexta detalla la relevancia de la movilización propalestina contra el genocidio israelí. Y la séptima, con un tratamiento académico, valora el proceso y la conveniencia de la identificación feminista.

5.1 Rearme y oportunismo

Trato cuatro cuestiones controvertidas sobre el análisis y las estrategias políticas para un cambio profundo, que suscitan debates en las izquierdas y sus tradiciones teóricas, dejando al margen las diferencias

de contextos: el concepto de régimen de guerra, el significado del malmenorismo, el error de la prioridad anti reformista y la crisis centrista proveniente, sobre todo, por la derecha autoritaria.

Parto de la relevancia de un asunto fundamental, la construcción procesual y conflictual del sujeto colectivo transformador, capaz de modificar la relación de fuerzas con los poderosos. En ese sentido, es una idea sencilla y con gran carga política, la expuesta por Lenin, en tiempos convulsos, sobre que la «acción independiente de las masas», respecto de la gestión institucional y los aparatos de las corrientes oportunistas, es una condición necesaria pero no suficiente para el cambio radical.

El concepto de ‘régimen de guerra’

Uno, el concepto de ‘régimen de guerra’ y más aún de ‘sociedad de guerra’ es problemático para analizar la actualidad europea o española. Aunque haya guerras abiertas (Ucrania/Rusia, Palestina/Oriente Próximo...) y tendencias militaristas y belicistas en los países occidentales, es excesivo hablar hoy de sociedades de guerra en la Europa occidental con implicación masiva de la población en una pugna militar abierta. No se trata solo de una situación con el incremento de la polarización social, de la represión coactiva a movilizaciones y organizaciones populares o de rasgos autoritarios o iliberales, con sus correspondientes dinámicas de rearme y militarización. Al introducir la palabra guerra, se interpreta una situación real e inmediata de enfrentamiento o conflicto armados, sean civiles o entre países. Y no conviene utilizar el mismo significante para las dos situaciones.

El problema no es solo analítico sino, sobre todo, político. Todo el poder establecido de la UE pretende basarse en la llamada crisis existencial europea por una situación de guerra en Ucrania para justificar una economía de guerra con un fuerte rearme militar, innecesario para garantizar la paz y la autonomía estratégica, y

vinculado a un recorte de la inversión social y protectora y un refuerzo de las élites derechistas.

Podemos afirmar que, desde sus comienzos, el capitalismo y el colonialismo han recurrido a la violencia militar para imponer sus instituciones a las capas subalternas o países subordinados, y que en el actual estado de la pugna interimperialista, se están desarrollando dinámicas belicistas, intervenciones militares limitadas y una preparación occidental encaminada hacia una conflagración más general, particularmente, entre EE.UU. y China.

Se puede decir que el capitalismo y el imperialismo conllevan la guerra para asegurar su hegemonía, su expansionismo y sus beneficios. Pero no de forma exclusiva, fatalista y generalizada. En ese sentido, la democracia o el liberalismo político es instrumental para los grandes grupos de poder, a efectos de legitimidad popular y cohesión social o, simplemente, de equilibrio de fuerzas. Tampoco se puede decir lo contrario que, siempre y en toda circunstancia sociohistórica, apuestan por las dictaduras, el fascismo y la guerra. La realidad y la historia son más ambivalentes y los sistemas políticos y la paz dependen de las relaciones de fuerza en cada país y a nivel geopolítico. Las democracias y la paz han sido fruto de la presión cívica de mayorías sociales.

Ante las amenazas de seguridad y de cambios de estructura de poder, las relaciones institucionales antagónicas terminan por dirimirse a través de conflictos político-militares, con reequilibrios de hegemonía político-cultural y sometimientos, más o menos violentos y coercitivos. Se puede reinterpretar aquello de ‘socialismo o barbarie’, ahora también en el plano mundial y con la (in)sostenibilidad del planeta al fondo.

En estos momentos, a pesar del rearme militar y el creciente discurso belicista, las sociedades europeas, las mayorías sociales, no están inmersas —todavía— en una contienda armada generalizada; no se pueden hacer paralelismos con el nazi-fascismo de los años cuarenta, aunque haya ciertos parecidos con las décadas de pugna interimperialista precedentes y posteriores a la primera guerra mundial. Sin ánimo de ingenuidad histórica, todavía hacen falta tiempo y

condiciones para la tercera guerra mundial o un conflicto armado generalizado en el núcleo de Europa. Hay tendencias hacia ello y hay que ampliar en la sociedad una acción y cultura pacifistas pero, al mismo tiempo, hay que criticar la dinámica del miedo y la instrumentalización derechista de la llamada crisis existencial europea, con una situación de preguerra que conduce al rearme, la hegemonía de los grupos de poder, la degradación ética y democrática y la justificación del desmantelamiento del Estado de bienestar europeo.

Va siendo habitual el uso de ese significante, guerra, para hablar de guerras culturales, guerras arancelarias, comerciales o tecnológicas, etc. No obstante, el generalizar su uso para designar todos los conflictos de poder, más que crear la suficiente alerta pacifista y movilización cívica, puede generar confusión y pérdida de credibilidad defensiva... respecto de cuando realmente haya un conflicto armado masivo y en el corazón europeo (o mundial) o un riesgo creíble e inmediato, más allá de las guerras anticoloniales o periféricas; por ejemplo, la instalación estadounidense de misiles nucleares en Europa, en los años ochenta, con la generalización de sus bases militares, en el contexto de la guerra fría (o caliente) con la Unión Soviética y que produjo, precisamente, el mayor movimiento pacifista europeo (y español).

Hay que saber cuándo y cómo viene efectivamente el lobo para prevenir su destrozo. El problema para las izquierdas no se resuelve en el plano de la continua alarma discursiva de que viene el lobo sino que, dando por supuesto las amenazas existentes, consiste en adoptar medidas prácticas y contundentes para que, cuando venga, se pueda neutralizar su agresividad. No se trata de la idea tradicional de ‘si quieres la paz, prepara la guerra’, que justifica el rearme y el belicismo, sino de cambiar los factores y condiciones que conducen a la guerra, empezando contra la política del miedo y el crecimiento armamentístico.

Oportunismo y malmenorismo

Dos, es importante la pugna ideológica y política frente al oportunismo político —llámese malmenorismo, reformismo o posibilismo...—, como simple adaptación resignada de las izquierdas a una relación de fuerzas desfavorable, tal como advierte Gramsci; es el peligro principal para criticar. No obstante, en sentido contrario, hay que evitar los idealismos analíticos y discursivos. Hay que contemplar, desde el realismo, que en condiciones defensivas y si realmente solo hay dos alternativas, una mala y otra peor, se pueda elegir la menos mala, creando condiciones para revertirla y preservando las propias fuerzas. No se trata de resignación y pasividad sino de análisis claramente realistas y de treguas activas para impedir la destrucción de fuerzas propias, así como de resistencia transformadora y acumulación de fuerzas para contraatacar.

Por tanto, la opción del mal menor, en el sentido de que ante la única posibilidad es elegir entre un mal malo y otro peor, se puede abordar desde dos perspectivas contrapuestas: la adaptativa y la transformadora. Y, en condiciones desventajosas, hay que partir siempre de una constatación trágica de la realidad, no de las hipótesis discursivas bienintencionadas, o sea, hay que valorar la reducción de otras posibilidades alternativas y la imposibilidad de una tercera opción positiva inmediata. En ese caso, y mientras se cambia la ventana de oportunidad, no es suficiente la toma de decisiones perentorias por una expectativa hipotética pero irreal en ese momento, con escapismo de las responsabilidades políticas para la salida menos destructiva ante una realidad trágica.

Hay ejemplos históricos, especialmente en el marco de la primera guerra mundial y la experiencia antifascista de los años treinta y cuarenta, así como, en otro sentido, en el proceso adaptativo posibilista de la socialdemocracia y el eurocomunismo, sobre todo, a partir de los noventa. Pero, quizá, el caso polémico más inmediato para la reciente estrategia de las izquierdas fue la formación de un gobierno progresista de coalición, anterior y posterior al 23J, junto con el voto de investidura

al socialista Sánchez y frente a un gobierno de PP/Vox, situación que se puede repetir en los próximos comicios de 2027.

Este discurso crítico al malmenorismo puede ser ambivalente, ya que se puede referir a dos actitudes estratégicas contrapuestas, de resignación o de resistencia. Actualmente, ¿se intenta legitimar la oposición al gobierno de coalición y defender una abstención ante la hipotética nueva investidura socialista, considerando por igual de malos los dos posibles gobiernos, de derecha extrema y de coalición progresista con apoyo nacionalista, al que se desecha como un mal menor a combatir?

Desde luego, esa era la posición de grupo anticapitalista ante la posibilidad de que la izquierda alternativa apoyase y participase en un gobierno de coalición con los socialistas; en gran medida, se escindió de Podemos por ello, pero no fue la idea de su dirección y sus aliados en aquel momento. Ahora las relaciones entre las izquierdas están bloqueadas. Algunos de los dirigentes morados han manifestado su disponibilidad hacia la cooperación con el Partido Socialista, en determinadas condiciones, en especial manteniendo su autonomía política, aunque su prioridad es el desarrollo propio. El tema de las alianzas, con la combinación de los grados de cooperación y diferenciación, de colaboración y autonomía, entre los grupos progresistas, constituye un debate abierto y específico en cada etapa. Veremos cómo se encaran las siguientes elecciones y la próxima legislatura.

El error de la prioridad antirreformista

Tres, en algunos planteamientos radicales la prioridad política parece ser la victoria sobre esa tendencia calificada de malmenorista, o sea, el actual gobierno de PSOE/Sumar y, más en particular, sobre Sumar, como expresión mayoritaria —hasta ahora y en el plano institucional— de ese espacio a la izquierda del Partido Socialista. Puede ser un objetivo legítimo, con procedimientos democráticos y

frente al adversario común de las derechas. El problema aparece cuando se focaliza la movilización social y discursiva en ese objetivo ‘antirreformista’, para luego, tras desaparecer ese supuesto tapón de la deseada emergencia movilizadora popular, abordar la lucha contra las derechas.

Es un pensamiento irreal y sectario, dominante en los años veinte en sectores comunistas de la Tercera Internacional, para quienes el adversario principal era la socialdemocracia. La lección posterior enseñó a las izquierdas que la estrategia —revolucionaria— sería al revés, priorizar la capacidad movilizadora y de contrapoder popular para transformar las condiciones de las mayorías sociales frente a los poderosos; así se conseguiría mayor apoyo y legitimidad cívica para afrontar mejor el objetivo principal: derrotar a los grupos de poder derechista. Y, en ese caso, evidenciar la retórica vacía o la acción limitada del posibilismo centrista, que quedaría desacreditada.

Es el error estratégico de hace un siglo en los comienzos de la III Internacional —y la IV—, con el principio de ‘clase contra clase’, al considerar el principal adversario el llamado reformismo socialdemócrata, colaboracionista con la guerra interimperialista, cuando asomaba el fascismo, al que supuestamente favorecía; hasta el giro hacia la política de frente popular y las alianzas antifascistas, en los años treinta —incluidas la guerra antifranquista o la larga marcha maoísta—. Aunque luego, en los años setenta, fueron readaptados por el eurocomunismo más pragmático, con la unidad de la izquierda o el compromiso histórico, y la renuncia a una transformación sustancial de las relaciones de poder, sustituida por vagas declaraciones programáticas, mientras el grueso de la socialdemocracia giraba hacia el nuevo centro.

La crisis centrista o liberal viene, sobre todo, por la derecha autoritaria

Cuatro, se está produciendo cierta bancarrota del centrismo político y las derechas liberales, pero por la ofensiva derechista, ya que los grandes poderes fácticos se enfrentan de forma reaccionaria a su ilegitimidad pública, la desafección ciudadana y del Sur global y su necesidad de mayor control social y productivo, subordinación popular y autoritarismo. La crisis del liberalismo político, el posibilismo centrista o la propia democracia, no viene por la amenaza revolucionaria o el desborde popular por la izquierda.

O sea, como apuesta autoritaria se puede recomponer el dominio neoliberal, conservador y ultra en Europa... con la crisis social, ecológica y geopolítica —frente a China— al fondo, y la derrota de las izquierdas, el bloqueo del feminismo y la amenaza militarista de los imperialismos. Es la dinámica de rearme hegemónico, autoritario y regresivo para combatir. Sufren una profunda crisis de legitimidad, pero todavía no hay suficientes fuerzas sociales y políticas para garantizar un futuro de paz y bienestar. La tarea de las izquierdas, sociales y políticas, es acumular esas fuerzas de cambio democratizador.

Por último, hay conflictos entre las dos corrientes progresistas, la moderada u oportunista y la radical o transformadora. Pero, aparte de recordar la importancia de la movilización social para formar fuerza sociopolítica —la acción independiente de las masas— habrá que demostrar la capacidad transformadora o contrahegemónica popular y su representación social y política frente a los poderes fácticos. En esa medida, se incrementará su legitimidad y la insuficiencia del malmenorismo adaptativo. La cuestión es cambiar las actitudes de las bases sociales a través de la experiencia popular, la activación cívica y la credibilidad transformadora, no a través del subjetivismo irrealista o el sectarismo discursivo, que suelen quedar en la impotencia. La relación entre las dos corrientes -y otros sectores democráticos- siempre debe obedecer a la combinación entre unidad y diferenciación. En definitiva, es imprescindible el realismo analítico y la voluntad transformadora.

5.2 Guerras culturales y cambio sociopolítico

Introducción

Este ensayo trata un tema fundamental para las ciencias sociales y la estrategia transformadora de las izquierdas: la relación entre el cambio cultural, ideológico o de las mentalidades de la población y las transformaciones sociopolíticas, institucionales o estructurales de la sociedad. Está compuesto de tres partes. La primera, «La ultraderecha y la guerra cultural», analiza la estrategia ultraderechista y la combinación de su pugna cultural con su acceso a posiciones de poder para modelar los sistemas políticos y las estructuras sociales, en un sentido regresivo y autoritario. La segunda, «Conflicto geopolítico y universalismo moral», explica, a raíz de un interesante artículo de la politóloga Marian Martínez-Bascuñán, los fundamentos éticos y filosóficos de la tradición occidental y la oriental, en el marco de la reciente escenificación del poderío chino y sus alianzas internacionales. La tercera, «El papel de las ideas en el cambio político», con ocasión de un ensayo del ilustre pensador británico, Perry Anderson, trata sobre la importancia de la hegemonía cultural en los cambios revolucionarios, en conversación con las distintas tradiciones del marxismo y las izquierdas.

La ultraderecha y la guerra cultural

Dos hechos recientes ilustran los objetivos segregadores y reaccionarios de las derechas extremas: Las jornadas de VOX en el Congreso contra la ‘Ideología de género y las denuncias falsas’ y la reacción racista de ultraderechistas en Madrid tras la presunta agresión sexual a una adolescente por un inmigrante joven de origen marroquí.

Al mismo tiempo, dirigentes del Partido Popular, especialmente la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, con gran eco en los grandes medios

de comunicación, amplifican el odio a los inmigrantes racializados, boicotean la redistribución desde Canarias de menores o colaboran con la campaña racista de criminalización y expulsión de los inmigrantes irregulares, en vez de garantizar sus derechos humanos y habilitar su regularización.

Por una parte, la ultraderecha lleva su neoconservadora campaña mediática y política basada en el negacionismo de la violencia machista, en la inexistencia de las situaciones de desigualdad, dominio y prepotencia patriarcal. La mayor lacra de esa situación queda reflejada en la constatación de las agresiones machistas y la discriminación que sufren las mujeres y colectivos LGTBIQ+, en diferentes campos relacionales. Sobre ello hay suficiente evidencia empírica, imposible de rebatir a pesar de los bulos y la desinformación, y se ha desarrollado una amplia conciencia feminista e igualitaria entre los sexos, así como un potente movimiento feminista transformador que figura como su adversario sociopolítico y cultural a derribar.

Por otra parte, instrumentalizan un supuesto hecho agresivo poniendo el foco no en la prevención de esa violencia y la protección y el avance de derechos de las mujeres, junto con la individualización del presunto delito, sino en la estigmatización y la represión punitiva a toda una comunidad de jóvenes inmigrantes, particularmente de cultura musulmana.

Su preocupación no es la protección de las mujeres, en particular de las víctimas de violencia machista, que niegan; por el contrario, pretenden esconder las agresiones machistas e impedir el reconocimiento y la reparación de las víctimas frente a los agresores.

Su prioridad es doble. Por un lado, frenar el feminismo, los procesos igualitarios y emancipadores que favorecen a las mujeres, en beneficio de las ventajas y privilegios patriarcales, sin adoptar medidas frente a esa lacra que es el machismo violento, que no sean el tradicional punitivismo legal y represivo.

Por otro lado, afianzar el racismo, con las consecuencias de la segregación social y cultural de la población inmigrante,

particularmente la racializada y de origen magrebí. Se estigmatiza como amenaza para su plan de orden social y homogeneidad cultural, desde un nacionalismo esencialista y excluyente; por tanto, configuran un enemigo interno a erradicar. Se construye un ‘nosotros civilizado’, en posición dominante, frente a un ‘ellos bárbaro’, en posición subalterna. Las derechas extremas generan un conflicto entre esas identidades, solo resoluble, según ellos, por dos políticas: la asimilación forzada, con sumisión y segregación, o la expulsión del país; y, en la práctica, por una combinación de ambas.

Al mismo tiempo, estas campañas de odio, justificación del machismo y violencia racista, con objetivos e intereses más pragmáticos, pretenden consolidar la segregación social, espacial y cultural de esa población inmigrante, así como la subalternidad femenina. Tratan de conseguir dos objetivos complementarios.

Uno, la mayor subordinación laboral y vital, como mano de obra barata en el mundo económico-empresarial, que presione a la baja las condiciones y derechos de la población autóctona; así, se incrementa su división, insolidaridad e inestabilidad.

Dos, una contención de la diversidad étnica y cultural, para mantener la supremacía de su nacionalismo excluyente, pero que reclama diálogo cultural y cierto mestizaje voluntario y cooperativo, con respeto y esfuerzo de convivencia intercultural en la pluralidad, más en una sociedad plurinacional como la española, por parte de la sociedad receptora con perspectiva progresista.

Ambas cosas son imposibles de aceptar por las derechas extremas, que priorizan el nacionalismo identitario conservador, la maximización del beneficio socioeconómico privado y la cohesión cultural y política de una base social reaccionaria amparada en las ventajas derivadas del sometimiento inmigrante y patriarcal.

Se trata, con el apoyo de todos sus aparatos mediáticos, de la penetración del racismo, el machismo y el autoritarismo entre algunas capas populares autóctonas, funcional para sectores del poder establecido, que tiene una doble tarea. Por un lado, recomponer sus

élites dirigentes en un sentido autoritario, en el caso español de refuerzo de VOX en detrimento del PP, frente a su deslegitimación por su gestión regresiva, antidemocrática y corrupta anterior.

Por otro lado, debilitar el campo popular y progresista y el Gobierno de coalición, con la descalificación de su representación social y política, así como, atraer a una base social en descenso y con incertidumbres, respecto de su estatus social, nacional, cultural o de sexo. Su descontento, mediante manipulación, se reorienta hacia la defensa de sus ventajas parciales y un nuevo supremacismo relativo a costa de los escalones más vulnerables: capas precarias, particularmente, de mujeres e inmigrantes.

Es su combate contra lo *woke*, con un enfoque despreciativo hacia los avances en condiciones sociales y derechos civiles beneficiosos para la mayoría de la sociedad. Sobre todo, atacan, en primer plano, las mejoras de carácter feminista o antirracista y, más en general, democráticos y progresistas, incluido el propio Estado de bienestar europeo y los servicios públicos y la acción por la sostenibilidad medioambiental del planeta y frente a la emergencia climática.

En particular, aparte de la segmentación laboral en el mercado de trabajo o en el acceso a la vivienda, que afectan más a la población inmigrante o recién nacionalizada, las propias políticas sociales respecto de la sanidad y la educación públicas de muchas Comunidades Autónomas, especialmente la de Madrid, promueven sistemáticamente, además del recorte de recursos públicos, la discriminación por el estatus social y el origen étnico-nacional.

La desconsideración institucional hacia los menores inmigrantes, junto con la segregación escolar, alimenta la exigencia ultra para imponer la subordinación de una nueva generación joven diversa que, por motivos sociodemográficos, laborales y socioculturales, va a tener un fuerte impacto en el mercado de trabajo, en la convivencia y en la sociedad.

La ultraderecha, se apresta, como en EE.UU. y Europa, a una estrategia autoritaria de dominación y división social, con la

neutralización de las opciones progresistas de integración social, igualdad e interculturalidad.

Por tanto, no estamos solo ante una ofensiva cultural o ideológica ultra, habitual en la interpretación, sobre todo estadounidense, en las décadas pasadas. Desde el primer mandato de Trump y, especialmente en éste, así como en las políticas iniciadas por distintos gobiernos europeos, incluido los socialdemócratas de Reino Unido o Dinamarca, estamos ante una auténtica ofensiva política y relacional derechista, racista y autoritaria.

Lo fundamental, desde una óptica progresista o de izquierdas, en consecuencia, no es solo afrontar una acción cultural o ideológica que cuestione la amplia y persistente difusión de ideas y marcos interpretativos reaccionarios. Esa actividad es necesaria. Pero la estrategia ultra busca apoyos sociales y electorales y, al mismo tiempo, incrementa sus posiciones de poder entre los aparatos del Estado, principalmente, fuerzas de seguridad, judicatura y alta burocracia pública, así como su complicidad con los intereses del gran poder económico, no con su pretendido ‘pueblo’.

Su objetivo último es la conquista del poder institucional, para moldear la sociedad a su plan regresivo y autoritario. Es el sentido del trumpismo, las alianzas de las derechas en Europa y las del PP en algunas Comunidades Autónomas.

Por tanto, la principal tarea progresista es sociopolítica, en el doble sentido de una acción reformadora político-institucional y una actividad relacional y transformadora directamente en la sociedad. Así, hay que abordar una agenda específica de transformaciones sociales e institucionales, de carácter igualitario y solidario que afronte el cambio de las condiciones vitales y culturales de las mayorías sociales. El reto de la regularización inmigrante es inminente. Para frenar la involución derechista, hay que superar las dinámicas segregadoras y discriminadoras que, desde el racismo estructural, afectan a la población inmigrante y recién nacionalizada, así como garantizar la consolidación y el avance en los derechos feministas frente a la involución machista.

Se trata de combinar el debate y la pugna sociocultural con la activación cívica y la gestión institucional por la implementación de una política integral que asegure la convivencia intercultural y el desarrollo social de la población. El futuro del país depende de ello.

Conflicto geopolítico y universalismo moral

Marian Martínez-Bascuñán, prestigiosa politóloga, ha escrito un interesante artículo («Un funeral en Pekín», *El País*, 7/09/2025), sobre China y el universalismo ético. Plantea un debate en profundidad sobre los fundamentos éticos y filosóficos de la tradición occidental y la oriental, en el marco de la reciente escenificación del poderío chino y sus alianzas internacionales.

Aunque haya también una interpretación sesgada de algunas características de las posiciones ideológico-políticas en liza, es una buena base para el debate de este tema crucial, que impacta en la perspectiva estratégica de las izquierdas.

A mi modo de ver, China no defiende el relativismo moral; tampoco que solo le guíe intereses pragmáticos (económicos o geopolíticos). Esto último es verdad, pero también aspira a una hegemonía ideológica y moral, que justifique su compromiso histórico por el nuevo orden multilateral y diverso en cuanto intereses nacionales, geoestratégicos, civilizatorios y de legitimidad internacional. Dejando al margen algunas deficiencias del régimen chino y su especificidad histórica, pretende un equilibrio entre el respeto a esa pluralidad de los sistemas políticos y culturales, con la defensa de la soberanía nacional y un reequilibrio de la tradicional dominación occidental, desde la representatividad de los nuevos poderes emergentes.

Por otra parte, en Occidente se ha disociado ese cierto universalismo ilustrado (democracia, derechos humanos...), con un sentido formalista, de la estrategia y la práctica política concreta de dominación imperial, colonialismo y subordinación de las mayorías sociales. De tal forma que, los llamados valores universales (libertad, igualdad solidaridad...),

han solido reinterpretarse y utilizarse en beneficio de la hegemonía mundial (o en cada país y estructura social) de sus élites dominantes; es decir, en función de otra finalidad práctica dominadora.

El pensamiento y la ética universalistas deben reforzarse, elaborados de forma socio-histórica, no solo por la llamada razón abstracta (frente a ella y su idealismo, Kant ya escribió la *Crítica de la razón pura*) de unas élites autonombradas. Esa actitud moral se debe vincular a la experiencia de las condiciones de vida de los pueblos, así como de las características de sus agentes sociales y políticos y su articulación institucional o régimen político. De ahí la importancia de partir de las relaciones de desigualdad y opresión en estos siglos para definir y concretar los valores universalistas vinculados a la acción liberadora práctica.

Frente al relativismo tradicional o posmoderno ha habido dos grandes corrientes en pugna por hegemonizar ese universalismo en busca de su legitimidad sociopolítica, moral e intelectual: el liberalismo político (no tanto el económico) y el socialismo (más o menos marxista). El desafío consiste en la vinculación de la ética o, si se quiere, los derechos humanos, con la situación concreta de dominación/opresión y su respuesta igualitaria.

Lo que está sucediendo en estas décadas, en especial tras la política dominante de austeridad, ante la crisis socioeconómica de 2008/2013, es la crisis de legitimidad del poder establecido. Pero, esa crisis representativa de las capas dominantes se ha ido acelerando los últimos tiempos, por los cambios en el plano internacional y en el interior de los países centrales, con una recomposición de sus élites dirigentes. Se trata de la quiebra moral de Occidente, y la falsedad de su supuesto universalismo ético y democrático, que se ha utilizado casi solo como justificación de su dominio.

Ejemplos son su debacle moral con el genocidio de Palestina, o la involución democrática y ética de Trump y la ultraderecha, así como la dinámica regresiva del neoliberalismo neoimperialista. Todo ello supone retrocesos en lo social y lo medioambiental, así como mayor racismo y

antifeminismo, que afectan a las mayorías sociales, con un profundo malestar cívico, que se pretende instrumentalizar, manipular y reorientar por todos los actores políticos y mediáticos.

Por tanto, sí es necesario reelaborar un nuevo universalismo moral y político, y no caer en la indiferencia relativista o el nihilismo moral, ni tampoco con su combinación con el pragmatismo inmediateista de la adaptación al poder dominante.

De momento, China parece que pretende unir su interés (legítimo) nacional, geopolítico y cultural-ideológico, junto con una mezcla de marxismo adaptado y confucianismo renovado (recordemos, con puntos similares al aristotelismo); es decir, no parece que defienda el relativismo moral o el simple nacionalismo identitario, sino que busca un nuevo equilibrio, más justo y representativo, del orden internacional y de las reglas y normas de convivencia que mantener en las relaciones entre las naciones y pueblos. Pero, lo hace sin ingenuidad sobre la lucha de poder, incluso militar que amenaza el mundo, buscando alianzas entre países tradicionalmente sometidos a Occidente. Especialmente, pretende contrarrestar el avance trumpista y de la ultraderecha europea, que están reforzando su estrategia agresiva y belicista para frenar su declive económico y político y garantizar su primacía mundial y su dinámica autoritaria.

La población europea, en particular, la izquierda social y cultural, tenemos el reto de reelaborar, como referencia autónoma de estas tendencias imperialistas y autoritarias de EE.UU. y determinadas élites europeas, la aportación geopolítica multipolar y democrática de la mejor Europa. Al mismo tiempo, hay que renovar la tradición emancipadora e igualitaria de la mejor tradición europea (y mundial) y avanzar en un nuevo universalismo moral, basado en esos valores de igualdad, libertad, solidaridad y democracia... y sostenibilidad del planeta y pacifismo.

En definitiva, en el plano teórico (o filosófico) hay que superar esas tradiciones supuestamente universalistas, pero insuficientes y manipuladas, así como las tendencias pragmáticas y relativistas,

presididas por el beneficio propio y el abuso de poder. Es una ardua tarea que refleja la crisis sociopolítica, geoestratégica y moral del mundo actual y las izquierdas en particular, y la necesidad de incardinarse, desde la situación concreta y en defensa de las capas subalternas, en un proyecto universalista emancipador e igualitario.

El papel de las ideas en el cambio político

Acaba de publicarse en la prestigiosa revista *New Left Review*, un amplio ensayo de Perry Anderson, insigne intelectual británico de izquierdas, titulado «[Idées-forces: las ideas y el desencadenamiento de los procesos revolucionarios](#)», sobre este tema crucial para la acción política transformadora. En él se repasa la transición histórica de los distintos sistemas sociales y políticos y, en particular, la ilustración y su relación con la revolución francesa, el marxismo (y el leninismo) con la revolución soviética, y el neoliberalismo, con el cambio en los años ochenta hacia su hegemonía completa. Destaca, por tanto, la importancia de las ideas acumuladas como recursos intelectuales minoritarios que en combinación con una situación de crisis objetiva son capaces de controlar los procesos sociopolíticos progresistas.

El texto sugiere algunas controversias de interés en la tradición de izquierdas, algunas de las cuales paso a comentar brevemente. A mi modo de ver, habría que revalorizar entre las referencias citadas, los enfoques de E. P. Thompson y A. Gramsci que integran la experiencia cívica y la agencia humana, interpretadas teóricamente dentro del conflicto social, como base específica para un cambio igualitario y emancipador de carácter socialista por las fuerzas populares.

En un contexto capitalista y neoliberal como el actual, las fuerzas de izquierdas, aunque consigan una amplia representatividad poblacional y diversas capacidades comunales o asociativas, así como parlamentarias, no tienen un previo poder económico e institucional (o cultural) relevante, desde el que imprimir el cambio político. Dependen más de la

propia articulación social y democrática de las clases trabajadoras y populares.

Hoy, el cambio sociopolítico progresista (por una democracia social avanzada o anticapitalista) se debe apoyar en la fuerza social democrática, con su presencia en las instituciones representativas y en la esfera social y cultural. Hay una diferencia sustantiva con las transformaciones políticas de los siglos XVII, XVIII y XIX, en las revoluciones ‘burguesas’, en las que las fuerzas dominantes frente al Antiguo Régimen contaban con un peso importante en el control de la estructura económico-mercantil y política; tenían ya cierto poder institucional-estructural y lo completaban con su labor de hegemonía cultural y cambio de régimen político.

En la actualidad, para un cambio de orientación socialista y de izquierdas, es fundamental la participación cívica, masiva y democrática, o, si se quiere, la lucha de clases o la pugna social desde abajo. Es decir, la convergencia del conjunto unitario de conflictos sociales progresistas, incluido en el campo socioelectoral, en el que interviene la subjetividad transformadora y la capacidad articuladora de las mayorías sociales.

Esa agencia humana por el cambio igualitario frente a las dinámicas reaccionarias y autoritarias, acelerado en una encrucijada estratégica de crisis socioeconómica, política y de legitimidad de los poderosos, sería el motor de la historia. Por tanto, no sería el desarrollo de las fuerzas productivas, que dice el materialismo vulgar o economicismo, ni la propaganda ideológica desde arriba, que expresa el idealismo discursivo voluntarista. Ambos elementos, el realismo estructural de las relaciones de fuerzas y las condiciones socioeconómicas, por sexo-género y étnico-nacionales, por un lado, así como las características culturales, la consciencia social y la pugna por la hegemonía ideológica, por otro lado, se interaccionan y combinan en esa práctica social emancipadora de las capas subalternas y la voluntad y capacidad de sus liderazgos o, bien, su representación social, política e intelectual.

En definitiva, lo fundamental para el cambio social y político — igualitario, emancipador y solidario—, no es la guerra cultural ni el desarrollo productivo, dicotomía estéril, dominante entre las izquierdas en estas décadas, sino, siguiendo a lo mejor de la tradición crítica de las izquierdas, la experiencia masiva, democrática y democratizadora, por la transformación de las condiciones y derechos de las mayorías sociales, decisivas para el arraigo social de sus organizaciones, con la generación de dinámicas contra hegemónicas y de (relativo) poder popular.

Así, es decisiva la participación mayoritaria en una dinámica transformadora, articulando toda su diversidad y pluralidad. Lejos de ambos determinismos unilaterales, de carácter idealista, se revaloriza el papel sociohistórico de la agencia humana, o sea, la práctica social; o, si se quiere, la acción colectiva sociopolítica y cultural, con los valores de igualdad, libertad y solidaridad.

5.3 El debate sobre las identidades colectivas

Introducción

Este ensayo trata sobre el sentido de las identificaciones colectivas, ambivalentes desde el punto de vista de su significado ideológico y político, la conveniencia de la identificación feminista y antirracista, con una perspectiva igualitaria-emancipadora, la vinculación de la identidad colectiva con la formación del sujeto social, y la combinación e interseccionalidad de sus identificaciones parciales, junto con el carácter

sociopolítico de ciudadanía y el universalista como ser humano. Tiene un enfoque sociohistórico. Se trata de analizar el proceso de conformación de los sujetos sociales y superar, por un lado, el simple identitarismo particularista posmoderno, y por otro lado, el universalismo abstracto e indiferenciado, de carácter liberal.

En este tiempo que hay una ofensiva ultraconservadora contra las identidades progresistas, descalificadas por las derechas extremas como *woke*, es imprescindible clarificar el sentido de las identidades, en particular la feminista, y su interacción multidimensional y relacional para reafirmar una dinámica igualitaria y emancipadora y superar el individualismo abstracto.

Por un lado, hay que constatar las desigualdades por motivos étnico-culturales o de raza, con particular impacto en las personas inmigrantes, con un fuerte crecimiento en España, y la necesidad de priorizar la defensa de sus derechos e intereses; se trata de desarrollar una cultura antirracista, decolonial e intercultural, clave para la integración social y convivencia sociocultural en las clases populares españolas y europeas.

Por otro lado, existe una ofensiva política, relacional y cultural de carácter reaccionario y ultraconservador de las nuevas fuerzas de extrema derecha que pretenden hacer retroceder los derechos feministas hacia un modelo tradicional y patriarcal de subordinación femenina; requiere una trayectoria democratizadora y antiautoritaria, común a otras fuerzas sociales.

De ahí, el carácter más multidimensional, interseccional e inclusivo del presente feminismo, abarcando toda la diversidad y complejidad de la acción emancipadora, con la conformación de un proceso unitario y complementario de problemáticas singulares, sujetos colectivos e identificaciones parciales, en una dinámica cooperativa de respuesta y, al mismo tiempo, de conjunción y superación, en un proceso identificador feminista más global e interrelacionado respecto de las especificidades y la diversidad de cada dinámica particular, que evite sus efectos disgregadores.

Se trata de fortalecer el feminismo frente al machismo, de articular procesos identificadores de ese sujeto colectivo, anclados en la realidad de opresión específica pero asociada a la dinámica social y cultural progresista y los valores universalistas de igualdad, libertad y solidaridad, constitutivos del feminismo en estos más de dos siglos. Supone continuidad emancipadora y renovación y adecuación práctica y teórica ante las nuevas realidades sociales.

El sentido de la identidad

Desde la sociología crítica la pertenencia e identificación colectivas progresistas se van formando a través de las relaciones sociales, sobre la base de una práctica social prolongada, una interacción relacional solidaria tras los objetivos de libertad, igualdad y reciprocidad. El hacerse e identificarse feminista es una conformación social, procesual e interactiva: supone comportamientos duraderos igualitarios-emancipadores y solidarios, interrelacionados con esa subjetividad. Es la experiencia vital, convenientemente interpretada, la participación en la pugna social y cultural en sentido amplio, incluyendo hábitos, estereotipos y costumbres además de subjetividad, frente a la desigualdad y la discriminación, la que va formando la identidad feminista, o cualquier otra de capas subalternas, como la identificación de clase, la identidad nacional y la antirracista o decolonial. El componente social de la interacción humana es el principal para forjar el reconocimiento y las pertenencias grupales e individuales y dar soporte a la acción colectiva.

Estos dos conceptos, identidad e interseccionalidad, han recobrado relevancia en el pensamiento social y, en particular, para la teoría feminista y el discurso étnico-nacional o antirracista. Hacen referencia a algunas características de los grupos sociales, su reconocimiento y su relación, que conforman su actitud sociopolítica en un contexto de grandes transformaciones sociales. Por separado pero, sobre todo, juntos, ayudan a explicar la formación de nuevos actores (o sujetos),

individuales y colectivos, y sus procesos participativos y colaborativos en el marco del cambio sociocultural y político. Conllevan una experiencia relacional diversa que se combina con lo común de la interacción humana, al mismo tiempo que con su pluralidad.

En la identidad feminista influye el sexo (mujer) y el género (femenino). Pero no de forma determinista, sea biológica o estructural. Sí tiene importancia la realidad vivida, sentida y percibida de una desigualdad injusta, es decir, la pertenencia a un grupo social discriminado y con desventajas concretas o, bien, con suficiente sensibilidad y solidaridad respecto de su situación.

Pero, sobre todo, el elemento sustantivo que configura ese proceso identificador feminista es la acción práctica, los vínculos sociales, la experiencia relacional por oponerse a esa subordinación y avanzar en la igualdad y la emancipación de las mujeres. La identificación feminista deriva del proceso de superación de la desigualdad basada en la conformación de géneros jerarquizados. Se trata de la actitud transformadora respecto de las funciones sociales, productivas y reproductivas desventajosas para la mitad de la población. Supone un cambio de su estatus vital subordinado.

La formación de un sujeto unitario superador de los sujetos o actores parciales va más allá de un liderazgo común (simbólico y legítimo), un objetivo genérico compartido (la democracia y la igualdad) o un enemigo similar (el poder establecido patriarcal-capitalista). Es un proceso sociohistórico y relacional complejo que necesita una prolongada experiencia compartida que debe superar las tensiones derivadas de los intereses corporativos y sectarios de cada élite respectiva, con su rigidez doctrinal legitimadora, que muchas veces reclaman su primacía haciendo pasar, incluso con prepotencia, sus intereses particulares e identidades específicas como los comunes o universales para el conjunto.

Las identidades, frente a los esencialismos deterministas, se construyen social e históricamente; son diversas, variables y contingentes. La identidad, como pertenencia colectiva y

reconocimiento público, tiene un anclaje en una realidad material, institucional y sociocultural, en su contexto histórico; encarna una dinámica sustantiva de las relaciones sociales. Las identidades se configuran a través de la acumulación de prácticas sociales continuadas, en un marco estructural y sociocultural determinado, que permiten la formación de un sentido de pertenencia colectiva a un grupo social diferenciado con unos objetivos compartidos.

La conveniencia de la identificación feminista

En la medida que se mantenga la desigualdad y la discriminación de las mujeres, sus causas estructurales, la conciencia de su carácter injusto y la persistencia de los obstáculos para su transformación, seguirá vigente la necesidad del feminismo, como pensamiento y acción específicos. Y su refuerzo asociativo e identitario, inclusivo y abierto, será imprescindible para fortalecer el sujeto sociopolítico y cultural llamado movimiento feminista y su capacidad expresiva, articuladora y transformadora. No es tiempo de un postfeminismo abstracto, sino de un amplio feminismo crítico, popular y transformador frente a la pasividad o la neutralidad en este conflicto igualitario-emancipador. Eso sí, con una perspectiva integradora y multidimensional que le haga converger con los demás procesos emancipatorios. Igual ocurre con otros movimientos sociales progresistas.

Desde ese punto de vista, al igual que necesitamos más y mejor identificación feminista, precisamos más y mejores sujetos feministas; por supuesto, abiertos, plurales y en formación. En este caso, la identidad o el sujeto feminista, como partícipes de un proceso igualitario-emancipador, se diferencian de la identidad de género, que expresa la realidad diversa de las mujeres y sus específicos y variados estatus sociales y culturales.

En definitiva, el feminismo, con sus distintos niveles de identificación y pertenencia colectiva y su pluralidad de ideas y prioridades, es un movimiento social, una corriente cultural, un actor

fundamental que, en una acepción débil, se puede considerar un sujeto sociopolítico en formación, inserto en una renovada corriente popular más amplia que califico de nuevo progresismo de izquierdas, con fuertes componentes ecologistas, antirracistas y feministas.

Los procesos identificadores progresistas (a veces descalificados como *woke*) son procesos democratizadores, igualitarios, críticos frente a los poderosos y con una orientación transformadora de progreso. Pero esta experiencia, ya nos indica la superación de la rígida separación entre los componentes culturales, la redistribución y la firmeza democrática y participativa frente al poder establecido.

Con la crisis socioeconómica, especialmente, ya no se pueden separar las demandas clásicas de la izquierda —igualdad social, derechos sociolaborales, protección pública, servicios públicos de calidad, empleo decente, regulación y renovación de la economía y del aparato productivo— de reclamaciones, por ejemplo feministas, que ya no son solo culturales sino que tienen impacto evidente con las estructuras sociales y los comportamientos colectivos: contra la violencia machista y por la libertad sexual, por un reparto igualitario de los cuidados y la reproducción social, contra la precariedad laboral femenina y las brechas de género, por un reconocimiento y relaciones de estatus igualitario.

En definitiva, en el debate sobre el sujeto y la identidad feminista, que no femenina, habría que superar los determinismos sociodemográficos y estructurales, así como los idealismos culturalistas de priorizar, para definir su carácter, los proyectos y aspiraciones, aunque sean también importantes. A partir de la realidad de desigualdad y subordinación de las mujeres —y otros grupos subalternos— e integrando las demandas de sus derechos igualitarios-emancipadores, debería ponerse el acento, desde esta interpretación relacional y crítica, en los procesos de identificación colectiva derivados de unas prácticas sociales, unos comportamientos o unas costumbres comunes que establecen unos vínculos sociales y una cultura sociopolítica con ese

carácter feminista. Es el nexo social y realista para una transformación sociopolítica hacia la libertad y la igualdad.

La identidad colectiva, inseparable del sujeto social

La identidad, personal y grupal, es inseparable de la posición social y su experiencia vital y relacional. Los procesos de identificación colectiva, de pertenencia compartida a un grupo social diferenciado, se vinculan con la conformación sociohistórica de los sujetos sociales, siempre en interacción y recomposición. Su configuración y su evolución no dependen solo de la transformación de la subjetividad, las mentalidades y el deseo, sino de la existencia de una voluntad de cambio, junto con el despliegue continuado e interactivo de su práctica social: sociopolítica, económica, cultural, étnico-nacional, de género-sexo. Se trata de superar, de forma realista y multilateral, la dicotomía convencional entre sujeto / objeto o bien necesidad / libertad, sin caer en determinismos ni en voluntarismos.

Por otro lado, la identidad es el resultado del pasado y el presente de la persona, de sus vivencias y relaciones sociales; pero también incorpora sus proyectos e ilusiones que modelan sus comportamientos inmediatos. No tiene razón Sartre cuando afirma que la identidad es solo expresión del pasado y que el futuro es libertad... luego sería conveniente no aferrarse a la identidad para poder ser más libre; es un enfoque individualista que infravalora el vínculo social como condición para la sociabilidad y la propia emancipación. La relación social, si es una relación desigualdad y de dominación / subordinación puede coartar la libertad individual y colectiva e imposibilitar la reciprocidad y el contrato social. Igualmente, la identidad es ambivalente, puede tener componentes positivos y negativos; refleja una pertenencia colectiva y un reconocimiento social de un estatus determinado, pero hay que contextualizar su sentido y su orientación, emancipadores o de subordinación relacional.

En todo caso, lo que somos no nos determina, la identidad no necesariamente es fija ni nos restringe, la vamos cambiando y regula nuestra libertad de acción y pensamiento. Tampoco es acertada la idea de que la identidad se construye hacia adelante, no hacia atrás; se priorizaría el criterio hegeliano, supuestamente inscrito en su ley histórica, del deseo o la aspiración a la plenitud humana (autorrealización) como base de la construcción identitaria. Parafraseando a Simone de Beauvoir, la mujer se hace, por su relación social experimentada, pensada y proyectada; no nace, pero tampoco depende solo del futuro y sus ilusiones. Su identidad forma parte de su devenir real y su interacción colectiva. Prima una perspectiva relacional o social e interactiva.

La combinación de identificaciones

Todo individuo y grupo social tiene diversas identidades, más o menos complementarias, desiguales en su importancia, asimétricas en su combinación y jerarquía interna y variables en su impacto expresivo en cada momento y circunstancia. O sea, se produce una suma, convergencia, equilibrio inestable o integración más o menos coherente de sus identidades, con el despliegue de variadas representaciones, subjetividades y funciones sociales, que no son especialmente identitarias. La identidad recoge los rasgos psicológicos de un individuo o colectividad, pero también las características posicionales y culturales que permiten el autorreconocimiento y el reconocimiento de los demás; es decir, expresa el sentido de pertenencia a un grupo social, hacia dentro y hacia fuera del mismo. Esa actuación prolongada, compartida y reconocida conforma el sujeto social.

Por último, la combinación de distintas identidades parciales de carácter sociopolítico y cultural, fuertes o débiles, y la expresión de cada combinación de ellas en el tiempo, en cada individuo y grupo social, ofrece unas características identitarias en el sentido más concreto: étnico-nacionales, de sexo/género y clase social, o de grupos específicos

con distintas opciones y preferencias. Pero están ligadas a una situación e identificación más general en dos planos diferentes.

Uno, en la pertenencia sociopolítica a una comunidad política, desde el punto de vista de sus derechos y deberes cívicos, independientemente de sus características particulares: es el sentido de una ciudadanía política compartida, que puede ser multinivel, local, nacional o estatal, europea, mundial.

Otro, la pertenencia a la humanidad, a nuestra especie, como rasgo común de las personas de todo el mundo, con unos derechos humanos fundamentales compartidos por toda la población y una identificación común como ser humano. Y, especialmente, en su ejercicio sociopolítico y cultural según los contextos. No se trata solo de cierto cosmopolitismo y un universalismo ético existente en todas las personas, sino que esos componentes se integran también junto con los demás en la identidad y el carácter del sujeto y pueden tener un mayor o menor impacto en su carácter, su comportamiento y sus aspiraciones.

Por tanto, la combinación en cada individuo y grupo social de esa multiplicidad identificadora, con el peso diferenciado de cada componente, positivo o negativo (o neutro), según qué procesos, incluidos los más generales de la ciudadanía y la pertenencia humana, ofrece un panorama no estrictamente fragmentado de su identidad, como gran parte de las ciencias sociales asegura; ni tampoco unificado, como otra parte afirma al intentar meter la realidad diversa en supuestas categorías homogeneizadoras, insensibles a esa diversidad, o subordinar algunas de ellas a una supuesta identidad superior, sea de clase, nación o particularidad esencialista. El conjunto de identificaciones asimétricas, por la jerarquización de su importancia o su desarrollo en cada situación particular, configura distintas expresiones unitarias en (des)equilibrios diversos y en transformación.

El significado de la interseccionalidad

El concepto de interseccionalidad apunta a ese análisis, aunque hay que evitar quedarse en una simple descripción o una constatación formalista de la multiplicidad identitaria. Hay que comprender sus interrelaciones internas para explicar su impacto normativo, relacional o sociopolítico, es decir, su configuración como sujeto activo superador de cada actor particular, llámese pueblo, proletariado o movimiento popular de movimientos sociales.

Mi interés es poner el acento en la capacidad articuladora, conformadora o transformadora de los seres humanos y sus relaciones a través de su experiencia vital, multidimensional e interactiva. La sociedad es diversa. Las relaciones sociales, sin reducirlas a relaciones de poder o de dominación, también son ambivalentes; el sentido político o ético de las interacciones humanas expresa la pugna y la colaboración de proyectos individuales y colectivos en procesos relacionales multidimensionales y en diferentes niveles.

En definitiva, las grandes identidades tradicionales, especialmente las derivadas de las relaciones machistas, la subordinación y precarización popular y los reajustes étnico-nacionales dominantes, con sus jerarquías valorativas, están en crisis y cambio. Hay una nueva pugna por su nueva conformación, su interrelación interna y su papel: desde la reacción defensiva y fanática de las anteriores identidades tradicionales, a la reafirmación en identificaciones parciales o fragmentadas. La construcción de nuevas identidades y, sobre todo, de los nuevos equilibrios, personales y grupales, de su heterogeneidad, es lenta e incierta y exige realismo, reconocimiento, tolerancia, negociación, mestizaje y convivencia; en resumen, respeto al pluralismo, igualitarismo, capacidad integradora y talante democrático.

Por tanto, hay que superar cierto pensamiento posmoderno, fragmentario e individualista, así como la rigidez unificadora y esencialista de algunas teorías modernas y premodernas, sean asimilacionistas ante la diversidad o prepotentes respecto de las minorías. En ese sentido, la identidad feminista es fundamental para las

mujeres, como expresión de su situación específica de discriminación y su demanda de igualdad y emancipación, a integrar con sus otras identidades en una pertenencia diversa y conectada con una identidad cívica, más general, democrático-igualitaria y solidaria, así como en una conducta e interacción prologada de carácter igualitario-emancipador que constituye la identidad sociopolítica y cultural feminista, más universalista.

Hay que superar la política basada en las emociones o en la simple racionalidad abstracta y, en particular, también un feminismo o una identidad de género solo emocional y/o solo racional. La posición social y la experiencia relacional y cívica son fundamentales; las condiciones, intereses, trayectorias y necesidades sociales configuran un punto de partida para la emancipación. Los sujetos colectivos, en particular el movimiento feminista, expresan una particular combinación de emociones, razones, estatus social, experiencia relacional y proyectos de vida. La igualdad, la libertad y la solidaridad siguen siendo referencias universalistas y transformadoras.

En consecuencia, el sentido del feminismo es combatir el sometimiento de las mujeres, superar su situación impuesta de desigualdad y opresión para que puedan ser personas libres. La situación y la identidad de género mujer conlleva una posición de subordinación derivada de la desigual división sexual del trabajo productivo y reproductivo, público y privado, que el feminismo pretende superar mediante un proceso igualitario-emancipatorio que configura la identidad feminista de las mujeres. Se replantean las femineidades y las masculinidades y su interacción, y se forman nuevas identificaciones.

Por tanto, la clave del feminismo es conseguir la igualdad de género o entre los géneros, superar las desventajas relativas y la discriminación de las mujeres. Dicho de otro modo, el objetivo es que la diferenciación de géneros y su construcción sociohistórica no supongan desigualdad real y de derechos y, por tanto, no tengan un peso sustantivo en la distribución y el reconocimiento de estatus y poder.

En ese sentido, se rompen los géneros como funciones sociales desiguales impuestas por el orden establecido, patriarcal-capitalista, que se ve favorecido por esa segregación por sexo. Supone un largo y persistente proceso individual y colectivo para superar las profundas causas estructurales y de dominación en que se basan esa segmentación.

La acción igualitaria y la emancipadora están entrelazadas frente a una realidad social ambivalente, en particular, respecto de las tres grandes categorías de dominación/subordinación: clase social, sexo/género y raza o étnico-nacional. La reacción ultraconservadora contra lo *woke* pretende frenar este proceso liberador. No obstante, como práctica social e interacción sociopolítica y cultural, que afecta a los grupos sociales subalternos, ambas dinámicas sociohistóricas conforman un proceso de identificaciones colectivas multidimensionales, interseccionales e interactivas y forman los sujetos colectivos transformadores.

5.4 Acerca de lo *woke*: experiencia, identitarismo y universalismo

Introducción

Woke, en su significado literal en inglés, deriva de ‘despertar’, estar consciente de algo. De entrada, no define sobre qué, es decir, puede ser ambiguo desde el punto de vista político o ideológico. Para aclarar su sentido, hay que tener en cuenta el contexto sociohistórico en el que se

divulga esa expresión: quiénes y ante qué hechos sociales son conscientes, y qué orientación relacional y actitud transformadora promueve esa consciencia. Desecho el carácter despectivo utilizado por la reacción derechista.

Aunque tiene algunos precedentes, este significante se fue generalizando en la comunidad afroamericana de Estados Unidos, en los años sesenta, en el marco de la creciente conciencia social de la existencia de discriminación racial, de su carácter injusto y la actividad masiva por los derechos civiles. Era un potente movimiento igualitario que tenía, sobre todo, un contenido antirracista, pero no solo. Desde el principio las mujeres afroamericanas tuvieron un gran protagonismo y le dieron a ese movimiento un sesgo feminista que se desarrolló más con la campaña *Black Lives Matter* ('Las vidas negras importan'), en la década pasada. Se incorporó, incluso, una tendencia de clase social, claramente desde el impacto del partido de los *Panteras Negras* y la composición trabajadora de la mayoría afroamericana.

Paralelamente, desde los años sesenta, y también en Europa, se desarrolla la nueva ola de feminismo por la igualdad —por la redistribución y el reconocimiento—, desde la percepción cívica de la situación de subordinación y desventajas de las mujeres respecto de una estructura social y familiar que privilegiaba las relaciones patriarcales favorables a los varones y al propio sistema de opresión capitalista, sin suficiente protección pública, mientras estimulaba la segregación social y la división popular.

La conciencia de la discriminación femenina —lo *woke*— se va combinando con prácticas sociales liberadoras, y se va conformando un proceso transformador de esas relaciones desiguales, con cambios en múltiples esferas vitales, culturales e institucionales: desde la discriminación por los distintos papeles sociales y familiares y los estereotipos de género, hasta la sexualidad y las mentalidades tradicionales, los sistemas reproductivos y de cuidados o la segmentación laboral y remunerativa por sexo. Se genera, durante varias décadas y hasta la última ola contra la violencia machista, una potente

movilización feminista y solidaria de profundo cambio social y cultural, de carácter emancipatorio e igualitario.

Lo *woke*, como inicial denominación de la concienciación de la discriminación y la desigualdad, en particular en esos dos grandes campos sociales, la población racializada y la femenina, se va ampliando a la consciencia de la discriminación hacia otros sectores sociales, especialmente a los colectivos LGTBIQ+ y otros grupos marginados por su origen étnico-nacional o su estatus social y cultural subalterno.

A ello habría que añadir, por su especificidad temática, el movimiento pacifista, muy potente en su oposición a la guerra de Vietnam y, en Europa, frente a la OTAN y los riesgos de guerra, en los ochenta, así como el movimiento ecologista, frente a los crecientes peligros de la crisis energética, climática y ambiental. Ambos no se definen por sus características grupales sino por su actividad frente a los riesgos geopolíticos o medioambientales con una conciencia pacifista y ecologista, el llamado ecopacifismo.

Como antes los grandes movimientos sociales, el movimiento obrero y sindical, el vecinal o los movimientos nacionales emancipadores y antimperialistas, esas dinámicas participativas, reivindicativas y expresivas van generando vínculos de pertenencia colectiva y de apoyo mutuo. La experiencia prolongada e interactiva de una actividad relacional compartida, desde situaciones discriminatorias similares y objetivos igualitarios afines, va generando identificaciones grupales que permiten conformar sujetos colectivos, más o menos convergentes, al mismo tiempo que opuestos a adversarios comunes.

En la realidad estadounidense, más diversa y fragmentaria, así como en la europea, se van formando nuevos movimientos sociales, con una composición popular particular en torno a una trayectoria específica, generalmente de carácter progresista, con puntos semejantes de sus componentes y elementos diferenciados del resto de grupos sociales. A veces se han considerado movimientos identitarios, o basados en la exigencia de políticas de identidad, con valoraciones controvertidas. En

todo caso, se justifican en la existencia de discriminaciones específicas con demandas compensadoras de las desventajas, con una finalidad igualitaria. Suponen reconocimiento propio, ‘orgullo’ grupal, frente a la marginación social y simbólica que impone el supremacismo racista o machista.

En esta aproximación inicial, los podemos definir por su acento en sus características grupales diferenciadas, con reivindicaciones particulares y representaciones colectivas específicas. En ocasiones, existe una rigidez exclusivista o corporativa, en tensión con otros rasgos positivos, complementarios y superadores de esa inclinación inmediateista e intolerante: la apertura relacional, la interacción temática interseccional, la relación de cada movimiento con un proyecto y una dinámica más global, así como su carácter *movimentista* y autónomo dentro de su articulación con la acción político-institucional y su vinculación con un proyecto de cambio más general.

La realidad de estos movimientos sociales o movilizaciones colectivas, dejando aparte las dinámicas reaccionarias, ultraconservadoras o fundamentalistas, han tenido y tienen un carácter progresista aun con sus limitaciones fragmentarias, inmediateistas o corporativas, como ha sido habitual en la acción colectiva popular. En ese sentido, hay que entrar en el detalle de cada situación concreta, tal como se viene haciendo desde la sociología de los movimientos sociales y la acción colectiva. Las críticas y debates sobre ellos, más generales, son diversos y con distintos enfoques ideológicos e intereses políticos. Más tarde hago alusión a algunos.

Análisis concreto de la situación concreta

Es importante tener en cuenta y valorar la especificidad de la experiencia española, ámbito más inmediato de elaboración de una respuesta a este problema de fondo: la articulación de la acción colectiva y la movilización popular con una dinámica de cambio global de progreso, así como su conexión con la formación de sus élites

representativas y la elaboración de una teoría social crítica que mejore su capacidad interpretativa y orientadora.

Se trata de profundizar en las particularidades españolas, sobre su diversidad social y política, y no repetir esquemas interpretativos referidos a otras realidades. En especial, hay que tener en cuenta la experiencia popular de acción cívica, con sus marcos socioculturales y los procesos democratizadores, junto con algunas particularidades significativas como la incorporación reciente de la inmigración y la articulación territorial y de la plurinacionalidad.

Por tanto, es necesario un doble esfuerzo interpretativo y crítico, desde cierta orfandad teórica, ya que la teoría social está bastante estancada y con diversos sesgos que dificultan el análisis. Y siempre contando con que, en general, la práctica social suele ir por delante de la teoría, y hay que ir planteando problemas y dilemas que, en la medida que son manifestación de amplias experiencias populares, demandan una explicación de conjunto y una orientación transformadora.

En ese sentido, con un enfoque sociohistórico, hago un repaso sintético de la experiencia de los movimientos sociales en España, parcialmente diferente de la de Estados Unidos, desde donde viene la mayor parte del bagaje analítico, teórico y normativo sobre este tema.

Adelanto dos características específicas para tener en cuenta. Aquí la inmigración es más reciente, con un ritmo, dimensión, composición y articulación diferentes y emergente, incluida la actual virulencia de la reacción ultra. Por ello es distinta, respecto de la realidad estadounidense o de los países europeos centrales, la doble dinámica interactiva. Por un lado, el racismo, el llamado supremacismo blanco, autoritario e identitario esencialista, con la creciente reacción ultraconservadora y derechista. Por otro lado, los variados procesos de la integración social y la interculturalidad con la comunidad autóctona, por parte de las distintas partes de la población inmigrante (latinas, magrebís-musulmanas, subsaharianas, del este europeo), incluida la primera generación infantil y juvenil ya nacida aquí y la nacionalizada.

Pero, sobre todo, a partir de esa nueva realidad, hay que valorar la actual conformación de la conciencia social de las desigualdades étnicas y nacionales y las dinámicas neocoloniales, respecto de las poblaciones del Sur global, así como la dimensión creciente de las actitudes de solidaridad y antirracismo —incluida la reciente de la solidaridad propalestina—, entre la población autóctona y, especialmente, el despertar en sus derechos de la propia población de origen migrante.

Igualmente, es singular la conexión interseccional de movimientos sociales —parciales—, iniciativas de acción colectiva, articulaciones asociativas y actividades socioculturales, que tienen distinto impacto sociopolítico y diferente combinación entre ellos pero que, al mismo tiempo, mantienen otras características comunes. Una, la configuración de una base social compartida, que llamo progresismo de izquierdas —rojo, verde, violeta—. Otra, un significativo proceso participativo y democratizador en el cambio sociopolítico e institucional, desde la acción antifranquista y la transición democrática, que ha permitido la configuración de una amalgama de corriente social crítica, con varias oleadas de regeneración juvenil y renovación político-cultural de las élites asociativas y de izquierda. Todo ello, con altibajos en su activación y su impacto sociopolítico y con distintos protagonismos simbólicos y articulaciones representativas —incluidas referencias culturales, artísticas o deportivas—.

Una rica y particular experiencia cívica

En España también hemos tenido una rica y particular experiencia expresiva y articuladora de movimientos sociales, con interacción entre ellos y con dinámicas transformadoras progresistas más globales. Esa práctica colectiva, acumulada en estas décadas, ofrece una peculiar característica, más multidimensional, para abordar este tema de la formación de identificaciones colectivas y su interacción, así como la relación entre su especificidad y su generalidad. Veamos algunos rasgos básicos de las últimas etapas.

La más amplia, profunda y duradera experiencia sociopolítica, en los años setenta, estuvo constituida por la combinación de movimientos sociales progresistas y movilización democrática antifranquista. Se conformó, por un lado, por el impulso del movimiento obrero y sindical, junto al vecinal y el estudiantil, así como por el movimiento feminista y los procesos de reivindicación de los derechos nacionales en diversos territorios; por otro lado, por la acción colectiva antifranquista y por las libertades civiles, sociales y políticas, con un significativo carácter antirrepresivo y solidario y un relevante papel de las izquierdas para la conquista de la democracia.

La trayectoria sociopolítica de una amplia base progresista y de izquierda social, aparte de un fuerte componente juvenil, tenía un perfil democratizador, igualitario y cooperativo. Se interrelacionaba la lucha concreta por motivos inmediatos desde situaciones específicas, gente especialmente afectada o dinámicas sectoriales y locales, con una relevante y continuada acción democrática y, en algunos sectores de izquierda, por un cambio social e institucional más avanzado.

Podemos decir que había una fuerte imbricación o interseccionalidad en un doble sentido: por una parte, la interacción popular, a través de la participación e intercomunicación de las experiencias compartidas de acción colectiva y legitimidad cívica; por otra parte, la conexión de dinámicas reivindicativas y objetivos inmediatos y concretos, con aspiraciones y exigencias más generales, de tipo político-democrático o de solidaridad.

En los años ochenta, con unas características especiales, así como en las dos décadas siguientes, se disociaron dos procesos articuladores de experiencia sociopolítica e impacto identificador. Primero, una cierta dinámica de estabilización político institucional, en el marco del asentamiento bipartidista del nuevo régimen político democrático, junto con la crisis política de las izquierdas transformadoras, aun con su lenta y parcial recomposición.

Segundo, una reactivación de la movilización popular y de clase trabajadora, principalmente con el movimiento pacifista contra la

OTAN, el movimiento sindical contra la precariedad laboral y por el giro social y el movimiento feminista, con gran potencia expresiva y de base; todos ellos con la diferenciación —incluso oposición— respecto de la socialdemocracia gobernante. A ellos se unió, con discontinuidades, el movimiento ecologista, y más adelante, en los primeros años dos mil, la movilización cívica contra la participación española en la guerra de Irak y el militarismo estadounidense, en este caso, posición crítica compartida con la socialdemocracia española —y el eje francoalemán—.

Todo ello, con altibajos, produce una particular experiencia colectiva de esa izquierda social o progresismo rojo (laborista), verde (ecopacifista) y violeta (feminista) que se va sedimentando en sus mentalidades y actitudes a través de dos factores.

Uno, la dimensión masiva y las características progresistas de la acción colectiva y su amplia legitimidad pública, más autónoma de lo político-institucional (aunque el Partido Socialista siga teniendo la primacía electoral). Llegaron a tener gran impacto sociopolítico, a través de amplias campañas en las que una u otra movilización colectiva y su correspondiente élite sociopolítica tenía, coyunturalmente, un papel más relevante en la representación del conjunto y acogía la capacidad expresiva del malestar social y democrático existente.

Dos, la menor capacidad articuladora de las organizaciones políticas de izquierdas y su discontinuidad como mediadoras y representantes institucionales de las corrientes sociales progresistas, el distanciamiento de gran parte de la izquierda social respecto de la socialdemocracia gobernante y la reconfiguración del espacio de Izquierda Unida y diversos nacionalismos de izquierda.

Por tanto, a diferencia de la anterior etapa de movimiento antifranquista y transición democrática, en esta larga fase de tres décadas, se produce una relativa disociación entre el campo sociopolítico y cultural, relativamente activo, aunque heterogéneo y discontinuo, y el campo político-institucional y electoral, dominado por la socialdemocracia gobernante y el bipartidismo.

En este periodo perviven dinámicas movilizadoras y participativas, algunas muy amplias y contundentes frente a los poderes establecidos, con identificaciones parciales significativas, así como élites asociativas, incluido el sindicalismo, que pugnan por su influencia y legitimidad particular. Han configurado importantes pulsos sociopolíticos y democráticos, como en el referéndum contra la permanencia en la OTAN —con un apoyo al NO del 43% de los votantes, siendo mayoría en Catalunya, Euskadi, Navarra y Canarias—; o la gran huelga general del 14 de diciembre de 1988, con apoyo masivo, contra la precariedad laboral y por el giro social. Así, se constituyen empoderamientos colectivos, referencias simbólicas y culturales, representaciones sociopolíticas específicas e intersecciones colaborativas más amplias. Constituyen procesos identificadores de un campo sociopolítico crítico con la gestión del poder establecido.

No obstante, no hay una traslación de una masividad equivalente hacia la formación y la pertenencia partidista a un bloque político e institucional transformador, aun contando con la presencia emergente, a finales de los ochenta y primeros de los noventa, de Izquierda Unida y las izquierdas nacionalistas. La expresión partidaria y la presencia institucional de un proyecto de cambio global, protagonizado por la izquierda política transformadora y alternativa, se había debilitado, tras su profunda crisis en los primeros tiempos de la estabilización democrática.

Al mismo tiempo se dan distintas fases de la situación social y en la gestión gubernamental socialdemócrata y los procesos de reformas —o recortes— sociales e institucionales, que condicionan la consistencia de la protesta social progresista. El cambio cualitativo se produce con la crisis socioeconómica (2008) y las políticas de austeridad de 2010/2012, junto con el correspondiente movimiento de protesta e indignación, conocido por el movimiento 15-M, con su conversión parcial más adelante en un campo político electoral e institucional diferenciado del Partido Socialista y la articulación de una nueva izquierda alternativa: Podemos, su alianza en Unidas Podemos y sus convergencias

territoriales y, más tarde, con la formación de Sumar y la división existente con Podemos, con difíciles perspectivas. Aparte está la persistente relevancia de las izquierdas nacionalistas.

Nueva etapa y un futuro en la encrucijada

En los últimos quince años entramos en una nueva etapa de esta configuración de movimientos populares —parciales— y una vertebración política más institucional. Se produce la explosión de la movilización cívica, sobre todo juvenil, simbolizada por el movimiento 15-M, frente a los recortes sociales y por la democratización, así como la posterior articulación político electoral de esa ciudadanía indignada con las llamadas fuerzas del cambio de progreso o nueva izquierda alternativa, que adquiere una significativa influencia político-mediática e institucional en los gobiernos de coalición progresista. Se pueden mencionar cuatro procesos paralelos.

Uno, la persistencia de una amplia corriente social crítica y alternativa, diferenciada de la socialdemocracia y de las izquierdas nacionalistas, de hasta seis millones de personas, aunque en declive cuantitativo y cierto retraimiento de expectativas transformadoras. Hoy se cifra en unos tres millones de personas, con una cobertura más amplia, según temas y circunstancias, con posiciones alternativas diferenciadas, aunque participa, junto con el conjunto de las izquierdas, en un marco de confrontación política y discursiva frente al bloque de las derechas y la involución reaccionaria.

Dos, la fragmentación y la dificultad articuladora de las representaciones políticas alternativas (Sumar, con su heterogeneidad grupal, y Podemos), con relativa incapacidad para su colaboración que condiciona su influencia reformadora y su estatus institucional. Ese debilitamiento y división —si no se avanza en algún arreglo—, junto con el estancamiento socialista y la gran ofensiva derechista, puede conllevar la pérdida de la gestión gubernamental progresista y el

advenimiento de un cambio de ciclo político-institucional de carácter reaccionario y la correspondiente involución social y democrática.

Tres, la reactivación de algunos procesos movilizadores progresistas de gran impacto expresivo y sociopolítico. En primer lugar, hay que destacar la amplia ola feminista contra la violencia machista desde el año 2017, que ha sufrido la reacción derechista y ultraconservadora. Aparte de las movilizaciones nacionalistas, en particular del *procés* catalán, se han producido estos años otras campañas colectivas significativas de dos modelos: de tipo social y en defensa de la protección pública, principalmente por la sanidad y la educación públicas, la vivienda o las pensiones, y de carácter pacifista y solidario, contra el rearme y propalestina.

Cuatro, la fuerte ofensiva derechista y ultra, en especial, la mayor iniciativa política y mediática del racismo, el nacionalismo esencialista y excluyente y el machismo antifeminista, que promueven retrocesos discriminatorios en las relaciones sociales, con el refuerzo de las desigualdades y jerarquías dominantes y contra la igualdad y la convivencia cívica. Desarrollan discursos divisivos y sectarios desde una polarización identitaria de un ‘nosotros civilizado’ —cristiano, españolista, masculino y blanco—, dominador de un ‘ellos bárbaro’. Aprovechan el miedo a la pérdida de la ventaja relativa de unos segmentos sociales frente a otros, para reforzar su supremacismo; se amparan en un gran apoyo financiero y mediático de ciertos grupos de poder que pugnan por una regresión de las condiciones socioeconómicas y vitales, los derechos sociales y políticos y la neutralización de las izquierdas y la propia democracia.

En perspectiva, por una parte, nos encontramos con el agotamiento de este ciclo político-institucional de orientación progresista y la incertidumbre sobre las dos hipotéticas salidas gubernamentales: su continuidad renovada, tras la hipotética victoria electoral en los próximos comicios generales de las fuerzas de izquierda, democráticas y nacionalistas; o bien, el giro en un sentido reaccionario, con una fuerte activación derechista y su victoria electoral. Por otra parte, persiste una

amplia identificación y pertenencia social de izquierdas, una parte más moderada y otra más transformadora, al mismo tiempo que confluyen unos perfiles o identificaciones masivas de carácter feminista (dos tercios de mujeres y un tercio de varones), ecologista, pacifista y plurinacional.

En particular, dada la división de la izquierda política alternativa y la impotencia de sus actuales liderazgos para conseguir una suficiente representación parlamentaria que facilite una nueva etapa de progreso, el foco de la respuesta se traslada a la esfera sociopolítica y cultural; es decir, al dinamismo participativo de la izquierda social y los movimientos sociales, que permitan una renovación y un refuerzo de sus representaciones políticas.

De ahí que sean cruciales las dinámicas de activación cívica, democratización popular y articulación asociativa, con sus correspondientes procesos identificadores y de pertenencias grupales particulares, enraizados en la especificidad de cada realidad social. Y, al mismo tiempo, con la participación colectiva en una trayectoria más general hacia el cambio político-institucional, por una democracia social avanzada, y una transformación global del sistema capitalista, imperialista y patriarcal, que amenaza a la humanidad y la viabilidad del planeta.

Todo ello permitiría avanzar en una identificación colectiva compartida, más universal a la vez que integradora de su experiencia relacional ante su diversidad concreta (de clase social, sexo/género, raza/étnico-nacional...), de ese llamado progresismo de izquierdas multidimensional —rojo, verde, violeta y plurinacional (decolonial)—. Se trata de una base sociopolítica y cultural activa, en formación y heterogénea pero unitaria, que puede favorecer una nueva vertebración política de las izquierdas, en particular de la izquierda alternativa y sus liderazgos, auténtico enemigo para la ultraderecha y el poder establecido.

Esfuerzo crítico y renovación teórica

El debate sobre la combinación de las distintas identificaciones colectivas y la conformación de los sujetos sociales, muy controvertido en el plano político y filosófico, se debe reinterpretar a partir de las experiencias concretas de la realidad sociopolítica y cultural, en un nuevo marco explicativo que sirva para orientar la tarea transformadora igualitaria y emancipadora. La práctica colectiva suele ir por delante de la teoría social. Supone el reconocimiento del relativo atraso y desconcierto en la intelectualidad progresista y la necesidad de un esfuerzo de realismo analítico, elaboración de teoría crítica y voluntad transformadora.

Desde los inicios de movimiento obrero y popular y los cambios sociales y políticos de finales del siglo XVIII y primeros del XIX (según nos ha enseñado, entre otros, el historiador E. P. Thompson) y, particularmente, en esta fase histórica, desde los años sesenta y setenta, ha habido una pugna ideológico-política por la interpretación y la orientación de los movimientos sociales y populares, los tradicionales y los nuevos.

Aparte de las teorías más conservadoras, fanáticas y supremacistas, impulsadas por la ola reaccionaria de la ultraderecha, sobre las que no voy a entrar aquí, podemos constatar los dos grandes campos ideológicos relevantes en estos dos siglos: el liberalismo dominante (más o menos social, democrático o conservador-autoritario) y la izquierda tradicional (más o menos socialdemócrata, marxista o ácrata). Podemos añadir otra significativa corriente en la actualidad, el pensamiento postmoderno y, con matices, más o menos populista de izquierdas, transversal y radical.

Las tres tendencias tienen su influencia en la izquierda social y los movimientos sociales, y merecen un pequeño comentario. No se trata de valorar esas doctrinas o relatos sino, solamente, de aportar alguna reflexión sintética sobre sus insuficiencias interpretativas en este tema de las identidades colectivas, para justificar la necesidad de un esfuerzo

crítico y una renovación teórica y estratégica superadora de esas tradiciones.

Una de las aportaciones, desde el campo liberal, más actual y sistemática de crítica al identitarismo de los nuevos movimientos sociales, es la del estadounidense Yascha Mounk —*La trampa identitaria* (2024)—. Analiza los orígenes, las características y las consecuencias de lo que denomina activismo *woke*, fundamentado, según él, en una ‘síntesis identitaria’ basada en el postmodernismo, la teoría crítica de la raza y el poscolonialismo, a la que opone ‘sus’ valores universales y humanistas de la libertad y la igualdad, con la alternativa doctrinal y política del liberalismo.

Con esta doctrina liberal, los nuevos grupos de poder burgués ascendente pretenden consolidar su hegemonía política y cultural, desarrollando una nueva universalidad frente a la tradición conservadora de los poderes del Antiguo Régimen (monarquía, aristocracia, Iglesia).

Pero, enseguida, el poder del capitalismo liberal y su legitimación doctrinal se enfrentan a la emergencia de los movimientos obreros y populares de carácter socialista y a los nacientes movimientos anticoloniales, a los que acusa de particularismo y corporativismo. Su dominio lo consolida mediante su relato justificativo universalista sobre la prosperidad general, que esconde la realidad de su explotación económica, la desigualdad social y la división del trabajo por sexo, así como su eurocentrismo y su colonialismo.

Aparte de algunos aspectos informativos de interés, este autor comparte la misma deficiencia teórica de todo el liberalismo: su formalismo retórico esconde la dominación particular de una clase social o grupo de poder (la burguesía ascendente, la oligarquía capitalista o imperialista, los poderosos) bajo el manto de la universalidad de derechos del sujeto abstracto y la ciudadanía formal.

Desconsidera la realidad de las ventajas para unos y desventajas para otros (desigualdad, discriminación, explotación, subordinación...) entre los distintos segmentos sociales y, por tanto, le falta capacidad para interpretar el conflicto social y la acción colectiva de los movimientos

sociales subalternos. Es insuficiente o contraproducente para impulsar la libertad y la igualdad reales, respecto de los desiguales puntos de partida, condiciones, estatus y trayectorias de las mayorías populares. Se manipula el universalismo para oscurecer o subsumir las opresiones y rebeldías específicas o particulares, o sea para criticar el identitarismo y desactivar los procesos colectivos igualitarios y liberadores de las capas subordinadas.

La tradición de las izquierdas también tiene esa aspiración universalista a la igualdad, desde una perspectiva de clase trabajadora, así como, en menor medida, con el objetivo de la emancipación de los pueblos y de otros grupos discriminados, como las mujeres. Su pugna política e ideológica busca la conquista de una nueva hegemonía, en este caso, de las clases trabajadoras y su representación política, asumiendo un relato universalista y pro socialista. Ahora sería el proletariado, la clase social mayoritaria, quien encarnaría un proyecto universalista para toda la sociedad, desde sus aspiraciones de clase subordinada y su pretensión hegemónica respecto de la mayoría popular o democrática.

La deficiencia, más pronunciada en las tendencias más economicistas y deterministas, es el reduccionismo de clase social (objetiva), que tiende a privilegiar el factor de clase (y su representación sindical o partidaria), frente a otros componentes sustantivos de las mayorías populares, como el carácter étnico-nacional o el de sexo/género. Su universalismo se queda sesgado, en beneficio particular de un segmento social y, particularmente, de su representación partidaria o institucional; no es capaz de articular bien el pluralismo y las respuestas equilibradas respecto de toda la diversidad y multidimensionalidad de las capas trabajadoras y populares, el conjunto de sus actividades colectivas y sus conglomerados asociativos.

Ambas teorías modernas, distintas entre sí políticamente pero de similar justificación y apariencia universalista, mantienen un déficit interpretativo y normativo. Por tanto, se necesita una reinterpretación de un universalismo ajeno a su instrumentalización dominante, auténticamente igualitario y emancipador de todas las situaciones de

subordinación y desventaja, con un contenido concreto y sociohistórico de la libertad y la igualdad y, al mismo tiempo, común para toda la humanidad. Es el sentido de la ética universalista de los derechos humanos —civiles, sociales y políticos—, así como de principios básicos como el respeto a la pluralidad, la convivencia intercultural y la democracia social y política, dentro de la articulación institucional de las sociedades (y del mundo).

Con precedentes anteriores, desde los inicios de los nuevos movimientos sociales, en los años sesenta y setenta y, sobre todo, en los años ochenta y noventa, se desarrolla el pensamiento postmoderno con cierta incidencia en esos movimientos. Supone un cuestionamiento de la rigidez economicista de alguna izquierda tradicional, a veces justificada desde cierto esencialismo determinista o estructuralista, así como la relevancia de las cuestiones de sexo/género y de raza, que suelen tratar con un enfoque más culturalista.

La tendencia más idealista prioriza el papel constructivo del discurso, es decir, de las élites intelectuales y la pugna cultural, en detrimento de la experiencia social masiva en los conflictos sociales, factor fundamental que destaca para conformar la capacidad de agencia, la formación del sujeto colectivo o movimiento social alternativo y, en definitiva, de contrapoder sociopolítico y hegemonía cultural.

Se puede citar a una de las más interesantes pensadoras feministas, Judith Butler, defensora de su propuesta de práctica ‘reiterativa’, de repetición performativa —para construir y/o destruir el género—. Se acercaría, parcialmente, a esta dimensión defendida aquí: la relevancia de la práctica social de la gente ante sus circunstancias reales o la experiencia sociopolítica y cultural de las capas subalternas, como elemento clave para articular los procesos de identificación colectiva y transformación igualitaria y emancipadora.

En este sentido, ese criterio interactivo lo aplico a la acción colectiva de los movimientos sociales y sus procesos identificadores, ampliando la importancia de la activación cívica. Mantengo una perspectiva de construcción sociohistórica de los sujetos, incluyendo la valoración de

su estatus social en una determinada relación de fuerzas sociales, así como su subjetividad, aunque con un enfoque relacional y realista. Se revaloriza, así, la necesidad de partir de la realidad social y valorar el fundamento del comportamiento colectivo para su transformación, a diferencia de la tendencia postmoderna que, con un enfoque idealista, prioriza el papel del discurso en el cambio sociopolítico.

Por tanto, es interesante tener en cuenta las críticas apropiadas que, desde el enfoque postmoderno, se realizan a los inadecuados relatos globales o a las prepotentes actitudes hegemónicas de algunos sujetos, discursos y tendencias modernas —de derecha o de izquierda—. No obstante, habrá que superar las dinámicas fragmentadoras o los excesos exclusivistas de un determinado grupo social o élite asociativa, con las pretensiones habituales de cada cual de constituirse en el respectivo eje central de la acción sociopolítica —o diagnosticar la muerte del sujeto—.

La salida, desde una visión más multidimensional e interactiva, es interrelacionar los componentes materiales, sociales y culturales, en cada situación concreta, valorando la experiencia vivida e interpretada de las clases populares, dentro de una trayectoria liberadora e igualitaria.

Justicia social, reciprocidad y políticas compensadoras

Existen tres concepciones o criterios de la justicia. Primero, la justicia tradicional o equidad (desde Aristóteles y Confucio), como proporcionalidad entre esfuerzo y recompensa, entre aportaciones y prestaciones, habitual en el mercado laboral y salarial, las prestaciones públicas contributivas e, incluso, en los contratos mercantiles con intercambios equilibrados; se trata de la meritocracia convencional y la correspondencia contractual entre derechos y deberes.

Segundo, la justicia formal o liberal; es el trato igual y sin discriminación de todas las personas, independientemente de su origen o estatus. Se parte del individuo abstracto, sin condiciones previas o

trayectorias particulares, sujeto de derechos iguales, que suele estar incorporado en las constituciones modernas.

Tercero, la justicia social. Parte de la situación desigual de las personas y grupos sociales y la redistribución y la protección pública se regulan de acuerdo y como respuesta a las necesidades sociales. Consiste en un trato ‘compensador’, en los ámbitos públicos y comunitarios, ante situaciones desiguales, una realidad persistente en distintos planos de la sociedad.

Por tanto, son insuficientes la simple equidad meritocrática o el trato igual, haciendo abstracción de la (desigual) realidad social, por origen, estatus y trayectoria. La justicia debe considerar las situaciones personales o grupales distintas. Así, cuando existen necesidades desiguales, la justicia social exige adecuación o compensación de las políticas públicas para reequilibrar esa desigualdad y avanzar hacia la igualdad real. Es el criterio habitual en distintos campos de las democracias sociales avanzadas: desde la fiscalidad progresiva —quien más tiene, más paga—, hasta las prestaciones o subsidios no contributivos —por estado de necesidad y con el derecho a una vida digna—, la educación compensadora —ante mayores necesidades educativas— o la sanidad pública —ante el distinto estado de salud o grado de enfermedad—. La correspondencia redistributiva y protectora pública o de apoyo comunitario no es mecánicamente igual para todas las personas, ni proporcional a la contribución aportada, sino que la justicia (social) exige adecuación a esa necesidad social, derivada de una condición desigual previa.

Es el fondo de la concepción del valor de la solidaridad (fraternidad y sororidad), en las relaciones sociales e institucionales, en el que el contrato social de las obligaciones públicas (o el apoyo mutuo interpersonal o familiar) no derivan de las aportaciones o empleos realizados previamente, sino que, dando por supuesto un pacto global de sociabilidad, ciudadanía o interacción humana e intergeneracional, se atienden las necesidades humanas, según el viejo criterio socialista de ‘cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad’.

Se trata del criterio justificativo de las políticas de igualdad sustantiva, partiendo de la desigualdad real —de estatus, trayectoria, apropiación y dominio—, que está detrás de lo *woke*, como conciencia y reconocimiento, y las políticas de identidad, distributivas y compensadoras, que responden a las necesidades particulares de grupos sociales en situación de discriminación o dinámicas desventajosas, pero están incardinadas en la finalidad universalista de avanzar hacia la igualdad real.

Es la concepción de una justicia social avanzada contra la que se oponen las fuerzas liberales, conservadoras y ultraderechistas, que consideran estas políticas sociales o culturales reequilibradoras, como innecesarias e injustas, contraponiendo y haciendo prevalecer las otras dos concepciones, de la equidad meritocrática y la igualdad -abstracta- de trato. La ofensiva práctica e ideológica contra los supuestos excesos de lo *woke* conlleva el retroceso de la solidaridad pública, el recorte del Estado de bienestar, la anulación de la justicia social según necesidad, consideradas un ‘exceso’ de la normalidad del actual orden neoliberal (capitalista, neocolonial, supremacista y patriarcal). En las democracias sociales avanzadas se trata de acertar con una combinación adecuada de los distintos criterios de justicia y reforzar la ‘solidaridad social’.

No obstante, hay que recalcar que este valor de la solidaridad forma parte, junto con la libertad y la igualdad, del núcleo fundamental de los valores universales. Junto con otros valores decisivos, como el de la democracia y el laicismo, constituyen la referencia universalista de la mejor tradición humana, adecuada a las distintas culturas y realidades mundiales, pero superadora del relativismo cultural o el nihilismo adaptativo al poder. Supone la readecuación del universalismo, con una perspectiva transformadora liberadora.

Un universalismo concreto, emancipador, igualitario y solidario

En conclusión, se trata de la reelaboración de un nuevo universalismo emancipador e igualitario, partiendo de la realidad social

diversa y multidimensional, con intereses, experiencias y tradiciones variados y, a veces, contrapuestos en determinados contextos espaciotemporales. Con realismo analítico y enfoque sociohistórico, poniendo en primer plano la capacidad articuladora de las relaciones sociales de la propia sociedad, la experiencia popular prolongada, desde cierto constructivismo social.

Está alejado de dos tradiciones contrapuestas, dominantes en los procesos de legitimación de los actuales poderes hegemónicos. Por un lado, el determinismo o esencialismo que oscurece, justifica y reproduce las relaciones de dominación de los grupos poderosos establecidos, bajo la máxima liberal de la prioridad al beneficio privado y su acumulación, así como de las jerarquías sociales que aseguran su poder.

Por otro lado, el idealismo discursivo o el voluntarismo elitista, a veces institucionalizado como socialización cultural o mediática, y utilizado como instrumento legitimador de los grupos de poder emergentes, normalmente asentados en un previo acceso al poder económico o institucional. Unas veces, con un sentido progresivo, como la burguesía ascendente en el siglo XVIII y los valores ilustrados, los derechos humanos kantianos o la ‘universalidad concreta’ hegeliana. Y otras veces, regresivo, como la involución autoritaria de las ultraderechas actuales y las tendencias conservadoras, reaccionarias y fundamentalistas.

Por tanto, el universalismo debe tener un fundamento realista y social, partir de la situación concreta individual y grupal, con un contenido crítico contra la opresión, la desigualdad y el egoísmo individual. Son realidades incompatibles con los valores antagónicos de la libertad, la igualdad y la solidaridad (fraternidad o sororidad). Conlleva una perspectiva relacional, de reciprocidad de derechos y deberes, de colaboración comunitaria y protección pública. Se configura a través de procesos amplios de participación cívica, una dinámica más o menos tensa y conflictiva y consensos sociopolíticos y culturales de los pueblos, frente a los relatos y doctrinas emanados de los poderes

fácticos mundiales, liberales o conservadores, que imponen y avalan la persistencia de su dominación antidemocrática o neocolonial.

En definitiva, se abre una pugna inacabada, contrahegemónica y más o menos consensuada, por el sentido y el alcance del universalismo ético y político-cultural que cuestione las situaciones de ventaja posicional y clarifique y favorezca los procesos igualitarios y liberadores. La acción práctica para transformar la realidad desigual, en nuevos contextos, necesita una teoría integradora, realista, social y crítica. Se superará, así, el simple identitarismo particularista, al igual que el universalismo abstracto de un hegemonismo dominador. La respuesta es caminar hacia un universalismo concreto, realista y, al mismo tiempo, emancipador. Se trata de la reelaboración de una teoría crítica para una readecuación estratégica por la igualdad y la libertad.

5.5 Mamdani y la izquierda española

La victoria electoral de Zhoran Mamdani a la alcaldía de Nueva York ha tenido un impacto mundial. Nacido en Uganda, de origen indio y migrante, candidato del Partido Demócrata, cuyas primarias ganó, pertenece a su corriente ‘socialista democrática’ y se ha identificado con las demandas de la población inmigrante. Entronca con la tradición antirracista afroamericana, expresada en lo *woke* y, al mismo tiempo, ha sabido canalizar las exigencias de cambios materiales en beneficio del conjunto de la mayoría popular.

Ha vencido al viejo poder establecido representado por el candidato del partido republicano, Curtis Sliwa, y el exgobernador demócrata, Andrew Cuomo. Este estaba apoyado por el presidente Trump que ha irrumpido amenazante y descalificador al grito de parar el socialismo y evitar la destrucción de Nueva York. Ha sido una derrota sin paliativos para el poder establecido trumpista pero, también, para el núcleo dirigente del Partido Demócrata y su política de ‘neoliberalismo progresista’.

En un marco estadounidense e internacional de ascenso de las ultraderechas, debilitamiento de la democracia y declive y desorientación de las izquierdas es un hecho —junto con otras derrotas trumpistas en EE.UU.— que anima a la esperanza en el cambio progresista. Falta por ver su consolidación en esa capital del imperio, con poderosas fuerzas en contra, su influjo en la recomposición del espacio democrático y de izquierdas en ese país y su relevancia para sus próximas elecciones parlamentarias de mitad de mandato.

No obstante, ya se pueden sacar algunas enseñanzas sobre su significado, en particular para tener en cuenta en la articulación de las izquierdas españolas en su actual y difícil encrucijada.

De entrada, se pueden destacar dos aspectos valorados por la mayoría de analistas y medios, incluido los de la ultraderecha —como el propio Banon, referente ideológico del trumpismo—. Uno, la activación participativa de una amplia base social, mediante una gran red de activistas a pie de calle en conexión con la gente y sus demandas; es una lección democrática y democratizadora de las estructuras partidistas y de confianza en los nuevos liderazgos, más jóvenes.

Otro, el prolongado esfuerzo organizativo y político como agrupación diferenciada de izquierdas pero que, dada la particularidad del sistema electoral mayoritario, tendente al bipartidismo, ha sido capaz de ganar las primarias en el Partido Demócrata, mantenerse en él y, desde dentro, impulsar un giro hacia la izquierda y neutralizar a su grupo de poder. Es difícil su traslado para el conjunto del país, en particular con vistas a las próximas elecciones presidenciales, con el

tándem de Bernie Sanders y Alexandria Nicasio-Cortez, también ligados a la izquierda demócrata. Pero veremos hasta dónde llegan. Ese es su reto.

Lo que me parece más relevante de este fenómeno es su particular característica y la combinación de los dos ejes fundamentales de su propuesta política: la reforma social y lo *woke* —o políticas de identidad—.

En su programa de reforma social han destacado tres grandes apuestas: Vivienda asequible, con control de alquileres, así como transporte público y escuelas infantiles gratuitas. Más allá de los limitados recursos fiscales municipales, abordan aspectos fundamentales en las condiciones de vida ciudadana.

Por otra parte, ha avanzado políticas de identidad dirigidas a sectores discriminados (por sexo-género, raza u origen étnico e inmigrante) y, especialmente, musulmanes —con un millón en esa ciudad, en un ambiente oficial antisláamico—. Además, ha mantenido una posición pro palestina, en un clima mediático pro sionista, y se ha atrevido a confrontar con la política neocolonial e imperialista estadounidense dominante.

No obstante, como se decía, no se ha limitado al reconocimiento cultural o de estatus social de esos sectores discriminados, sino que ha complementado esas exigencias con una posición de clase social beneficiosa para las capas populares en sus condiciones vitales que, precisamente, en grandes ciudades como Nueva York tienen una gran composición migrante (incluido de varias generaciones, distintas razas y de experiencia esclavista) y con pluralidad étnica, cultural y religiosa.

Mamdani y su equipo, con ese doble perfil de socialismo democrático y antirracismo, han superado el equilibrio o alianza alicorta de la mayoría de la dirección demócrata estadounidense entre economía —neoliberal— y cultura —progresista—, se trata del llamado neoliberalismo progresista, por un lado, con su componente globalizador, desigual e imperial; por otro lado, con cierta inclusión de

capas medias afroamericanas o de mujeres en las estructuras de poder hegemónico, con una versión liberal de lo social y moderada de lo *woke*.

Han sabido proponer una nueva combinación entre unas medidas sociales básicas, con una orientación universalista y de clase social, y unas políticas de identidad transformadoras de discriminaciones específicas. Con ello se abordan dos limitaciones claras en el cambio sociopolítico, derivadas del bipartidismo tradicional en EE.UU.

Uno, el continuismo socioeconómico de la oligarquía estadounidense que deja abundantes brechas sociales y masiva desprotección pública, cuando no los actuales amenazantes recortes sociolaborales y de desmantelamiento del Estado de bienestar, lo que afecta a la profunda segmentación y precariedad social de mayorías poblacionales, particularmente, racializadas, mujeres y migrantes.

Dos, el formalismo de las políticas liberales establecidas, con su falta de concreción de las libertades civiles, así como en el avance en la igualdad real y la convivencia intercultural, incapaz de frenar la involución derechista del trumpismo, con su racismo, su negacionismo de la crisis medioambiental y la persistente subordinación por sexo-género, pertenencia cultural u opción sexual y de género.

Por otra parte, esta interacción de perspectiva social y *woke*, también permite frenar ciertos aspectos unilaterales o sectarios que tenían algunas actuaciones y discursos identitarios, en una realidad fragmentaria con una cultura corporativa, más o menos postmoderna.

Aspectos que, aunque han sido sobredimensionados por las derechas o el liberalismo, dificultaban darles a estas luchas por los legítimos derechos y reivindicaciones feministas o antirracistas, un contenido de cambio sustantivo, redistributivo y de igualdad de estatus y poder, respecto de las situaciones mayoritarias de desventaja relativa, sin quedarse solo en el reconocimiento cultural o en el ascenso de algunas élites representativas.

En consecuencia, con este doble e interseccional plano, los derechos sociales y las políticas igualitarias por raza, origen étnico-nacional o sexo-género, se responde a la larga y profunda frustración de las capas

populares derivada de los límites de las transformaciones sociales, culturales y políticas del liberalismo progresista, bajo el imperio del mercado, y afronta la ola reaccionaria que amenaza con su involución autoritaria en los dos ámbitos.

En definitiva, Mamdani y su proyecto apuestan por superar el tradicional neoliberalismo progresista, dominante en el Partido Demócrata —y la tercera vía o nuevo centro europeo—, con sus dos componentes. Por un lado, las políticas económicas e imperiales defensoras del poder establecido (financiero, político-militar, neocolonial), con ligeras diferencias con la derecha reaccionaria del Partido Republicano. Por otro lado, un progresismo liberal, un *wokismo* moderado o solo moralizante, incluso de algunas élites —de mujeres o personas de color u origen migrante—, para completar la supuesta alianza con las capas medias y trabajadoras blancas.

Es lo que está deshaciendo la nueva ofensiva ultra, arrastrando a la derecha tradicional europea —incluso, a algunas izquierdas— con su involución autoritaria, racista y antifeminista y generando una recomposición de las élites dirigentes occidentales.

El problema es que ese proyecto liberal o centrista está bastante agotado para la izquierda y las mayorías sociales, al no abordar los procesos de transformación necesarios en los dos campos: la perspectiva social para las mayorías populares, y la dinámica específica para reequilibrar las desventajas y sus causas que padecen amplias franjas (mal llamadas minorías) de la población estadounidense y que, en ciudades como Nueva York, son mayoritarias respecto de las clases medias blancas.

En resumen, esta experiencia constituye una fuente de enseñanzas para las izquierdas europeas y, particularmente, españolas, en esta situación difícil y con unas perspectivas problemáticas, si no se acierta con los tres elementos exitosos en Nueva York, con su adecuación respectiva: estrategia de reforma social; políticas de igualdad y reconocimiento, y activación democratizadora y unitaria de las izquierdas sociales y políticas.

5.6 La savia de la movilización propalestina

Estas semanas ha cobrado una nueva vitalidad la movilización social solidaria con Palestina y de rechazo al genocidio y la limpieza étnica del gobierno israelí. La protesta ciudadana ha ido creciendo en masividad y capacidad expresiva, con una participación intergeneracional y, particularmente, con una gran presencia juvenil.

Tras diversas iniciativas y actividades durante estos dos años, la mayor reactivación se produjo con ocasión de la Vuelta ciclista, el mes pasado, en múltiples lugares de España y, en particular, en la Comunidad de Madrid, durante su final, con la participación, según datos oficiales, de más de cien mil personas.

Además, la flotilla **Global Sumud** (firmeza o resistencia), con cerca de quinientos activistas solidarios de varias decenas de países y una pluralidad ideológica y política, ha demostrado el fuerte compromiso de una representación de la sociedad civil, dispuesta a romper el cerco israelí a la población de Gaza y apostar por la aportación de la imprescindible ayuda humanitaria; contrasta con la inacción de sus gobiernos. La reacción ilegal del gobierno israelí contra el propio derecho internacional y humanitario y con la detención y secuestro de las personas activistas, ha supuesto otro revulsivo de apoyo y solidaridad en múltiples ciudades españolas y europeas.

Igualmente, las distintas manifestaciones de este fin de semana de octubre constituyen otra expresión de la amplitud del rechazo popular a esa estrategia genocida y la solidaridad con el pueblo palestino.

Todo ello supone un paso cualitativo de la reactivación cívica por unos objetivos justos, con fuertes componentes solidarios y pacifistas.

La estrategia genocida israelí ha contado con la colaboración del gobierno estadounidense y la complicidad de los principales gobiernos europeos. La ha realizado a través de matanzas masivas indiscriminadas

y destrucción de sus infraestructuras y recursos habitacionales, sanitarios, educativos y alimentarios. Busca el exterminio de un pueblo, su desarticulación como sociedad y su sometimiento al Estado israelí, en un marco de control social y político-militar, con la pretensión de una normalización neocolonial de Oriente Próximo.

Sus consecuencias deshumanizadoras inmediatas para la población de Gaza, a pesar del control mediático israelí, se han comprobado y visualizado diariamente de forma gráfica y masiva. El sufrimiento humano que transmiten sacude las conciencias europeas, que no encuentran ninguna justificación para tamaño horror y deshumanización. El relato israelí de su legítima defensa o su victimismo histórico ya no sirven para justificar tanto destrozo inocente.

Las consecuencias vitales discriminatorias, como pueblo diferenciado y Estado independiente, se extienden al conjunto de Palestina, incluyendo Cisjordania y la diáspora. El plan de Trump y Netanyahu, con el aval de otros gobiernos árabes y europeos, pretende consolidar esa desarticulación social y política como pueblo con derecho al autogobierno y reforzar el control colonial estadounidense que, junto al gobierno israelí, pretenden dominar toda el área de Oriente Próximo. El conflicto tiene perspectivas perdurar, en el marco de los equilibrios geopolíticos en marcha. Por tanto, es también un aviso mundial del supremacismo estadounidense, cuyo autoritarismo debe fracasar.

En ese sentido, hoy no hay todavía fuerzas políticas suficientes en el panorama internacional para vencer a corto plazo esa fuerte alianza de poder mundial que tienen los gobiernos de EE.UU. e Israel, con la complicidad de otros países del Norte y árabe-musulmanes. Su supremacismo se impone; existe una impotencia o retraimiento institucional de la mayoría de gobiernos y la propia ONU.

No obstante, a nivel social, se ha producido una solidaridad humanitaria y la oposición ciudadana a ese plan genocida e imperialista, con algunos efectos concretos positivos. Uno de ellos, simbólico, es obligar a las élites europeas a cierto giro discursivo de condena

diplomática a las actuaciones israelí más atroces o el reconocimiento formal del Estado palestino, aunque sin capacidad de su implementación, como no duda en resaltar el propio Netanyahu.

Sobre todo, las consecuencias positivas están en la dinámica de la propia sociedad civil, particularmente la española y la europea, que se han movido y han dado un paso al frente en su compromiso cívico. Según distintas encuestas de opinión es muy mayoritaria en estas sociedades la oposición a esta masacre antihumana.

Pero, además de esa conciencia humanitaria y pacifista masiva, bastante transversal, lo específico y lo particularmente positivo a valorar, es la actual ola solidaria de miles de activistas, la mayoría jóvenes e incluida la intelectualidad progresista, que refuerza esa actitud popular en torno a valores éticos, democráticos y antiautoritarios, y que conecta con esa mayoritaria conciencia cívica.

Ello permite una nueva articulación de la ciudadanía crítica, con mayor capacidad expresiva, participativa, unitaria y democratizadora, que permite superar el estrecho marco de la acción política institucional o partidaria, en un contexto de relativa pasividad social y confrontación mediática.

Esta reactivación de la participación cívica es particularmente importante para el impulso de la propia experiencia popular y la articulación sociopolítica y orgánica de la gente progresista y de izquierdas. Conlleva nuevos retos colaborativos en el tejido asociativo, para la promoción y la orientación de esta nueva ola cívica, de carácter netamente solidario y, lo que es más importante, con fuertes valores solidarios y gran firmeza democrática frente a los poderosos.

Además, esta movilización, en la medida que sea sostenida, autónoma y unitaria, introduce una dinámica renovadora para el conjunto de movimientos sociales y las izquierdas alternativas y su trayectoria política. La movilización pro- Palestina incorpora savia nueva al árbol de la ciudadanía crítica.

5.7 La identificación feminista

Comunicación al XVI Congreso Español de Sociología – Bilbao, julio de 2026. Grupo de trabajo 12: *Sociología de género*

Palabras clave: Identidad, sujeto, desigualdad por sexo/género, universalismo.

Introducción

Esta comunicación trata sobre el sentido de las identificaciones colectivas, ambivalentes desde el punto de vista de su significado ideológico y político, y la conveniencia de la identificación feminista, con una perspectiva igualitaria-emancipadora. Este tema está vinculado con la formación del sujeto social, la combinación e interseccionalidad de sus identificaciones parciales, así como con el carácter sociopolítico de ciudadanía y el universalista como ser humano. Tiene un enfoque sociohistórico. Se trata de analizar el proceso de conformación de los sujetos sociales y superar, por un lado, el simple identitarismo particularista posmoderno, y por otro lado, el universalismo abstracto e indiferenciado, de carácter liberal o conservador (Antón, 2025; 2023; 2022; 2020).

Existe una ofensiva política, relacional y cultural de carácter ultraconservador de las nuevas fuerzas de extrema derecha que pretenden hacer retroceder los derechos feministas hacia un modelo tradicional y patriarcal de subordinación femenina. Forma parte de una ola reaccionaria contra las identidades progresistas.

Requiere una trayectoria democratizadora y antiautoritaria, común a distintas fuerzas sociales. Es imprescindible clarificar el sentido de las

identidades, en particular la feminista, y su interacción multidimensional y relacional para reafirmar una dinámica igualitaria y emancipadora.

Se trata de fortalecer el feminismo frente al machismo, de articular procesos identificadores de ese sujeto colectivo, anclados en la realidad de opresión específica, pero asociada a la dinámica social y cultural progresista y los valores universalistas de igualdad, libertad y solidaridad, constitutivos del feminismo en estos más de dos siglos. Supone continuidad emancipadora y renovación y adecuación práctica y teórica ante las nuevas realidades sociales.

Planteamiento teórico-metodológico. El sentido de la identidad

Desde la sociología crítica la pertenencia e identificación colectivas progresistas se van formando a través de las relaciones sociales, sobre la base de una práctica social prolongada, una interacción relacional solidaria tras los objetivos de libertad, igualdad y reciprocidad. El hacerse e identificarse feminista es una conformación social, procesual e interactiva: supone comportamientos duraderos igualitarios-emancipadores y solidarios, interrelacionados con esa subjetividad. Es la experiencia vital, convenientemente interpretada, la participación en la pugna social y cultural en sentido amplio, incluyendo hábitos, estereotipos y costumbres además de subjetividad, frente a la desigualdad y la discriminación, la que va formando la identidad feminista, o cualquier otra de capas subalternas, como la identificación de clase, la identidad nacional y la antirracista o decolonial. El componente social de la interacción humana es el principal para forjar el reconocimiento y las pertenencias grupales e individuales y dar soporte a la acción colectiva.

Estos dos conceptos, identidad e interseccionalidad, han recobrado relevancia en el pensamiento social y, en particular, para la teoría feminista y el discurso étnico-nacional o antirracista. Hacen referencia a algunas características de los grupos sociales, su reconocimiento y su

relación, que conforman su actitud sociopolítica en un contexto de grandes transformaciones sociales. Por separado pero, sobre todo, juntos, ayudan a explicar la formación de nuevos actores (o sujetos), individuales y colectivos, y sus procesos participativos y colaborativos en el marco del cambio sociocultural y político. Conllevan una experiencia relacional diversa que se combina con lo común de la interacción humana, al mismo tiempo que con su pluralidad.

En la identidad feminista influye el sexo (mujer) y el género (femenino). Pero no de forma determinista, sea biológica o estructural. Sí tiene importancia la realidad vivida, sentida y percibida de una desigualdad injusta, es decir, la pertenencia a un grupo social discriminado y con desventajas concretas o, bien, con suficiente sensibilidad y solidaridad respecto de su situación.

Pero, sobre todo, el elemento sustantivo que configura ese proceso identificador feminista es la acción práctica, los vínculos sociales, la experiencia relacional por oponerse a esa subordinación y avanzar en la igualdad y la emancipación de las mujeres. La identificación feminista deriva del proceso de superación de la desigualdad basada en la conformación de géneros jerarquizados. Se trata de la actitud transformadora respecto de las funciones sociales, productivas y reproductivas desventajosas para la mitad de la población. Supone un cambio de su estatus vital subordinado.

El sujeto colectivo

La formación de un sujeto unitario superador de los sujetos o actores parciales va más allá de un liderazgo común (simbólico y legítimo), un objetivo genérico compartido (la democracia y la igualdad) o un enemigo similar (el poder establecido patriarcal-capitalista). Es un proceso sociohistórico y relacional complejo que necesita una prolongada experiencia compartida que debe superar las tensiones derivadas de los intereses corporativos y sectarios de cada élite

respectiva. Requiere respeto al pluralismo, debate integrador y participación democrática.

Las identidades, frente a los esencialismos deterministas, se construyen social e históricamente; son diversas, variables y contingentes. La identidad, como pertenencia colectiva y reconocimiento público, tiene un anclaje en una realidad material, institucional y sociocultural, en su contexto histórico; encarna una dinámica sustantiva de las relaciones sociales. Las identidades sociopolíticas se configuran a través de la acumulación de prácticas sociales continuadas, en un marco estructural y sociocultural determinado, que permiten la formación de un sentido de pertenencia colectiva a un grupo social diferenciado con unos objetivos compartidos.

La conveniencia de la identificación feminista

En la medida que se mantenga la desigualdad y la discriminación de las mujeres, sus causas estructurales, la conciencia de su carácter injusto y la persistencia de los obstáculos para su transformación, seguirá vigente la necesidad del feminismo, como pensamiento y acción específicos. Y su refuerzo asociativo e identitario, inclusivo y abierto, será imprescindible para fortalecer el sujeto sociopolítico y cultural llamado movimiento feminista y su capacidad expresiva, articuladora y transformadora. No es tiempo de un postfeminismo abstracto, sino de un amplio feminismo crítico, popular y transformador frente a la pasividad o la neutralidad en este conflicto igualitario-emancipador. Eso sí, con una perspectiva integradora y multidimensional que le haga converger con los demás procesos emancipatorios. Igual ocurre con otros movimientos sociales progresistas.

Desde ese punto de vista, al igual que necesitamos más y mejor identificación feminista, precisamos más y mejores sujetos feministas; por supuesto, abiertos, plurales y en formación. En este caso, la identidad o el sujeto feminista, como partícipes de un proceso

igualitario-emancipador, se diferencian de la identidad de género, que expresa la realidad diversa de las mujeres y sus específicos y variados estatus sociales y culturales.

El feminismo, con sus distintos niveles de identificación y pertenencia colectiva y su pluralidad de ideas y prioridades, es un movimiento social, una corriente cultural, un actor fundamental. En una acepción débil, se puede considerar un sujeto sociopolítico en formación, inserto en una renovada corriente popular más amplia que califico de nuevo progresismo de izquierdas, con fuertes componentes ecologistas, antirracistas, social laboristas y feministas.

Los procesos identificadores progresistas (a veces descalificados como *woke*) son procesos democratizadores, igualitarios y críticos frente a los poderosos y con una orientación transformadora de progreso. Pero esta experiencia, ya nos indica la superación de la rígida separación entre los componentes culturales, la redistribución y la firmeza democrática y participativa frente al poder establecido.

Especialmente, con la crisis socioeconómica y las respuestas cívicas, ya no se pueden separar las demandas clásicas de la izquierda — igualdad social, derechos sociolaborales, protección pública, servicios públicos de calidad, empleo decente, regulación y renovación de la economía y del aparato productivo— de reclamaciones democratizadoras e igualitarias, por ejemplo feministas, que ya no son solo culturales sino que tienen impacto evidente en las estructuras sociales y los comportamientos colectivos: contra la violencia machista y por la libertad sexual, por un reparto igualitario de los cuidados y la reproducción social, contra la precariedad laboral femenina y las brechas de género, por un reconocimiento y relaciones de estatus igualitario.

Conclusión

En definitiva, en el debate sobre el sujeto y la identidad feminista, que no femenina, habría que superar los determinismos

sociodemográficos y estructurales, así como los idealismos culturalistas de priorizar, para definir su carácter, los proyectos y aspiraciones, aunque sean también importantes. A partir de la realidad de desigualdad y subordinación de las mujeres —y otros grupos subalternos— e integrando las demandas de sus derechos igualitarios-emancipadores, debería ponerse el acento, desde esta interpretación relacional y crítica, en los procesos de identificación colectiva derivados de unas prácticas sociales, unos comportamientos o unas costumbres comunes que establecen unos vínculos sociales y una cultura sociopolítica con ese carácter feminista. Es el nexo social y realista para una transformación sociopolítica hacia la libertad y la igualdad.

Bibliografía

- Antón, A. (2020): *Feminismo crítico. Un enfoque relacional e igualitario*. Mauritius, Editorial Académica Española (EAE).
- (2022): *Dinámicas transformadoras. Renovación de la izquierda y acción feminista, sociolaboral y ecopacifista*. Albatana, Dyskolo.
- (2023): *Feminismos: retos y teorías*. Albatana, Dyskolo.
- (2025): *Encrucijadas. Para la democracia, las izquierdas y el feminismo*. Albatana, Dyskolo.

6. DILEMAS DE LAS IZQUIERDAS

El capítulo sexto, *DILEMAS DE LAS IZQUIERDAS*, recoge las reflexiones sobre siete cuestiones de actualidad para el cambio progresista de las izquierdas. Interrelaciona diversos planos. Uno, entre las dinámicas del campo sociopolítico y cultural y el del ámbito político e institucional. Dos, la interacción entre las diversas izquierdas, así como entre sus élites representativas y sus estructuras partidarias y sus bases sociales. Tres, las tendencias socioelectorales y políticas con las perspectivas que se abren sobre el agotamiento y/o renovación del ciclo de progreso frente a la ofensiva derechista.

La primera sección, *Encrucijadas*, es una reseña del libro anterior, editado recientemente, del mismo nombre que explican las disyuntivas que aparecen sobre el devenir de la democracia, las izquierdas y el feminismo.

La segunda sección, *Estrategia gubernamental e incertidumbre electoral y política*, señala la importancia de los hechos sociales, para superar por parte del Gobierno la simple confrontación discursiva con las derechas e impulsar las políticas transformadoras en beneficio de las mayorías ciudadanas. Con un análisis demoscópico, explica la incógnita

del carácter del próximo Gobierno y las características de una prolongada campaña electoral, con el desgaste del Partido Socialista y la división de la izquierda alternativa y su impacto.

La tercera sección, *Perspectivas de la izquierda alternativa*, explica el declive de la izquierda transformadora y sus causas, las dinámicas regeneradoras, las enseñanzas históricas y la pugna competitiva con sus efectos divisivos, la prioridad de combatir el mal mayor, la recomposición de las izquierdas y las bases para abordar su renovación y la remontada socioelectoral.

La cuarta sección, *Movimientos sociales y cambio global*, es una comunicación académica que trata sobre los procesos identificadores y la acción colectiva en esta última etapa en España.

La quinta sección, *La incertidumbre sobre el cambio de ciclo*, detalla la desafección socialista por el continuismo gubernamental y los casos de corrupción y agresión sexual en sus filas que, junto con los obstáculos para la unidad en la izquierda alternativa y poder acceder a suficientes escaños, dificultan una nueva etapa de gobernabilidad progresista.

Por último, en la séptima sección, *Crisis y reconstrucción de las élites alternativas*, expone los factores específicos de la división de las élites del campo alternativo y las condiciones para su renovación y recomposición.

6.1 Encrucijadas

Reseña del libro *ENCRUCIJADAS. Para la democracia, las izquierdas y el feminismo*. Antonio Antón Morón, Dyskolo (2025).

España, Europa y el mundo están viviendo profundas mutaciones, con diversos conflictos y crisis que afectan, sobre todo, a las capas populares. Estamos ante varias encrucijadas de caminos, con distintas y contradictorias tendencias. Para las fuerzas progresistas y de izquierda, particularmente en España, se abren dilemas estratégicos en el objetivo de avanzar en un sentido igualitario, emancipador y solidario y de hacer frente a las dinámicas reaccionarias de involución social y autoritarismo político.

El libro digital y de acceso libre, explica ese contexto socioeconómico, cultural y político. El texto se centra en el impacto social de esas dinámicas globales y los desafíos para el sistema democrático, las izquierdas sociales y políticas, especialmente la izquierda alternativa y, en particular, para el feminismo, como movimiento social y corriente cultural progresista y transformadora.

Tiene, sobre todo, un contenido analítico y valorativo de los hechos sociopolíticos más relevantes, y aborda algunas cuestiones teóricas y estratégicas para la transformación social. El análisis se realiza desde la teoría crítica, en particular de la sociología política, la sociología de los movimientos sociales, la acción colectiva y el cambio social y la sociología del género. Todo ello con un enfoque realista, relacional y sociohistórico.

Derechización y continuismo socialista

Tras el Prólogo de Albert Recio Andreu, profesor de Economía de la UAB, y la Presentación, el primer capítulo «**Derechización y continuismo socialista**» analiza el marco político-institucional general, las tendencias de involución autoritaria y regresiva, con especial protagonismo de las ultraderechas, en España, Europa y el mundo. Así, se hace una valoración de las estrategias de los principales actores políticos y sociales.

La primera sección «Impedir la involución derechista», explica la amenaza ultra en Europa, el proceso de derechización institucional, la recomposición de las élites dominantes, el avance derechista y sus ejes estratégicos, el refuerzo del autoritarismo para contrarrestar su frágil legitimidad, la manipulación mediática del sentido común y la necesidad de un nuevo impulso reformador progresista.

La segunda sección se titula «La lacra del racismo». A partir de la constatación de una inmigración creciente y la experiencia de conflictos entre la población autóctona y la inmigrante, se valoran dos actitudes fundamentales para las fuerzas progresistas: la imprescindible integración social, y la necesaria convivencia intercultural.

La tercera parte, «Inmigración, racismo y delincuencia», con abundante fundamentación empírica, trata de disociar inmigración y delincuencia, estudia los delitos y los delincuentes por edad, sexo y nacionalidad, así como la mayor tasa de actividad, la menor renta media y la fiscalidad equitativa de la inmigración; finalmente, critica la percepción sesgada de la inmigración y la estrategia racista de desinformación y estigmatización inmigrante.

El cuarto apartado, «El avance de progreso en la encrucijada», señala la catarsis socialista, el dilema de Sánchez y la inconsistencia estratégica socialista, para valorar las condiciones del avance social y democrático y la necesidad del refuerzo del bloque democrático y plurinacional.

La quinta y última sección, «Continuismo socialista y resistencia», evalúa la orientación política aprobada en el reciente Congreso del Partido Socialista, calificada de pragmatismo continuista, junto con la

actitud resistente del presidente Pedro Sánchez ante el acoso judicial y mediático a su entorno, dejando la reforma social y la democratización en un segundo plano. Por último, profundiza en el sentido político e histórico de la resistencia cívica y política y su relación con el avance social y democrático y la transformación del poder institucional.

Desafíos de la izquierda alternativa

El segundo capítulo se titula «**Desafíos de la izquierda alternativa**». Ante las dificultades para una remontada electoral, política y unitaria, que no termina de fructificar, con efectos para la gobernabilidad progresista, repasa esta densa y controvertida experiencia y estudia los desafíos de la izquierda transformadora.

La primera sección explica «La relación entre Sumar y Podemos», con el planteamiento teórico-metodológico, un estudio comparativo de la representatividad de Sumar y Podemos y una conclusión general.

La segunda, «¿Podrá la izquierda alternativa?» señala la duda sobre si serán capaces de afrontar los desafíos estratégicos. Así, analiza el pragmatismo del sanchismo y los reequilibrios de poder, las dificultades de Sumar. Valora las ideas de que el centrismo socioliberal y el antipluralismo no son la solución, el fiasco político y democrático del centrismo, más allá de las pugnas ideológicas y de poder y que el discurso optimista no siempre motiva, ni prepara. Por último, plantea la necesidad de reformas sustantivas y pluralismo y que la democracia será social, participativa y solidaria, o no será.

La tercera, «Transformar la izquierda», se interroga sobre el cambio de ciclo progresista y la tendencia hacia un bipartidismo imperfecto, así como la interacción, utilizando una metáfora, entre ola y surfismo o, bien, entre dinámica social y representación político-institucional. Analiza el declive representativo de la izquierda alternativa, sus causas y la respuesta renovadora fallida, con sus dificultades articuladoras y unitarias y la importancia de la credibilidad transformadora y su articulación unitaria y pluralista frente al corporativismo sectario en las

élites alternativas. Termina con una reflexión sobre lo común, la fragilidad democrática y de la cultura pluralista y el arraigo social.

La cuarta trata sobre las «Enseñanzas y perspectivas» de esta larga y densa experiencia. Empieza por el análisis del declive y la necesidad del refuerzo de las fuerzas del cambio de progreso, el problema de su división y el difícil camino unitario, la conveniencia de un espacio alternativo diferenciado de la socialdemocracia, el arraigo social y la reactivación cívica, como claves para la remontada alternativa y algunos rasgos de la actual movilización social progresista.

La quinta expone el «Reto de la remontada alternativa», con las ideas de que el ciclo de progreso no se ha cerrado y la formación de un electorado transformador.

Y la sexta, «La incertidumbre de las izquierdas» señala la división y la impotencia de las dirigencias alternativas, el carácter ambivalente del Partido Socialista y la unidad, para qué: sus obstáculos y su conveniencia.

Polémicas sobre los feminismos

El capítulo tres, «**Polémicas sobre los feminismos**», reúne varios textos individuales y otros compartidos con Carmen Heredero, filóloga, feminista y experta en coeducación. Constituyen valoraciones y debates del momento actual, con un enfoque feminista, crítico, relacional, igualitario, popular y transformador.

El primero, «A favor de la identidad feminista», es la evaluación que Carmen Heredero realizó en el momento de la publicación del libro *Feminismos. Retos y teoría*, de mi autoría. En él se destaca la fortaleza del feminismo, las críticas a las corrientes socioliberal y posmoderna, la interacción entre identidad, sujeto y feminismo, así como los retos del feminismo.

El segundo texto, «Sobre el consentimiento y el deseo», de carácter teórico, es la Comunicación ampliada al último Congreso de Sociología, en la especialidad de Sociología del Género, realizado en Sevilla en julio

de 2024. Tras una introducción expone las controversias sobre el consentimiento, sus límites, la interacción entre deseo y consentimiento, el impacto sociopolítico del individualismo posmoderno, la paradoja del no saber el sentido de una relación sexual y el escepticismo filosófico y las características de un feminismo relacional, igualitario y emancipador.

La tercera parte, compartida entre ambos, consiste en una explicación sobre el «Feminismo de la igualdad». Tras una alusión a cierta polarización de posiciones en los feminismos, señala una doble característica y su interacción: por un lado, se defiende un feminismo inclusivo e interseccional, por otro lado, un feminismo igualitario y transformador.

La cuarta sección, también compartida, se titula «Ante el ‘caso Errejón’, más feminismo, no menos», un tema complejo y con muchas implicaciones feministas y políticas que ha suscitado diversas controversias. Se sitúa el foco del problema, la agresión machista del líder de Sumar/Más Madrid, y la respuesta justa de la denuncia pública y la exigencia de responsabilidades, así como la necesidad de avanzar en la transformación feminista y democrática.

El quinto tema es una evaluación conjunta sobre ‘Judith Butler y el feminismo como sujeto social’, a raíz de la publicación de su último libro. En esta sección se destaca la persistencia de la desigualdad de género, el valor del feminismo y la identidad feminista, cómo avanzar en la liberación y la igualdad femenina, el sujeto social como imprescindible para la transformación colectiva y la relevancia de la experiencia vivida e interpretada.

La última sección, «Identidades, interseccionalidad y universalismo», tras el análisis de la movilización feminista de este 8M, explica el sentido y la relación entre esos tres conceptos.

Debates sociopolíticos

El capítulo cuarto, «**Debates sociopolíticos**», explica siete temas específicos de relevancia sociopolítica, que constituyen debates

significativos en las izquierdas, con posiciones diversas y, a veces, controvertidas.

El primero es el contenido de la presentación de mi libro anterior, *Izquierda transformadora* (2024), en la que se evalúa la evolución de esta como campo social y electoral diferenciado de la socialdemocracia y se da cuenta de sus principales características, así como de su configuración política y las relaciones entre Sumar y Podemos.

El segundo trata sobre «El conflicto del subsidio de desempleo»; analiza detalladamente las ventajas e inconvenientes del decreto inicial del Ministerio de Trabajo, bajo la responsabilidad de Yolanda Díaz, líder de Sumar, al que se opuso Podemos, al considerar que pesaba más su carácter de recorte de derechos a un colectivo vulnerable, con la particularidad de la tensión por la ruptura del grupo parlamentario conjunto.

El tercer tema es «La experiencia francesa», en alusión a la victoria electoral del Nuevo Frente Popular, aunque sin mayoría absoluta, como alianza de las izquierdas, en las elecciones legislativas francesas, y el pulso con el presidente Macrón sobre la legitimidad y la reorientación política del nuevo Gobierno francés.

El cuarto asunto, titulado «Rearme, posibilismo y resistencia», es una reflexión teórica, a partir de la experiencia histórica de las situaciones defensivas o en desventaja de las izquierdas, como la actual del rearmen militar europeo, para definir sus estrategias transformadoras.

La quinta sección, «La reforma social y la regeneración democrática pendientes», analiza las dos tareas fundamentales que, aunque se han realizado algunos significativos avances, siguen estando pendientes, dada la persistencia de los graves problemas existentes en los dos ámbitos. Por último, expongo la idea de «la democracia social, el empuje reformador y el pluralismo», con los ejes fundamentales para avanzar en el proceso reformador progresista.

El sexto aspecto, «Dilemas de la izquierda alternativa», explica la situación y las perspectivas para el cambio social y político que tienen

las fuerzas progresistas y, en particular, la izquierda alternativa, referenciada fundamentalmente por los grupos que conforman la coalición Sumar y por Podemos.

Por último, a modo de epílogo, en «Las izquierdas y Europa ante el Trumpismo», se explica el nuevo imperialismo iliberal, comandado por Trump, las perspectivas para Europa y la doble excepcionalidad española, con el carácter antipluralista en las derechas y la capacidad estratégica de las izquierdas.

Este texto, «Encrucijadas», es una recopilación de artículos y ensayos publicados el último año en distintos medios (*Público, Nueva Tribuna, Mientras Tanto, Rebelión y Jacobin*), que han sido reelaborados para esta edición, así como diversas ponencias e investigaciones académicas de ciencias sociales elaboradas en este periodo.

6.2 Estrategia gubernamental e incertidumbre electoral y política

Es conocido el refrán popular recogido por Lope de Vega «Obras son amores y no buenas razones». Resume la tradición social realista de valorar el comportamiento de la gente, su compromiso cívico y su lealtad relacional, más que las simples palabras, intenciones o justificaciones.

Valga esta cita de la experiencia milenaria como punto de partida para analizar la actual estrategia gubernamental, actualizada este curso: ofensiva discursiva frente a las derechas, con ausencia de grandes reformas sociales y democráticas.

Tenemos, como ejemplo, algunas actuaciones recientes. El emplazamiento del proyecto de ley de reducción de la jornada laboral para su intento de aprobación parlamentaria, sin el apoyo de Junts, y con el objetivo de ganar la opinión de la calle y cuestionar la legitimidad de las derechas. O bien, la propuesta de la constitucionalización del derecho al aborto, con la conciencia de su imposibilidad aprobatoria, pero con la intención de desacreditar y dividir al PP y frenar entre la opinión pública la ola reaccionaria antifeminista.

No obstante, la norma decisiva que va a imprimir la orientación gubernamental, en lo que queda de legislatura, es la presentación y el carácter de los Presupuestos Generales, sin certeza de su aprobación y para marcar —discursivamente— las prioridades socioeconómicas, cuestionar el bloqueo derechista y prefigurar el programa electoral socialista, mientras el resto del bloque de investidura busca su propia legitimidad. Y todo ello junto con la presión atlantista por el rearme, que conlleva restricción del gasto social, y la necesaria diferenciación con Trump y el trumpismo estadounidense y europeo, así como frente al genocidio palestino.

Se trata del desarrollo del modelo de emplazamiento discursivo, sin expectativas de su concreción ejecutiva y como método de ampliar la legitimidad social progresista para mejorar sus perspectivas electorales y su gobernabilidad. La cuestión es si esa estrategia va a ser eficaz y podría garantizar la victoria electoral frente a las derechas. Veamos sus puntos débiles, basados en la impotencia transformadora que expresa la cita antedicha, y la dudas que suscita su insuficiencia respecto de su objetivo declarado.

El presidente Sánchez es consciente de la fragilidad de sus apoyos parlamentarios de izquierda y nacionalistas, menores que la legislatura pasada y más dependientes, por un lado, de Junts y, por otro lado, de Podemos, en un contexto de fuerte ofensiva política, mediática y judicial de las derechas. Su pragmatismo y su prioridad de acceder al poder gubernamental le llevó a aplicar la regla de ‘hacer de la necesidad

virtud' y convertir una situación desfavorable, con una medida controvertida, la amnistía, en una ventaja política.

Así nacía esa gran reforma política, que está marcando toda la legislatura en un doble sentido. Por lo positivo: el reconocimiento democratizador y la normalización con (y en) Cataluña, así como el aislamiento gubernamental de las derechas. Y por lo negativo: la sublevación de las derechas y el grueso del poder judicial, que ha conllevado el ascenso en España del nacionalismo ultra excluyente.

Pero el acuerdo de la investidura, salvo ese gran consenso democrático, tenía —y tiene— solo un objetivo limitado: evitar un gobierno regresivo y autoritario de las derechas. No se basaba en un común proyecto reformador de progreso. En la percepción socialista, no hay suficientes fuerzas parlamentarias progresistas para una alianza fuerte y cohesionada que permita avanzar en un significativo proceso de reformas sociales y democráticas. Su solución es el continuismo socioeconómico e institucional de la gestión gubernamental, con una simple adaptación normativa y ejecutiva al entorno, incluido el internacional, complementada con una confrontación discursiva con las derechas, primero defensiva y ahora ofensiva.

La dirección socialista descarta la apuesta por una dinámica de articulación sociopolítica que avance en un proceso reformador más contundente y condicione la actitud de las fuerzas más reticentes al mismo, con el apoyo de la izquierda alternativa (Sumar y Podemos) y la nacionalista (ERC, EH-Bildu y BNG). No hay giro hacia la izquierda, la democratización o la plurinacionalidad del Estado, incluida la mejora de la financiación autonómica, que podría abarcar el refuerzo de los servicios públicos, la democratización institucional y el autogobierno territorial solidario.

Las reformas sociolaborales progresistas tienen dificultades derivadas de la oposición de grupos nacionalistas de derecha —desde la reducción de la jornada hasta una reforma fiscal progresiva—. Igualmente, por parte del Partido Popular y Vox hay un bloqueo al desarrollo de leyes y servicios públicos —vivienda, sanidad educación...

—, y en sus comunidades autónomas imponen una involución privatizadora, de precarización y segmentación.

El presidente Sánchez, en algún momento, especuló con cambios significativos en el campo de la transparencia democrática —como el caso de la justicia o la ley mordaza—, en el que podría encontrar mayor apoyo en los grupos nacionalistas, pero se amilanó ante los poderes fácticos. Además, el Partido Socialista ha sufrido el impacto de la corrupción en sus filas, en el caso de sus dos exsecretarios de Organización, que le ha restado credibilidad ética.

La coalición gubernamental ha ido sacando algunas reformas menores, pero se puede decir que hay un bloqueo de reformas sociales y democráticas sustanciales y un acomodo a cierto continuismo socioeconómico e institucional, en un marco de cierta bonanza macroeconómica e inestabilidad internacional. Ante ese estancamiento en la gestión gubernamental de las políticas públicas y la tarea de afrontar una nueva etapa en el poder institucional y lo que queda de esta legislatura, se refuerza la estrategia de impulsar la acción discursiva frente a las derechas.

La gestión gubernamental se reorienta al emplazamiento, más o menos simbólico y de impacto mediático, pero sin perspectivas de eficacia transformadora inmediata de las relaciones sociales e institucionales. De la necesidad adaptativa al bloqueo del proceso reformador de progreso, se pasa a la virtud de la ofensiva propagandística. Desde luego, siempre es mejor que la pasividad o la rendición. El problema es que puede ser insuficiente sin una credibilidad transformadora de las izquierdas que permita forjar un fuerte contrato social y activar su base socioelectoral.

Se entra en una precampaña electoral prolongada, en la que lo prioritario es el incremento de la legitimidad pública y la confianza de sus bases sociales, con la perspectiva de ganar las elecciones generales que, se insiste, se convocarán en 2027... si no hay condiciones favorables para ganarlas en una convocatoria anticipada o es insostenible la gobernabilidad. Llegados a este punto, está por ver la eficacia de este

giro gubernamental hacia la prioridad por la guerra cultural sin cambios sustantivos.

El plan para ganar las elecciones parte del análisis demoscópico del relativo empate electoral entre las derechas estatales y las fuerzas progresistas y nacionalistas, con ventaja socialista sobre los populares, que descienden, el ascenso de Vox, el mantenimiento del bloque nacionalista y la delicada división de la izquierda alternativa. Son los resultados del CIS y de 40dB, cuyo sesgo, favorable al Partido Socialista, valoro más adelante.

Con ese diagnóstico embellecido de la realidad socioelectoral, un contexto macroeconómico razonable, la expectativa de los errores del PP y las insuficiencias del liderazgo de Feijóo, no se ve la necesidad de modificar esta dinámica de gestión gubernamental continuista, sin apenas avances reales. Se piensa que, sobre todo, con esta estrategia de confrontación discursiva frente a las derechas, incrementada por el miedo a la involución ultra, va a ser suficiente para estimular al electorado progresista y renovar otra etapa de gobierno democrático y de progreso.

Ahora bien, este planteamiento socialista es inseguro y peligroso, por sugerir acomodamiento continuista y conllevar frustración social. Se basa en la conjunción de esas variables, algunas sin rigor y otras autónomas de la gestión gubernamental, o sea, dependientes de otros actores. No garantiza la ampliación de la legitimidad cívica y la victoria electoral.

Por el contrario, el factor decisivo es la credibilidad transformadora de las élites políticas democráticas, la mejora con hechos de la situación vital de la gente, particularmente de la más vulnerable. Y, en todo caso, por el fuerte compromiso para ejecutarlos, construyendo las condiciones sociopolíticas e institucionales necesarias para articular ese objetivo de cambio real y sustantivo que beneficie a las mayorías sociales. Y así, especialmente para las izquierdas, con la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, se ganará la confianza popular por una nueva etapa de progreso.

La incógnita del carácter del próximo Gobierno

Hay un hecho, cada vez más trascendente que está condicionando (casi) todo el panorama político-electoral e institucional, presente y del inmediato futuro, en un marco global problemático: el carácter del próximo Gobierno y las estrategias a implementar por las izquierdas. El debate gira en torno al agotamiento del ciclo político e institucional de progreso, el posible cambio derechista y reaccionario y la división de la izquierda del Partido Socialista y su impacto. Se trata de abordarlo con rigor.

Desde prácticamente el primer día, el Gobierno de coalición progresista ha sido desacreditado por la oposición sistemática de las derechas de PP y Vox, que lo han tachado de ilegítimo, contrario a España y su ciudadanía. Pero, además, machacan la idea de que iba a ser breve y, cada poco tiempo, reclaman elecciones generales anticipadas, pensando en ganarlas y abrir una nueva etapa de involución derechista.

Ya se ha pasado la mitad de la legislatura y el presidente del Gobierno insiste en que convocará elecciones en el año 2027, con la consiguiente frustración de las derechas y su ansia de recambio del poder gubernamental, que suponen al alcance de su mano. No obstante, dada la composición parlamentaria, las derechas estatales no tienen capacidad para ganar una moción de censura y los socios de investidura —de momento— tampoco están interesados en hacer caer al Ejecutivo.

La decisión de adelantar las elecciones generales está en manos del presidente Pedro Sánchez. Y éste solo las va a convocar si tiene posibilidades de ganarlas, o si la gobernabilidad se hace insostenible, tal como promueven las derechas políticas, mediáticas y judiciales. Es decir, según indiquen los datos demoscópicos sobre el bloqueo institucional, la (des)legitimación gubernamental y su expectativa electoral, que confluyen en la decisión presidencial de anticiparlas (o no).

Necesidad de un impulso reformador

Existen dificultades para la gestión gubernamental y la aprobación legislativa, incluyendo los Presupuestos Generales para el año 2026 y, ya veremos, para el año 2027. Con una situación económica que, según su diagnóstico, comparativamente con otros países, no es demasiado problemática, el Gobierno utiliza unos presupuestos prorrogados algo expansionistas y los fondos europeos vigentes para todo el año 2026. Parece que para ellos no es imprescindible adelantar los comicios en el caso probable de su no aprobación; e incluso tampoco aunque se vayan paralizando las reformas legislativas, incluidas las políticas sociales y la reducción de jornada, sobre lo que se resiente más su izquierda.

El punto débil, a efectos de legitimidad ciudadana y malestar social de fondo, es el estancamiento de la impotencia gubernamental en asuntos cruciales para las mayorías sociales: dificultad del acceso a la vivienda; deterioro de los servicios públicos; amplia segmentación laboral y precariedad social, en particular hacia la inmigración; persistencia de fuerte desigualdad, incluida las brechas por sexo/género; limitada capacidad adquisitiva de los sectores populares...

La inercia continuista gubernamental choca con la necesidad de impulsar avances sociales y evitar recortes públicos. Junto con la necesaria agenda democratizadora contra la corrupción, de los aparatos del Estado y la articulación territorial —incluida la financiación autonómica—, así como frente al rearme, por las garantías feministas contra la violencia machista y la solidaridad con Palestina, constituyen factores fundamentales para reactivar a la ciudadanía progresista y superar la desconfianza y la desafección hacia su representación política.

Son dinámicas de reformas concretas y reales que se deben potenciar; no son suficientes los gestos simbólicos o el simple emplazamiento discursivo confrontativo, que aparecen como sustitutos del proceso reformador. La propaganda o la pugna cultural contra los discursos y las políticas de las derechas son positivas y sirven algo para

mostrar su carácter regresivo y autoritario. Pero son insuficientes para contrarrestar sus políticas, frenar la dinámica conservadora y ultraderechista y responder a las demandas sociales y democráticas. Hay que implementar mejoras reales y reafirmar el contrato social con la ciudadanía con una trayectoria coherente hacia un cambio sustantivo de progreso.

Se dibuja un elemento decisivo para no dar por finalizado este ciclo político y reeditar una etapa progresista: la credibilidad de las izquierdas sobre una agenda transformadora real y su fuerte compromiso para continuarla en la próxima legislatura. Ello permitiría la activación social y electoral progresista y la disminución de la tendencia abstencionista o desafecta de izquierdas, considerando que hay muy poco trasvase electoral hacia las derechas. La cuestión es que esa dinámica de progreso solo va a ser posible si, al mismo tiempo, se genera una amplia reactivación cívica por una agenda social y democrática, como ha demostrado el masivo movimiento solidario con Palestina y contra el genocidio del Estado israelí. La solución vendrá más del campo sociopolítico y cultural, no tanto del ámbito institucional.

Una campaña preelectoral prolongada

Para el presidente Sánchez —y la dirección socialista—, se vuelve determinante la expectativa de un resultado electoral que le permita continuar con un Ejecutivo de progreso, enfrentado a las derechas estatales y con el apoyo del resto de fuerzas progresistas y nacionalistas. Por tanto, diseña toda una estrategia de precampaña electoral prolongada para garantizar una mínima posibilidad de ganar las elecciones generales.

La hipótesis y el plan socialista, dada la relación de fuerzas parlamentarias y su dependencia de los poderes estructurales, económicos e institucionales, se basa en un continuismo socioeconómico e institucional, con leves reformas y un discurso confrontativo con las derechas. Es dudoso que sea suficiente para activar su electorado y,

especialmente, es limitado para articular y reforzar a su izquierda social y política, imprescindible para garantizar el próximo Gobierno de progreso y asegurar su labor reformadora.

Aquí, es cuando cobra relevancia el análisis demoscópico de la opinión pública, con rigor y garantías, sobre el impacto social legitimador de esa estrategia y la decisión sobre el momento oportuno para convocar los comicios con posibilidades de no perderlos. Pero la cuestión es que los propios estudios electorales, empezando por el CIS, también están condicionados, cada vez más, por las pretensiones ganadoras de cada bloque político y no son muy fiables. Tras los comicios en Extremadura, con refuerzo de las derechas, debacle socialista y avance de la izquierda alternativa, habrá que esperar a comprobar los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón, Castilla y León y, sobre todo, Andalucía, esta primavera.

No obstante, los estudios sociológicos nos proporcionan ciertas claves indicativas para evaluar las posibilidades de sus resultados electorales, con su impacto estratégico para la siguiente etapa política. Son necesarios para definir el *tempo* y la gran decisión sobre el anticipo (o no) de la convocatoria.

Podemos decir que las élites políticas y la ciudadanía, en general, mantienen cierta *incertidumbre* sobre esas expectativas. Aquí, esta palabra tiene un significado ambivalente, positivo y negativo. Por una parte, genera inquietud por el futuro. Por otra parte, significa que el futuro está abierto. La derecha, a pesar de todos los augurios, no tiene la completa seguridad de tenerlas ganadas; las izquierdas y fuerzas democráticas mantienen la esperanza de no perderlas (o no salir demasiado derrotadas). No hay certezas claras. No todo está perdido para las izquierdas... ni ganado para las derechas. Genera ansiedad y, al mismo tiempo, acelera la competencia política y la polarización discursiva como medios (dudosos) para vencer.

La pugna mediática se centra en la falta de credibilidad de las élites partidistas contrarias, poniendo el foco en aspectos ilegítimos de su actuación, sin valorar el conjunto de su trayectoria. La finalidad de la

política, como gestión del bien común, queda relegada por el interés partidista —corporativo—, con un cansancio en la sociedad al disociarse del sentido del interés público. Es el marco de la desconfianza social en la clase política y de la tensa y permanente campaña preelectoral por lograr legitimidad ciudadana.

La dirección socialista, con todos los datos demoscópicos y de análisis político, deberá acertar en el momento y las condiciones de la convocatoria adelantada (¿otoño de 2026?). Tendrá que combinar su diagnóstico sobre el agotamiento de la legislatura con sus expectativas electorales, así como con el análisis de la tendencia ascendente o descendente de la legitimación —entre la sociedad y los poderes establecidos— de su gestión política, comparada con la de las derechas. Y ello, hasta la fecha obligatoria de julio de 2027. Difícil pronóstico, aunque los criterios interpretativos son evidentes.

Las derechas creen en su victoria

Veamos los datos demoscópicos más significativos, sin entrar a valorar los múltiples acontecimientos en marcha o por venir y su previsible impacto electoral. Partimos de la hipótesis de que hoy, con fuentes contradictorias, no hay un claro bloque ganador, y los resultados van a depender de los acontecimientos venideros y la estrategia de cada cual.

Todos los estudios electorales privados, promovidos o publicados por medios de las derechas, en las últimas semanas (Demoscopia y Servicios —Libertad Digital—, NC. Report —La Razón—, Sigma Dos —El Mundo—, Sociométrica —El Español— y Gad3 —ABC—), ofrecen una amplia ventaja a las derechas estatales (PP y Vox), en estimación de voto y distribución de escaños, con un promedio de mayoría absoluta, cercana a los 200 escaños (140 + 58) y en torno al 50% de votos (33% + 17%), y con un ascenso significativo de la ultraderecha a costa del Partido Popular (SALT no llega al 2% y sin escaño).

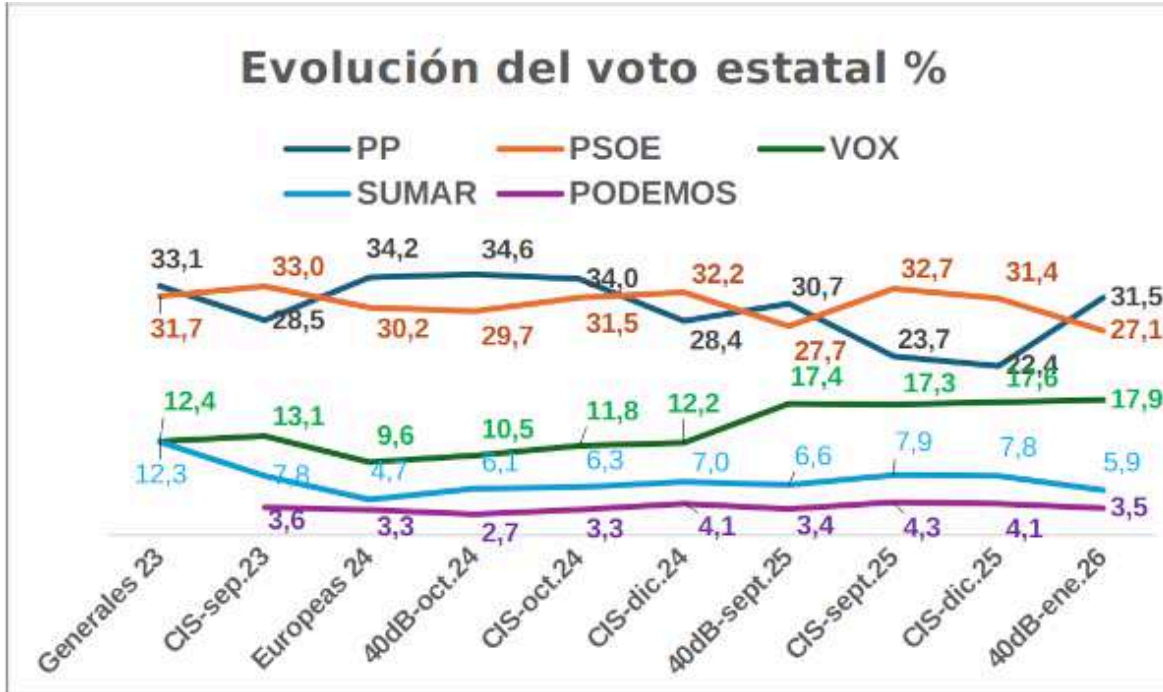
Las izquierdas estatales (PSOE, Sumar y Podemos) descienden a un entorno de unos 122 escaños (108 + 10 + 4) y 38% de voto estimado (27% + 7% + 4%). Además, el bloque nacionalista (de izquierdas — ERC, EH-Bildu y BNG— y de derechas —Junts, PNV, CC—) se mantiene estable en torno a 30 escaños, sin llegar al 10% de voto estimado.

La sentencia, desde las derechas, está clara: las derechas estatales tendrían ganadas las elecciones generales, su estrategia pasa por el acoso profundo y duradero al Gobierno de coalición, especialmente, a su Presidente y el sanchismo, y exigen adelantarlas cuanto antes. Solo se ventilaría su reequilibrio interno, con la imposibilidad de un Ejecutivo en solitario del PP -que lo acaricia-; o sea, con su inevitable alianza con Vox y el condicionamiento ultra.

Las izquierdas pueden ganar

Como contraste, están los resultados demoscópicos de los dos estudios que se consideran más favorables para el Gobierno, especialmente, para el PSOE: el CIS (público) y 40dB (El País y la Ser), recientemente publicados. En el siguiente gráfico expongo los últimos datos de diciembre de 2025 y enero de 2026 y la tendencia desde el 23/J/2023.

Ambas encuestas no ofrecen distribución de escaños, pero se pueden entrever. Tienen una muestra más amplia: de cuatro mil y dos mil entrevistas, con error muestral del +/-1,6% y el +/-2,2%, respectivamente, mientras las privadas de derechas suelen quedarse en las mil encuestas, con menor transparencia técnica, su correspondiente sesgo político y con un margen de error muestral de hasta más del +/-3%.



Fuente: CIS y 40dB, con elaboración propia

No obstante, especialmente respecto del CIS (dirigido por Tezanos), hay que constatar un sesgo político claro favorable a las izquierdas gubernamentales (PSOE-Sumar). A la hora de confeccionar la muestra, la selección de las entrevistas, según el porcentaje del ‘recuerdo de voto’ en las últimas elecciones generales del 23/J/2023, no corresponde con el porcentaje real conseguido por cada fuerza política sobre el censo (que pongo entre paréntesis): PP: 18,70% (21,77%); PSOE: 28,82% (20,87%); Vox: 9,46% (8,15%); Sumar: 10,26% (8,12% —con Podemos incorporado—).

Como se observa, en el caso de PSOE y de Sumar hay una sobrerrepresentación en la muestra de más de una cuarta parte respecto del recuerdo de voto de 2023, y más de la décima parte en Vox; todo ello en detrimento de la representación del electorado votante del PP, que está infrarrepresentado en un 16%, junto con una hipotética reducción de la abstención.

Además, el CIS ha solido sobredimensionar en sus muestras la categoría de la clase alta y media-alta. Pero, en esta ocasión, también lo ha hecho 40dB, que la sitúa en el 45% de la población, cuando no debería suponer más del 20%; el resto lo constituye la clase media (media) —25%— y, sobre todo, la media-baja y baja —29,5%—, que queda infrarrepresentada, cuando se trata de la típica clase trabajadora que conforma, al menos, la mitad de la población (más, si incorporamos la población inmigrante, sin derecho a voto en las generales).

Los datos expresados en el gráfico reflejan un resultado diferente entre los dos estudios; pero, sobre todo, exponen un panorama distinto al de las agencias privadas de derecha: el CIS refleja la victoria amplia del PSOE respecto del PP, que baja casi nueve puntos desde el barómetro anterior de diciembre pasado. Así, las izquierdas gubernamentales (PSOE-Sumar) suman un porcentaje alrededor del 40% (32,7% + 7,9%), similar al de las derechas estatales (PP-Vox: 23,7% + 17,3%). Aparte quedarían Podemos y los nacionalistas -de izquierda y de derecha-, que dejarían de serles tan imprescindibles para gobernar y estarían sometidos a la conveniencia socialista de los pactos de geometría variable.

Paisaje idílico para Sánchez, si se consolidase esa hipótesis de primacía desahogada; tendría despejada la convocatoria electoral adelantada, de forma inmediata. Pero, como hemos comentado, su base objetiva es frágil y, probablemente, no es suficiente garantía (o sí) para Sánchez como para anticipar las elecciones ahora, sin grandes riesgos de perderlas.

Como se ve, 40dB, en septiembre de 2025, es más prudente y realista; a esas izquierdas gubernamentales les da algo más del 34% (27,7% + 6,6%), bajando algo en su Barómetro de enero de 2026, 33%, (27,1% + 5,9%), frente a más del 48,1% de esas derechas estatales (30,7% + 17,4%), en septiembre que suben al 49,4% (31,5% + 17,9%) en este enero. O sea, el diagnóstico se acerca más a la experiencia de hace dos años, en el 23/J, con ascenso derechista, especialmente de Vox, pero con posibilidades de victoria de las izquierdas, aunque con su necesidad de alianzas con nacionalistas y Podemos para el apoyo, al

menos, de la investidura del presidente de Gobierno. Todo ello, siempre que los acontecimientos y su estrategia gestora y comunicativa les sean favorables al Ejecutivo, y desfavorables para las derechas. En todo caso, habría partido, cosa que tensa la política, pero abre expectativas para las izquierdas.

La división de la izquierda del PSOE y su impacto

Ahora pasamos a analizar la división de la izquierda del Partido Socialista y su impacto político y electoral. Además de la incertidumbre sobre la relación de fuerzas entre las derechas estatales y las izquierdas y fuerzas progresistas o democráticas, tratada anteriormente, existe otra gran dificultad para garantizar la continuidad de la gobernabilidad de las izquierdas: la división de la izquierda del Partido Socialista, particularmente entre Sumar y Podemos, que anuncian su presentación electoral por separado, con pretensiones de su respectiva primacía.

Casi todas las encuestas ofrecen un porcentaje, entre ambas formaciones, coalición Sumar y Podemos, algo superior al 10%, es decir, solo un poco inferior al conseguido, de forma compartida, el 23J (12,3%); incluso el CIS de septiembre les da ese mismo porcentaje y el de diciembre se acerca hasta el 11,9%. No obstante, la última encuesta de 40dB, de enero de 2026, considerada aquí la más objetiva, constata la continuidad de un ligero descenso hasta el 9,4% (5,9% Sumar + 3,5% Podemos).

A pesar de las tensiones y la división en ese espacio de izquierdas diferenciado de la socialdemocracia, y tras los tres millones de votos conseguidos en las últimas generales, a lo largo de estos dos años todavía mantienen, con un nivel de participación similar al de 2023, según el conjunto de encuestas, un suelo de más de dos millones y medio de votantes.

Ese campo electoral parece consistente y se resiste a ir hacia el PSOE, la izquierda nacionalista o la abstención, aun con una bolsa significativa de votantes indecisos. La distribución aproximada y

duradera de ese electorado básico es de más de millón y medio para el conjunto de Sumar y en torno a un millón para Podemos, o sea, en una proporción de seis y medio a tres y medio, aunque en escaños aumentaría la distancia.

De la valoración de la evolución de la estimación del voto desde el 23J y la siguiente división en ese espacio a la izquierda del PSOE, se deducen cuatro conclusiones.

Primera, persiste esa relación mayoritaria por parte del conglomerado de Sumar, que se aferra a su gestión gubernamental, y minoritaria de Podemos, que se concentra en su opción por una izquierda fuerte.

Segunda, la coalición Sumar no se consolida como monopolio representativo y ascendente, ni Podemos, aunque evita su peor presagio, consigue el suficiente apoyo electoral para aspirar a su deseado *sorpasso* y ser el motor ideológico y representativo del conjunto del espacio.

Tercera, ambas agrupaciones se alejan de sus mejores pronósticos y expectativas respectivas y salen debilitadas con esta trayectoria divisiva, confirmada para las próximas elecciones autonómicas —Aragón, Castilla León y Andalucía—, y probablemente para las generales —quizá adelantadas a este otoño— y el resto de autonómicas y municipales de 2027.

Cuarta, en particular, tiene un grave impacto de reducción de sus accesos a los escaños parlamentarios (10 + 4) y, por tanto, para tener una presencia institucional relevante y contribuir a la reedición de un gobierno de coalición progresista. El riesgo es la victoria de las derechas y las posibilidades de una involución derechista hacia un ciclo político reaccionario.

Queda toda esta prolongada campaña preelectoral, con el complejo panorama internacional, pero todo indica que se aventura una crisis, quizá asimétrica, de las élites alternativas, probablemente en el marco de un mayor desconcierto del conjunto de las izquierdas, sin poder gubernamental. Supone el desafío de abordar la recomposición del espacio sociopolítico y electoral transformador y la reconstrucción de

sus estructuras partidarias y sus liderazgos. Pero ello requiere otra reflexión en profundidad. Más tarde volveré sobre ello.

La transferencia de votos entre las izquierdas

Es conveniente analizar las transferencias de votos y la relativa estabilidad de los totales en estos meses, con algunos matices entre el CIS y 40dB, que saltan a la vista, en especial con relación al saldo de las transferencias desde y al PSOE, así como desde y a la abstención o la indecisión (cuyos indicadores no son claros y homogéneos), tal como se detalla en la tabla adjunta.

En particular, 40dB, aparte del flujo proveniente de la candidatura compartida de Sumar en el año 2023, cercano a 0,8 millones, la cuarta parte, similar al dato del CIS, le da a Podemos una transferencia desde el PSOE y las personas que no votaron, de más de 0,46 millones, casi el doble del que recibe el actual Sumar —0,24 millones—.

Con una reducida abstención progresista, según el CIS, Sumar podría alcanzar hasta 1,9 millones y Podemos más de 1,2 millones, similar a los datos globales de 40dB, manteniendo casi la misma proporción de 65% a 35%, sin llegar a dos tercios y un tercio —aunque alguna encuesta les da un empate—.

La fuerte participación de la gente de izquierdas, junto con la unidad electoral de esa izquierda alternativa, aunque sea solo con un programa mínimo consensuado y a efectos de sortear la penalización normativa a las listas minoritarias, aparecen como claves para asegurar la continuidad de un gobierno de coalición progresista con credibilidad transformadora y evitar la gobernabilidad más regresiva y autoritaria de las derechas.

Transferencia de voto desde 23/J/2023 (según voto estimado)

DE SUMAR A	CIS- sept.2025		40dB-sept.2025	
	TOTAL (miles)	%	TOTAL (miles)	%
SUMAR	1.331	43,8	1410	46,4
PODEMOS	760	25,0	796	26,2
PSOE	380	12,5	210	6,9
Izda. Nacionalista	115	2,7		
PP	40	1,3		
Otros-n/s-Abst.	431	14,2	617	20,3
TOTAL	3.057	99,5	3033	99,8
A SUMAR y PODEMOS				
(Total en miles)	CIS- sept.2025		40dB-sept.2025	
	A SUMAR	A PODEMOS	A SUMAR	A PODEMOS
DE PSOE	281	117	414	164
DE NO VOTÓ	222	123	128	294
TOTAL	503	240	542	458

Fuente: Barómetros del CIS y 40dB de septiembre de 2025, con elaboración propia.

No obstante, hay que recordar que, desde los años 2015/16 ese espacio alternativo, desde los seis millones de votos en las elecciones generales —en las municipales y autonómicas era menor—, pasando por la fase intermedia del año 2019, ha reducido su electorado a la mitad. Hasta el año 2023 se había producido un trasvase de más de dos millones de votos hacia el PSOE, con otra parte hacia la izquierda

nacionalista (sobre todo a BNG y EH-Bildu, especialmente, en las autonómicas) y la abstención. Esas fugas de voto se han frenado y están compensadas por la tendencia contraria. El suelo del 10% y los dos millones y medio de votos parece estable, aunque con una preocupante bolsa de indecisión y desafección, a revertir.

El declive de representatividad electoral de la izquierda alternativa continúa desde 2023. La particularidad es que, aunque estos dos años el descenso en estimación de voto no es muy pronunciado, en caso de listas separadas sí que puede disminuir fuertemente el número de escaños conseguidos. Deriva de la constricción de la adjudicación provincial de escaños, con la dificultad de la no conversión del voto en escaños en la docena de provincias medianas a las que se tuvo acceso en 2023. Es el clásico problema de la ‘utilidad’ del voto para el acceso institucional que, seguramente, utilizará el Partido Socialista (y la izquierda nacionalista) a su favor, y que puede hacer mella en una parte indecisa o posibilista.

La reducción de escaños, en caso de división electoral

Según todas las estimaciones, con ambas formaciones por separado, obtendrían una media de escaños en torno a la mitad (unos 14: 10 + 4; ahora suman 31: 27 + 4); algo más en el caso del CIS, aunque sin superar la veintena. Su representación quedaría circunscrita, prácticamente, a cuatro provincias.

En el caso de Sumar: Madrid, 3 escaños; Barcelona, 3; Valencia, 2; Sevilla (o Málaga), 2. Como se deduce, Más Madrid, podría aspirar a dos escaños; Catalunya en Común, a tres; Compromís, a dos; IU, a uno (o dos); pero Movimiento Sumar, con Yolanda Díaz, se supone que por Madrid, se podría quedar con solo uno (o dos), y se verían cuestionados su liderazgo y la capacidad de vertebración del conjunto. El más perjudicado, cualitativamente, sería Movimiento Sumar, además de Izquierda Unida. Son la fuente de las dudas que subyacen sobre el futuro de esa plataforma política, sobre la renovación, el carácter y el liderazgo

de su proyecto, así como sobre su relación con Podemos, sin perspectivas de resolución.

Por otra parte, en el caso de Podemos, sus cuatro escaños se podrían alcanzar por las mismas provincias: Madrid, dos; Valencia, uno; Sevilla (o Barcelona), 1. Podemos y Movimiento Sumar estarían en abierta competencia entre sí y con el grupo territorial respectivo. En ese sentido, el plan morado de mantener una izquierda fuerte en pie, en confrontación con toda la operación de Sumar, vería cumplido su objetivo pírrico de superar electoralmente a Movimiento Sumar y debilitar su liderazgo en el conjunto del espacio alternativo, más desestructurado, con distintas fuerzas territoriales. Sin embargo, estaría en desventaja representativa respecto del conjunto de la coalición Sumar, como aventura el reciente acuerdo entre Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes, y aunque está por ver su vertebración definitiva, su liderazgo y su marca.

Consecuencias políticas controvertidas

El marco de sectarismo competitivo y división política y electoral, cada vez más acentuado —y si no se revierte—, además de desanimar a franjas de sus militancias y su electorado, dificultaría la victoria global de las izquierdas, aun con el acuerdo de los grupos nacionalistas. La consecuencia, aparte del perjuicio para las condiciones vitales y democráticas de la ciudadanía, es especialmente sensible para el Partido Socialista (y Sumar), por el desalojo gubernamental del Gobierno de coalición progresista, que se resiste a ese augurio. Sin embargo, no puede absorber otra parte significativa del electorado a su izquierda —salvo el impacto del voto útil—, está condenado a pactar con ella, y confía en que se recupere; eso sí, sin cambios estratégicos gubernamentales y con sus equilibrios estructurales, lo que lo pone difícil.

Para la dirección de Podemos, la composición gubernamental derivada de estas elecciones, de derechas o socialista, es una

consecuencia irrelevante; según su hipótesis, tanto si gana un Gobierno de las derechas como si lo hace el actual gobierno de coalición, van a ejecutar, básicamente, las mismas políticas. Y lo que podría influir en la trayectoria política es su presión como izquierda consecuente, cuyo discurso y determinación, con la expectativa de un ascenso de la movilización popular a la que aspiran representar, esperan que pueda llegar a ser influyente. Enfrente estaría ese supuesto bipartidismo indiferenciado, a combatir desde la oposición, parlamentaria y social, en la próxima legislatura, mientras se refuerza como agrupación partidaria. No están interesados, por tanto, en la colaboración con el resto de fuerzas progresistas o democráticas, que consideran incoherentes o inconsistentes, y siempre con su prevalencia.

Para la dirección de Sumar es más decisivo su acceso a posiciones gubernamentales, en la creencia de que existen diferencias significativas con las derechas y que su gestión posibilista va a ser importante y útil para la gente y para su estatus político y su incremento electoral. No obstante, su liderazgo actual también es incapaz de articular de forma unitaria el conjunto del espacio, sin asumir su parte de responsabilidad en la fragmentación y la consecuencia de la probable debacle parlamentaria y gubernamental.

Ambas hipótesis y planes, más allá de su actual enconamiento discursivo y fáctico, y si no se modifican, se verificarán en las elecciones generales y sus efectos para la gobernabilidad y el sentido de su orientación. La verdad sociológica, también sometida a polémica, dará más luz sobre la realidad. El análisis concreto de la situación concreta habrá que realizarlo sobre las certezas de estas estrategias, sus consecuencias para la ciudadanía, las responsabilidades de sus equipos dirigentes y las enseñanzas a extraer para la próxima etapa.

En definitiva, la consecuencia de la división o, dicho de otro modo, la incapacidad dirigente por articular de forma unitaria y plural el conjunto de la izquierda alternativa, junto con la izquierda nacionalista y el resto de fuerzas progresistas, debilita al conjunto del espacio alternativo y la capacidad de reactivación cívica, que pueda favorecer el

campo democratizador. Igualmente, disminuye el condicionamiento político de progreso frente a las derechas y el continuismo socialista, y lastra las posibilidades de reeditar un gobierno de coalición progresista con una izquierda firme y potente.

De momento, por lo que se comprueba en estos dos años, en un contexto externo desfavorable, no hay suficientes mimbres políticos y organizativos en los liderazgos del conjunto de la izquierda alternativa, política y social, para evitar su declive representativo y de influencia reformadora, institucional y político-cultural. Son evidentes las dificultades para afrontar los retos políticos, estratégicos y orgánicos para remontar esa dinámica y levantar una trayectoria consecuente en beneficio de la mayoría social y generar nuevas perspectivas de cambio de progreso frente a la amenaza derechista.

Solo cabe, aparte de contar con la débil consistencia de las estructuras orgánicas existentes, la respuesta sociopolítica desde abajo y desde afuera, en la medida que se active una amplia movilización cívica, con el refuerzo de una estrategia transformadora, una regeneración cultural y democrática y la reestructuración plural de las élites asociativas y partidarias. Colectivamente, habrá que aprender de los errores y sus consecuencias, evitar un desgaste mayor y reconstruir el espacio alternativo y su representación. Los liderazgos se generan y se recomponen al afrontar las encrucijadas estratégicas y demostrar su capacidad articuladora. Estamos a las puertas de un cambio de ciclo. Las crisis también constituyen una oportunidad. Veremos.

Una reflexión final

En un mundo inseguro, como el actual, las personas tendemos a buscar y conseguir certezas. Los grandes actores políticos, sociales y mediáticos, en su función de representación, intermediación y socialización de la población, cada cual representando específicos intereses y discursos, expresan sus particulares perspectivas y líneas de actuación. Pretenden alcanzar suficientes apoyos sociales que faciliten la

conquista cierta de su objetivo respectivo, definido en términos de bienestar y seguridad de la sociedad, con su trayectoria colectiva y sus (supuestos) mecanismos institucionales democráticos.

Hay muchos factores de crisis multidimensional, sin excesiva confianza popular en las respuestas convencionales ofrecidas, ni en las élites políticas y económicas que las gestionan. Existe mucho ruido y crispación que incrementa la confusión social y la desorientación ciudadana; no hay conversación razonada ni argumentación deliberativa. El diálogo y la elaboración participativa y compartida de la política y los proyectos de vida se desactivan. El autoritarismo ultra avanza, incluido el de apariencia neutra y tecnológica. El supremacismo racista y neocolonial se expande. El machismo se refuerza. La democracia, especialmente su componente igualitario, se debilita.

En ese contexto, se genera la pugna discursiva, la manipulación comunicativa y la tergiversación de la realidad, para aparecer cada núcleo de poder, o aspirante a tal, como el grupo garante de bien común, de seguridad —social—, de verdad absoluta.

En ciencias sociales solemos decir que los ‘hechos’ son los hechos, base de la objetividad y la verdad; contra ello se levantan los llamados ‘hechos alternativos’, basados en mentiras o medias verdades. La hegemonía cultural y el control de los medios de comunicación, incluido universidades e institutos de investigación, están a la orden del día, con ventaja para el poder económico y las derechas.

Desde el campo progresista hay que volver a la prioridad analítica y política de los hechos sociales, a la experiencia popular, a la democracia como expresión de los intereses y aspiraciones de las mayorías sociales, más cuando se trata de analizar el comportamiento político-electoral de la población y los procesos de legitimación ciudadana.

Es cuestión de levantar la mirada, ver las contradictorias tendencias sociales y reforzar la voluntad de transformar la realidad con los valores vigentes en estos siglos de las izquierdas democráticas y fuerzas progresistas: libertad, igualdad y solidaridad. Es lo que he pretendido hacer en este ensayo. Valorar, con rigor, uno de los eslabones

fundamentales de esta encrucijada: la actual incertidumbre política y la perspectiva electoral.

6.3 Perspectivas de la izquierda alternativa

La fragmentación de la izquierda alternativa y su reconfiguración y renovación es un campo complejo y delicado, pero necesitado de análisis objetivo y constructivo para contribuir a su recomposición. Tiene implicaciones para la conformación de las izquierdas y la gobernabilidad progresista del país, en un marco de cierto agotamiento del ciclo de progreso en España. En libro *Encrucijadas. Para la democracia, las izquierdas y el feminismo*, trato sobre todo ello. Aquí voy a intentar clarificar los diagnósticos y propuestas existentes para abordar su problemática trayectoria.

Doy por supuesta la complejidad de esos conceptos ‘izquierda’ y ‘alternativa’ (o transformadora) y las controversias derivadas de la adjudicación de pertenencias de los distintos grupos políticos, así como la experiencia de la colaboración y la división entre ellos, junto con la voluntad legitimadora de sus élites dirigentes y sus intereses corporativos por reforzar su estatus.

Dejo al margen al Partido Socialista, considerado ambivalente en este eje izquierdas/derechas, con un componente doble, conectado con el poder establecido y vinculado con una amplia base social de izquierdas. Por otro lado, no entro en la valoración de la izquierda nacionalista y sus relaciones con las izquierdas estatales o confederales.

Señalo la importancia de la interacción entre las izquierdas sociales y las políticas; entre la acción sociopolítica de las movilizaciones sociales con sus procesos específicos de articulación, y la construcción de los campos electorales y su expresión político-institucional. Es una cuestión que se suele dejar de lado en las interpretaciones más politicistas o institucionalistas.

Me refiero, por tanto, al conglomerado en torno a la coalición Sumar y a Podemos, dando por supuesto que son fuerzas de izquierda (o progresistas) a la izquierda del Partido Socialista, con políticas similares y, al mismo tiempo, diferencias estratégicas y de alianzas significativas, pero diferenciada respecto de las derechas y, particularmente, con la mayoritaria identificación de izquierdas de sus bases sociales y su militancia, con valores democráticos comunes.

De entrada, hay que hacer una precisión relevante. Normalmente, en los análisis políticos no se valoran suficientemente las características de la base social y electoral de izquierdas, las dinámicas que las conforman y las tendencias sociopolíticas y culturales, en los contextos concretos de cada etapa. Se suelen centrar en las particularidades de los grupos dirigentes y sus intereses, discursos y estrategias. Con ello se pierde un necesario enfoque sociohistórico que explique las tendencias sociopolíticas de fondo y poder aventurar las dinámicas previsibles y las respuestas más realistas y transformadoras. En ese sentido, es cierta la idea de que lo mejor existente en España es esa base socioelectoral crítica, la izquierda social y cultural.

El declive de la izquierda alternativa

Desde 2019, más de la mitad del electorado alternativo estatal —unos seis millones—, expresado en los años 2015/2016, tras el amplio proceso de protesta social progresista de los años 2010/2014, ha sido recuperado por el Partido Socialista, la izquierda nacionalista y algo la abstención. La estimación de voto del CIS, de abril de 2024, daba un 6,2% a Sumar y el 4% a Podemos (en las elecciones europeas, 4,67% +

3,30%, respectivamente), y en el año 2025 no ha habido grandes variaciones. Hay una dinámica de descenso del voto a la coalición Sumar que, conjuntamente, había llegado hasta el 12,3% y tres millones de votos en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, y de ascenso relativo de Podemos; incluso alguna encuesta privada augura cierto empate, sumando entre ambas formaciones algo más del 10%, hasta unos dos millones y medio de votos, y unos ocho escaños cada una.

Su transformación en escaños, dada la normativa electoral, al ir por separado se vería perjudicada todavía más, con una disminución de la representación parlamentaria alternativa. De 31 escaños en total (26+5 en el reparto inicial entre ambas formaciones), en 2023, con esos datos del CIS, con un sesgo favorable a las dos formaciones gubernamentales, y considerando otros estudios demoscópicos, se reducirían hasta 4/6 para Podemos y 9/16 para Sumar. Su reparto, con sus respectivos intereses y expectativas, podría ser, en el mejor de los casos: Movimiento Sumar, 3/5; Izquierda Unida, 3/4 (Andalucía); Catalunya en Común, 3 (Barcelona); Más Madrid, 2 (Madrid); Compromís, 2 (Comunidad Valenciana).

La particularidad es que los escaños de Movimiento Sumar y de Podemos saldrían en esas cuatro zonas, en competencia entre ellos y con esos cuatro grupos territoriales, además de la polarización por ser cabeza de lista a la presidencia del Gobierno. Con los mismos votos, conjuntamente, se podría acceder a unos 6/8 escaños más, en las provincias medianas, cuya adjudicación volvería a ser complicada en una posible negociación o proceso de primarias.

Por otro lado, la incorporación de líderes de Movimiento Sumar a las listas del Partido Socialista es dudoso que consiguiese el desplazamiento de su base electoral hacia él; es decir, al propio PSOE, por mucho que pretenda absorber una parte relevante de ese espacio para intentar remontar y gobernar en solitario, le sería poco operativo. Menos interesante sería para la dirección de Movimiento Sumar, que disolvería

su base social y su proyecto político. Por tanto, esa hipótesis ha sido desechada por la dirección de Sumar.

Al mismo tiempo, esas cuatro formaciones territoriales — considerando el peso electoral y municipalista de IU, sobre todo, en Andalucía— tienen suficiente entidad para mantener su actual base social, mantener esa representación institucional, quizá algo disminuidas, y frenar un poco el flujo hacia el PSOE (o hacia Podemos). Aun así, **queda pendiente el gran problema, conseguir suficiente representatividad parlamentaria por parte del conjunto de ese espacio alternativo para contribuir en la reedición negociada de una mayoría de progreso.**

A tenor de la últimas encuestas y los resultados de las elecciones europeas, damos por supuesto que Podemos, a pesar de la marginación y el acoso recibidos, ha salvado su mayor peligro de la irrelevancia política y se está recuperando, de momento con ese techo del millón de votantes; y en el caso de coalición Sumar, con amplias posiciones institucionales y apoyo mediático, hay una trayectoria electoral descendente, aunque sigue manteniendo todavía un millón y medio de votantes, más fragmentados en su articulación política, con peso significativo en las cuatro provincias con primacías orgánicas específicas y garantías representativas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla).

El hecho decisivo, cuando se pretende formar una fuerza política con una capacidad electoral significativa para tener posiciones institucionales, es alcanzar en el Estado, al menos, una representatividad superior al 10% del electorado, dadas las constricciones de la normativa electoral.

Con esa previsión parlamentaria, sin un proceso de reactivación unitaria y remontada electoral, con un estancamiento del Partido Socialista y un ligero ascenso de las derechas (PP y VOX), no se podría conformar, junto con el PSOE y las fuerzas nacionalistas, una alianza de progreso, o simplemente continuista, que impida un gobierno de derechas extremas y la consolidación de un nuevo ciclo reaccionario.

Además, con un posible predominio institucional de las derechas, tampoco se podría condicionar significativamente, desde ese ámbito parlamentario, su anunciada dinámica gubernamental y legislativa regresiva y autoritaria, con una impotencia transformadora mayor de la izquierda alternativa y el conjunto de las fuerzas progresistas y democráticas.

Con esas perspectivas de involución democrática y de condiciones y derechos sociales, así como de frustración ciudadana, **el foco principal del activismo político alternativo pasaría a la esfera sociopolítica y cultural y la oposición parlamentaria**, para recomponer y ampliar un nuevo campo socioelectoral y político-institucional, como mecanismo para reiniciar otra fase de cambios sustantivos de progreso para las mayorías populares.

Superar el sectarismo partidista

En el contexto de declive de la izquierda transformadora, se produce una fuerte pugna por el relato de sus causas, las responsabilidades partidistas y las salidas que legitimen los respectivos liderazgos y estrategias.

Se producen diagnósticos contrapuestos y performativos, poco realistas, que expresan deseos de cada cual. Por un lado, la muerte de Podemos; por otro lado, la descomposición de Sumar. Se genera la incompatibilidad de liderazgos, con los vetos cruzados: Yolanda Díaz/Irene Montero. Se da por inevitable la persistencia de solo un grupo dirigente para articular ese espacio alternativo, con la prevalencia de una parte y la subordinación de la otra.

Así, las dos propuestas existentes son hegemónicas de parte y no demasiado sensatas para articular la cooperación, considerada imposible o innecesaria por ambas partes.

Por un lado, el modelo de Sumar del 23J, con la continuidad de la primacía del Movimiento Sumar y el equipo de Yolanda Díaz, y la sustitución de Podemos en el liderazgo y su marginación, con una

política moderada de afinidad con el Partido Socialista. Es la que la dirección de Sumar pretendió imponer en el proceso que culminó el 23J, con los reajustes gubernamentales y parlamentarios excluyentes consiguientes, plan que ahora se reproduce sin valorar su fracaso fáctico y antipluralista. Es la actual alternativa oficial de Movimiento Sumar, imposible de repetir ante el reequilibrio representativo de Podemos y la actitud más reequilibradora y unitaria de Izquierda Unida. O sea, no es operativa y solo tiene una función legitimadora para mantener una aparente iniciativa unitaria.

Por otro lado, el de una ‘izquierda valiente’ en torno a Podemos, con una estrategia confrontativa con el Gobierno de coalición, poniendo el énfasis en la movilización contra la guerra, intentando absorber partes de la coalición Sumar, tras la supuesta integración de otra parte en el PSOE. Se basa en la hipótesis de la descomposición de Sumar: que el PSOE incorpore al núcleo dirigente de Movimiento Sumar, y Podemos articule, atrayendo el grueso de su base social, a varios grupos de la coalición Sumar (IU y los Comunes —sin ICV—), junto con otros activistas sociales. Sería una especie de nueva Unidas Podemos, con prevalencia de la dirección morada, dejando a la intemperie a Más Madrid y Compromís (o Mes y Chunta), difíciles de asimilar para ellos.

Es una hipótesis deseable para Podemos, para fortalecer su liderazgo, pero poco realista, al menos, antes de la comprobación del probable batacazo electoral en 2027, aunque las encuestas negativas precedentes y los reajustes internos de expectativas podrían adelantar las tensiones internas y la búsqueda de apaños para evitar la pérdida de credibilidad social.

Además, está la propuesta razonable de Izquierda Unida, de reunir al conjunto en una nueva plataforma sin vetos y con programa mínimo compartido, más horizontal, con un procedimiento democrático consensuado —primarias a negociar—, pero que adolece de cierto irrealismo que los lleva a admitir la posibilidad de una tercera lista por separado, con lo que se agravaría la situación todavía más. Al final, la estrategia unitaria se reconduce hacia la renovación de la coalición

Sumar —con otro nombre—, con similares componentes y en competencia con Podemos, que decide caminar por separado.

Hoy es difícil de concretar ese frente amplio o bloque histórico, sin mayor autoridad moral y política de sus liderazgos y dada la predisposición de cada parte, incluida IU, para consolidar en este proceso transitorio su respectiva hegemonía orgánica y su línea política particular.

Así, de entrada, la dirección de Movimiento Sumar y el equipo liderado por la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, valoran su política y su posición como las más útiles e innegociables, ya que el radicalismo de Podemos lo consideran un lastre para ensanchar su influencia. Mientras que la dirección de Podemos las considera imposibles de consensuar, por la gran distancia existente entre una estrategia que llaman de régimen de guerra, en la que involucra a todo el Gobierno, y otra de paz, que defienden y que, según ellos, es determinante para la formación de la izquierda en la fase actual.

La situación se agrava con la posición exclusivista, en sus respectivas comunidades autónomas, de Más Madrid y Compromís, que excluyen cualquier alianza electoral con Podemos, aparte de mantener a Izquierda Unida en una posición subordinada, para reforzar su posición prevalente, infravalorando sus consecuencias negativas.

Se puede constatar que, con los liderazgos actuales, es difícil avanzar en una colaboración, institucional, social o de base, que pudiese culminar en un acuerdo electoral y de estrategia política para el inmediato reto político-electoral y, particularmente, para la próxima etapa. Es un camino que requiere varias condiciones y necesitaría más altura de miras y capacidad de liderazgo colectivo.

Dinámicas regeneradoras

Caben tres dinámicas, necesariamente combinadas, que pueden desbloquear y modificar algo esas actitudes y estrategias de los núcleos dirigentes actuales, en el marco de una presión democrática

más general, incluido por los intereses corporativos del resto de las fuerzas progresistas y del propio Partido Socialista, que pretende evitar su desalojo gubernamental.

Primera, una significativa activación cívica y de masivas movilizaciones sociales —feministas, vivienda, sanidad y educación públicas, solidaridad con Palestina, contra el rearme...—, junto con una dinámica más global contra la involución regresiva y autoritaria, que presionen desde la base popular una trayectoria transformadora y unitaria.

Segunda, unos resultados especialmente positivos, comunes y visibles, de las pocas experiencias colaborativas existentes —*Por Andalucía, Contigo Navarra, Unidas por Extremadura* u otras dinámicas locales, municipalistas y sectoriales—, que abran mayores caminos cooperativos y de confianza.

Tercera, una reconsideración reflexiva y constructiva de las direcciones partidistas —y de otras organizaciones sociales y la intelectualidad progresista—, con la capacitación de nuevos liderazgos unitarios, democráticos y con una perspectiva transformadora a medio plazo.

De momento, parece que las dos espadas principales están en alto, sin dar el brazo a torcer, y en espera de que los cambios de la realidad de la crisis político-orgánica se hagan más evidentes y aparezcan factores favorables para cada cual en su pugna por la prevalencia política y orgánica.

Es decir, contando con el precedente de las elecciones andaluzas (y los tres comicios autonómicos adelantados de Extremadura, Aragón y Castilla y León), habrá que esperar hasta la debacle previsible —quizá asimétrica— de los resultados electorales —municipales, autonómicos y generales— de 2027, constatar la impotencia frustrante y la crítica de la izquierda social y política ante los graves retos existentes, y valorar su representatividad específica, su fuerza comparativa y la credibilidad de sus liderazgos.

Será el momento, trágico, de reactivar las tres dinámicas antedichas, activación cívica, experiencias colaborativas y renovación de liderazgos, seguramente, en condiciones sociopolíticas más desfavorables que en la actual etapa transitoria, previa pugna competitiva por la adjudicación de responsabilidades del fracaso y los intentos de asentar nuevos liderazgos y estrategias políticas. Entraremos en otra fase, dura y delicada, que demostrará la validez de las actuales estructuras dirigentes de la izquierda alternativa.

El riesgo de involución y la voluntad transformadora

Se trata de desafiar al mal mayor, frente a la prioridad contra el mal menor, prevenir la pugna sectaria y corporativa en la izquierda alternativa y apostar por su renovación, colaboración y refuerzo. La tendencia probable es una realidad externa desfavorable para las fuerzas transformadoras. No obstante, al mismo tiempo que el declive y el desconcierto de las izquierdas alternativas, se abre la oportunidad para otro ciclo de reactivación cívica y recomposición sociopolítica y partidista, para el que se genera una fuerte pugna política y discursiva por la primacía para influir en su nueva dimensión, sus características y su liderazgo.

Por otra parte, respecto de las condiciones externas, hay que remarcar la diferencia entre, por una parte, una gestión ultraliberal, regresiva, imperial y autoritaria de las derechas extremas, reforzadas por la trayectoria trumpista y ultra en Europa, con fuertes componentes racistas, antifeministas y antiecológicos; y, por otra parte, una gestión centrista o continuista (o posibilista / oportunista), con componentes neoliberales y de contención de derechos sociales y democráticos. En ambos casos, en un ámbito de cierta democracia liberal debilitada, se puede condicionar su gestión por su necesidad de su legitimación social y democrática, o sea, por la presión cívica, si la hay en el corto plazo.

El foco principal de la acción política y la influencia transformadora pasaría a la capacidad de activación cívica y articulación sociopolítica de

las organizaciones sociales y culturales, así como de su representación política, en un papel menos institucionalizado. Esta, con pocos recursos de poder institucional, tendría que basarse en su arraigo social, su cultura democrática y pluralista y su capacidad articuladora y de liderazgo popular. Constituye una nueva prueba para las estructuras de la izquierda alternativa, y la propia influencia de la socialdemocracia y la izquierda nacionalista.

En todo caso, hay que valorar la especificidad de la interacción entre las dos corrientes de izquierdas, la moderada y la transformadora, también en su capacidad articuladora de las demandas sociales.

Igualmente, hay que tener en cuenta cómo frenar la gestión política de las derechas y los grupos de poder, que pueden combinar imposiciones excluyentes a unos grupos sociales con concesiones parciales y privilegios relativos a otros. Por tanto, hay que actuar frente a su dinámica de reforzar ventajas comparativas de unos sectores sociales frente a otros más vulnerables y en desventaja, para incrementar la división social y apropiarse de la legitimidad o la representatividad de sectores populares descendentes, o desafectos, en términos relativos, e impedir el avance de las fuerzas progresistas.

Si terminamos ahí, con un Ejecutivo de derechas extremas y una oleada segregadora y reaccionaria, el camino antifascista y contra la reacción no será nada fácil, aunque aparezca el adversario con claridad.

Desafiar al mal mayor, frente a la prioridad contra el mal menor

La conclusión estratégica no es la de subordinarse a los intereses de ese bloque centrista/continuista, el llamado malmenorismo, sino la de oponerse al mal mayor, la involución social y democrática de las derechas extremas, y consolidar las fuerzas sociopolíticas transformadoras. En ese sentido, hay que valorar el carácter ambivalente o contradictorio de las corrientes moderadas, posibilistas o socioliberales respecto del poder establecido y las derechas, adversario principal de las fuerzas progresistas y de izquierda.

El riesgo principal es un refuerzo derechista y de los grupos de poder y una destrucción mayor de las fuerzas transformadoras y de izquierdas, incluido los movimientos sociales y el sindicalismo. También es problemática la crisis de las fuerzas liberal-democráticas o centristas, sin grandes acomodos en los poderes fácticos, y su deslizamiento hacia la derecha conservadora. El desafío estratégico para las izquierdas frente a los poderosos será resistir frente al retroceso político-social y avanzar en condiciones, derechos y fuerzas sociales, en plena travesía del desierto institucional, con una dinámica doble de unidad y diferenciación, o cooperación y crítica, con las fuerzas moderadas o socioliberales, dentro del campo democrático, y según las características de cada fase histórica.

En todo caso, como se adelantaba, una decisión trágica sobre la configuración institucional puede venir en 2027, en los procesos electorales municipales, autonómicos y generales —si no se adelantan—, sobre la constitución de mayorías de gobierno, si se da una coyuntura similar de equilibrios parlamentarios como la de 2023. La actual coalición Sumar lo tiene claro: su firme alianza con el Partido Socialista.

La principal condición morada para llegar a acuerdos con el PSOE es que respete su autonomía política (para disentir), aunque esa posibilidad negociadora, como política flexible, está contrarrestada por el análisis, la crítica frontal y la polarización como representación del ‘régimen de guerra’ a derribar. No obstante, se afianza la idea de la imposibilidad de participar en un gobierno conjunto con los socialistas (y Sumar) o de compartir un programa mínimo de legislatura.

El interrogante sería sobre la decisión del apoyo (o la inhibición) en la investidura socialista, si su voto es determinante para que no gobiernen las derechas. Y a qué precio. La cobertura del relato justificativo de la oposición a esa posibilidad ya se avanza: la responsabilidad de la victoria de las derechas sería del gobierno de coalición, que les ofrece una ‘alfombra roja’, al hacer políticas de derechas, y la única alternativa a ese consenso bipartidista bélico, con

diferencias irrelevantes entre ese bipartidismo formal, es la ‘izquierda valiente’, que se puede fortalecer en esa polarización con el bloque de poder, al que pertenecería el Partido Socialista y el grueso de Sumar.

Aunque habría que diferenciar entre la función discursiva actual para intentar reforzar el espacio propio, de las consideraciones prácticas de sus efectos cuando se produzca la decisión morada, según su contexto, y que podrían condicionarla.

Preservar las fuerzas transformadoras

En el peor de los casos, de un gobierno de derechas y una débil representación progresista y alternativa, otra hipótesis problemática para la izquierda política transformadora sería su caída en la irrelevancia institucional y político-cultural, con fuerte aislamiento político y desarraigo social, con la tendencia hacia la pasividad y la rendición político-ideológica. Supondría una etapa prolongada de crisis y recomposición.

La respuesta morada es un partido cohesionado, con autonomía y capacidad comunicativa... hasta ampliar el electorado a lo largo de la próxima legislatura. Y generar las condiciones sociopolíticas de movilización y articulación social y política para acumular más fuerzas ‘en la calle’ y luego en las instituciones parlamentarias y ejecutivas, ya que se mantiene el criterio fundamental de ser partido de poder y de gobierno. Veremos la consistencia de sus mimbres.

En el caso de la coalición Sumar, el riesgo de mayor fragmentación se puede producir ante la situación de previsible fracaso representativo y desalojo del Gobierno, probablemente no antes, tras los procesos electorales de 2027. La tendencia puede ser de repliegue local de sus grupos territoriales (Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana), con cierta representatividad, la dilución de Movimiento Sumar y su liderazgo, y la persistencia de Izquierda Unida, en su nicho político territorial (Andalucía). Pero es difícil que, de entrada, renuncien a su

primacía orgánica y política, en particular en esas zonas. La competencia con Podemos está servida.

La apuesta de Movimiento Sumar y, en gran medida, de la coalición Sumar, es la de revalidar un frente electoral suficiente para mantener el gobierno de coalición progresista otra legislatura, y mantener el peso institucional y de gestión que les permita seguir legitimándose por su política ‘útil’, dentro de la unidad —con forcejeos— con el Partido Socialista.

No obstante, la derechización política y, en particular, el bloqueo continuista gubernamental y los límites y compromisos socialistas con los grupos de poder, generan nuevos conflictos que dificultan esa legitimidad basada en limitadas mejoras para el bienestar de la gente, en el marco de una política de progreso sin mayoría parlamentaria y una gestión, a veces, regresiva, belicista o neoliberal. No contemplan otra hipótesis, de irrelevancia político-institucional o permanencia debilitada en la oposición parlamentaria. Supone que, de producirse, no habría mecanismos colectivos para hacerle frente y podría haber una salida individualizada o fragmentada. Un futuro lleno de incertidumbres.

Enseñanzas históricas y pugna competitiva

En esta etapa de transición por el declive y la fragilidad estructural de la izquierda alternativa, con la hipótesis de su prolongación en la siguiente legislatura, un obstáculo a remontar es la polarización sectaria por intereses corporativos de las élites dirigentes respectivas, el fanatismo de la ideología propia, con una trayectoria competitiva y destructiva. Es decir, la incapacidad de las actuales élites partidistas para resistir un proceso de mayor fragmentación y destrucción de fuerzas organizadas y la profundización de una crisis representativa, de influencia social y de liderazgo público.

Para sacar enseñanzas, se pueden citar las otras **dos grandes experiencias de recomposición de la izquierda del Partido Socialista, tras su fracaso representativo, sus pugnas corporativas y las**

dificultades políticas y sociales para una trayectoria transformadora.

La primera, tras la crisis del PCE y la izquierda radical y el ‘desencanto’ de la transición política, de finales de los años setenta y primeros ochenta, la reactivación de la movilización popular en los años ochenta, con el movimiento pacifista —campañas anti-OTAN—, el sindical —incluida la gran huelga general del 14-D-1988 contra la precariedad y por el giro social— y, en menor medida aunque significativos, el feminista y el ecologista, aparte de la persistencia de los movimientos nacionalistas periféricos. Esa activación cívica se tradujo en el refuerzo de un campo sociopolítico diferenciado de la socialdemocracia y la formación de Izquierda Unida, cuyo mayor influjo político y electoral, desde la oposición, pervivió una década, hasta mitad de los años noventa, junto con el declive socialista.

La segunda, tras un reflujo alternativo pronunciado de tres lustros — con movilizaciones significativas como contra la guerra de Irak en 2003 y la renovación socialista con Zapatero, en su primera legislatura—, se reinició un gran proceso de protesta cívica (2010/14), con la movilización e indignación popular progresista simbolizada por el movimiento 15-M, frente a la austeridad y la prepotencia del bipartidismo y por la justicia social y la democracia. Se amplió y conformó un nuevo campo sociopolítico y electoral a la izquierda del PSOE, representado por Podemos y sus alianzas y convergencias, en el marco de Unidas Podemos, luego debilitado y fragmentado entre Podemos y Sumar, que pretendía sustituirlo y reorientarlo, en una operación, finalmente, fallida en parte.

Ahora, si se mantiene la trayectoria actual de la izquierda alternativa, se aventura otra crisis de su capacidad orgánica, representativa y de influencia institucional y transformadora, aunque está por ver el grado de asimetría entre los dos bloques actuales y su impacto comparativo.

La dificultad adicional para un marco constructivo conjunto es la cierta inclinación sectaria existente entre formaciones democráticas o progresistas, con mucha tradición entre las izquierdas en estos dos

siglos. Consiste en trazar una línea rígida entre dos bloques incompatibles, defensores de su específico patrimonio político y orgánico, apropiándose de una identidad embellecida y descalificando la identidad contraria: amigos/enemigos. Frente a los poderosos no habría un campo popular-progresista, amplio y plural, sino que, para unos, las corrientes moderadas o posibilistas forman parte del poder establecido, no son izquierda, y, para otros, las corrientes radicales o transformadoras son ‘izquierdistas’, marginales y perjudiciales para el avance social y democrático. Todo ello, a pesar de que el grueso de sus bases electorales, esa izquierda social -o progresismo rojo, verde y violeta-, tiene ideas, posiciones y valores de izquierda bastante similares.

Existen dos versiones. La justificación moderada de Sumar, despreciando o marginando a Podemos como grupo radical, minoritario o contraproducente. La explicación radical de la dirección morada, aventurando la descomposición de Sumar, por su política contemporizadora con el PSOE y su política de rearme, que favorecería a las derechas. En la situación actual, estos últimos esquematizan una polarización entre la llamada ‘izquierda’ (Podemos y sus aliados políticos y de la sociedad civil) y las fuerzas del ‘régimen de guerra’ (incluido PSOE/Sumar).

Los puentes entre las direcciones partidistas se rompen. El riesgo es caer en el doctrinarismo y la descalificación discursiva, estéril para la reactivación popular y la articulación de un frente común, social y partidario, diferenciado de la socialdemocracia. Su prioridad es otra, la primacía particular de cada liderazgo alternativo.

En esa situación defensiva y de división, se acentúan los relatos sobre las responsabilidades por el declive y por la legitimación de nuevos liderazgos y estrategias. Cobra virulencia y gravedad la pugna sectaria y corporativa, por su carácter destructivo y la ausencia de acumulación —unitaria— de experiencias de lucha cívica, activación democrática y articulación político-orgánica y electoral. No hay escucha ni diálogo con argumentos, predomina la descalificación; se resiente el talante democrático.

Aparte del reparto de las responsabilidades de las direcciones partidistas, se produce el desgaste adicional de su crédito político y moral ante la ciudadanía, por su impotencia o incapacidad transformadora y articuladora. Se añade la posibilidad de la travesía del desierto para la recomposición de la izquierda social y política en el siguiente ciclo político, con la agudización de las tensiones internas que pueden profundizar dinámicas destructivas, sin perspectivas de una estrategia unitaria de resistencia cívica y cooperación partidaria.

La perspectiva explícita en la dirección de Podemos parece que es la de resistir como minoría parlamentaria (en la oposición, sin mucha capacidad institucional de influencia transformadora) ante un amplio bloque de poder derechista y belicista, y acumular fuerzas sociales y culturales para ampliar electorados y contrapoder social e ideológico, a medio plazo, con la expectativa de un relanzamiento de la movilización social por la paz y contra el rearme que desborde la denominada representación moderada o posibilista de la coalición Sumar.

En unas circunstancias desfavorables, con limitados arraigo social, contrapoder asociativo, influencia cultural y legitimidad cívica, ¿aguantará una estructura de cuadros políticos, con poco arropo institucional y difícil arraigo popular? ¿o se prolongará y agudizará la crisis orgánica y la necesidad de una renovación profunda y la recomposición de las élites y plataformas partidistas?

El camino hacia la recomposición

Ante una salida difícil hay que prevenir la inercia autocomplaciente de unos diagnósticos embellecidos para adecuarlos a una subjetividad voluntariosa pero, a veces, irrealista, que vuelva a generar desilusión. Como decía Gramsci, hay que **combinar el pesimismo de la inteligencia —del análisis— con el optimismo de la voluntad —transformadora—**.

La apuesta deseada en la izquierda alternativa, particularmente en Podemos, es la conformación de otro proceso de movilización general,

más o menos similar al del origen de este ciclo, el 15M, en una versión, a veces, idealizada. Así, en este periodo de transición se pueden extremar las expectativas subjetivas de la resistencia y movilización popular progresista (aparte del nacionalismo) para dar verosimilitud al deseo del ascenso de la radicalización sociopolítica y cultural, para conseguir una nueva hegemonía en torno a esa estrategia radical contra el ‘régimen de guerra’ y el apoyo a ese liderazgo discursivo.

La cuestión es que hay que ser realistas respecto de las contradicciones, tendencias y fuerzas presentes para diagnosticar la trayectoria movilizadora y articuladora de la izquierda social, especialmente juvenil. Hay que valorar la experiencia, con las diferencias de los contextos de otras épocas históricas en los procesos de conformación de los sujetos sociales, sin paralelismos forzados, y profundizar el análisis concreto de la situación concreta.

En particular, como se decía, hay que explicar, aparte de los nacionalismos, los procesos de movilización colectiva progresista. Singularmente, como enseñanzas articuladoras, el movimiento antifranquista —1968/78—, el anti-OTAN y sindical —1981/85/88—, el de ‘No a la guerra’ —2003— y el movimiento feminista —2018/23—; y, especialmente, el simbolizado por movimiento 15M. Igualmente, hay que valorar los campos de desafección política, deslegitimación social y pugna cultural, para empujar, articular y orientar la movilización cívica, reconstruir una base social progresista y de izquierdas y fortalecer la capacidad vertebradora del activismo social y político. Hay motivos graves para el descontento público, cierta conciencia social y algunas movilizaciones relevantes sobre: la vivienda, la sanidad pública, Palestina, la violencia machista... y ahora la oposición contra el rearme.

La orientación está clara, fortalecer esa activación cívica y participativa, no solo ni principalmente discursiva, aunque también con una pugna ideológica y una teoría crítica. Y realizar el análisis concreto de la situación concreta, para elaborar la línea política y una plataforma político-electoral compartida, la convencional acumulación de fuerzas sociopolíticas transformadoras o, si se quiere, la articulación de tejido

asociativo y de base, así como movimientos sociales con capacidades articuladoras y contractuales.

Al mismo tiempo que el declive y el desconcierto en las izquierdas alternativas, con una fuerte ofensiva derechista, se abre la oportunidad para otro ciclo de reactivación cívica y recomposición sociopolítica y partidista. La otra cara, es que también se genera una fuerte pugna política y discursiva por la primacía en el reconocimiento, el estatus y la colocación para influir en su nueva dimensión, sus características y su liderazgo.

El reto alternativo es fortalecer una confrontación popular democratizadora, con arraigo social, frente al poder establecido, y rearticular una dinámica colaborativa de base y de proyecto transformador, que constituya el fundamento para ensanchar ese campo sociopolítico y electoral diferenciado del centrismo socioliberal.

Consiste en promover la participación democrática y la pugna ideológica y discursiva por la vertebración y la hegemonía legítimas con procedimientos organizativos desde el respeto a la pluralidad, la democracia y la negociación de acuerdos y políticas comunes en beneficio de las mayorías populares.

Al mantener la vocación de articular a las mayorías sociales y las expectativas de estatus e influencia institucional, la cohesión partidista se busca en la convicción colectiva del acceso —seguro— a esa posición de poder, la confianza en el camino a recorrer y las condiciones de liderazgo a establecer. Sin embargo, está por ver la capacidad de las actuales élites partidistas de las izquierdas para afrontar ese desafío constituyente, así como su renovación y recomposición.

Bases para abordar la renovación y la remontada

Podemos resumir los fundamentos para impulsar la recomposición político-organizativa y su remontada electoral y de influencia transformadora.

En primer lugar, la activación cívica en el campo sociopolítico, en los movimientos sociales, ante los graves problemas de regresión social y democrática (feminismo, vivienda, servicios públicos como sanidad y educación, desigualdad y capacidad adquisitiva, solidaridad con Palestina, oposición al rearme...). O sea, la colaboración por abajo, el impulso a la actividad reivindicativa, crítica y solidaria.

En segundo lugar, potenciar las posibilidades de acuerdos parciales en territorios (Andalucía, Navarra, Extremadura) y sectores con experiencias conjuntas, así como en iniciativas políticas y legislativas compartidas. Y evitar mayor división.

En tercer lugar, una reflexión y renovación de las estructuras dirigentes y los liderazgos partidistas, desde la pluralidad, la cultura democrática y la colaboración. Y, en ese marco, la clarificación ideológica y la nueva vertebración orgánica.

El problema de la legitimidad pública y el encaje de los intereses corporativos de los núcleos dirigentes, con sus políticas y trayectorias, solo se podrá resolver con la realidad de la constatación de la representatividad electoral (y aun así, será insuficiente, como han demostrado las elecciones europeas) y su influencia político-cultural. Por tanto, existe el peligro de tender hacia el debilitamiento mutuo, con la competitividad sectaria y la demostración de su empoderamiento respectivo por su política y su liderazgo. Son tendencias disgregadoras.

Se constata un punto débil que añade dificultad renovadora. La fragilidad de la constitución ideológica y democrática, sin cultura consistente en el respeto al pluralismo y la negociación de acuerdos y lealtades comunes, con unos objetivos y un plan conjunto que referencie las particularidades y reequilibrios representativos y de poder, así como consensuar los acuerdos estratégicos y de alianzas y pactar el tratamiento de los desencuentros.

Ante ese problemático escenario, hay una opción definida en el caso de Podemos. Salvarse como izquierda valiente y firme, aunque sea en condiciones de poca relevancia en los equilibrios parlamentarios y gubernamentales hegemonizados por las derechas y la socialdemocracia

asimilada, y con la hipótesis de su remontada a medio plazo. Su perspectiva es que las élites de Sumar se pasen al PSOE. Ello les permitiría absorber sus bases sociales, una vez clarificados los campos electorales, tras la previsible debacle político-electoral. El complemento organizativo puede ser la tendencia a la cohesión y la disciplina partidista, minusvalorando tensiones internas y el retroceso en el respeto al pluralismo, el debate interno y la negociación, descalificados por su ineficacia operativa, ante la dimensión de la nueva tarea de prevalencia dirigente.

Por parte de la dirección de la coalición Sumar se trataría de continuar con el actual estatus de superioridad institucional y respetabilidad mediática y política. Pero, ante un escenario en la oposición, queda abierta la falta de previsión y capacidad para superar esa posición menos ventajosa. Y está por ver el desarrollo de la propuesta unitaria de Izquierda Unida que, ante su imposibilidad por la negativa de Podemos, se apresta a promover la renovación de la coalición actual.

Así, se está articulando una nueva coalición, empezando con los grupos pertenecientes a Sumar con responsabilidades gubernamentales —Movimiento Sumar, Comunes, Más Madrid, e Izquierda Unida—, con nombre distinto al actual de Sumar, y sin Podemos, que se distancia de ese proceso, ni Compromís, que no quiere acuerdos orgánicos y solo pretende que sean electorales y puntuales.

La conclusión es que **frente al declive representativo y de influencia de la izquierda alternativa, y su división política y electoral, la solución vendrá fuera de las élites partidistas y de abajo, de la activación cívica; y los liderazgos deberán demostrar su capacidad para articular una dinámica transformadora y democrática, en condiciones desfavorables.** Su renovación y ampliación procederá de la confluencia de la experiencia de acción popular, la articulación democrática y la cultura crítica de una nueva generación, con los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Queda

abierta la tarea de la recomposición y la remontada de la izquierda alternativa en la próxima década.

6.4 Movimientos sociales y cambio global

(Comunicación al XVI Congreso Español de Sociología – Bilbao, julio de 2026. Grupo de trabajo 20: *Acción colectiva, Movimientos sociales y Cambio social*)

Palabras clave: Activación cívica, izquierda social, woke, sujetos colectivos.

Introducción

Esta comunicación analiza la articulación de la acción colectiva y la movilización popular, con una dinámica de cambio global de progreso, así como su conexión con la formación de sus élites representativas y la elaboración de una teoría social crítica que mejore su capacidad interpretativa y orientadora.

Se trata de profundizar en las particularidades españolas, sobre su diversidad social y política, y tener en cuenta la experiencia popular de acción cívica, con sus marcos socioculturales y los procesos democratizadores (Antón, 2006; 2013; 2015; 2022; 2023; 2024, y 2025).

Planteamiento teórico-metodológico

Es necesario un doble esfuerzo interpretativo y crítico, desde cierta orfandad teórica, ya que la teoría social está bastante estancada y con diversos sesgos que dificultan el análisis. Y siempre contando con que, en general, la práctica social suele ir por delante de la teoría, y hay que ir planteando problemas y dilemas que, en la medida que son manifestación de amplias experiencias populares, demandan una explicación de conjunto y una orientación transformadora.

En ese sentido, con un enfoque sociohistórico, parto de la experiencia de los movimientos sociales en España, parcialmente diferente de la de Estados Unidos, desde donde viene la mayor parte del bagaje analítico, teórico y normativo sobre este tema.

En España también hemos tenido una rica y particular experiencia expresiva y articuladora de movimientos sociales, con interacción entre ellos y con dinámicas transformadoras progresistas más globales. Esa práctica colectiva, acumulada en estas décadas, ofrece una peculiar característica, más multidimensional, para abordar este tema de la formación de identificaciones colectivas y su interacción, así como la relación entre su especificidad y su generalidad.

Procesos identificadores

Lo *woke*, como inicial denominación de la concienciación de la discriminación y la desigualdad, en particular en esos dos grandes campos sociales, la población racializada y la femenina, se va ampliando a la consciencia de la discriminación hacia otros sectores sociales, especialmente a los colectivos LGTBIQ+ y otros grupos marginados por su origen étnico-nacional o su estatus social y cultural subalterno.

A ello habría que añadir, por su especificidad temática, el movimiento pacifista, muy potente en su oposición a la guerra de Vietnam y, en Europa, frente a la OTAN y los riesgos de guerra, en los ochenta, así como el movimiento ecologista, frente a los crecientes peligros de la crisis energética, climática y ambiental. Éstos no se

definen por sus características grupales, sino por su actividad frente a los riesgos geopolíticos o medioambientales con una conciencia pacifista y ecologista, el llamado ecopacifismo.

Como antes los grandes movimientos sociales —movimiento obrero y sindical, vecinal, estudiantil o los movimientos nacionales emancipadores y antiimperialistas—, esas dinámicas participativas, reivindicativas y expresivas, van generando vínculos de pertenencia colectiva y de apoyo mutuo. La experiencia prolongada e interactiva de una actividad relacional compartida, desde situaciones discriminatorias similares y objetivos igualitarios afines, va generando identificaciones grupales que permiten conformar sujetos colectivos, más o menos convergentes, al mismo tiempo que opuestos a adversarios comunes.

A veces se han considerado movimientos identitarios, o basados en la exigencia de políticas de identidad, con valoraciones controvertidas. En todo caso, se justifican en la existencia de discriminaciones específicas con demandas compensadoras de las desventajas, con una finalidad igualitaria. Suponen reconocimiento propio, «orgullo» grupal, frente a la marginación social y simbólica que impone el supremacismo racista o machista.

En esta aproximación inicial, los podemos definir por su acento en sus características grupales diferenciadas, con reivindicaciones particulares y representaciones colectivas específicas. En ocasiones existe una rigidez exclusivista o corporativa, en tensión con otros rasgos positivos, complementarios, y superadores de esa inclinación inmatista e intolerante: la apertura relacional, la interacción temática interseccional, la relación de cada movimiento con un proyecto y una dinámica más global, así como su carácter *movimentista* y autónomo dentro de su articulación con la acción político-institucional y su vinculación con un proyecto de cambio más general.

La experiencia de la acción colectiva en la última etapa

En los últimos quince años entramos en una nueva etapa de esta configuración de movimientos populares —parciales— y una vertebración política más institucional. Se produce la explosión de la movilización cívica, sobre todo juvenil, simbolizada por el movimiento 15-M, frente a los recortes sociales y por la democratización, así como la posterior articulación político electoral de esa ciudadanía indignada con las llamadas fuerzas del cambio de progreso o nueva izquierda alternativa, que adquiere una significativa influencia político-mediática e institucional en los gobiernos de coalición progresista. Se pueden mencionar cuatro procesos paralelos.

Uno, la persistencia de una amplia corriente social crítica y alternativa, diferenciada de la socialdemocracia y de las izquierdas nacionalistas, de hasta seis millones de personas, aunque en declive cuantitativo y cierto retraimiento de expectativas transformadoras. Hoy se cifra en unos tres millones de personas, con una cobertura más amplia, según temas y circunstancias, con posiciones alternativas diferenciadas, aunque participa, junto con el conjunto de las izquierdas, en un marco de confrontación política y discursiva frente al bloque de las derechas y la involución reaccionaria.

Dos, la fragmentación y la dificultad articuladora de las representaciones políticas alternativas (Sumar, con su heterogeneidad grupal, y Podemos, además de las izquierdas nacionalistas), con relativa incapacidad para su colaboración que condiciona su influencia reformadora y su estatus institucional. Ese debilitamiento y división —si no se avanza en algún arreglo—, junto con el estancamiento socialista y la gran ofensiva derechista, puede conllevar la pérdida de la gestión gubernamental progresista y el advenimiento de un cambio de ciclo político-institucional de carácter reaccionario y la correspondiente involución social y democrática.

Tres, la reactivación de algunos procesos movilizadores progresistas de gran impacto expresivo y sociopolítico. En primer lugar, hay que destacar la amplia ola feminista contra la violencia machista desde el

año 2017, que ha sufrido la reacción derechista y ultraconservadora. Aparte de las movilizaciones nacionalistas, en particular del *procés* catalán, se han producido estos años otras campañas colectivas significativas de dos modelos: de tipo social y en defensa de la protección pública, principalmente por la sanidad y la educación públicas, la vivienda o las pensiones, y de carácter pacifista y solidario, contra el rearme y propalestina.

Cuatro, la fuerte ofensiva derechista y ultra, en especial, la mayor iniciativa política y mediática del racismo, el nacionalismo esencialista y excluyente y el machismo antifeminista, que promueven retrocesos discriminatorios en las relaciones sociales, con el refuerzo de las desigualdades y jerarquías dominantes y contra la igualdad y la convivencia cívica. Desarrollan discursos divisivos y sectarios desde una polarización identitaria de un ‘nosotros civilizado’ —cristiano, españolista, masculino y blanco—, dominador de un ‘ellos bárbaro’. Aprovechan el miedo a la pérdida de la ventaja relativa de unos segmentos sociales frente a otros, para reforzar su supremacismo; se amparan en un gran apoyo financiero y mediático de ciertos grupos de poder que pugnan por una regresión de las condiciones socioeconómicas y vitales de las mayorías ciudadanas, los derechos sociales y políticos y la neutralización de las izquierdas y la propia democracia.

Conclusión

Junto con el agotamiento de este ciclo político-institucional de orientación progresista y la incertidumbre sobre la salida de esta encrucijada, persiste una amplia identificación y pertenencia social de izquierdas, una parte más moderada y otra más transformadora, al mismo tiempo que confluyen unos perfiles o identificaciones masivas de carácter feminista (dos tercios de mujeres y un tercio de varones), ecologista, pacifista y plurinacional.

En particular, dada la división de la izquierda política alternativa y la impotencia de sus actuales liderazgos para conseguir una suficiente

representación parlamentaria que facilite una nueva etapa de progreso, el foco de la respuesta se traslada a la esfera sociopolítica y cultural; es decir, al dinamismo participativo de la izquierda social y los movimientos sociales, que permitan una renovación y un refuerzo de sus representaciones políticas.

De ahí que sean cruciales las dinámicas de activación cívica, democratización popular y articulación asociativa, con sus correspondientes procesos identificadores y de pertenencias grupales particulares, enraizados en la especificidad de cada realidad social. Y, al mismo tiempo, con la participación colectiva en una trayectoria más general hacia el cambio político-institucional, por una democracia social avanzada.

Bibliografía

Antón, A. (2006): *El devenir del sindicalismo y la cuestión juvenil*. Madrid, Talasa

—(2013): *Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica*. Sequitur, Madrid.

—(2015): *Movimiento popular y cambio político. Nuevos discursos*. Editorial UOC (Universitat Oberta de Catalunya), Barcelona.

—(2022): *Dinámicas transformadoras. Renovación de la izquierda y acción feminista, sociolaboral y ecopacifista*. Albatana, Dyskolo.

—(2023): *Feminismos: retos y teorías*. Albatana, Dyskolo.

—(2024): *Izquierda transformadora*. Albatana, Dyskolo.

—(2025): *Encrucijadas. Para la democracia, las izquierdas y el feminismo*. Albatana, Dyskolo.

—(2026): *El cambio de ciclo. Desafíos para las izquierdas*. Albatana, Dyskolo.

6.5 La incertidumbre sobre el cambio de ciclo

Con las elecciones en Extremadura, se ha iniciado el ciclo electoral hasta los comicios autonómicos y municipales y, si no se adelantan, las generales de 2027. Al refuerzo de las derechas, con la mayoría relativa del PP y el ascenso de VOX, se añade el batacazo del Partido Socialista y el éxito de Unidas por Extremadura.

Esta candidatura de la izquierda alternativa —Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde; Movimiento Sumar no existe en la región— casi ha duplicado su representación parlamentaria —de cuatro a siete escaños—, remontando la trayectoria descendente de la última década. Por un lado, su ampliación electoral se ha derivado del descrédito de la dirección socialista, con una parte de su base social que se ha desplazado a esta candidatura a su izquierda —aunque la mayoría de su pérdida ha ido hacia la abstención—. Por otro lado, su incremento ha sido debido a la prologada trayectoria unitaria, su fuerte arraigo social, su adecuado liderazgo y la firmeza transformadora de su proyecto político. Son rasgos difícilmente repetibles.

Los próximos meses vamos a asistir a una sucesiva competición en otros tres territorios: Aragón, Castilla y León y Andalucía. Ya no contaremos solo con estudios demoscópicos, sino con voto real, que en esas zonas parece que van a propiciar una gobernabilidad derechista. Aunque cada una tenga sus particularidades, irán expresando algunas tendencias socio-electorales generales.

Lo que se ventila es el carácter del nuevo ciclo político, aunque se mantiene la incertidumbre sobre su sentido, regresivo o progresivo, con una dura pugna sociopolítica y cultural. Existe una actitud contradictoria en la gente progresista, entre la fatalidad y la esperanza, entre la decepción pasiva y la voluntad democratizadora. Digamos que hay

incertidumbre sobre el cambio de ciclo institucional y la orientación de las políticas públicas.

A pesar de toda la ofensiva política, judicial y mediática de las derechas contra el gobierno de Sánchez y el desgaste de credibilidad del Partido Socialista por la corrupción y el acoso machista en sus filas, añadida a la escasa gestión transformadora del Ejecutivo, se puede decir que todavía no es irreversible la victoria de las derechas. Hay partido, aunque cada vez más agónico.

El primer factor que puede posibilitar el freno a la ola reaccionaria, conectar con las perentorias demandas sociales y contrarrestar la tendencia de cierta desafección hacia el gobierno de coalición y sus socios, es un impulso reformador, socioeconómico y democrático, del Ejecutivo. No obstante, esa expectativa es poco consistente ya que mantiene un frágil apoyo parlamentario y está empeñado mayoritariamente en un simple continuismo gubernamental.

Esa inercia gestora limitada y con claroscuros, sin una profunda regeneración democrática y feminista del Partido Socialista, ni un fuerte compromiso con una agenda social, habitacional y redistributiva, y con una simple defensa discursiva frente a la involución derechista que se va imponiendo, parece que es insuficiente para garantizar la consolidación de un victorioso campo socioelectoral de progreso.

El segundo factor capaz de asegurar una nueva etapa de gobernabilidad progresista es el fortalecimiento y la unidad de la izquierda alternativa, en un marco de reactivación cívica de la gente de izquierdas y acompañado de la disponibilidad democratizadora de las izquierdas nacionalistas.

Es difícil que la experiencia unitaria en Extremadura, con una remontada electoral hasta más del 10%, se vaya a repetir en las tres próximas elecciones autonómicas. En Aragón ya se han dividido en tres candidaturas, y es probable que suceda en Castilla y León y Andalucía. Hace falta ver la dimensión de sus nefastos efectos políticos y electorales, ampliados por las culpabilizaciones cruzadas. La división parece constituir la tendencia dominante para el resto del emplazamiento

electoral municipal y autonómico de 2027 y, especialmente, para las elecciones generales.

Según la media de los estudios demoscópicos más fiables, entre el conglomerado de fuerzas articuladas en la coalición Sumar y Podemos, sumarían más del 10% (7,8% + 4,1%, respectivamente, en el último CIS), acercándose a los resultados anteriores del 23J, del 12,3%. Es decir, persiste un campo socioelectoral a la izquierda del PSOE entre tres millones y dos millones y medio de votos, con una distribución desigual por zonas, tipos de elecciones y corrientes políticas.

Aparte de las variables sociopolíticas y económicas que pueden condicionar esta prolongada precampaña electoral, un factor decisivo para potenciar su representación parlamentaria y contribuir al reforzamiento de la gobernabilidad de progreso, es la unidad electoral que permita traducir en escaños esa representatividad política, con una dinámica de cooperación.

En las circunstancias actuales, de fuerte división y presión hacia el voto útil socialista y de la izquierda nacionalista, el acceso parlamentario alternativo solo estaría asegurado en cuatro provincias (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla), con la particularidad de que en ellas se concentra la presencia de los grupos de implantación territorial vinculados a la coalición Sumar (Más Madrid, Comunes, Compromís e Izquierda Unida —con presencia significativa en Andalucía—) que, junto con el encaje de Movimiento Sumar, entrarían en abierta competencia por la hegemonía política y el liderazgo con Podemos.

El pronóstico demoscópico hoy está en torno a la mitad de los 31 escaños actuales (10 + 4). Sin listas conjuntas parece difícil ensanchar esa representación institucional y acceder en la docena de provincias medianas.

Dados los desencuentros precedentes existen grandes dificultades para avanzar en la colaboración necesaria. Más allá de llamamientos unitarios, más o menos bienintencionados, utilizados a veces para legitimar las posiciones y los liderazgos propios de cada grupo político, conviene hacer una reflexión seria de los obstáculos para la unidad.

A mi modo de ver, el principal problema a solventar es el de la primacía, el carácter y la orientación estratégica del liderazgo del conjunto estatal, con la particularidad de que se asienta, principalmente, en la representación institucional en esas cuatro zonas, con sus preponderancias orgánicas respectivas.

No hay que desconocer la trayectoria y las causas que han traído esta situación. El problema no solo es de egos, resentimientos y venganzas, talantes prepotentes y actitudes sectarias. Todo ello existe. Pero esos rasgos, definidos normalmente en términos personales o psicológicos y utilizados para la mutua descalificación ética y democrática, son expresión de algo más profundo de carácter colectivo: el interés corporativo de unas élites políticas, sin suficiente capacidad de articulación pluralista, que pretenden legitimarse con una práctica diferenciadora comparativamente más eficaz y su correspondiente discurso justificativo.

Las dos dinámicas están entrelazadas, la pugna por el reconocimiento público e institucional de cada liderazgo, con el refuerzo de su estatus respectivo, y la defensa y la gestión de una línea estratégica y de alianzas que demuestre la superioridad política comparativa.

La cuestión es que, en condiciones externas desfavorables, sin una significativa presión social por abajo, con trayectorias diversas en la formación de cuadros dirigentes y sin marcos orgánicos y procedimientos democráticos consensuados para adoptar las decisiones, es difícil la deliberación y el acuerdo sobre las diferencias políticas y la articulación de las distintas jerarquías de poder orgánico e institucional.

Esa deficiencia constitutiva, común en los grandes partidos políticos, pero que afecta específicamente a las fuerzas de izquierda, sin gran poder fáctico (o social y democrático), les impide contrarrestar su tendencia corporativa inmediatista y su aislamiento respecto del interés colectivo de la mayoría social. Supone la sustitución de la actividad de articulación sociopolítica de la gente por el activismo comunicativo competitivo. La activación cívica y el arraigo social se relegan por la agitación discursiva para mostrar la prevalencia respectiva.

Es importante tener en cuenta la trayectoria reciente de los reequilibrios políticos y orgánicos de la izquierda transformadora y los métodos prepotentes utilizados. Hoy es imposible una evaluación compartida y menos una reconsideración autocrítica. La realidad político-social e histórica irá poniendo la verdad en su sitio y, por tanto, la legitimidad de los liderazgos. Estamos en una fase transitoria de la comprobación, con hechos sustantivos y claros —aunque siempre van a ser controvertidos—, de la credibilidad estratégica y organizativa de los dos polos principales.

Por un lado, la del liderazgo de Movimiento Sumar y el papel de Yolanda Díaz, que han rebajado sus expectativas, así como, en su justa proporción, la de los dirigentes de los grupos territoriales que, junto con los de IU, apostaron por la vertebración de la coalición Sumar, con el desplazamiento de Podemos de su anterior primacía, su política más moderada y su alianza gubernamental con el Partido Socialista.

Por otro lado, la de la dirección de Podemos, con una estrategia política más confrontativa y de reafirmación partidista, que pretende recuperar su prevalencia político-ideológica en este espacio, por encima de cualquier otra transacción. Confía en el resquebrajamiento de la coalición Sumar, considera irrelevantes las diferencias entre las derechas y las izquierdas gobernantes y piensa que la fase de involución política ya se ha producido.

En definitiva, ambos liderazgos se consideran incompatibles y aspiran a absorber a las diferentes bases socioelectorales alternativas. Prevalece la pugna competitiva por la primacía de la orientación política y la articulación orgánica de la izquierda transformadora, sin mucho margen para las mediaciones y los procedimientos compartidos necesarios para el acercamiento y la colaboración. En particular, parece imposible ejercer un liderazgo estatal unipersonal, que concentrase el valor simbólico y representativo del conjunto. Solo podría ser coral y reconstruido.

En este interregno cada parte va a priorizar su reforzamiento particular y la competencia con el adversario, aunque sea a costa de los

perjuicios relativos que pueden sufrir sus grupos políticos y, sobre todo, infravalorando los efectos perniciosos para sus bases sociales. Si no hay una reconsideración unitaria de los equipos dirigentes y una complicidad externa —incluida la del Partido Socialista y otras organizaciones sociales—, la dinámica competitiva aboca a ese pronóstico sobre el descalabro representativo de la izquierda alternativa, agudizado por las críticas y responsabilidades cruzadas.

Será el comienzo de otra fase de aprendizaje imperioso de las deficiencias y errores y de recomposición de nuevos liderazgos y estructuras partidarias. Junto con el estancamiento socialista, daría lugar a un nuevo ciclo institucional dominado por las derechas extremas. Todavía hay tiempo para evitarlo.

6.6 Crisis y reconstrucción de las élites alternativas

En esta última sección, a título de epílogo, comienzo por el análisis de la reciente derrota de las izquierdas en las elecciones autonómicas aragonesas, para abordar las dificultades de las élites dirigentes de la izquierda transformadora para asegurar una remontada representativa y superar su fragmentación, su crisis política y su impacto para la gobernabilidad progresista. Termino con la exposición de las propuestas y escenarios que se abren, para fijar las posibilidades y características de la reconstrucción de las élites alternativas.

La derrota de las izquierdas aragonesas

Los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón confirman algunas tendencias sobre la derechización política estatal e indican otras variantes específicas, especialmente sobre la división de la izquierda alternativa, distintas respecto de las precedentes de Extremadura, que constituyen la excepción. Junto con los estudios demoscópicos, que otean el horizonte de las perspectivas socioelectorales para los próximos comicios generales, constituyen un indicador —algunos estudios señalan que por sus características sociodemográficas representan la media estatal— para analizar la incertidumbre sobre el cambio de ciclo político y, particularmente, el hilo conductor de esta reflexión: la crisis de la izquierda transformadora y el necesario refuerzo, reestructuración y cooperación de sus élites partidarias.

Antes de iniciar la valoración, conviene aclarar las condiciones desde las que elaboro mi punto de vista, estrictamente personal. Llevo acumuladas seis décadas continuadas de experiencia y compromiso cívico, siempre en el espacio sociopolítico de la izquierda alternativa. Primero desde la acción democrática y la lucha antifranquista en mi juventud zaragozana, después en distintas organizaciones socioculturales, sindicales y políticas, desde mi actual residencia madrileña, para continuar, en lo que va de siglo, con mi actividad investigadora desde la intelectualidad crítica, como especialista en ciencias sociales.

Comienzo por el análisis de los hechos concretos más relevantes que ilustran las recientes elecciones aragonesas, con la evolución de las izquierdas, como punto de partida para valorar los escenarios y dilemas de la izquierda del Partido Socialista (ver tabla adjunta, más abajo).

Aquí la nombraré, indistintamente, como izquierda alternativa o transformadora, de carácter confederal o plurinacional, para el conjunto de esas fuerzas del cambio de progreso, incluidas las plataformas municipalistas unitarias; a veces, diferenciando su base social de su

representación partidaria o su componente social del político-institucional, y con puntos comunes y sectores mixtos o compartidos, pero como corriente distinta de la izquierda nacionalista de ERC, EH-Bildu y BNG.

Hay que constatar que, en este caso, la barrera para la adjudicación de escaños se sitúa en el 3% del voto válido, sin penalizar excesivamente su acceso, a diferencia del caso de otras CC.AA., con el 5%, o en las elecciones generales en que, salvo las grandes provincias, se necesita, en realidad, al menos el 10%.

Existen dos particularidades más significativas. La primera es que Podemos pierde más del 95% de sus votantes, pasando desde el 20,51% y catorce escaños (2015), el 8,08% y cinco (2019) y el 4,01% y uno (2023) hasta menos del uno por ciento (0,94%) en 2026, con 0 escaños. Requiere una reflexión específica sobre sus causas externas, por el acoso padecido, e internas, sobre su orientación política y de alianzas y su vertebración organizativa y de liderazgo. La segunda es que Chunta Aragonesista, la izquierda territorial fundada por Labordeta, con un 9,73%, una parte proveniente del desplazamiento crítico del voto socialista, duplica sus escaños hasta los seis, y se consolida en el eje mayoritario de la izquierda alternativa aragonesa, reforzando la tendencia intermedia territorial que representa Compromís y Mes, algo autónoma de la coalición Sumar. Mientras tanto, la candidatura conjunta de IU-Movimiento Sumar, no le sirve a Izquierda Unida para una mejora electoral significativa y se queda con un ligero descenso (2,94%), aunque mantiene su escaño.

Evolución de las izquierdas en las elecciones autonómicas en Aragón

Años	Podemos *	Esc.	Chunta Aragón	Esc.	IU**	Esc.	TOTAL Izda alternativa		PSOE		TOTAL Izquierdas	
	%		%				%	Esc.	%	Esc.	%	Esc.
1983	0	0	0	0	4,66	1	4,66	1	47,13	33	51,79	34
1987	0	0	0,98	0	4,98	2	2,98	2	36,21	27	39,19	29
1991	0	0	2,33	0	6,83	3	9,16	3	40,87	30	50,03	33
1995	0	0	4,93	2	9,35	5	14,28	7	26,13	19	40,41	26
1999	0	0	11,28	5	3,92	1	15,20	6	31,46	23	46,66	29
2003	0	0	14,01	9	3,12	1	17,13	10	38,75	27	55,88	37
2007	0	0	8,15	4	4,08	1	12,23	5	42,08	30	54,31	35
2011	0	0	8,23	4	6,16	4	14,39	8	29,97	22	44,36	30
2015	20,51	14	4,59	2	4,23	1	29,33	17	21,86	18	51,19	35
2019	8,08	5	6,26	3	3,33	1	17,67	9	31,12	24	48,79	33
2023	4,01	1	5,11	3	3,12	1	12,24	5	30,00	23	42,24	28
2026	0,94	0	9,73	6	2,94	1	13,61	7	24,29	18	37,90	25

Fuente: Junta Electoral Central. * Podemos en 2026 se presenta junto con Alianza Verde. ** IU en 2026 se presenta con Movimiento Sumar, y en 1983 se ha sumado con PCE, que es quien saca el escaño. El total de escaños es de 67 y, por tanto, la mayoría es de 34.

En su conjunto, la izquierda alternativa aun saca unos meritorios 13,71% y siete escaños, algo superiores a los conseguidos por ese espacio en la anterior legislatura, pero completamente insuficientes ante el fuerte descenso del PSOE, de más de seis puntos porcentuales y cinco escaños, con un descenso total para las izquierdas que bajan hasta del 37,90% y 25 escaños, de un total de 67.

En su conjunto ese declive expresa una crisis profunda de la representación institucional de las izquierdas y un refuerzo de las derechas, particularmente de la extrema derecha de VOX, que va a condicionar todavía más la gobernabilidad. Y refleja, los efectos negativos, representativos y de influencia transformadora, derivados de la fragmentación de la izquierda alternativa y, especialmente para la dirección de Podemos, cuyo proyecto de construir una izquierda valiente, de forma diferenciada, encuentra escaso apoyo popular e influencia institucional.

Solamente podemos añadir el similar fracaso de la experiencia municipalista. Zaragoza fue una de las grandes ciudades, en el año 2015, con uno de los ayuntamientos del cambio progresista liderados por la alcaldía de la plataforma unitaria de Zaragoza en Común, que se ha ido fragmentando desde 2019, hasta sus actuales dos concejales, sin que en las últimas elecciones Podemos consiguiese entrar tampoco en el consistorio.

Al mismo tiempo, conviene citar otra situación particularmente nefasta como la última de las elecciones municipales en Huesca en 2023: cuatro candidaturas de izquierda alternativa, promovidas por Podemos, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y Equo, cada una con más del 4% de representatividad, con un total del 18%, pero que ninguna consiguió concejalías al no superar la barrera del 5%; por supuesto, con la consecuencia de un ayuntamiento de derechas.

Además, hay que constatar que en las elecciones autonómicas de 2015 la representatividad electoral del conjunto de la izquierda alternativa (29,33%) fue superior a la del Partido Socialista (21,86%); es decir, se produjo el sorpasso en votos, aunque al ir separados obtuvieron menos escaños y el acceso a la presidencia autonómica del pactado gobierno de coalición pudo recaer en el PSOE (de Lambán).

Inquietante panorama para las izquierdas

Por último, también se ha confirmado la división en dos candidaturas (Podemos/Alianza Verde e Izquierda Unida/Movimiento Sumar) para las Cortes de Castilla y León de marzo próximo, y parece probable que se reproduzca la división en Andalucía, para junio, allí con tres candidaturas, al añadirse Adelante Andalucía.

Mientras tanto, la media de los estudios demoscópicos sobre las elecciones generales, señala una mayoría absoluta para las derechas, con ascenso de VOX, respecto del bloque de la investidura, el mantenimiento del bloque nacionalista, un descenso socialista —o estancamiento en el mejor de los casos- y un fuerte retroceso en escaños

entre la coalición Sumar -pendiente de reformular— y Podemos, en torno a la mitad (10 + 4), aunque entre ambos superarían la barrera del 10%, o sea, al menos con dos millones y medio de votos, al que añadir el millón de las izquierdas nacionalistas.

En definitiva, esa pérdida de una quincena de escaños de la izquierda alternativa es determinante para imposibilitar la continuidad de un gobierno progresista y, en especial, una influencia significativa de esa izquierda. Expresa su impotencia para la remontada y la incapacidad de su liderazgo para contribuir a frenar la adversidad principal que se dibuja en el horizonte: la fuerte involución social y democrática derivada de una gobernanza derechista (extrema), junto con la crisis consiguiente de las fuerzas sociales y, especialmente, políticas, de izquierdas.

El dilema es desde dónde, quién y cómo afrontar el agotamiento de los liderazgos partidarios de la izquierda alternativa y qué proceso de reorientación política y recomposición orgánica es preciso abordar. Se han empezado a ofrecer distintas iniciativas para abordar ese inquietante panorama. La realidad del proceso sociopolítico y de las dos siguientes elecciones autonómicas complementará el análisis de estas tendencias que se están prefigurando, cuyo impacto final se concretará en las próximas elecciones generales, con el dilema sobre el cambio de ciclo político.

Incapacidad —hasta ahora— para afrontar la crisis

El declive representativo de la izquierda transformadora es evidente. Igualmente, aunque más controvertida en su interpretación, es la realidad de la disminución de la influencia política transformadora y la capacidad articuladora de sus estructuras dirigentes. La dificultad valorativa está ligada a su vinculación con la legitimación de los distintos actores y liderazgos y sus respectivas líneas estratégicas, con sus relatos justificativos. Así, se ha reiniciado un amplio debate público sobre cómo superar las dinámicas de debilitamiento y fragmentación de la izquierda alternativa y la crisis de credibilidad de sus liderazgos. Veamos algunas

características del contexto sociohistórico y las dificultades para afrontar esa deriva preocupante.

Básicamente, en la historia de los grupos políticos de izquierdas, desde hace más de dos siglos, existen dos tendencias estatales fundamentales, con una relación ambivalente entre ellas. Por una parte, de colaboración, con intereses y trayectorias compartidos. Por otra parte, de competencia, con pugnas por la primacía en la orientación política y de alianzas o por el liderazgo.

Las relaciones unitarias, normalmente, son proclamadas como necesarias y positivas para mejorar la capacidad transformadora progresista frente a las derechas y los bloques de poder, al mismo tiempo que para mejorar el estatus político y de legitimidad del conjunto de fuerzas y de cada una de ellas.

No obstante, también en la tradición de las izquierdas, aparece la dinámica de buscar cada grupo particular, en el proceso unitario, en la actividad política o con relación a influencias de actores externos, alguna ventaja comparativa respecto del resto de fuerzas coaligadas. Es decir, cada grupo político y, específicamente, cada núcleo dirigente, pretende mejorar su posición, avanzando en su primacía estratégica y orgánica, a veces, con prepotencia y sin la suficiente transparencia, negociación y actitud integradora. Es cuando aparece la desconfianza, la instrumentalización del relato común y la lucha fratricida de las fuerzas o dirigentes políticos que se consideran en desventaja relativa.

Además del talante unitario y democrático, que se asienta en el respeto, el reconocimiento, la deliberación compartida y, sobre todo, en una práctica sociopolítica común y de arraigo social, el componente fundamental es la orientación estratégica y política de esas izquierdas. Y ahí, también en la historia, aparecen las dos tendencias principales, una más moderada y otra más radical. Sin detallar las tradiciones ideológicas y los dilemas estratégicos en los que se han conformado esas dos tendencias, con numerosas derivaciones y posiciones mixtas e intermedias, solamente voy a entrar a precisar sintéticamente algunas características de la reciente experiencia española, centrándome en la

izquierda alternativa; o sea, dejando fuera del análisis al Partido Socialista y la particularidad del sanchismo, como reafirmación socialista para diferenciarse de las derechas y contener y pactar con su izquierda y el nacionalismo periférico para articular un proyecto reformador limitado, bajo su hegemonía política y gubernamental, ya tratado en otra parte.

La formación del espacio socioelectoral alternativo

Desde el año 2010, comienza un profundo proceso de reordenación de los campos sociopolíticos, con un ensanchamiento cualitativo del espacio socio electoral a la izquierda de la socialdemocracia. Se inicia con un masivo proceso de protesta social e indignación cívica con dos componentes fundamentales que forjarán la identidad de este espacio sociopolítico. Por una parte, contra los recortes sociales y laborales y las políticas de austeridad, y por la igualdad social y de género y los servicios públicos. Por otra parte, contra la prepotencia gubernamental, primero del Partido Socialista y, luego, más autoritaria, del Partido Popular, y por la democracia, incluida la democratización del estado y la regulación de la plurinacionalidad.

En términos cuantitativos, en el plano de la participación cívica — desde las grandes concentraciones del movimiento 15M (2011), las tres grandes huelgas generales (2010 y 2011), más distintas mareas sectoriales (principalmente de enseñanza y sanidad), marchas ciudadanas...—, se puede cifrar en una ciudadanía activa de unos cuatro millones de personas, en su mayoría jóvenes. En el plano de la legitimidad pública esa dinámica sociopolítica de exigencia de reforma social y más democracia contaba con el apoyo de dos tercios de la población.

En el año 2014 termina el periodo álgido de movilización social, solo parcialmente recuperado por la cuarta ola feminista (2017-2020), precisamente con unos indicadores similares (unos tres a cuatro millones de participantes en las grandes manifestaciones contra la violencia

machista o en el 8M, con una legitimidad de dos tercios de mujeres y un tercio de varones); así como, la reactivación de distintas movilizaciones sectoriales (vivienda, sanidad, pensiones...) o ecopacifistas y de solidaridad (proPalestina...). Además, hay que citar al procés independentista catalán, que desencadena una dinámica particular del conflicto político, en vías actuales de cierta normalización en un contexto de gran polarización de las derechas y los poderes fácticos y mediáticos.

En el ámbito electoral, ya en las elecciones generales de diciembre de 2011, se expresan cerca de seis millones de electores distanciados del bipartidismo gobernante. A un millón de votantes a Izquierda Unida y cerca de otro millón a las izquierdas nacionalistas, hay que añadir unos cuatro millones de votantes anteriores al Partido Socialista que se expresan con una abstención crítica por su izquierda y muestran cierta orfandad representativa. A ello hay que añadir la experiencia de los ayuntamientos del cambio de progreso en grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cadiz, Santiago, A Coruña...), con mayorías alternativas —relativas— que asumen su gobernabilidad municipalista, con el *sorpaso* y el acompañamiento socialista.

Según los datos de las elecciones generales de diciembre de 2015, la gran explosión de la izquierda alternativa confederal o plurinacional, tenemos una dimensión de unos siete millones de votantes: Podemos — con sus convergencias, catalana, gallega y valenciana— algo más de cinco millones (4+1), con un total de 69 escaños, Izquierda Unida (presentada como Unidad Popular en Común), cerca de un millón —dos escaños— y el resto de la izquierda nacionalista (ERC, EH-Bildu, BNG...), no llega al millón, con 11 escaños (9+2+0).

En 2016, Unidos Podemos, la unidad entre Podemos e Izquierda Unida, más las convergencias territoriales, consiguen más de cinco millones (21%), uno menos que unos meses atrás, pero con los mismos escaños (71), más los once de las izquierdas nacionalistas.

El declive electoral se manifiesta claramente en las dos elecciones generales de 2019, la primera, juntos y la segunda, divididos, con la

reducción del 40% de sus electorados y de escaños en el Congreso por parte de la izquierda alternativa confederal: de 71 en 2015 y 2016 hasta 42 en abril de 2019 (3,7 millones, el 14,3%) y 38 en noviembre de 2019 (35 de Unidas Podemos con más de tres millones de votos (13%) + 3 de Más País, con más de medio millón (2,3%).

Se produce una pérdida de más de dos millones de votantes que van a parar, una parte, hacia el Partido Socialista y, otra parte, hacia las izquierdas nacionalistas (ERC, EH-Bildu, BNG), que acentúan su perfil social; llegan hasta casi 1,3 millones de votos y 19 escaños, con una tendencia de trasvase que se incrementa gradualmente en las elecciones autonómicas de esos tres territorios, y en las que los grupos de la izquierda confederal tienen menor apoyo que en las generales. Ello se completa con la pérdida de la alcaldía de varios ayuntamientos relevantes, entre ellos el de Madrid y el de Zaragoza.

Por último, en las elecciones generales de 2023, ahora de forma conjunta bajo la plataforma de la coalición Sumar, todavía se desciende un poco más, quedándose en tres millones (12,3%) y 31 escaños, es decir, con la pérdida de otro medio millón de votos y siete escaños, aunque suficientes para revalidar el gobierno progresista de coalición, comandado por el PSOE, con el apoyo nacionalista. Supone la pérdida de la mitad del electorado alternativo respecto de sus inicios en 2015.

Ello se puede complementar con el diagnóstico medio de los estudios demoscópicos actuales sobre la estimación de voto en las próximas elecciones generales, que sitúan a ese electorado alternativo en torno a dos millones y medio (1,5 para la coalición Sumar, y un millón para Podemos), es decir, todavía una reducción suplementaria de otro medio millón. Mientras permanece estable, con ligero ascenso, el electorado de las izquierdas nacionalistas.

Se puede complementar con los resultados de las últimas elecciones europeas de 2024, con mayor abstención: coalición Sumar, 0,81 millones (4,6%, y tres escaños); Podemos, 0,57 millones (3,3% y 2 escaños), entre ambos 1,4 millones, y Ahora Repúblicas, la alianza de las izquierdas nacionalistas, 0,86 millones (4,9% y 3 escaños). Se produce

una reducción del espacio de Sumar, la supervivencia en un nicho propio de Podemos, aunque minoritario, y un reequilibrio representativo más favorable para las fuerzas soberanistas, casi el 40% del conjunto alternativo.

Todo ese declive de la izquierda transformadora se relativiza oficialmente al estar compensado con la formación y la participación en el nuevo e inédito gobierno de coalición progresista, entre PSOE y, primero, Unidas Podemos (y sus aliados territoriales) y, luego, con la coalición Sumar, en la que se presenta también Podemos, de la que posteriormente se descuelga (y Compromís). Es más, esa gestión institucional, desde 2019, sobre todo de impulso de reformas sociales, constituye la principal línea de legitimación social y del intento de consolidación del espacio electoral y su representación política. Como vemos ha sido insuficiente por sus limitados logros y su dependencia de la primacía y los límites socialistas.

A cada paso cualitativo de descenso representativo y, por tanto, de disminución de la credibilidad de sus direcciones, se abren fuertes debates sobre sus causas y medidas correctoras, cuyas pautas renovadoras han sido fallidas, agudizándose la pugna por el relato, el prestigio de sus liderazgos y las nuevas orientaciones estratégicas o programáticas que definan mejor las tareas, el horizonte y la esperanza de sus bases sociales.

La pugna por la primacía estratégica y de poder

Todo ello, la configuración del espacio sociopolítico y electoral, hay que contextualizarlo con la pugna política clave que se desarrolla en este ciclo político de estos quince años sobre dos cuestiones fundamentales. Una, la consolidación (o el debilitamiento) de una amplia corriente sociopolítica transformadora a la izquierda del Partido socialista, con reflejo en una significativa influencia socioelectoral e institucional y el condicionamiento efectivo de la gobernabilidad y las políticas públicas progresistas, principalmente de la reforma social y la democratización.

Otra, el reequilibrio y la disputa entre sus dos tendencias dominantes por la primacía en la orientación estratégica, su firmeza transformadora y sus liderazgos respectivos, sin suficiente capacidad o voluntad real para articular un acomodo unitario, plural y democrático del conjunto.

La situación más conflictiva ha sido el proceso de conformación de Sumar (desde el pistoletazo de salida del acto de mujeres líderes en Valencia, en 2021 hasta el de Magariños, como confirmación de la alianza electoral en abril de 2023), y su gestión gubernamental, con un relanzamiento político y una renovación formalmente unitaria, pero con el objetivo del desplazamiento del anterior papel dirigente de la dirección de Podemos, sustituida por una dirección más moderada, encabezada por Yolanda Díaz, que lidera una nueva mayoría política.

La pugna era por la primacía dirigente y la dinámica estratégica, con ganadores y perdedores, sin posibilidad contractual de mediación y búsqueda de acuerdos, más o menos intermedios y con soporte democrático. Se trataba, claramente, por la nueva mayoría dirigente de corregir el supuesto rumbo izquierdista de la dirección morada, que pretendía continuar como motor ideológico predominante.

Los déficits de procedimientos democráticos —primarias— y de negociación consensual de la estrategia política y la imposición por la nueva mayoría de la distribución del estatus de cada parte, no equilibrado según cada representatividad, terminaron en el resentimiento de los morados y la división correspondiente. Con ese proceso asimétrico en sus responsabilidades e insostenible de mayorías y minorías, con un fuerte poso de desconfianza mutua, se justifica, en ambas partes, la polarización discursiva y la competencia política, hoy difícil de revertir, sin una seria reconsideración realista, democrática y unitaria de sus direcciones.

Tras el intento fallido de Pablo Iglesias, en 2021, de impulsar cierta remontada mediante un continuismo estratégico y de poder, bajo su propuesta del liderazgo de Yolanda Díaz, se abre la etapa de transición del cambio de hegemonía, con el proceso de configuración de Sumar, hasta las elecciones generales de 2023 y la constitución del nuevo

gobierno de coalición. La vicepresidenta utiliza su nuevo poder institucional, cuenta con suficientes tendencias políticas afines y el apoyo externo socialista y del poder mediático y, junto con cierta legitimidad —proceso de escucha— de una parte de la base social compartida y de los demás grupos políticos, configura esa nueva mayoría dirigente, imponiendo la subalternidad de la dirección de Podemos y una actitud más colaborativa en el gobierno de coalición progresista. Y hasta ahora, que se prefigura la continuidad de esos ejes básicos indiscutibles, estratégicos y de primacía dirigente, con cierta renovación procedimental y discursiva y de reequilibrio hacia un liderazgo más colectivo.

Adelanto mi convicción. De momento, no veo mimbres realistas e integradores suficientes, sobre todo en ambos liderazgos partidarios actuales, para avanzar hacia una solución completa que asegure su reconstrucción, con una dinámica transformadora, renovadora e integradora. Existe una profunda desconfianza entre las direcciones (y parte de sus militancias) de la actual coalición Sumar y Podemos por el proceso impositivo de sustitución de la primacía dirigente del conjunto, que ostentaba Podemos.

Sin abordarlo, y consensuar el equilibrio dirigente y diseñar la estrategia compartida, con procedimientos democráticos y de respeto a la pluralidad, es difícil avanzar en una colaboración del conjunto, dando por supuesto que ambas fuerzas y su cooperación son imprescindibles para garantizar la remontada política y electoral de la izquierda alternativa, además de la colaboración de las izquierdas nacionalistas. Luego, como conclusión final, retomo este dilema y el debate sobre la recomposición de las élites alternativas.

Tendencias políticas de la izquierda transformadora

Tras la exposición de la evolución electoral declinante, volvamos al punto de partida sobre la representatividad de cada cual y las creencias de cada núcleo dirigente para apropiarse de una capacidad relacional con

la que disputar su primacía política y orgánica, en los múltiples y cambiantes equilibrios representativos y de estatus, a fin de colocarse en posiciones de ventaja en el futuro inmediato.

Las características ideológico-políticas de las militancias suelen ser distintas a las de la población. En particular, aquí podemos valorar una aproximación, a título orientativo, entre una base inscrita amplia, con su participación en distintos procesos internos, y los electorados alternativos. Si diseccionamos la base electoral exclusiva de Podemos (sin sus convergencias territoriales), en su máxima expresión de 2015, de unos cuatro millones y la distribuimos según las tendencias políticas internas que se fueron expresando a lo largo de los años 2015/2016 y terminaron por manifestarse en su Asamblea Ciudadana (Vistalegre II), a principios de 2017, tenemos una proporción en las votaciones en torno al 50% al pablismo (más transformador), el 40% al errejonismo (más transversal) y el 10% a los anticapitalistas (más radical). Por tanto, hay una representatividad aproximada de las tres tendencias, respectivamente, de dos millones, un millón seiscientas mil y cuatrocientas mil personas.

A ello le añadimos, un millón por cada uno de los otros tres bloques de fuerzas, en los que también hay cierta pluralidad interna respecto de esas inclinaciones político-ideológicas básicas: Izquierda Unida, convergencias territoriales e izquierdas nacionalistas.

Pues bien, la conversación pública y la pugna por el relato ha privilegiado el papel discursivo de las distintas élites, sin entrar en las complejidades de sus realidades sociopolíticas y tradiciones culturales y las diversidades experienciales de sus militancias y, especialmente, de sus bases sociales y electorales. Por tanto, partir de esa realidad plural es fundamental a la hora de articular el conjunto de la izquierda alternativa, mucho más heterogénea y en proceso de construcción que la socialdemocracia o las derechas; en consecuencia, sus liderazgos necesitan mucha más capacidad democrática, compromiso ético y cívico y claridad estratégica.

En otra parte he hablado de una base social de progresismo de izquierda, rojo, violeta y verde, por sus componentes de neolaborismo, feminismo y ecopacifismo, a los que habría que añadir su carácter plurinacional o confederal. En términos de identificación ideológica en el eje izquierda-derecha, la gran mayoría de los electorados de las formaciones alternativas se sitúa a la izquierda —solo una pequeña parte en el centro o en la derecha—. La divido entre una base social que se autoidentifica de izquierda transformadora y otra de izquierda moderada, con la advertencia de que una parte mayoritaria de la gente que se considera de izquierdas vota al Partido Socialista, incluso es significativo el sector de sus votantes que se considera de extrema izquierda, ciertamente, por otras consideraciones pragmáticas y de voto útil.

Para definir a las distintas formaciones políticas, en términos político-ideológicos, voy a seguir esta doble clasificación, todas con una base social de composición ideológica mixta (de izquierda transformadora y moderada) y más preponderante de una tendencia o de otra, entrecruzada por distintas trayectorias y experiencias históricas y tradiciones culturales de sus estructuras partidarias, y con la combinación, no solo generacional, de la llamada nueva política y la vieja, así como por su identificación nacional y sus mayores o menores preferencias federales / confederales / plurinacionales.

Atendiendo a la orientación estratégica de sus estructuras dirigentes, aparte de la socialdemocracia, existen dos tendencias sociopolíticas básicas alternativas o transformadoras. Una primera izquierda, moderada, posibilista o transversal: el errejonismo, con la dirección de Más Madrid, con influencia ideológica del populismo transversal, y el yolandismo, con la dirección de Movimiento Sumar (e Iniciativa catalana y valenciana), del neolaborismo moderado o eurocomunismo renovado. Otra segunda radical, contundente o confrontativa: el pablismo, con la dirección actual de Podemos, del populismo de izquierda o eurocomunismo radical.

Se pueden añadir, desde el punto de vista político-ideológico, otras dos corrientes de la izquierda alternativa: una intermedia y con elementos mixtos, en el caso de Izquierda Unida, del eurocomunismo renovado y radical, y otra, más extrema en el caso de Anticapitalistas, del comunismo radical. Además, según el componente nacional, con sus dinámicas propias, estarían otras fuerzas nacionalistas (Compromís, Chunta Aragonesista, Mes...), con puntos compartidos con la primera o, bien, con una posición intermedia en el caso de Catalunya en Comú, y a su vez, con elementos comunes con la típica izquierda nacionalista independentista o soberanista (ERC, EH-Bildu, BNG). Por último, desde el campo ecosocialista también se reproducen afinidades políticas y de pertenencia con la primera (Equo) o la segunda (Alianza Verde).

Dificultades de la articulación unitaria y pluralista

En esta sintética aproximación descriptiva, con mayor o menor peso y combinación, del realismo y el pragmatismo o, bien, el doctrinarismo y el idealismo discursivo, ya tenemos una gran complejidad para articular una dinámica y una estructuración unitarias: la diversidad de grupos políticos, con las dificultades para la conjunción de intereses corporativos legítimos de sus estructuras partidarias; la coordinación y decisión sobre políticas prioritarias para sus respectivas bases sociales y el conjunto del país, y la legitimación y el estatus de sus respectivas representaciones institucionales y orgánicas.

Requiere, por tanto, a las élites dirigentes, o aspirantes a serlo, grandes capacidades de articulación pluralista y consensual, realismo, respeto, tolerancia y reconocimiento de cada cual y entre sí, así como de confianza y negociación de procedimientos compartidos para gestionar los desacuerdos, las decisiones y el acomodo e integración de las minorías y las mayorías.

Pongo tres ejemplos concretos de prepotencia de las mayorías frente a las minorías, ya lejanos pero que siguen teniendo impacto en la desconfianza entre las actuales corrientes políticas. Primero, el ya citado

proceso de reequilibrio y sustitución del núcleo dirigente de este espacio alternativo, con la primacía del nuevo equipo y alianza liderados por Yolanda Díaz, con la subalternidad de la dirección de Podemos.

Segundo, el sistema de elección y composición de los órganos dirigentes, inicialmente por un sistema prácticamente mayoritario — luego parcialmente corregido— sin aceptación de la proporcionalidad en la distribución de las responsabilidades orgánicas o ejecutivas respecto de la representatividad de cada candidatura y con escaso entendimiento integrador. En la constitución de Podemos, en la primera Asamblea Ciudadana, en Vistalegre I, con el pacto de pablismo y errejonismo, la minoría a minorizar eran los anticapitalistas, que contaban con una amplia militancia y la dirección dominante quería neutralizar su izquierdismo; pero también agrió la tensión soterrada por la hegemonía política y organizativa entre esas dos corrientes dominantes, hasta la victoria pablista en Vistalegre II y la posterior escisión errejonista.

Tercero, el llamado acuerdo de los botellines en la primavera de 2016, donde se pactó la configuración política y representativa de la alianza de Podemos con Izquierda Unida, en este caso con beneficio para ambas partes y avalada por más del 80% de las personas votantes inscritas de Podemos, aunque el errejonismo la consideraba negativa. Pues bien, Izquierda Unida vio mejorado su estatus institucional, desde los dos diputados conseguidos en diciembre de 2015 hasta la media docena, manteniéndose el mismo total de 71 en las elecciones generales de 2016. No obstante, atendiendo a su representatividad electoral de un millón de votos en relación con los cinco de Podemos, o sea, casi el 17% del total, le hubieran correspondido el doble, unos doce. Es decir, en términos comparativos, imponiendo el marco negociador, la mayoría — Podemos— sacó ventaja comparativa respecto de la minoría —Izquierda Unida—.

Son comportamientos poco democráticos que no se olvidan por las partes perjudicadas, reflejan la prioridad de los intereses partidistas inmediatos de los grupos dominadores, el resentimiento disgregador y la revancha grupal cuando las condiciones de estatus cambian. Entonces, se

utilizan las nuevas posiciones ventajosas de poder, y se convierten en el motor clave de la articulación organizativa, sorteando la calidad democrática y unitaria como argamasa imprescindible para asegurar la dinámica compartida y la cohesión interna. Todo ello, vinculado con las distintas estrategias políticas y expectativas de ascenso posicional de cada grupo, constituye una pesada losa para la reconstrucción unitaria y democrática de las élites dirigentes alternativas.

En definitiva, uno de los aspectos decisivos para establecer bases de confianza, especialmente entre los grupos dirigentes, es contar con un diagnóstico común de la representatividad y capacidad política de cada organización y, específicamente, de cada liderazgo. La aproximación debe contar con datos objetivos y receptividad al otro, la única forma de establecer el diálogo sobre la realidad comparativa y los intereses compartidos y no de parte, a veces camuflados con diversos mecanismos discursivos de carácter genérico, pero para el beneficio particular. Es lo que he intentado explicar con la aproximación anterior.

Corporativismo y autonomización elitista

La mayor deficiencia, con larga tradición histórica de más de dos siglos en las izquierdas, con grandes diferencias con las derechas que están condicionadas más por sus grupos de poder, tiene que ver con el interés corporativo de las élites partidistas y su independización de su base social, particularmente, las que adquieren cierto poder institucional o aspiracional. Se desarrolla con su correspondiente manipulación organizativa o sectarismo, para defender sus privilegios específicos, y el fanatismo discursivo justificativo. Se trata de la ley de la oligarquía de los partidos políticos, ya estudiada hace más de un siglo, que supone la autonomización de sus liderazgos, por sus ventajas propias, respecto de sus electorados y sus bases partidarias, cuyas estructuras intermedias se difuminan y su papel se relega al seguidismo divulgativo y la legitimación dirigente. Queda lejos el modelo participativo de partido-

movimiento y, a veces, se opta por una simple plataforma elitista de comunicación política o núcleo irradiador de discurso.

Junto con la continuada presión de los poderes fácticos y la capacidad del orden institucionalizado para favorecer las tendencias más moderadas y adaptativas al poder establecido, el corporativismo elitista supone un condicionamiento permanente hacia las representaciones de las izquierdas más consecuentes, que deben redoblar su talante democrático, sus convicciones éticas, su compromiso cívico y su arraigo social. Además, y a veces de forma complementaria, se generan dinámicas irrealistas, doctrinarias, oportunistas y sectarias, que debilitan la acción transformadora de progreso.

Todo ello, ha constituido continuados debates y pugnas, a veces antagónicas y violentas, en la historia de las izquierdas y sus distintas tendencias, con reflexiones de diverso tipo, casi siempre condicionados por el interés partidista inmediatista de preservar el capital relacional y la primacía del liderazgo político particular. Han ido desde las tendencias ácratas y consejistas hasta la centralización jerárquica, socialdemócrata o comunista y los hiperliderazgos populistas.

No se suele valorar, suficientemente, el complejo y multidimensional proceso de articulación de las fuerzas sociopolíticas, a medio plazo, ligado a un proyecto transformador, por avances sociales y la legitimidad política y moral entre las mayorías sociales. Y, particularmente, hay grandes déficits de cultura democrática, participativa y de respeto e integración de la pluralidad, con procedimientos compartidos.

El medio, la estructura partidista, la dirección orgánica o institucional y el liderazgo personal, se convierte en un fin en sí misma, que hay que preservar a toda costa... hasta que la realidad de su desgaste se impone, no sin grandes costos y crisis, y se inicia la renovación —o la destrucción—. Falta cultura de respeto al pluralismo o, lo que es lo mismo, existe impotencia democratizadora para articular la diversidad en un proyecto común, con envidias, rencores mutuos y lucha particular

por conseguir posiciones de poder ventajosas, que corroen el compromiso militante y unitario por la transformación social.

Adelanto mi convicción. De momento, no veo mimbres realistas e integradores suficientes, sobre todo en los liderazgos partidarios actuales, para avanzar hacia una solución completa que asegure su reconstrucción, con una dinámica transformadora, renovadora e integradora. Existe una profunda desconfianza entre las direcciones (y parte de sus militancias) de la actual coalición Sumar y Podemos por el proceso de sustitución de la primacía dirigente del conjunto, que ostentaba Podemos. Sin abordarlo, y consensuar el equilibrio dirigente y la estrategia compartida, con procedimientos democráticos y de respeto a la pluralidad, es difícil avanzar en una colaboración del conjunto, dando por supuesto que ambas fuerzas y su cooperación son imprescindibles para garantizar la remontada política y electoral de la izquierda alternativa, además de la colaboración de las izquierdas nacionalistas. Seguidamente, como conclusión final, retomo este dilema de la reconstrucción de las élites alternativas.

Propuestas de refuerzo y renovación: parciales y de parte

Hoy día existen, al menos, cuatro propuestas para dar respuesta al imprescindible refuerzo y la deseada renovación de la izquierda transformadora situada a la izquierda de la socialdemocracia. Parten de la realidad de su declive representativo que, junto a la debilidad socialista, aventura la posibilidad de un cambio de ciclo político en las próximas elecciones generales, con la victoria parlamentaria y el acceso gubernamental las derechas, cada vez más extremas, que impongan una involución social y autoritaria. Ante esa eventualidad, pretenden generar un revulsivo público para activar a la izquierda social y las fuerzas progresistas.

Las dos primeras iniciativas señalan su oferta unitaria, desde su respectiva primacía, con un perfil programático por desarrollar. Las dos

segundas, destacan su prioridad por el autodesarrollo y avanzan su particular estrategia.

La primera propuesta es la de refundación de la plataforma actual de la coalición Sumar, por parte de los dirigentes de sus cuatro grupos más relevantes, con responsabilidades gubernamentales: Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes. Dan por supuesto que constituyen el eje mayoritario y articulador del conjunto de la izquierda alternativa, con una oferta para las mayorías sociales, es decir, de políticas útiles de izquierda moderada y de colaboración institucional con el Partido Socialista. Supone asegurar su hegemonía política ante Podemos y el bloque nacionalista, aunque está por definir su nuevo programa compartido y el reequilibrio dirigente entre esos grupos políticos en una estructura coral, su liderazgo y el papel de Yolanda Díaz.

La segunda iniciativa es de debate público sobre la convergencia de todo el espacio de izquierda alternativa, comandado por el diputado catalán de ERC, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado. Lo hacen sin el aval oficial de sus respectivas organizaciones, pero son representativos de una amplia corriente de opinión, con expectativas de remontada electoral para prolongar la gobernabilidad progresista.

El matiz significativo que aporta el republicano es que la primacía política debería recaer en las fuerzas soberanistas o territoriales, que mantendrían su propia independencia y el estatus y la sigla predominantes en sus zonas. Supuestamente, serían más sólidas que las plataformas estatales (Podemos y la nueva coalición que salga de la renovación de Sumar), que también tienen presencia en esos territorios.

A su vez, el otro participante en la conversación, de Más Madrid, además de promover, igualmente, su protagonismo público y el de su sensibilidad política, no esconde su preferencia por la coordinación más estrecha y mayor influencia con los grupos territoriales autónomos en la actual coalición Sumar (Compromís, Chunta Aragonesista y Mes), que valoran positivamente esta iniciativa.

La tercera propuesta, contrapunto de la segunda, es la reafirmación, de cada una de las tres organizaciones nacionalistas de izquierda más potentes en Catalunya, País Vasco y Galicia (ERC, EH-Bildu y BNG), de su prioridad por su respectivo proyecto específico nacionalista y su papel predominante en su propio país, reforzado en los últimos años.

Rebajan la relación con el resto de organizaciones del estado hacia posibles acuerdos concretos en la gestión política y parlamentaria estatal. Y, en sus países, favorecen la tendencia hacia una posición subalterna de esas fuerzas estatales y confederales o tendente a la asimilación ante su reciente debilidad relativa, y después de su susto, al comienzo de este ciclo, de que obtuviesen mayor representatividad entre sus ciudadanías que las nacionalistas. Aquí, podríamos añadir, aunque por otras consideraciones estratégicas, la posición autónoma de Adelante Andalucía y la corriente anticapitalista (y la CUP).

La cuarta posición es la estrategia de la dirección de Podemos, de construir una izquierda valiente, con el desarrollo autónomo de sus propias fuerzas, desde la consideración de que tanto el conglomerado actual de Sumar —y el que viene— como el de las formaciones soberanistas están subordinados al Partido Socialista y es imposible compartir con ellos un proyecto transformador real, al que, supuestamente, habrían renunciado, adjudicándoles la responsabilidad del avance de las derechas.

Su estrategia pasa por la diferenciación con todos esos campos de izquierda moderada y nacionalista, con la pretensión de exclusividad representativa y la expectativa de incremento del apoyo social, hipótesis que habrá que verificar —igual hasta las elecciones generales—.

Sin embargo, los últimos indicios de las elecciones aragonesas, probablemente repetibles en Castilla y León y Andalucía, indican la fragilidad de ese proyecto y ese argumentario, con la pérdida de apoyo popular, y la consolidación de la división en el conjunto de ese espacio, con la repercusión especial de la reducción de escaños colectivos que pudieran contribuir a una gobernabilidad progresista.

Se abre un debate interesante que trata de remover una dinámica descendente de la izquierda alternativa confederal, en su doble polo, la coalición Sumar y Podemos, no así de la izquierda nacionalista que está más consolidada. Su refuerzo y colaboración es imprescindible para, junto con la renovación socialista, mantener la expectativa de prolongar una gobernabilidad de progreso. Por ello, enseguida ha conectado con una sensibilidad social de izquierdas y una opinión pública progresista que aspira a consolidar derechos y mejorar sus condiciones vitales, a la reforma social y la democratización.

No obstante, las dificultades son muchas. Los tres grandes actores, las direcciones de la nueva coalición Sumar, en formación, Podemos y las izquierdas nacionalistas manifiestan posiciones distantes y específicas para el fortalecimiento prioritario de cada uno de los tres bloques, en parte en competencia con los otros dos. El riesgo es que se queden como dinámicas parciales y de parte, sin resolver la convergencia del conjunto, cuya traducción electoral en escaños es decisiva y, al mismo tiempo, problemática de articular equilibradamente.

La propuesta de Rufián, más ambigua, de construir puentes entre los tres aparece como bien intencionada pero sin estructura partidaria detrás y poca capacidad operativa.

Habrà que seguir la experiencia unitaria, profundizar en el análisis de los obstáculos, allanar el camino de intereses corporativos y, sobre todo, practicar un talante democrático, de respeto al pluralismo e integrador, con un proyecto transformador sustantivo de progreso.

AUTOR



Antonio Antón Morón (Zaragoza, 1949) es sociólogo, politólogo y escritor. Profesor (jubilado) del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid —UAM— (2003-2022). Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la UNED y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid —UCM— (con sobresaliente cum laude).

Pertenece a los *Comités de Investigación* de la Federación Española de Sociología (FES) de *Sociología política, Movimientos sociales, acción colectiva y cambio social, Sociología del género y Sociología del trabajo*. Es especialista, además, en *Políticas públicas y Estado de bienestar y Sociología de la educación*; también ha escrito sobre *Historia social y Filosofía política*.

Ha realizado variadas investigaciones y comunicaciones en distintos Congresos y Jornadas de ciencias sociales, y ha expuesto múltiples ponencias en conferencias y debates públicos. Colaborador de diversos periódicos y medios de comunicación (*Público, Mientras Tanto, Nueva Tribuna, Rebelión...*), ha publicado más de seiscientos artículos y ensayos, así como estudios en diferentes revistas académicas e internacionales.

Es autor de una quincena de capítulos de libro y una treintena de libros. Los más destacados son: *Trabajo, derechos sociales y globalización* (coord.), Talasa (2000); *Rentas básicas y nuevo contrato social*, Fundación Sindical de Estudios (2003); *El devenir del sindicalismo y la cuestión juvenil*, Talasa (2006); *Precariedad laboral e identidades juveniles*, Fundación Sindical de Estudios (2006); *Reestructuración del Estado de bienestar*, Talasa (2009); *Resistencias frente a la crisis. De la HG del 29S al movimiento 15M*, Germanía (2011); *Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica*, Sequitur (2013); *Movimiento popular y cambio político. Nuevos discursos*, UOC (2015); *La democracia social hoy. Un nuevo ciclo sociopolítico por la democracia y la igualdad*, Ed. Académica Española (2016); *Clase, nación y populismo. Pensamiento crítico y estrategias políticas*, Dyskolo (2019); *Cambios en el Estado de Bienestar*, Rebelión (2021); *Perspectivas del cambio progresista*, Dyskolo (2021); *Dinámicas transformadoras. Renovación de la izquierda y la acción feminista, sociolaboral y ecopacifista*, Dyskolo (2022); *Feminismos. Retos y teorías*, Dyskolo (2023); *Izquierda Transformadora*, Dyskolo (2024); *Encrucijadas. Para la democracia, las izquierdas y el feminismo*, Dyskolo (2025), y *Cambio de ciclo. Desafíos para las izquierdas*, Dyskolo (2026).